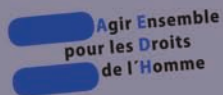




Informe Alternativo

al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del
Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados

Con el apoyo de:



en





Informe alternativo al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados

AUTORES

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia

Acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia, Acooc.
Benposta Nación de Muchachos.
Corporación Paz y Democracia.
Corporación Vínculos.
Defensa de los niños internacional –DNI–, Colombia.
Fundación Creciendo Unidos.
Fundación para la Educación y el Desarrollo, Fedes.
Justapaz.
Servicio Jesuita a Refugiados.
Taller de Vida.
Tierra de hombres, Alemania.
War Child, Holanda.

Comisión Colombiana de Juristas

Bogotá, Colombia. Noviembre de 2009

Informe alterno al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del
Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados

COORDINACIÓN GENERAL

**Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes
al conflicto armado en Colombia**

MIEMBROS DEL COMITÉ EDITORIAL

Defensa de los niños internacional –DNI–, Colombia.

Justapaz.

Tierra de hombres, Alemania.

Comisión Colombiana de Juristas.

Humanidad Vigente Corporación Jurídica.

CON EL APOYO DE

Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, Unión Europea, War Child Holanda,
TDH Alemania e ICCO & Kerk in Actie

Este documento fue elaborado por:

Coalición Colombia (María Clara Melguizo, Consultora Independiente. *Comité de Investigación:*
Fernando Sabogal y Natalia Camargo –DNI–. Hilda B. Molano Casas –Secretaría Técnica–.
John Giraldo –Justapaz–. William León –tdh–).

Comisión Colombiana de Juristas (Margarita Bonilla, Investigadora en Derecho Humanitario).

Rocío Paola Neme Neiva, Diagramación

Carlos Alarcón, ilustración de portada. Imagen de la Campaña de los 10 años
de la Coalición Colombia. www.carlosalarconart.com

ISBN: 978-958-98137-6-8

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE SUSCRIBEN EL INFORME

- ✓ Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas – Asocodita
- ✓ Asociación para la Promoción Alternativa - Minga
- ✓ Casa de la Juventud
- ✓ Colectivo Semillas Flora Tristán - Red de Mujeres de Suba
- ✓ Corporación Casa Amazonía
- ✓ Corporación Colombia Joven
- ✓ Corporación Con – Vivamos
- ✓ Corporación para el Ecodesarrollo Comunitario - Comunitar
- ✓ Equipo de Asesorías a Proyectos de Desarrollo Integral Comunitarios – Aprodic
- ✓ Fundación Afrocolombiana Servir
- ✓ Fundación Enseñame a Pescar
- ✓ Fundación Social Colombiana - Cedavida
- ✓ Fundación Sol y Serpiente de América
- ✓ Humanidad Vigente Corporación jurídica
- ✓ Instituto de Capacitación Popular - IPC
- ✓ Red Distrital de Salud de las Mujeres de Bogotá

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
1. CONTEXTO SOCIO POLÍTICO DEL PAÍS 2005 – 2008	15
2. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN	25
3. PREVENCIÓN	27
3.1. Vinculación a la Fuerza Pública	27
3.2. Vinculación a grupos armados irregulares	39
3.3. La escuela como escenario de reclutamiento	51
3.4. Política pública en materia de prevención	53
4. PROHIBICIÓN Y CUESTIONES CONEXAS	59
4.1. Tipificación del delito del reclutamiento en el ordenamiento jurídico colombiano ...	59
4.2. Prohibición del reclutamiento y uso de la niñez	63
4.3. Disposiciones jurídicas para el tratamiento de NNA desvinculados de grupos armados	65
4.4. Adhesión a instrumentos internacionales de protección	72
5. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN	75
5.1. Programa de atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley	75
5.2. Desmovilización de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las AUC: ocultamiento e impunidad	80
5.3. Medidas para la verdad, la justicia y la reparación	85

6. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONALES	91
6.1. Proceso de aceptación e implementación del mecanismo de la Resolución 1612	91
6.2. La cooperación internacional con relación a la aplicación del Protocolo Facultativo	95
7. INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL	103
7.1. En materia de prevención	105
7.2. Con relación a las prohibiciones y cuestiones conexas	106
7.3. Con relación a la protección, recuperación y reintegración	108
8. RECOMENDACIONES	111
8.1. Con respecto al contexto político del país	111
8.2. Con respecto a las medidas generales de aplicación	112
8.3. Con respecto a la prevención	112
8.4. Con respecto a la prohibición y cuestiones conexas	115
8.5. Con respecto a la protección, recuperación y reintegración	115
8.6. Con respecto a la asistencia y cooperación internacionales	117
8.7. Con respecto a iniciativas de la sociedad civil	117
8.8. Con respecto al cumplimiento por parte del Estado de los mandatos contenidos en la Convención sobre Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados	118

“Vincular niños y niñas en la guerra es un acto de barbarie ya que ellos nada tienen que ver con una guerra que no es suya”.¹

INTRODUCCIÓN

Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados², y le son aplicables las disposiciones del derecho internacional humanitario relativas a la protección de la población civil, en especial de la niñez³. Dichas normas internacionales proscriben la vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) a los grupos armados que participan en las hostilidades incluyendo a las fuerzas de seguridad del Estado, e instan a los Estados a adoptar las medidas posibles para que estas fuerzas no recluten o utilicen bajo ninguna circunstancia personas menores de 18 años de edad.

La ratificación del Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados⁴ supone el compromiso de presentar ante el Comité de los Derechos del Niño informes periódicos que den cuenta de los avances que obtiene el país alrededor de las obligaciones y supuestos contenidos en el mismo. El Comité por su parte examina los informes presentados a intervalos regulares y hace recomendaciones sobre cómo los Estados pueden aplicar mejor las disposiciones del tratado.

- 1 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Septiembre 17 de 2009): Memorias del taller. Palabras de un adolescente.
- 2 Firmado el 15 de mayo de 2001, aprobado por medio de la Ley 833 de 2003 y depositado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2005.
- 3 Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977; y la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y los principios y directrices sobre los niños vinculados a fuerzas o grupos armados.
- 4 En adelante Protocolo Facultativo.
- 5 Vigencia que para nuestro caso rige a partir del 25 de junio de 2005, un mes después del depósito del instrumento de ratificación.

Teniendo en cuenta la vigencia de dicho Protocolo Facultativo para Colombia⁶ y considerando las normas dictaminadas por este instrumento frente a su operatividad, el Gobierno Colombiano presentó su informe a finales de 2008. Por su parte la sociedad civil también se hace partícipe de esta reflexión, entregando el informe alterno que se presenta a continuación.

El presente informe es producto de un proceso participativo realizado por varias organizaciones no gubernamentales, plataformas de derechos humanos y NNA, a favor de visibilizar sus principales planteamientos y preocupaciones frente a la problemática de la niñez en el contexto del conflicto armado interno. El documento presenta un balance de la situación actual de las personas menores de 18 años vinculadas al conflicto armado en Colombia a partir de las obligaciones emanadas del Protocolo Facultativo, las recomendaciones internacionales en este campo y la información que se ha podido constatar a partir del monitoreo de la situación entre el año 2005 y 2008⁷.

La construcción de este documento supuso las siguientes actividades:

Encuentro nacional de niños, niñas y adolescentes

Este encuentro realizado el primer semestre de 2009 contó con la participación de 45 NNA provenientes de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. Su propósito era fortalecer las herramientas de los NNA en materia de incidencia, investigación y comunicación con relación al Protocolo Facultativo y la elaboración del informe alterno. Con base en ello se organizaron tres comités de trabajo los cuales profundizaron en las diferentes estrategias aportando información sobre diagnóstico y análisis de la situación, visibilidad del Protocolo Facultativo y participación de NNA en su seguimiento y aplicación.

Conversatorios con niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados de grupos armados

La niñez afectada directamente por el conflicto armado suele ser una de las víctimas más constantes e invisibles en la opinión pública y en el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En aras de darles voz a los NNA con respecto a la verdad, justicia y

6 El Protocolo Facultativo supone la entrega de un informe inicial "a más tardar dos años después de la entrada en vigor del Protocolo" Artículo 8 del Protocolo. A partir de entonces, los Estados deben presentar informes de seguimiento junto con el informe sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.

7 Rigiéndonos por la fecha de entrada en vigencia del Protocolo para Colombia, este informe de seguimiento cubre el periodo 2005 – 2008.

reparación que ansían y exigen como víctimas⁸, desde el 2008 se han desarrollado tres conversatorios para conocer sus percepciones y recomendaciones respecto al cumplimiento de estos derechos. En desarrollo de estas actividades NNA han otorgado elementos de análisis que se presentan en este informe. Asimismo, el proceso ha motivado su interés para trabajar en el tema, promoviendo la discusión y comprensión de dichos conceptos.

Presentación y consulta con organizaciones

Considerando que el informe alterno debe representar una parte importante de la sociedad civil, se emprendió un proceso de convocatoria y consulta entre organizaciones no gubernamentales y plataformas de derechos humanos, para garantizar que éstas aportaran documentos e información, se constituyeran en aliadas de su elaboración, o se adhirieran al contenido del documento al final del proceso.

La participación de organizaciones de orden nacional se facilitó gracias a los espacios que como sociedad civil se han ido constituyendo y fortaleciendo en torno a la investigación, seguimiento, denuncia e incidencia con relación al desarrollo del conflicto armado y su impacto en los derechos humanos de la infancia⁹. La consulta con organizaciones regionales fue posible gracias a las alianzas establecidas en algunas zonas de profundización del conflicto que ejemplifican la forma como actualmente los NNA colombianos están siendo afectados por la guerra. La recopilación, sistematización y análisis de la información estuvo a cargo de un comité editorial que se reunió periódicamente revisando los avances obtenidos.

Recolección de información documentada

La recolección de información documentada supuso la revisión y análisis de documentos, informes, boletines y comunicados de prensa emitidos en el periodo 2005-2008 por fuentes estatales, de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación. El análisis supuso la recolección y sistematización de casos debidamente documentados

8 Es necesario tener en cuenta un enfoque diferencial en los procesos y medidas que buscan reparar integralmente a las víctimas. La dinámica de la violencia sociopolítica y el conflicto armado en Colombia ha afectado de maneras diversas a personas, comunidades, organizaciones y movimientos sociales, generando daños específicos respecto al género, la edad, las opciones políticas y la pertenencia étnica y cultural. El reconocer y visibilizar los impactos y daños de manera diferenciada, conlleva a poner la mirada en las distintas formas en que también se vivencian y significan los daños, con lo cual es posible empezar a construir una respuesta coherente con las particularidades y necesidades de los niños y niñas víctimas.

9 Dentro de estos espacios podemos destacar el Grupo de trabajo de la Resolución 1612, y los grupos creados para la presentación de los Informes alternos al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y al Examen Periódico Universal.

que dan sustento a las tendencias y dinámicas encontradas con relación a la vinculación de NNA a todos los grupos armados en diferentes regiones del país. En este sentido, toda la información aquí documentada en torno a casos emblemáticos, regiones y poblaciones afectadas proceden de denuncias y casos específicos aportados por las fuentes citadas.

Consolidación del informe

La ratificación del Protocolo Facultativo en Colombia y la presentación del informe estatal y el alterno es una oportunidad para obtener del Comité recomendaciones en materia de prevención de la utilización de NNA por grupos armados irregulares y fuerza pública; ajuste de la legislación interna conforme a los instrumentos internacionales; investigación y juzgamiento de los responsables del crimen de guerra de reclutamiento de NNA; y estructuración de planes y programas para la población víctima de vinculación; entre otros.

Los principales planteamientos, reflexiones y preocupaciones sobre el tema han sido brevemente descritos en ocho capítulos. El primer capítulo expone algunos de los hitos que marcaron el contexto sociopolítico del país desde el 2005 hasta el 2008, marcado por la prolongación de la política de “seguridad democrática” como una estrategia fundamentalmente bélica y militar; la vigencia del poder de los grupos paramilitares y la visibilización de sus nexos con el Estado; la negación del conflicto armado por parte del gobierno nacional; las amenazas a defensores de derechos humanos, maestros y líderes sociales; las continuas infracciones al derecho humanitario por parte de las guerrillas, los grupos paramilitares y las fuerzas militares en contra de NNA; y la agudización de la crisis humanitaria. El segundo capítulo trata las medidas generales de aplicación, analizando el rango legal del Protocolo Facultativo en la legislación nacional, las reservas hechas por el país, y las labores adelantadas por el Estado y la sociedad civil en materia de difusión e implementación de este instrumento.

Teniendo en cuenta que la prevención hace referencia a las medidas adoptadas en un país para que no se recluten o utilicen NNA en las hostilidades, el capítulo tercero da cuenta de la insuficiencia de las disposiciones implementadas en su cometido fundamental de prevenir y mermar el reclutamiento o utilización de NNA por grupos armados regulares e irregulares, demostrando incluso que la situación lejos de mejorar, parece agravarse. El capítulo cuarto dedica sus páginas a analizar el marco jurídico que cobija a los perpetradores del crimen del reclutamiento y a los NNA víctimas, evidenciando preocupaciones frente a la impunidad en la que puede quedar el delito, la severidad de las penas impuestas a los NNA desvinculados, la ausencia aparente de responsabilidad de la fuerza pública respecto de la utilización de personas menores de 18 años, y el desconocimiento de la normativa internacional de derechos humanos pese a la adhesión a varios instrumentos internacionales de protección.

Con la intención de describir el panorama de los NNA víctimas el capítulo cinco expone algunas reflexiones en torno al programa de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como espacio de resocialización, el proceso de desmovilización adelantado con los paramilitares de las AUC, y las medidas adoptadas para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El capítulo seis hace un análisis del proceso de implementación de la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad en Colombia y de la cooperación internacional con relación a la aplicación del Protocolo Facultativo. Al respecto, se advierten preocupaciones importantes frente a los efectos perjudiciales que puede tener la asunción de las responsabilidades del Estado, por parte de otros sectores de la sociedad, los cuales solo deberían apoyar de manera complementaria, sin jugar un papel protagónico y de posible financiación indirecta de la estrategia militar. Por otra parte, valorando las iniciativas que desde la sociedad civil han emergido alrededor de la prevención y protección de NNA en relación a su vinculación en el conflicto armado, el capítulo siete consagra algunas experiencias exitosas en la materia. Por último, el capítulo ocho presenta las recomendaciones que emergen del análisis hecho a lo largo del documento y de la valoración respecto a las observaciones previamente realizadas por el Comité de los Derechos del Niño.

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que este informe alterno aporte elementos de análisis frente al conflicto armado colombiano y el cumplimiento del Protocolo Facultativo, en aras de promover, potenciar y cualificar políticas públicas a favor de los NNA que padecen día a día la guerra.

1. CONTEXTO SOCIO POLÍTICO DEL PAÍS 2005 – 2008

Colombia está inmersa en un conflicto armado interno de casi cinco décadas de existencia, que tiene profundas raíces en problemas estructurales tales como la inequitativa distribución de la riqueza, la exclusión social y la discriminación. Para la fecha de presentación de este informe dichas condiciones están lejos de ser superadas. En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "las desigualdades que han persistido pese al desarrollo y crecimiento económicos, han sido una constante fuente de conflicto en Colombia"¹⁰. Los grupos de guerrilla, grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, siguen infringiendo de manera constante las normas del derecho humanitario en contra la población civil¹¹. Las características del régimen político y económico se asocian con fenómenos como el paramilitarismo y el narcotráfico, que en su conjunto coinciden en la utilización del desplazamiento forzado como método de apropiación de grandes extensiones de tierra¹².

La República de Colombia es el segundo país del mundo con más población en situación de desplazamiento forzado¹³. La población campesina, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes han sido afectados de manera desproporcionada por este crimen de lesa

10 "Existe una estrecha relación entre injusticia social, particularmente el despojo de tierras, y el desplazamiento interno, cuyas causas primarias son anteriores al actual conflicto armado". Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Párrs. 10, 13 y 61, y pág. 219.

11 Informe para el Examen Periódico Universal de las Organizaciones No Gubernamentales - Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (199 organizaciones), la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (140), la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (110 organizaciones), la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (754 organizaciones), la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, la Coalición contra la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado, el Observatorio sobre Discriminación Racial y el Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN) - , Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Colombia, A/HRC/10/82, 9 de enero de 2009.

12 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS "Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados. Obstáculos y desafíos para garantizar el derecho al patrimonio de la población desplazada en Colombia", Pág. 13.

13 Report of the Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, Walter Kälin, 9 February 2009, A/HRC/10/13, Parr. 91; Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2008, Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, abril de 2009, pág. 9 y AMNISTÍA INTERNACIONAL *Colombia: Medalla de Plata en desplazados internos*, En: <http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/colombia-medalla-de-plata-en-desplazados-internos/>

humanidad¹⁴. El 76% de las personas desplazadas trabajaban la tierra para su autosubsistencia y tenían al momento del éxodo forzados derechos vinculados a la tierra, ya sea como propietarios, tenedores, ocupantes o poseedores¹⁵. Según la Corte Constitucional, aproximadamente el 50% de la población desplazada está constituida por personas menores de 18 años¹⁶. En este sentido, es importante tener en cuenta la relación existente entre el desplazamiento forzado y los constantes actos de reclutamiento en contra de NNA en condición de desplazados¹⁷.

Otros de los elementos que agudizan las condiciones de vulnerabilidad de la población infantil en el contexto del conflicto armado interno, son la impunidad y las dificultades de acceso efectivo a la justicia¹⁸. Un ejemplo representativo está constituido por los crímenes cometidos por grupos paramilitares, que a pesar de haber participado de un supuesto proceso de desmovilización, mantienen estructuras militares que continúan operando y teniendo efectos adversos en contra de la población civil¹⁹. A principios de 2006, la Defensoría del Pueblo denunció que en zonas como el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), los paramilitares seguían imponiendo normas de comportamiento social y expropiando ilegalmente bienes rurales bajo amenazas de muerte²⁰. Actualmente, los derechos a la vida, integridad personal y libertad, entre otros, siguen siendo violados por grupos paramilitares²¹. Adicionalmente, resulta preocupante que hasta el momento no se hayan esclarecido las relaciones entre altos funcionarios del estado y empresarios con el paramilitarismo²².

¹⁴ CORTE PENAL INTERNACIONAL Estatuto de Roma, Art. 7 literal d.

¹⁵ PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2006): Proyecto Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en Materia de Reinserción y Desmovilización, Capítulo 2, Seguimiento a la protección de las víctimas del conflicto en materia de bienes patrimoniales. Descripción, Análisis y Seguimiento, Bogotá, Pág. 185.

¹⁶ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA (2008): Auto *251 del 6 de octubre de 2008*. Tiene como finalidad “proteger los derechos fundamentales de los NNA afectados por el desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.

¹⁷ Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, A/62/609–S/2007/757, 21 de diciembre de 2007, párr. 6 y Annual report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/12/49, 30 July 2009, párr. 37.

¹⁸ Véase al respecto, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, doc. OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 rev.1, 26 de febrero 1999 y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Informe del Relator Especial encargado de la cuestión de la independencia de los jueces y abogados, Sr. Param Coomaraswamy, Informe de la misión a Colombia, doc. E/CN.4/1998/39/Add.2, 30 de marzo de 1998.

¹⁹ Informe para el Examen Periódico Universal de las Organizaciones No Gubernamentales, 9 de enero de 2009.

²⁰ DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2006): Informe de riesgo enero/febrero de 2006, vol. 5, No. 2, pág. 5, Véase en www.colombiassh.org (consultado el 7 de septiembre de 2006). Citado en Sala de Situación Humanitaria, Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA.

²¹ CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS “Bandas criminales: Seguridad Democrática y corrupción”, Observatorio del Conflicto, Bogotá.

²² COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2008) *Colombia: El espejismo de la justicia y la paz, Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005*, Pág. 49.

Otro aspecto de especial preocupación es el hecho de que se han venido confirmando los nexos entre grupos paramilitares y fuerza pública. El siguiente caso refleja las condiciones en que algunas de estas actuaciones se presentan:

El 21 de febrero de 2005, miembros del Ejército Nacional en conjunto con grupos paramilitares asesinaron en la vereda Mulatos Medios del municipio de Apartadó (Antioquia), a Luis Eduardo Guerra Guerra, miembro del Consejo de Paz de San José de Apartadó, a la niña Beyanira Areiza Guzmán y al niño Deiner Andrés Guerra. De manera simultánea, los mismos perpetradores asesinaron en la vereda La Resbalosa, del municipio contiguo de Tierraalta (Córdoba), a Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, a Sandra Milena Muñoz Posso, a Alejandro Pérez Castaño, al niño Santiago Tuberquia Muñoz, y a la niña Natalia Andrea Tuberquia Muñoz. Algunos de los cuerpos mostraban señales de tortura. Las ocho víctimas eran miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó¹⁴. Los presuntos autores pertenecían al Batallón Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima adscrito a la Brigada XVII, quienes actuaron de manera conjunta con miembros del bloque “Héroes de Tolová”, perteneciente al grupo paramilitar Auc. Por estos hechos el ente investigador llamó a indagatoria a dos oficiales, nueve suboficiales y 58 soldados “por su presunta autoría en los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo”¹⁵.



En dicho contexto, la situación de NNA sigue siendo de extrema vulnerabilidad. Tal y como se ha podido constatar, en conflictos armados internos como el colombiano, las personas menores de 18 años de edad continúan siendo víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales de manera sistemática²³. Los niños y las niñas siguen siendo víctimas de reclutamiento, masacres, desplazamiento forzado, toma de rehenes, víctimas de minas antipersonal y violencia sexual con ocasión del conflicto armado, por parte de grupos guerrilleros, grupos paramilitares y Fuerza Pública²⁶.

23 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS: *Revista Noche y Niebla* No. 31, Pág. 93 – 94; y denuncias públicas que reposan en los archivos de la Comisión Colombiana de Juristas, bajo los radicados D-05095; D-05097; D-05099 y D-5100.

24 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, “Asegurado oficial por terrorismo y homicidio en persona protegida”, 22 de noviembre de 2007, www.fiscalia.gov.co

25 Annual report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/12/49, 30 July 2009.

26 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS Informes Anuales sobre la situación de los derechos humanos en Colombia OACNUDH, E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006; A/HRC/4/48, 5 de marzo de 2007; A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008 y A/HRC/10/032, 19 de febrero de 2009.

En el periodo comprendido entre julio de 2002 y junio de 2008 la Comisión Colombiana de Juristas registró que, por lo menos 13.877 personas perdieron la vida por fuera de combate (es decir, en la casa, en la calle o en el lugar de trabajo) a causa de la violencia sociopolítica²⁷. Del total de víctimas en las que se conoce el sexo (12.125), por cada 100 hombres víctimas aproximadamente 13 mujeres fueron víctimas de violaciones a la vida²⁸. En aquellos casos en los que fue posible establecer la edad de la víctima (4.956), 784 eran niños y niñas²⁹.

En relación con las violaciones al derecho a la vida en contra de NNA en el contexto del conflicto armado, se han podido constatar homicidios en su contra cometidos por todos los grupos que participan de las hostilidades³⁰.

El 28 de febrero de 2009, en la ciudad de Bogotá, fue desaparecido forzosamente el niño Rodolfo Blandón, presuntamente por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según María Fernanda Sierra, madre del niño de 15 años, dos policías que se movilizaban en una moto de la institución desaparecieron al niño, en la localidad de Ciudad Bolívar, y hasta el 7 de marzo de 2009, apareció muerto con un tiro en la cabeza en un potrero en el barrio Lucero Alto, ubicado al sur de la ciudad. Según una familiar de la víctima “Son muy extraños los hechos en que murió mi sobrino, pero en Ciudad Bolívar es muy difícil identificar a los uniformados porque las motos de ellos nunca tienen placa y jamás portan chalecos reflectivos (...) Mi sobrino era un muchacho trabajador, a pesar de su edad él le ayudaba a su mamá, una mujer de 40 años y sordomuda”³¹. El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, manifestó a través de un comunicado de prensa que “se están adelantando las investigaciones pertinentes y que mientras tanto el comando ha tomado la decisión de suspender provisionalmente a los uniformados presuntamente vinculados con el propósito de contribuir con la investigación”³².



27 Durante este mismo periodo 10.282 personas murieron en combate o fueron víctimas de fuego cruzado.

28 De las 1.392 mujeres víctimas, se conoce la edad en 692, de las cuales 215 eran niñas, 141 jóvenes, 311 adultas y 25 adultas mayores.

29 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2009): “Situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia julio 2007 – junio 2008”.

30 Respecto de los homicidios de niñas, niños y adolescentes por parte de miembros de la Fuerza Pública, el Secretario General de Naciones Unidas afirma: “En 2008 la magnitud del problema de las ejecuciones extrajudiciales se hizo públicamente manifiesta. Según la Fiscalía General, en noviembre de 2008 el número de niños víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los 50 casos que se estaban investigando ascendía a 51”, Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, S/2009/434, 28 de agosto de 2009, párr. 34.

31 EL ESPECTADOR, “Dos policías habríamataado a un joven de 15 años”, 10 de marzo de 2009.

32 EL ESPECTADOR, “Policía sospechosos de asesinato”, Ver video completo en: <http://www.elespectador.com/policia-nacional/video-policias-sospechosos-de-asesinato>

En cuanto al constante uso de armas prohibidas por el derecho internacional humanitario, cabe resaltar que los grupos de guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN no han cesado sus ataques indiscriminados y el uso de minas antipersonal en contra de la población civil³³.

El 20 de enero de 2008, en el municipio de Palmira (Valle), una mujer embarazada y su hija de tan sólo nueve meses de nacida murieron al pisar accidentalmente una mina antipersonal instalada por uno de los grupos de guerrilla sin identificar. Después de siete de días de búsqueda, Martha Liliana y la niña Luisa Fernanda Villota Machín fueron halladas en una trocha del sector montañoso de Combia, corregimiento Cabuyal, a unos cuatro kilómetros de la finca La Grecia. La señora perdió sus extremidades y se arrastró con la pequeña por varios metros intentando infructuosamente salvar sus vidas. El cuerpo de la niña fue encontrado junto al de su madre sin vida⁵.



El 14 de agosto de 2008, ocho personas fueron asesinadas y por lo menos 52 resultaron heridas, víctimas de un ataque con explosivos producido por presuntos miembros del Frente 18 del grupo guerrillero Farc-EP. Un artefacto que, al parecer, había sido dejado en una caneca de basura, explotó hacia las 10:30 de la noche en un pasaje peatonal de la zona urbana del municipio de Ituango (Antioquia). En los hechos murieron, el niño Christian Estiven Cossio Barrera, de 15 años; Guillermo Osorio Uribe, de 17 años; José Alejandro Arias Valencia, de 18 años; Darío Pineda Galeano, de 18 años y Alberto Calle Gallo, ex secretario de Gobierno de Ituango y familiar del alcalde de este municipio. También murieron dos voluntarios del cuerpo de bomberos que pasaban por el lugar y otra persona aún no identificada. Entre los heridos se encuentran las siguientes personas: una niña de cuatro años, cuyo nombre se desconoce; el niño de 10 años Juan Sebastián Oquendo Misas; Andrés Palacio, de 15 años; John Fernando Oquendo, de 16 años; Luis Fernando Craciano, de 16 años; Gilbert Alexis Sucerquia, de 16 años; Juan Fernando Betancur, de 17 años; Arley López Henao, de 25 años; Elkin Alberto Higueta, de 32 años; Andrés Arredondo García, miembro de la Policía Nacional y Jaime Orozco López.²⁶



33 Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, S/2009/434, 28 de agosto de 2009, párr. 33. Informe del Monitor de Minas Terrestres 2008 (*Land Mine Report*) en: <http://www.icbl.org/lm/2008/countries/colombia.php>.

34 Banco de Datos de Violencia Sociopolítica del Cinep, Revista Noche y Niebla / No. 37/71, DIARIO EL PAÍS 29/01/2008 v.e. y DIARIO EL PAÍS 30/01/2008 v.e.

35 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (15 de agosto de 2008): "La Comisión Colombiana de Juristas rechaza la masacre contra la población de Ituango (Antioquia)", Comunicado de Prensa.

Por su parte los grupos paramilitares a pesar de haber anunciado un cese de hostilidades en el marco del proceso de negociación con el Gobierno Nacional, siguen cometiendo violaciones contra el derecho a la vida de la población civil de NNA^{36,37}

El día 23 de julio de 2008, el municipio de Puerto Escondido (Córdoba), presuntos paramilitares privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a los niños Rony Ricardo Díaz Babilonia de 14 años de edad y a Norbey Miranda de 16 años de edad. Los hechos se presentaron cuando los perpetradores llevaron a las víctimas hacia un paraje deshabitado a orillas del río Canalete de Puerto Escondido, allí los amarraron y los torturaron recurrentemente hasta causarles la muerte²⁸.



En cuanto al derecho a la integridad personal y las diferentes formas de violación que se cometen en el contexto del conflicto armado en Colombia en contra de NNA por parte de todos los grupos que participan de las hostilidades, se han identificado actos de tortura, tratos crueles y lesiones personales, entre otros³⁸. A continuación se relatan algunos casos representativos.³⁹

El 12 de octubre de 2008, en el municipio de Neiva (Huila), el adulto mayor José Cardozo fue asesinado y resultaron heridas 11 personas por presuntos miembros de la guerrilla de las Farc. Entre las personas heridas está el niño Diego Alejandro Cardozo de 16 años, y las niñas Heler Dayana Rivera y Linda Dayana Vega de 11 y 10 años respectivamente. Los hechos se presentaron como resultado del ataque indiscriminado realizado por miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC frente a dos hoteles del municipio. La explosión de artefactos explosivos se presentó frente a dos hoteles llamados Plaza y Sulicam, ubicados en el centro de la capital del Huila. Las explosiones se registraron con intervalos de cinco minutos mientras los huéspedes de los hoteles descansaban³⁰.



36 Más de 4.500 personas han sido registradas como muertas o desaparecidas forzosamente por ellos desde cuando el Presidente de la República anunció, el 1º de diciembre de 2002, que había iniciado formalmente las negociaciones con los paramilitares, y que ellas estarían condicionadas a que no hubiera ni un muerto más. Llama la atención el hecho de que el Alto Comisionado Gubernamental para la Paz, haya afirmado respecto a las denuncias hechas interpuestas por estos hechos que “el cese del fuego [era] una metáfora que se debe[ría] manejar con mucha flexibilidad”.

37 Banco de datos del Cinep, Revista Noche y Niebla No. 38 pág.96.

38 Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, S/2009/434, 28 de agosto de 2009.

39 DIARIO EL COLOMBIANO del 14 de octubre de 2008, versión electrónica; DIARIO DEL HUILA del 14 de octubre de 2008, versión electrónica; “Farc reactivan ataques terroristas en Neiva: 1 muerto y 11 heridos”, RADIO SANTAFÉ Noticias de 13 de octubre de 2008.

El 16 de diciembre de 2008, en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), presuntos paramilitares que se movilizaban en múltiples vehículos llegaron hasta el lugar donde se encontraban reunidas un grupo de personas y procedieron a disparar contra la humanidad de los mismos. Tal acto, produjo la muerte de Omar Jacinto Muñoz Guerra, quien era profesor, Armando Ceballos, Facundo Peralta, Manuel Alfredo Pacheco y los esposos Eduardo Hernández y Neris Urango. En este acto, también resultó herida la hija de los esposos Wendy Hernández Urango de 4 años de edad. Los hechos se presentaron en Puerto Libertador³¹.



En lo referente a las violaciones al derecho a la libertad personal en contra de NNA en el contexto del conflicto armado interno, según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en 2008 fueron secuestrados 75 personas menores de 18 años⁴¹. Está constatado que los grupos guerrilleros FARC y ELN cometen el crimen de guerra de toma de rehenes de manera constante. Durante los últimos años se han conocido casos aberrantes como el de niños víctimas de toma de rehenes o nacidos bajo cautiverio de la guerrilla de las FARC. Así mismo, los grupos paramilitares han realizado este tipo de privaciones a la libertad en contra de la población civil infantil.

En el mes de enero de 2008 se constató la situación que tuvo que padecer un niño nacido en cautiverio. Se trata del hijo de Clara Rojas, una mujer que estuvo secuestrada por el grupo guerrillero FARC-EP, durante más de cinco años. El niño, estuvo en poder del grupo armado durante sus primeros meses de vida en compañía de su madre y luego fue entregado a José Crisanto Gómez, un hombre que dijo haber llevado al niño que le entregaron las FARC-EP a un hospital de San José del Guaviare (300 kilómetros al sudeste de Bogotá). Emmanuel nació el 20 de julio de 2004 y fue entregado a un hospital del sur del país el 15 de junio de 2005, meses después, el ICBF, al haber encontrado al niño en situación de abandono, lo remitió a uno de sus programas de atención. No obstante, luego de las gestiones para liberar



⁴⁰ Banco de datos del Cinep, Revista Noche y Niebla No. 38 pág. 204-205

⁴¹ "En julio de 2008, 18 personas, incluidos 2 niños varones de 1 y 5 años de edad, fueron secuestrados por las FARC-EP en el departamento de Chocó. En noviembre de 2008, en el departamento de Antioquia, las FARC-EP intentaron secuestrar a una niña de 3 años y amenazaron de muerte a 15 familias por colaborar con el Ejército Nacional, por lo que se vieron obligadas a desplazarse", Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, S/2009/434, 28 de agosto de 2009, párrs. 40 y 41.

a tres secuestrados, entre los que se encontraba el niño, al momento de la liberación de su madre en enero de 2008, el Estado informó a la opinión pública que el niño estaba en su poder desde hacía varios meses³³.



Por su parte, los miembros de la Fuerza Pública insisten en realizar detenciones arbitrarias en contra de personas menores de 18 años de edad de manera frecuente y en desarrollo de dichas privaciones de libertad incurren en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones, tal como se describe a continuación:

El 8 de febrero de 2009, en la ciudad de Bogotá, los niños Jhonatan Ricaurte y Oscar Beltrán fueron víctimas de detención arbitraria y tortura por miembros de la Policía Nacional. Luego de ser privados de la libertad, los niños fueron conducidos a la Estación de Policía de la localidad de Rafael Uribe Uribe y fueron recluidos junto con adultos. Estando allí, los niños fueron sacados de la celda, esposados a una reja, se les roció gasolina y se les prendió fuego por miembros de la Policía Nacional. Al parecer, los niños fueron privados de la libertad en virtud del decreto 587 de 2007, expedido por la Alcaldía de Bogotá, que prohíbe a los niños y niñas menores de 18 años de edad “permanecer o circular entre las once de la noche y las cinco de la mañana, cuando se encuentren sin la compañía de cualquiera de sus padres o de un pariente responsable”³⁴.



Los actos de violencia sexual por parte de los grupos combatientes en contra de las mujeres, así como perpetrados en contra de la población infantil, son utilizados como arma de guerra en el marco del conflicto⁴⁴. Además, de manera recurrente se desarrollan este tipo de crímenes como en desarrollo de acciones de abuso de autoridad por parte de miembros de la Fuerza Pública.

42 Clara Rojas visita a su hijo Emmanuel en un orfanato de Bogotá”, DIARIO EL PAÍS, 14 de enero de 2008, www.elpais.com; “ICBF entregará a Emmanuel cuando Clara Rojas lo decida”, DIARIO EL TIEMPO, 11 Enero 2008, www.eltiempo.com. “FARC/rehenes: el acertijo del ADN”, BBC Mundo/América Latina, Jueves, 3 de enero de 2008, en http://news.bbc.co.uk/1/hi/spanish/latin_america/newsid_7168000/7168297.stm

43 DIARIO EL ESPECTADOR “Testigo narra forma en que policías quemaron a jóvenes”, 10 de febrero de 2009. DIARIO DEL SUR “Cerca de 200 personas protestaron por quemados”, 1º de marzo de 2009, y Base de denuncias de la Comisión Colombiana de Juristas, No. D-09005 y D-09012.

44 Al respecto ver Informe Mesa de Mujer y Conflicto Armado 2008; Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, S/2009/434, 28 de agosto de 2009, párr 36 Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, Informe Anual Colombia: Informe Anual 2006, pág. 35; Informe Anual 2007, pág. 43; Informe Anual 2008, pág 64.

El 14 de junio de 2009, en Bogotá, nueve integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, abusaron sexualmente de una niña de 12 años de edad. Los hechos ocurrieron en una carpa instalada por personas desplazadas en el parque Tercer Milenio. En dicho parque, un grupo de aproximadamente 1000 personas desplazadas están ubicadas desde hace varios meses, exigiendo al Estado la garantía de sus derechos. Las personas desplazadas, concentradas en ese lugar, estaban en condiciones de hacinamiento pobreza y discriminación. La Fiscalía dictó medida de aseguramiento en contra de nueve miembros de la Policía, por los delitos de acceso carnal abusivo agravado y pornografía infantil. Según las fuentes, lo que llevó a la Fiscalía a imputar el delito de pornografía, es que algunos de los implicados filmaron el abuso sexual en videos que después fueron difundidos por los medios de comunicación. La niña se encuentra bajo la custodia del ICBF³⁶.



Respecto al crimen de guerra de reclutamiento, existe una grave preocupación por la gran cantidad de NNA que son incorporados a las filas de los grupos armados ilegales en Colombia⁴⁶. El crimen de guerra de reclutamiento⁴⁷ de personas menores de 18 años constituye una de las violaciones constantes y reiteradas a los derechos de la niñez en Colombia y aunque la cantidad de NNA vinculados a los grupos armados es difícil de calcular⁴⁸, se ha llegado a estimar que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años⁴⁹. A pesar de sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario y algunos compromisos hechos, los grupos armados que participan en el conflicto continúan vinculando a NNA en las dinámicas del mismo.

45 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN “Aseguran a nueve auxiliares de la Policía por violar a menor de edad”, Comunicado de Prensa, 30 de julio de 2009, en fgn.fiscalia.gov.co; “Acusan a policías de abuso a menor”, DIARIO EL TIEMPO, www.eltiempo.com; “A la cárcel, auxiliares por abuso de menor” DIARIO EL TIEMPO, 31 de julio de 2009, pág. 1-27; “Asegurados nueve policías”, EL ESPECTADOR, 31 de julio de 2009, pág. 7.

46 Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, S/2009/434, 28 de agosto de 2009.

47 El artículo 8 del Estatuto de Roma establece los crímenes de guerra como aquellas violaciones graves a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, a sus dos Protocolos Adicionales de 1977 y a las leyes y costumbres de la guerra tanto en el contexto de conflictos armados internacionales como en el de los no internacionales.

48 UNICEF ha estimado que el número de niños y niñas vinculados a grupos armados oscila entre los 6.000 y 7.000, UNICEF, La niñez Colombiana en cifras, Bogotá, 2002, página 42; HUMAN RIGHTS WATCH, en su informe Aprenderás a no llorar, consideró que la cifra podría llegar a exceder los 11.000, HUMAN RIGHTS WATCH, Aprenderás a no llorar: Niños combatientes en Colombia, septiembre de 2003, p. 5 y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos en su informe sobre Colombia de 2004 consideró que podría tratarse de 14.000, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003, párr. 45.

49 HUMAN RIGHTS WATCH (2003): Aprenderás a no llorar: Niños combatientes en Colombia. Informe. Nueva York.

Teniendo en cuenta el panorama anteriormente descrito, es posible advertir la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran NNA en Colombia y la necesidad de poner fin al conflicto armado de forma inmediata. Los efectos que recaen sobre este sector de la población tienen un impacto social e individual devastador y no es posible seguir manteniendo una política de impunidad de las violaciones, tal como se ha venido presentando. Así las cosas, es necesario establecer medidas de prevención y protección adecuadas a favor de la población infantil para garantizar la no repetición de los crímenes.

2. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN

En materia de difusión del contenido del Protocolo Facultativo a la Convención de los derechos del niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, se han encontrado algunos actos realizados por organizaciones de la sociedad civil y de las entidades estatales que vale la pena mencionar.

- Actividades del Ejército Nacional de Colombia respecto del día mundial contra la utilización del niño soldado, cuya celebración la realizan desde el 12 de febrero del año 2002. “En esta fecha se celebra el aniversario de la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños y niñas en los conflictos armados. Hacerlo es una forma de seguir llamando la atención de la comunidad internacional sobre la situación de tantos niños y niñas soldados en más de veinte países en el mundo”⁵⁰.
- Campaña denominada Iniciativa para prevenir la vinculación de la niñez al conflicto armado – “El primer derecho de los niños es a ser niño”. Organizada por el ICBF, la Defensoría del Pueblo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Sueca para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, y las Embajadas de Suecia y de Noruega. Campaña desarrollada en el mes de enero de 2004.
- Campaña “No mas niñez y adolescencia reclutada” desarrollada por la Defensoría del pueblo, con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur y el Consejo Noruego para los Refugiados desde el 29 de octubre de 2008⁵¹.
- Charla denominada “Los Protocolos Facultativos de la Convención de los Derechos del Niño,

⁵⁰ “Día Internacional contra la utilización del Niño soldado” en: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=189258>

⁵¹ ALCALDÍA DE SOACHA CUNDINAMARCA “Lanzamiento De Campaña De Reclutamiento a Nivel Nacional será en Soacha”, en: <http://soacha-cundinamarca.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=C1p1--&x=1483833>

relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ICBF en la ciudad de Bogotá, el día 28 de febrero de 2008. Dicho evento fue organizado con el apoyo de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y UNICEF. Participaron como conferencistas a la señora Rosa María Ortiz, miembro del Comité de Derechos del Niño, y al señor Norberto Liwski, ex-miembro del mencionado Comité.

- Evento realizado el día 6 de noviembre de 2006, denominado “Protección infantil contra el abuso y la violencia”, consistente en una acción de performance por los derechos del niño a cargo del artista Fernando Pertuz⁵².
- Campaña denominada “Los niños y las niñas no queremos estar en la guerra”, dirigida a la adopción en el ordenamiento interno del Protocolo Facultativo. Organizada por la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado⁵³.
- Evento denominado “V Aniversario de la Entrada en vigencia del Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados”, organizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR, el 12 de febrero de 2007.
- Comunicado de prensa sobre la sentencia C-203 de 2005 de la Corte Constitucional de Colombia, en la que se declaró exequible el parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 2002. Documento realizado por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado el 11 de marzo de 2005.
- Comunicado de prensa **“Nuevos intentos del paramilitarismo por involucrar a las escuelas en estrategia de guerra” elaborado por la Coalición** contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, el 26 de julio de 2007.

52 “PERFORMANCE INTERACTIVO Derechos del Niño DIA INTERNACIONAL CONTRA EL ABUSO INFANTIL” en: <http://www.fernandopertuz.com/Pertuz-Performance-Derechos-de-la-Ninez.htm>

53 “Iniciativa conjunta de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y la Coalición Internacional para acabar la utilización de niños soldados, que busca sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la situación por la que atraviesan los niños, niñas y jóvenes que en Colombia son vinculados, directa e indirectamente, en el conflicto armado, a fin de llamar la atención del Gobierno nacional y de las partes en contienda para que respeten a los niñas, niñas y jóvenes, como sujetos de derechos”, junio de 2008, en: <http://www.comunit.com/es/node/271138/2714>

3. PREVENCIÓN

3.1. Vinculación a la Fuerza Pública

“Los niños se acercan más fácil (...) la Policía Nacional y el Ejército, les hacen, les buscan el lado, es decir les hacen unas actividades que les llame la atención, o les dan comida”⁵⁴

De acuerdo a lo establecido en las leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 642 de 2001, las Fuerzas Militares de Colombia no deben reclutar personas menores de 18 años dentro de sus filas, ni aún existiendo el consentimiento de sus padres. Pese a lo anterior, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han constatado que si bien no hay un reclutamiento formal de NNA, esta población es utilizada de manera indirecta a través de su involucramiento en actividades de inteligencia, campañas y programas “cívico – militares”, actividades lúdicas y realización de tareas de apoyo (transporte, oficios domésticos, etc.) que los exponen a graves riesgos ante los grupos combatientes, además de ser un acto contrario al Derecho Internacional Humanitario, en particular, al principio de distinción.

Esta práctica de la cual hay importantes denuncias desde 1998 persiste actualmente, constituyéndose en motivo de preocupación por parte de organismos de Naciones Unidas. Así lo corroboran los reportes de la OACNUDH desde el año 2005 hasta la fecha, y las declaraciones del Secretario General en sus informes de 2007, 2008 y el Primer Informe de País al Consejo de Seguridad en aplicación de la Resolución 1612, donde señala que “[l]as fuerzas armadas del Gobierno han utilizado niños con fines de inteligencia, a pesar de la política oficial del Gobierno

⁵⁴ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): *Un camino por la escuela colombiana desde los derechos de la infancia y la adolescencia 2006 - 2007*. Pp.39.

en contra de ello”⁵⁵. Pese a la Directiva permanente 048 de 2008 del Comando General de las Fuerzas Militares donde se establece expresamente la prohibición del uso de NNA en actividades de inteligencia, labores logísticas, operaciones, patrullajes o similares (guías, informantes, mensajeros, etc.), estableciendo a su vez la obligación de garantizar seguridad e integridad a los NNA recuperados de los grupos armados mientras son entregados al ICBF como entidad máxima encargada de su protección, esta práctica sigue presentándose de manera sistemática. De acuerdo a la información consolidada, entre 2005 y 2008 se han registrado casos de uso de la niñez por la fuerza pública en departamentos como Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca y Putumayo⁵⁶.

Campañas y programas cívico - militares

“Claro, ya no hay menores de edad en el ejército. Pero se supone que ellos son un actor armado; entonces yo me pregunto, ¿por qué un actor armado hace charlas en los colegios hablando del reclutamiento y nos excluyen de sus charlas cuando decimos que no compartimos todo lo que tenga ver con las conductas y el lenguaje militar que se emplea en la vida de nuestros pueblos?”⁵⁷.

Estas campañas y programas realizados en comunidades o planteles educativos suponen acciones pedagógicas, lúdicas o humanitarias como brigadas de salud, actividades recreativas y campañas educativas que, aunque en principio se presentan como un servicio y beneficio social a la comunidad, terminan atribuyendo a la fuerza pública labores que no son de su competencia, que exponen a graves riesgos a la población involucrada convirtiéndola en objetivo militar, y que imputan a la milicia actividades que deberían ejercer de manera exclusiva otras instancias estatales como los Ministerios de Educación y de Protección Social en consonancia con su misión. El contacto directo de los uniformados con los NNA hace que éstos interioricen y realcen los valores militares, enalteciendo este modelo como opción de vida y generando familiaridad con las insignias y símbolos propios a esta institución. Es así como el uniforme, las

55 Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad. Documento de Naciones Unidas A/62/609-S/2007/757, 21 de diciembre de 2007, Párrafo 114.

56 Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, 28 de agosto de 2009, S/2009/434, párr. 23; Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, 26 de marzo de 2009, A/63/785-S/2009/158, Párr. 114; y Los niños y los conflictos armados, Informe Global del Secretario General al Consejo de Seguridad, 21 de diciembre de 2007.

57 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2008): BOLETÍN PÚT-CHIPU No. 20 “Jóvenes conscientes y que sienten”.

armas y la figura del héroe valiente se constituyen entonces en imaginarios de poder, libertad y autonomía para los NNA. Su desarrollo muchas veces va acompañado de labores de inteligencia orientadas a indagar acerca de las actividades de padres y familiares e información acerca de la presencia y actividad de grupos armados en la zona.

Son actividades continuamente reportadas en la página web del ejército nacional, ilustradas con fotografías de NNA abrazando a los soldados o alusivas a celebraciones, donde se enaltece su papel cívico en apoyo a la comunidad⁵⁸. Muchas de estas actividades son realizadas en las instalaciones de los colegios y escuelas constituyendo un riesgo y amenaza para la neutralidad que deben ofrecer estos establecimientos. Las comunidades afectadas por estos programas sostienen que las actividades exponen a una mayor situación de riesgo a los NNA con relación a los efectos del conflicto o la vinculación. Ejemplos emblemáticos al respecto se hallaron en el departamento de Chocó (en municipios como Quibdó, Piedra Honda, Tutunendo y Cuajandó) y Bolívar (en los municipios de María la Baja, Turbaco y Carmen de Bolívar) donde miembros de las Fuerzas Armadas tienen injerencia en contenidos educativos y desarrollan campañas de aseo, jornadas ecológicas, lúdicas y entregan material didáctico y útiles escolares⁵⁹.

También se ha podido constatar que en zonas como el departamento de Bolívar estas tareas de integración incluyen almuerzos pagados por la comandancia y protección "*personalizada*" a personas víctimas de desplazamiento forzado⁶⁰ poniendo en riesgo de revictimización a estas personas. En el municipio de Sincelejo (Sucre), estas actividades incluyen el préstamo de armas para que realicen pruebas de polígono⁶¹. De igual forma son numerosos a lo largo y ancho del país los casos de actos conmemorativos donde los NNA llegan vestidos con uniformes de alguna dependencia de la Fuerza Pública⁶².

58 Página web del Ejército nacional, <http://www.ejercito.mil.co/>. Véase noticias como: Población de Achí se beneficia de jornada cívico militar. 26 de noviembre de 2007; Niños de Mocoa se divierten con el grupo Geos de la Brigada de Selva 27. 4 de septiembre de 2007; Décima Sexta Brigada se integra aún más con la comunidad Casareña. 25 de junio de 2007; Lancita y sus amigos saluda a los viajeros. 22 de mayo de 2008; Niños araucanos unidos con su ejército en: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=78190>; Niños provenientes del Catatumbo conocerán regiones de Colombia. 11 de mayo de 2009. Comunidades indígenas celebraron su día con el ejército. 11 de agosto de 2009.

59 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Op. cit. Pág. 49 – 63.

60 Ibid. Pp. 43.

61 Idem.

62 Un ejemplo de ello sucedió en *el barrio la Cruz de la ciudad de Medellín el 12 de abril de 2008, habitado por población en situación de desplazamiento*, cuando se realizó la inauguración de una pequeña carretera. El acto central estuvo a cargo de la policía local y allí fueron presentados más de 20 niños con uniformes de la policía como parte de la acción cívica de esta. CORPORACIÓN PAZY DEMOCRACIA (Mayo de 2008): "El caso de Antioquia. Informe de seguimiento presentado a la Representante especial del Secretario General sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados durante su misión a Colombia". Bogotá.

Algunos programas suponen la realización de actividades comunitarias y de servicio social con un grupo de NNA que se instruye regularmente durante un periodo de tiempo. No obstante, se advierte que en la práctica estos programas incluyen actividades relacionadas con la instrucción militar como la realización de ejercicios físicos, relaciones de subordinación, instrucción táctica en situaciones de orden público y actividades cuyo propósito es generar un impacto emocional que favorezca la percepción del “buen guerrero” y de la “guerra justa”. Dentro de estos programas pueden destacarse el programa desarrollado desde julio de 2007 en Antioquia por la Fuerza Aérea Colombiana denominado “Grupo Halcones”, en el cual 73 niños, entre 8 y 16 años son entrenados por el Comando Aéreo No. 5 del municipio de Rionegro, en actividades encaminadas a “*servirle a la patria*”⁶³; el programa de Policía Cívica Juvenil implementado desde el 2008 en los municipios de Patía - Cauca y Vista Hermosa – Meta con niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 7 y los 14 años de edad⁶⁴; el programa “Club Lancita” como espacio de entretenimiento y formación de niños y jóvenes entre los 5 y los 16 años implementado en varios municipios del país⁶⁵; los laboratorios experimentales realizados en las comunas 3 y 4 de Buenaventura – Valle del Cauca y liderados por el ICBF, el Sena y la Armada Nacional⁶⁶; el programa institucional “Conociendo Colombia” implementado con NNA de la región del Catatumbo (Norte de Santander) por el Ejército Nacional y la gobernación del departamento, incluso con el apoyo de la empresa privada (Apuestas Cúcuta 75, el Hotel Bolívar, Bancalzado y Carrefour)⁶⁷; y el programa “Soldados por un día” que siguió implementándose en varias zonas del país con leves modificaciones pese a los pronunciamientos hechos en el 2003 por la Procuraduría General de la Nación sobre su inconveniencia⁶⁸

63 FUERZA AÉREA COLOMBIANA “Grupo Juvenil Halcones”, septiembre de 2007, en, www.cacom5.mil.co/

64 CORPORACIÓN VÍNCULOS (Junio de 2009): Documento interno de análisis.

65 Como: Puerto Wilches, Neiva, Cocorná, Florencia, Oasis, Carmen de Bolívar, Bucaramanga, Bogotá, Florencia, Segovia, Anorí, La sierra, Rivera, Puerto Berrio, Caracolí. Al respecto véase: <http://www.clublancita.mil.co>

66 ICBF, SENA y Armada Nacional capacitan población vulnerable, Bogotá, 29 de abril de 2008, en: http://www.icbf.gov.co/Noticias/doc_noticias/doc-mar-abr-08/Capacitacion%20poblacion%20vulnerable.pdf

67 Niños provenientes del Catatumbo conocerán regiones de Colombia. 11 mayo de 2009, en: <http://www.segundadivision.mil.co/?idcategoria=223711>

68 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: *La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, Informe Especial*, sin fecha, mimeografiado, agosto 28 de 2003.

y pese a las recomendaciones realizadas en el 2008 en el contexto del Examen Periódico Universal implementado al gobierno colombiano por el Consejo de Derechos Humanos⁶⁹.

Muchos de estos programas suponen actividades que se imparten dentro de las guarniciones militares aumentando el peligro para los NNA involucrados. Tal es el caso de las actividades realizadas por la XVIII Brigada del Ejército en el departamento de Arauca, involucrando incluso a niños entre los cuatro y siete años de edad⁷⁰.

La realización de campañas y programas cívico militares con fines de inteligencia ha sido reportado por la OACNUDH quien denunció que en las comunidades rurales de Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó) el Ejército y la Policía Nacional entregan juguetes y material de propaganda militar a NNA, solicitando a cambio información acerca del paradero de grupos guerrilleros y de la identidad de sus miembros⁷¹.

Utilización en actividades militares y de inteligencia

“Los soldados muchas veces preguntan a los niños si sus papás son ‘milicianos’, además los motivan a que se alistén en el Ejército. Un militar le ha preguntado a una niña de dos años ‘dónde tiene su papá las granadas’, la niña salió corriendo, pero la alcanzaron y se la llevaron a un cañal (sic), y la retuvieron media hora. Se pasó este informe ante las autoridades del batallón, pero tildaron de mentirosos a los familiares”⁷².

El 6 de marzo de 2007 el Ministerio de Defensa de Colombia promulgó la Directiva 30743 que prohíbe a los miembros de la fuerza pública utilizar NNA en actividades de inteligencia, en par-

69 En las recomendaciones expuestas por el informe de la sesión del Examen Periódico Universal sobre Colombia adoptado por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, Eslovenia recomendó la cesación del programa “Soldado por un día” por implicar el uso de NNA por las fuerzas de la Seguridad del Estado. No obstante, el gobierno rechazó la observación argumentando que el programa no es contrario al principio de distinción y no convierte a los NNA en objetivos militares. Por el contrario, afirma que el programa anima a fortalecer las relaciones entre la población civil y la fuerza pública, proporcionando servicios sociales en comunidades rurales donde la fuerza pública es la única presencia del Estado. Al respecto véase: Consejo de Derechos Humanos “Draft report of the working group on the universal periodic review Colombia” Documento de Naciones Unidas A/HRC/WG.6/3/L.14. Diciembre 15 de 2008. Párr. 37. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Colombia Addendum Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review” Documento de Naciones Unidas A/HRC/10/82/Add.1. Diciembre 16 de 2008.

70 Niños araucanos unidos con su ejército en: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=78190>

71 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (19 de febrero de 2009): Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Documento de Naciones Unidas A/HRC/10/032. Párrafo 36.

72 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Op. cit. Pp. 40.

ricular niños rescatados de grupos armados ilegales. No obstante, organismos como la Defensoría del Pueblo, OACNUDH, UNICEF, y ONG de derechos humanos han seguido reportando casos de personas menores de 18 años, especialmente desvinculados de grupos armados ilegales, que han recibido presiones para suministrar información, participar en operativos e identificar a miembros de los grupos a los que pertenecían⁷³.

En el departamento del Cauca un niño desmovilizado de las FARC fue utilizado por presuntos miembros de la XXIX Brigada como informante de las fuerzas armadas en una operación, y posteriormente, a la edad de 19 años, resultó muerto en combate con las FARC⁷⁴. En el departamento de Bolívar un niño de 11 años fue empleado como guía por parte de presuntos miembros del Batallón Nueva Granada en un operativo militar⁷⁵ y se registró la muerte de otro debido a un artefacto explosivo mientras que era obligado a transportar tropas del Ejército en San Pablo (Bolívar)⁷⁶. En el departamento de Putumayo se induce a los NNA a dar información a cambio de recompensas⁷⁷ y se conoció el caso de un niño de 11 años que por ser informante fue víctima de homicidio por parte de las FARC-EP⁷⁸.

Dentro de la utilización de NNA en actividades de inteligencia preocupan las continuas detenciones arbitrarias de personas menores de 18 años desvinculadas del conflicto armado quienes son mantenidas en batallones y guarniciones militares por períodos no autorizados, desconociendo el plazo de 36 horas establecido en el Decreto 128 de 2003 para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo *“niños y niñas –en especial provenientes de las guerrillas- que han permanecido en instalaciones militares por periodos de más de 36 horas han recibido presiones para que suministraran información a miembros de la fuerza pública, lo mismo que a participar en operativos y a señalar o denunciar*

73 Tal y como lo denuncia la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (5 de marzo de 2007): Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Documento de Naciones Unidas A/HRC/4/48. Párrafo 97.

74 Información suministrada por la Defensoría del Pueblo y reportada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad. Documento de Naciones Unidas A/62/609-S/2007/757, 21 de diciembre de 2007.

75 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (28 de febrero de 2008): Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento de Naciones Unidas A/HRC/7/39. Párrafo 44.

76 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento de Naciones Unidas E/CN.4/2006/009. Párrafo 68.

77 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Op. cit. Pp.40.

78 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Op. cit. Párrafo 68.

a los miembros del grupo de procedencia”⁷⁹. El informe sostiene que tan solo el 12,2% de los niños incorporados al programa de atención de NNA desvinculados adelantado por el ICBF ha manifestado haber llegado directamente al mismo, 32.6% a estaciones de policía y 58.9% a los batallones militares.

Organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas en Colombia⁸⁰ han podido constatar varios casos de NNA desvinculados que han permanecido en batallones durante meses y que han sido obligados a entregar información sobre el grupo al que pertenecían bajo presiones e incluso han sido obligados a ser guías hacia los campamentos poniendo en grave riesgo su vida e integridad personal. En 2007 se conoció el caso de una joven que al desmovilizarse de la guerrilla en el 2005, siendo aún una niña, fue mantenida ilegalmente en un batallón por más de once meses y obligada a servir de guía a un campamento, hechos durante los cuales resultó gravemente herida al pisar una mina antipersonal. Actualmente, la joven se encuentra muy afectada emocionalmente y perdió el 90% de la vista y el 70% de la capacidad auditiva como consecuencia de la explosión de la mina, su caso permanece en la impunidad⁸¹.

Las llamadas batidas o acciones mediante las cuales la fuerza pública recoge de manera imprevista a jóvenes que se reúnen en plazas, parques, esquinas, colegios nocturnos, entre otros lugares, y que no portan libreta militar, también son un aspecto de especial preocupación⁸². En estas acciones personas menores de 18 años o jóvenes protegidos especialmente por las leyes nacionales y eximidos de prestar el servicio militar obligatorio, son retenidos a cambio de información siendo objetos de tratos crueles e inhumanos. Al respecto preocupa la expedición del Decreto 092 de abril de 2007 que rige para el puerto marítimo de Buenaventura (Valle del Cauca) y que autoriza “a realizar batidas ciudadanas y los controles policivos necesarios en todo el territorio municipal de Buenaventura, siempre y cuando se obtenga información veraz y objetiva de posibles hechos generadores de violencia que atenten contra la seguridad ciudadana y convivencia pacífica”⁸³. De acuerdo con información de la comunidad, desde entonces se realizan

79 DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2006): *Boletín No. 9 Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos*. Pp. 24.

80 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (5 de marzo de 2007): Op. cit.

81 Caso documentado y acompañado por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. La información detallada reposa en la base de datos de la Coalición.

82 Esta situación es identificada por el Informe del Grupo de trabajo de la Detención Arbitraria el cual realizó una visita a Colombia durante el 2008, señalando que: “se observan con preocupación las capturas practicadas por efectivos militares, a pesar de que el ejército no tiene facultades legales para realizarlas, particularmente las llamadas “batidas”. Informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, documento de Naciones Unidas, A/HRC/10/21/Add.3, 16 de Febrero de 2009.

83 Decreto 092 de abril de 2007.

operativos donde realizan detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, y toma de registro fotográfico y de video de los habitantes en el interior de sus casas⁸⁴.

Utilización en actividades domésticas, de transporte y mensajería

“Aquí los militares utilizan a los niños de pronto para (...) hacer mandados, o los envían a los cerros para llevarles cosas, dejarles paquetes, entonces eso es una forma de vinculación con la guerra”⁸⁵.

Además de las actividades militares y de inteligencia, los NNA son utilizados en labores domésticas, de transporte y mensajería. Así lo constatan los casos reportados por Naciones Unidas en 2007⁸⁶ en el departamento del Chocó, donde se evidenció el uso de personas menores de 18 años para transporte de materiales en Urrau, limpieza y mantenimiento de armas en Bebedó, y carga de dotación de guerra (morrales y radioteléfonos) en Curbatá⁸⁷. En la misión realizada en el departamento de Putumayo, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado recibió múltiples declaraciones por parte de docentes y pobladores que informaban que el Ejército intenta acercarse a NNA para involucrarlos en la carga de armas, implementos y vituallas, aduciendo que es un deber ciudadano colaborar con la fuerza estatal y que, además, por esa ayuda pueden recibir algún tipo de remuneración económica⁸⁸. En el municipio de San Onofre (Sucre), profesores de la institución educativa “Libertad” comentaron que miembros de las Fuerzas Militares utilizan a NNA para actividades de mensajería, pues muchas veces no pueden moverse de los lugares asignados y por esto necesitan de alguien que pueda llevar o recoger correspondencia dentro del perímetro urbano⁸⁹. La mensajería también fue reportada en San José de la Fragua (Caquetá)⁹⁰.

84 Información suministrada por el Servicio Jesuita para los Refugiados SJR.

85 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Op. cit. Pp.44.

86 Informe secretario general sobre los niños y los conflictos armados 2007. Documento de Naciones Unidas, Párr. 115

87 Información suministrada en Julio de 2007 por UNICEF.

88 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Op. cit. Pp.39.

89 Ibid. Pp.43.

90 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2009): Ficha de recolección de información aplicada a NNA de Benposta. Información que reposa en el sistema de información de Coalición.

Escuelas militares

“La disciplina militar es muy mala. Los seres humanos se vuelven esclavos de las órdenes y de la jerarquía y restringe los deseos de exploración, la libertad de expresión para pensar y para vivir”⁹¹.

Existe en la sociedad colombiana una permanente promoción de la vinculación de NNA al ámbito militar en espacios legítimos y socialmente reconocidos como colegios militares, policía de menores, y carabineros, entre otros⁹². Actualmente existen en el país 46 colegios militares cuya instrucción militar está reglamentada por la Resolución 00715 del 11 de agosto de 1999 del Ministerio de Defensa.

Los estudiantes reciben instrucción militar desde grado noveno hasta once, es decir, entre los 14 y 17 años. Los estudiantes son considerados cadetes⁹³ y obtienen un diploma que los acredita como “Bachilleres técnicos con orientación militar”. La instrucción supone 1.300 horas de entrenamiento y 3 campañas, luego de las cuales obtienen la tarjeta militar de primera clase “es decir, definen su situación militar como cualquier soldado, pues al igual que ellos...se preparan en las diferentes áreas que los habilitan como combatientes”⁹⁴. Lo anterior supone que no hay una definición clara en los límites que los definen como miembros oficiales de las fuerzas armadas.

La educación impartida incluye⁹⁵ ejercicio físico, amor a los símbolos patrios, manejo de armas, prácticas de tiro, actividades de sobrevivencia, asalto con armamento y sin armamento, entrenamiento en antimotines y campañas o misiones a terreno. “Cuando empezamos a usar armas sentía una sensación fuerte de poder que luego pasó con el tiempo pues ya fue normal”⁹⁶. En materia de estrategia les enseñan a pensar como el enemigo piensa. De acuerdo a los testimonios de los estudiantes, el enemigo es una persona que no está de común acuerdo con la acción de las fuerzas armadas o las políticas del estado.

La ambientación y decoración de muchos de estos colegios es similar a la de los batallones;

⁹¹ Testimonio de estudiante de grado 11 del Colegio Militar “Antonio Nariño”.

⁹² Ruiz, Sandra. En: Bello, Martha Nubia y Ruiz, Sandra (2002): *Conflicto armado, niñez y juventud. Una perspectiva psicosocial*. Universidad Nacional de Colombia y Fundación Dos Mundos. Ediciones Ántropos. Bogotá.

⁹³ Corte Constitucional, Sentencia T-1032/00 Contra el Colegio Militar Simón Bolívar MP Alejandro Martínez Caballero

⁹⁴ Senador de la República Luis Elmer Arenas, Exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 184 de 2001, “Por medio de la cual se reglamenta el servicio militar en los Colegios y Academias Militares y se dictan otras disposiciones”, noviembre de 2001

⁹⁵ Información obtenida a través de entrevistas realizadas por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia a 6 jóvenes graduados de colegios militares y a 40 estudiantes de grado 11 de colegios militares en Bogotá.

⁹⁶ Testimonio de estudiante de grado 11 del Colegio Militar “Mariscal Sucre”.

agresiva y de carácter bélico. Sobresalen murales con tanques de guerra, símbolos patrios, emblemas bélicos. Aunque los profesores son licenciados, han adquirido actitudes militares que permean el quehacer pedagógico y que se fundamentan en la idea de que la disciplina está relacionada con sacrificio, castigo y obediencia. Esta visión aceptada por padres y estudiantes, legitima mecanismos de “control disciplinario” que suponen intimidación por faltas, gritos, insultos, señalamientos públicos a líderes, y castigos físicos como hacer cuclillas, y correr largas distancias por periodos que van desde los 30 minutos a las 3 horas.

La mayoría de los entrevistados son conscientes de que podrían ser considerados blanco militar, puesto que las escuelas están ubicadas cerca a batallones militares, reciben instrucción o campañas en sus instalaciones, sus uniformes son semejantes y en un caso extremo, durante tiempo de guerra, podrían ser solicitados para ampliar el pie de guerra. No obstante, no están preocupados pues no lo perciben como un riesgo. Al indagar sobre las motivaciones que los impulsaron a adoptar este modelo pedagógico, más del 50% respondió que son una posibilidad que les permite adquirir la tarjeta militar de primera clase sin prestar servicio militar obligatorio. También dijeron que no era una decisión personal, sino de sus padres.

Teniendo en cuenta el contexto de conflicto armado interno, este tipo de educación debería erradicarse por los efectos negativos que conlleva. La educación impartida en escuelas militares promueve desde espacios legítimos la guerra como opción de vida y la violencia como mecanismo para solucionar conflictos; ubica en situación de riesgo a los estudiantes que se convierten en objetivo militar de grupos armados; atribuye a NNA conocimientos que por su etapa no están en condiciones de manejar responsablemente (como el entrenamiento en uso de armas); y promueve la aceptación de modelos pedagógicos en los cuales la disciplina está asociada al castigo, la rudeza, y la restricción a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la escogencia de una opción política diferente.

Impacto en las niñas y mujeres adolescentes

“Varias jóvenes (que) tienen hijos de policías (...) El militar es el poder, a él si le pagan y él puede gastar; él compra el ‘discman’ y tiene cómo sacarlas del hambre (...)”⁹⁷.

Vale la pena resaltar que la socialización de la fuerza pública con las comunidades ha afectado de manera particular a las niñas, jóvenes y mujeres, quienes han sido objeto de violencia

sexual, tratos degradantes y discriminación, tal y como lo corroboran los informes de OACNUDH, UNICEF, UNIFEM, Defensoría del Pueblo y ONG que han abordado el tema como las integrantes de la Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado, la Comisión Colombiana de Juristas y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. *"En situaciones de militarización de la sociedad y en situaciones de conflicto armado, aumentan las cargas, los riesgos y la inseguridad para las mujeres, jóvenes y niñas, y se agudiza la violencia contra las mismas"*⁹⁸.

El uniforme de camuflado, el aparato telefónico celular, las motos y las armas son símbolos de poder que captan fuertemente la atención de NNA, creando un imaginario positivo de guerra. En el caso particular de las niñas y jóvenes muchachas, resulta muy atractivo el hecho de que los miembros de la fuerza pública que permanecen en la zona sean jóvenes, provenientes de otras regiones del país y con capacidad para darles algo que ellas no tienen: dinero y posibilidades de acceso a la seguridad social de la que disfrutaban los miembros de la fuerza pública. *"Hay grupos de militares diseminados que se convierten en otro elemento peligroso para los y las jóvenes. Hemos tenido dificultades por el acoso que ese tipo de personajes hacen hacia las niñas. (...) no podemos censurar a las niñas porque miran a los militares. Hay que hacer un trabajo con ellas"*⁹⁹.

Para las comunidades afectadas es común que las niñas se hagan novias de los soldados y los policías, y saben que hay casos de embarazos en los cuales los padres no responden y que luego son trasladados. *"Hay mucha relación entre policía y población civil. Embarazan niñas de 12 a 14 años; hay niños pequeños sin padres; las niñas van a las guarniciones militares"*¹⁰⁰. Una madre entrevistada dijo: *"A veces en los bailaderos se ve a los uniformados con las jovencitas, pero yo sí les digo que yo no bailo con ellos [si tienen] armas o camuflado"*¹⁰¹. También son comunes los casos de violencia sexual en contra de jóvenes y niñas afectando gravemente su salud física y mental, autoestima e integridad personal, y aumentando el número de embarazos a temprana edad y la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. En otros casos, se presentan abortos mal practicados que generan secuelas permanentes en la salud de las adolescentes y las niñas. Se evidencia que muchos casos de abuso son denunciados ante las autoridades militares sin ningún resultado.

⁹⁸ MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO (2006): *Guía para documentar la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas, en contextos de conflicto armado*. Bogotá.

⁹⁹ MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO (2008): VIII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, niñas y jóvenes en Colombia / Violencia sexual. Bogotá. Testimonio escuchado en la vereda Puerto El Sol, municipio de San Miguel. Pp. 115.

¹⁰⁰ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Op. cit. Pp. 69.

¹⁰¹ Idem.

Las comunidades asocian la llegada de la fuerza pública con el aumento de violencia sexual, embarazos adolescentes, la prostitución infantil, el alcoholismo y la drogadicción. La asociación no es fortuita. De acuerdo a los registros de violencia sexual consolidados por la Comisión Colombiana de Juristas *"Si se observa el comportamiento de los presuntos autores por quinquenio, se determina que la participación de la Fuerza Pública casi se triplicó, en términos porcentuales, con respecto al período anterior. Estos niveles de participación de la Fuerza Pública en hechos de violencia sexual pueden constatarse también al analizar las fuentes estatales. La Fiscalía General de la Nación reportó a la organización Sisma Mujer estar adelantando 127 investigaciones por delitos de violencia sexual, cometidos entre los años 2001 y 2006 por miembros de grupos armados que participan en las hostilidades. De conformidad con el reporte de la Fiscalía, los porcentajes de presuntas autorías son los siguientes: a los agentes del Estado se les atribuye el 80,3%; a los grupos paramilitares, el 14,2%; y a los grupos guerrilleros, el 3,9%. Los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal también revelan que, para los años 2006 y 2007, entre los grupos armados que participan en las hostilidades, el grupo de presuntos autores con mayor número de registros en materia de violencia sexual es la Fuerza Pública"*¹⁰².

Otro factor de preocupación es que la fuerza pública utiliza las trincheras o lugares de acantonamiento como lugares para tener relaciones sexuales con las niñas y jóvenes, lo cual dificulta el acceso y control de los padres, madres de familia o maestros. Muchos de estos lugares tienen precarias condiciones higiénicas, pero sobre todo, pueden significar un riesgo adicional para las niñas y adolescentes que permanecen en los mismos, no sólo por posibles actos de violencia sexual por parte de otros combatientes, sino también porque son sitios declarados por los bandos contrarios como objetivo militar. Estas prácticas, además de poner en grave riesgo la integridad física y la salud de las niñas y jóvenes, generan discriminación de género pues son señaladas con apelativos humillantes *"... los policías han dejado marcado detrás de un espejo el nombre de las mujeres que se llevan a los bunker, que a las mujeres las tratan de 'perras', de 'putas', porque tienen confianza con ellos, en ocasiones demasiado. Que no le gusta lo de 'putas' a las mujeres..."*¹⁰³.

102 MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO (2008): VIII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, niñas y jóvenes en Colombia / Violencia sexual. Bogotá. Pp. 8.

103 COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Op. cit. Pp. 74.

3.2. Vinculación a grupos armados irregulares

“Muchos deciden unirse a un grupo armado porque se sienten más seguros bajo su protección. La mayoría tienen un concepto muy vago de lo que conlleva la vida de combatiente hasta que es demasiado tarde para echarse atrás. A cambio de camaradería, alimentos y protección, los niños se ven expuestos a las enfermedades, el agotamiento físico, las lesiones, la muerte repentina y la tortura en manos del enemigo. Muchos no conservan ni el más mínimo contacto con sus familias”¹⁰⁴.

En Colombia todos los grupos que toman parte en las hostilidades han suscrito en algún momento dado acuerdos de no utilización y vinculación de NNA a sus filas. Las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- en la Declaración de Paramillo del 26 de julio de 1998, establecieron que a partir de la fecha no reclutarían personas menores de 18 años en sus filas, ni los utilizarían en actividades de inteligencia o vigilancia, acuerdo que fue reiterado en el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz como parte del cese de hostilidades. Las FARC, en junio de 1999 hicieron formalmente un ofrecimiento al Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados, en el cual prometieron no reclutar más niños y niñas menores de 15 años¹⁰⁵. En junio de 1998 el ELN firmó en Mainz, Alemania, los acuerdos de “Puerta del Cielo”, en los cuales se comprometió a no reclutar personas menores de 16 años.

A pesar de estos acuerdos, dichos grupos continuaron vinculando NNA a sus actividades, utilizándolos como informantes, campaneros, combatientes y/o esclavas sexuales. La vinculación de NNA es un fenómeno que se viene advirtiendo con preocupación desde finales de la década del 1990 cuando se tiene conocimiento de las primeras desvinculaciones de NNA de grupos armados al margen de la ley¹⁰⁶, tomando relevancia dentro de la agenda a partir del 2000¹⁰⁷. Desde entonces organismos de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales vienen denunciando el reclutamiento de personas menores de 18 años a los grupos armados en Colombia como un accionar incesante que evidencia una

¹⁰⁴ HUMAN RIGHTS WATCH (2003): Op. cit. Pág. 3.

¹⁰⁵ Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados tras su misión humanitaria a Colombia, Declaración de Prensa HR/4418, 9/06/99.

¹⁰⁶ DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES (2008): *Ruta ética jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley*. Bogotá.

¹⁰⁷ De acuerdo al Estado del Arte realizado por el *Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia* en el 2002, es a partir de 1996 que el tema adquiere relevancia y se visibiliza en la agenda política del Estado y la sociedad civil.

sistematicidad y generalidad de esta práctica¹⁰⁸. *"En octubre de 2008, la Corte Constitucional de Colombia afirmó también que los grupos armados ilegales estaban reclutando a niños en Colombia de manera generalizada, sistemática y habitual, y que aún no se conocía la verdadera magnitud y el alcance territorial de estos reclutamientos"*¹⁰⁹.

Recientemente se ha advertido que el fenómeno lejos de disminuir ha aumentado considerablemente en los últimos años. Así lo corroboran las declaraciones realizadas por Hilde Johnson, directora adjunta de Unicef, quien afirmó que, de acuerdo al trabajo de campo que realiza esta agencia en el país, se notifica que en el 2008 se incrementó el número de personas menores de 18 años reclutadas por los grupos ilegales¹¹⁰. Similares afirmaciones dio el fiscal del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza Sergio Tapia, quien atribuyó el crecimiento a las nuevas modalidades paramilitares y de violencia organizada que complejizan aún más el conflicto armado interno¹¹¹. Aunque no hay cifras exactas y las que existen son fruto de extrapolaciones, Tapia afirma que actualmente puede calcularse en 25.000 el número de NNA vinculados a grupos armados, cuando históricamente se ha manejado una cifra que oscila entre 6.000¹¹² y 14.000¹¹³. La recesión económica que enfrenta el mundo y que ya toca al país también preocupa en este sentido, pues tal y como lo ha afirmado Paul Martin, director de la Unicef *"esta crisis podría acentuar en Colombia el número de niños y niñas que engrosan las filas de estas organizaciones porque los grupos armados ilegales no van a sufrir la misma recesión que los pobres del país y van a seguir ofreciendo un millón de pesos a niños y a niñas, quienes sufren cada vez más por los efectos de la crisis y van a estar cada vez más prestos a aceptar estos incentivos"*¹¹⁴.

Pareciera entonces que los nuevos hallazgos en la materia fueran cada vez más desalentadores. Esto se advierte en el crecimiento del número de NNA pertenecientes en los grupos armados irregulares así como en sus tempranas edades de vinculación. En el 2006 el informe

108 El reclutamiento de NNA es un fenómeno que viene advirtiéndose desde el 2004, siendo un tema recurrentemente reportado en los informes del Secretario General, OACNUDH, Unicef, Defensoría del Pueblo y varias ONG.

109 Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. 28 de agosto de 2009. Documento No. S/2009/434. Párr. 16.

110 DIARIO EL TIEMPO "Unicef alerta sobre incremento de niños reclutados para la guerra en Colombia" 24 de octubre de 2008.

111 CARACOL RADIO "ONG internacional dice que creció el reclutamiento de menores en Colombia" 1 de noviembre de 2008.

112 DEFENSORÍA DEL PUEBLO y UNICEF (Diciembre 2002): "La Niñez en el conflicto armado colombiano", *Boletín La niñez y sus derechos* No. 8.

113 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2002.

114 EL TIEMPO "Reclutamiento de menores en grupos armados podría aumentar por crisis económica, advierte Unicef". Febrero 11 de 2009. Véase En: http://www.eltiempo.com/colombia/politica/reclutamiento-de-menores-en-grupos-armados-podria-aumentar-por-crisis-economica-advierte-unicef_4809206-1.

de la Defensoría del Pueblo¹¹⁵, encontró que la edad promedio de reclutamiento se redujo entre 2001 y 2005 pasando de 13,8 a 12,8 años de edad. Podríamos afirmar entonces que la tendencia señala un incremento del reclutamiento y un uso sistemático de niños y niñas cada vez más pequeños.

La vinculación a grupos armados irregulares es una amenaza que padecen los NNA del 84% de los departamentos del país¹¹⁶. La evidencia del peligro ha sido documentada por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, quien en el 2007 advirtió 90 situaciones de riesgo (informes de riesgo y notas de seguimiento) de las cuales el 60% advertían de posible riesgo de reclutamiento de NNA por parte de guerrillas, paramilitares y grupos en rearme después de la desmovilización¹¹⁷. Asimismo, en el 2008 emitió más de 20 alertas en 44 municipios de 14 departamentos del país, estableciendo como zonas de alto riesgo los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca (Soacha), Guaviare, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Vaupés, entre otras¹¹⁸. Por su parte, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos también han reportado entre 2005 y 2008 casos de reclutamiento en estos y otros departamentos como Amazonas, Arauca, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Adicionalmente es importante recalcar que las dinámicas de reclutamiento por parte de todos los grupos que hacen parte de las hostilidades se han transformado. Desde el 2005 organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han registrado reclutamientos con las siguientes características:

- *Reclutamiento masivo*: como los casos presentados en el sur de Bogotá (30 NNA reclutados por grupos paramilitares)¹¹⁹; Cartagena - Bolívar (100 NNA reclutados por grupos

¹¹⁵ DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2006): *Boletín No. 9 Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos*.

¹¹⁶ La Defensoría del Pueblo ha dicho en sus investigaciones que niños y niñas han sido reclutados por los grupos armados ilegales en 27 de los 32 departamentos de Colombia. Véase DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2006): *Boletín No. 9 Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos*.

¹¹⁷ DEFENSORÍA DEL PUEBLO Comunicado de prensa No.1336. 28 de agosto de 2008.

¹¹⁸ Véase: DEFENSORÍA DEL PUEBLO Comunicado de prensa No.1336. 28 de agosto de 2008. SEMANA "Defensoría alertó sobre reclutamientos en Soacha y Ciudad Bolívar". 25 de septiembre de 2008.

¹¹⁹ Los grupos de autodefensa han reclutado a más de 30 menores de edad en el sur de Bogotá, Caracol Radio, 10 de septiembre de 2007, en: <http://www.caracol.com.co/noticias/490953.asp>

paramilitares)¹²⁰; Cali – Valle del Cauca (24 NNA reclutados por grupos paramilitares)¹²¹; Mitú - Vaupés (25 NNA indígenas reclutados por el grupo guerrillero FARC)¹²² y Rioblanco - Tolima (100 NNA reclutados por el grupo guerrillero FARC)¹²³. Hechos similares se han presentado en la región de los Montes de María (costa Caribe), y los departamentos de Chocó, y Arauca¹²⁴.

- En zonas de difícil acceso: lugares en los cuales aparentemente no existían registros, como lo son el caso de los departamentos de Guaviare, Vaupés y Amazonas.
- Afectando de manera particular a:
 - » Comunidades indígenas: registrando casos de reclutamiento en las comunidades Nasa (Cauca) por parte de las FARC¹²⁵, Awa (Nariño) por parte de las FARC y el ELN¹²⁶, Inga (Putumayo) por parte de las FARC¹²⁷, 8 etnias del departamento del Vaupés como los pueblos Kubeo y Yuruti por parte de las FARC¹²⁸, y Motilón Barí (Norte de Santander) por parte de grupos paramilitares¹²⁹, entre otros. La evidencia de su afectación se puso de presente en el 2005 cuando, en virtud al inminente reclutamiento de NNA indígenas, la Defensoría del Pueblo adelantó con el apoyo de OIM, Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), y organizaciones indígenas, un proceso de consulta y concertación para producir la "Ruta jurídica para los pueblos indígenas"¹³⁰ estableciendo una de guía de atención especializada para NNA indígenas desvinculados.
 - » Mujeres: todos los grupos han cometido actos de violencia sexual, principalmente en contra de las niñas y las adolescentes. Sus cuerpos son utilizados como botín de guerra, marcando las represalias que uno y otro bando cometen. Como lo puso de presente la Relatora

120 UNICEF, información proporcionada el día 09 de julio de 2007.

121 UNICEF, información proporcionada el día 09 de julio de 2007. Información reportada en Diario El País, 6 de junio de 2007.

122 Información reportada por la Defensoría del Pueblo. Septiembre de 2008.

123 Información reportada por el Defensor Regional del Pueblo, Abril 2009.

124 UNICEF, información recibida el día 09 de julio de 2007.

125 "Las FARC continúan reclutando niños y niñas para la guerra" 4 de marzo de 2008. En: <http://www.terceradivision.mil.co/index.php?idcategoria=200003>

126 Al respecto véase: 1) OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Op. cit. Anexo 2 Párrafo 82. 2) OMCT Organización Mundial Contra la Tortura "Graves violaciones de derechos humanos contra comunidad indígena AWA en Nariño", 24 junio de 2009, en <http://www.omct.org/index.php?id=&lang=es&articleSet=Appeal&articleId=8576>

127 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Op. cit. Párrafo 63.

128 a) EL ESPECTADOR "Denuncian que las Farc han reclutado cerca de 42 indígenas en el Vaupés", 4 junio 2009. En <http://www.elespectador.com/articulo144045-denuncian-farc-han-reclutado-cerca-de-42-indigenas-el-vaupes>. b) Información suministrada por la ONIC

129 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Op. cit. Párrafo 63.

130 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES (2005): *Ruta jurídica para los pueblos indígenas: Guía pedagógica*. Bogotá.

sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Colombia: *“el reclutamiento de mujeres y niñas puede estar acompañado de violaciones sexuales por miembros del grupo armado, la imposición de abortos forzados y el uso de métodos anticonceptivos, la esclavitud sexual, y acoso por parte de sus superiores y otros miembros”*¹³¹. Los departamentos que más reportes tienen de homicidios, amenazas y violencia sexual contra las mujeres atribuidos a miembros de las FARC-EP, del ELN y de grupos paramilitares son Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca¹³².

- » Personas en situación de desplazamiento: en agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo, el ACNUR, UNICEF y la Coalición Colombia, entre otras organizaciones sociales, denunciaron durante una audiencia ante la Corte Constitucional que en 13 departamentos del país los grupos armados ilegales reclutan NNA en situación de desplazamiento¹³³. Como resultado de dicha audiencia la Corte Constitucional emitió varios autos en los cuales requiere a la Fiscalía para dar información acerca de las gestiones realizadas para investigar estos hechos¹³⁴. *“Hay indicios de que los campamentos de refugiados y desplazados internos son a menudo las zonas preferidas para el reclutamiento de niños como soldados debido al hecho conveniente de que en ellas se concentra un buen número de niños vulnerables”*¹³⁵.
- » Desmovilizados: La MAPP/OEA viene denunciando en sus informes trimestrales que el reclutamiento forzado está afectando a la población desmovilizada que sigue reforzando las filas de los grupos al margen de la ley¹³⁶, e identifica los siguientes territorios como los de mayor preocupación: Urabá, Bolívar, Santander, Antioquia, Magdalena, Córdoba, y Chocó¹³⁷.

¹³¹ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: *Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia*. 18 de octubre de 2006, Párrafo 89.

¹³² Información reportada por OACNUDH en 2007.

¹³³ CARACOL RADIO “Denuncian reclutamiento de niños desplazados en 13 departamentos”, 29 de junio de 2007, en: <http://www.caracol.com.co/noticias/>, fecha de consulta: julio 12 de 2007.

¹³⁴ CORTE CONSTITUCIONAL Auto No. 171 del 4 de julio de 2007.

¹³⁵ Informe del Secretario general de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, documento A/62/609-S/2007/757, del 21 de diciembre de 2007, párr.6.

¹³⁶ Al respecto véase: MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA (Julio 2008): Décimo primer informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA (Febrero 2009): Décimo segundo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

¹³⁷ MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA (Febrero 2009): Op. cit. Pp. 6.

- Causando efectos directos en el fenómeno del desplazamiento: En el informe del CICR de 2007 se afirma que del total de casos recibidos por esta institución en el país, el tercer factor de desplazamiento es la amenaza de reclutamiento. La misma constatación la desarrolló la ONG CODHES en su Boletín Número 74¹³⁸ en el que indica el reclutamiento como uno de los principales factores del desplazamiento. Por su parte el Secretario General se ha manifestado en varias ocasiones reiterando que *"El reclutamiento de niños y el desplazamiento interno están estrechamente relacionados, (...) pues en muchos casos el desplazamiento es el único medio que tienen las familias en ciertas zonas para evitar que sus hijos sean reclutados por grupos armados"*¹³⁹. *"En 2008 se recibieron informaciones que coincidían en que las amenazas de reclutamiento de niños habían causado el desplazamiento de poblaciones locales en al menos cinco departamentos, a saber: Arauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca"*¹⁴⁰.

Vinculación a grupos de guerrillas

*"Saludan a los dueños de la casa, como si los conocieran de toda la vida. Conversan un rato (...) les hablan de la debilidad del Estado, de que ellos son la autoridad y que están allí para protegerlos. (...) Su intención: conocer las familias y lograr su simpatía. Su objetivo: identificar a sus potenciales combatientes. Su meta final: reclutar"*¹⁴¹.

El debilitamiento del grupo guerrillero FARC fruto de la ofensiva implementada por el Estado con importantes golpes a su estructura en el 2008 (muerte de dos integrantes de su máxima dirección, Operación Jaque y bajas sufridas en sus mandos medios y estructuras internas que han afectado duramente su comando y control) ha desencadenado presiones sobre este grupo. Lo anterior, se ha constituido en una de las mayores causas por las cuales las FARC han redoblado sus acciones de reclutamiento¹⁴². De acuerdo al último informe del Secretario General *"La información recibida confirma el reclutamiento (por parte de las FARC) de niños en 13*

¹³⁸ CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHES Boletín Codhes Informa Número 74 *Tapando el sol con las manos*. Informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos. Enero – junio de 2008.

¹³⁹ Informe del Secretario general de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, documento A/62/609–S/2007/757, del 21 de diciembre de 2007, párr.6; Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. 28 de agosto de 2009. Documento No. S/2009/434. párr. 26.

¹⁴⁰ Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. 28 de agosto de 2009. Documento No. S/2009/434. Párr. 26.

¹⁴¹ "Así reclutan las FARC", Diario El País, 17 de julio de 2006.

¹⁴² Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, documento de Naciones Unidas A/62/609–S/2007/757, 21 de diciembre de 2007, párrafo 114.

*departamentos*¹⁴³. Los casos reportados constatan presión e intimidación a las familias para que entreguen a sus hijos¹⁴⁴, raptos¹⁴⁵, y vinculación forzada¹⁴⁶.

También se evidencian labores de sensibilización con la comunidad buscando generar confianza y motivación; casos al respecto se han conocido en el departamento de Putumayo, donde tienen su propio sistema de radiodifusión en el cual se insta a la población adulta y juvenil a que se una a sus filas, y en el departamento de Chocó donde han entregado volantes y folletos publicitarios en los que invitan a jóvenes y adolescentes para que se vinculen a las filas de los grupos de guerrilla¹⁴⁷.

Los NNA también son utilizados por los grupos guerrilleros en actividades bélicas, logísticas y de inteligencia¹⁴⁸. Las niñas y adolescentes también son utilizadas como compañeras sexuales de los combatientes¹⁴⁹, son víctimas actos de violencia sexual y son obligadas a abortar en caso de embarazo y a usar métodos de anticoncepción¹⁵⁰. Se observa un trabajo intenso dentro de las comunidades indígenas siendo altamente afectados algunos grupos étnicos como los Nasa. De acuerdo a la gobernadora y líder del cabildo de Tacueyó Saray Vitonás, en los últimos cuatro años su comunidad ha reportado el reclutamiento de 200 NNA¹⁵¹.

De acuerdo a la información consolidada por los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos los departamentos más afectados por reclutamiento de las FARC son Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare,

¹⁴³ Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. 28 de agosto de 2009. Documento No. S/2009/434. Párr. 17.

¹⁴⁴ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Op. cit.; OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (19 de febrero de 2009): Op. cit.

¹⁴⁵ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): *Un camino por la escuela colombiana desde los derechos de la infancia y la adolescencia 2006 - 2007*. Pp.42.

¹⁴⁶ Al respecto se conoció un caso de dos menores de 13 y 15 años respectivamente, que fueron asesinados al resistirse a ser reclutados (Putumayo - enero de 2008). Información reportada en OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (19 de febrero de 2009): Op. cit. Párrafo 31.

¹⁴⁷ DIARIO EL MUNDO "Posible reclutamiento ilegal de jóvenes en Quibdó", 22 de enero de 2008, Pp. A9.

¹⁴⁸ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (19 de febrero de 2009): Op. cit. Párrafo 29.

¹⁴⁹ La Corte Constitucional de Colombia publicó su auto 092 en abril de 2008, que siguió a la sentencia T-025, en el que afirmaba lo siguiente "la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la violencia y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública". Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. 28 de agosto de 2009. Documento No. S/2009/434. Párr. 36.

¹⁵⁰ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: *Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia*. 18 de octubre de 2006, Párrafo 114.

¹⁵¹ "Las FARC continúan reclutando niños y niñas para la guerra"⁴ de marzo de 2008. En: <http://www.terceradivision.mil.co/index.php?idcategoria=200003>

Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vau-pés. Aunque de manera menos visible, también se ha tenido conocimiento de reclutamiento de NNA por parte del ELN en los departamentos de Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Sucre.

Vinculación a grupos paramilitares

“Primero me dijo que, bueno, que pa’ ir a trabajar por allá (...) escoltando la mercancía y también lo que le pusieran a uno, si lo ponen a matar, pues también (...) pagan \$800.000 haga o no haga nada... además le dan a uno comisión por trabajo que hagan”¹⁵²

Es importante señalar que el proceso de desmovilización del grupo paramilitar AUC no fue real. Se habla de la desmovilizaron de aproximadamente 35.000 paramilitares, sin embargo, según las fuentes oficiales, el número de paramilitares en 2002 era de 12.000¹⁵³. En este sentido, no es comprensible como se cuentan dentro del número de desmovilizados a 35.000 personas. Por otro lado, los propios jefes paramilitares han confesado que muchos de los que aparecieron como desmovilizados fueron personas vinculadas a última hora, lo cual es grave, porque entonces se estarían inflando las cifras, quizás con el propósito de aparentar una operación exitosa¹⁵⁴. Actualmente, se calcula que existen alrededor de 10.000 paramilitares activos, dentro de los cuales están incluidas víctimas de reclutamiento de niñas y niños no entregados por el grupo paramilitar AUC¹⁵⁵.

Fue con la sanción de la Ley 782 de diciembre de 2002 y el Decreto 182 de 2003 que el gobierno Uribe dio inicio a las conversaciones con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia “AUC”, en desarrollo de dicho proceso los paramilitares se comprometieron a dar por terminadas las hostilidades a partir del 1º de diciembre de 2002. De este compromiso inicial se apartaron los Bloques Metro y Elmer Cárdenas y fijaron fechas posteriores para la entrada en vigencia

¹⁵² COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): BOLETÍN PÚTCHI-PU No. 17-18. Pp. 8.

¹⁵³ Crisis Group, “Los nuevos grupos armados en Colombia”, Informe sobre América Latina No. 20, 10 de mayo de 2007, pág. 4 y 5.

¹⁵⁴ “Enjuiciamiento de Crímenes Internacionales Cometidos en Colombia”, (Comentarios a la ponencia de Cecile Aptel, “Los sistemas judiciales locales y el impacto del Estatuto de Roma”), Conferencia Consultiva de Justicia Penal Internacional, Septiembre 11 de 2009, Naciones Unidas, Nueva York, Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas.

¹⁵⁵ “Bandas criminales: Seguridad Democrática y corrupción”, Observatorio del Conflicto, Corporación Nuevo Arco iris, Bogotá.

del cese el Bloque Central Bolívar y las Autodefensas Campesinas del Casanare¹⁵⁶. Además de la ausencia de declaración de un compromiso de cese de hostilidades por parte de la totalidad de los grupos paramilitares, este fue violado sistemáticamente por aquellos que manifestaron dicho compromiso¹⁵⁷.

No obstante hoy en día se constata que, estas fuerzas no se han desmantelado, continúan controlando social, económica y políticamente varias zonas del país, siguen infringiendo violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (como la vinculación de NNA), y no se han depurado los estrechos vínculos entre agentes estatales y algunos empresarios¹⁵⁸. Su recomposición se reconoce fundamentalmente en tres fenómenos: la existencia de estructuras paramilitares que no participaron del proceso de desmovilización, el reagrupamiento de desmovilizados en las mal llamadas “bandas delincuenciales” que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; reductos de frentes o bloques que no se desmovilizaron abstrayéndose de la negociación y la existencia de organizaciones que mantienen una motivación política específica, siendo una de las pruebas más contundentes de la persistencia del paramilitarismo¹⁵⁹. “La CIDH ha recibido información en sus visitas en terreno, de numerosas víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de los bloques desmovilizados, indicando que continúan recibiendo amenazas, y siendo víctimas de actos de violencia e intimidación y control del territorio”¹⁶⁰.

El paramilitarismo es un fenómeno constante pero variante, las estructuras paramilitares, no han desaparecido, sino que han abordado procesos de innovación y reorganización que les permiten ajustarse a las necesidades y a los tipos de operaciones que tengan como objetivo desarrollar. Aunque según el Gobierno Nacional estas estructuras han sido desmontadas y existe una diferencia categórica entre NNA vinculados a los paramilitares y aquellos vinculados a las llamadas bandas delincuenciales, la realidad ha demostrado que esa frontera en la mayoría de

¹⁵⁶ Grupo paramilitar que al igual que el Bloque Cacique Pipintá finalmente no participó en las ceremonias de desmovilización. Comisión Colombiana de Juristas, “Colombia: El Espejismo de la Justicia y la Paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005”, Bogotá, noviembre de 2007, pág 18. Comisión Colombiana de Juristas.

¹⁵⁷ Entre el 1º de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2007, se registraron por lo menos 3530 violaciones al derecho a la vida atribuidas directamente a grupos paramilitares, *Listado de víctimas de violaciones al derecho a la vida presuntamente perpetradas por grupos paramilitares Fuera de Combate de 1º de Diciembre de 2002 a 30 de Junio de 2007, noviembre de 2007*, www.coljuristas.org

¹⁵⁸ Crisis Group, “Los nuevos grupos armados en Colombia”, Informe sobre América Latina No. 20, 10 de mayo de 2007, pág. 4 y 5.

¹⁵⁹ Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. 28 de agosto de 2009. Documento No. S/2009/434. Párrs. 10 y 11. Tal preocupación ha sido expresada en: MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA (Febrero 2009): Op. cit.

¹⁶⁰ Informe sobre la implementación de la Ley de justicia y paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales, OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 6, 2 octubre 2007, Párrafo. 91.

los casos resulta escurridiza, evidenciando una hibridación entre los grupos paramilitares como actores del conflicto y algunas formas de violencia armada organizada.

Cabe recordar que desde sus inicios, los grupos paramilitares también financiaron parte de sus acciones de control territorial, persecución política y contrainsurgencia con dineros provenientes de actividades como el narcotráfico, razón por la cual no debería ser este un argumento para desconocerlos actualmente como actores del conflicto armado interno. Adicionalmente, el crecimiento del paramilitarismo ocurrido a finales de la década de los 1990 fundamentalmente en el área urbana se vio beneficiado de la cooptación por la vía concertada o a la fuerza de bandas delincuenciales que fueron incorporadas de manera masiva a sus estructuras militares, dentro de una lógica que combinó la contrainsurgencia con sus vínculos al narcotráfico y el ejercicio de la violencia sociopolítica. Los NNA pertenecientes a grupos de violencia armada organizada, tal como en esa época, se acuestan siendo infractores de la ley penal, y se levantaban siendo paramilitares, es decir, soldados, cuando sus jefes han negociado su pertenencia orgánica a estructuras paramilitares (recuérdese que en el primer caso, se pasó de la denominación “Autodefensas” a hablar de “Bloques” denotando un mando y estructura militares).

Los efectos de la desmovilización han demostrado que el proceso también funciona a la inversa, convirtiendo a los NNA desmovilizados en figuras altamente codiciadas para la delincuencia común y para las estructuras paramilitares que hoy en día persisten bajo nuevos o viejos ropajes, pese al proceso adelantado al amparo de la Ley de Justicia y Paz. *“...pues ahorita lo que se está escuchando es que las autodefensas con esto de las entregas (desmovilizaciones masivas) no van a quedar como paramilitares, sino como narcotraficantes: pasar drogas, cuidar, hacer ‘limpiezas’, todo eso ya queda muy aparte de lo que son los paramilitares pues también son comerciantes de droga... y siempre han estado muy metidos con el negocio ese que da mucha plata”*¹⁶¹.

Un ejemplo emblemático al respecto son la Comuna 8 y 13 de Medellín donde las diferencias entre las acciones actuales de reclutamiento y las que venían realizando los grupos armados combatientes son difíciles de establecer y donde se reconoce un foco importante de reclutamiento de NNA desde el 2007, registrando actualmente una población en riesgo de más de 100

¹⁶¹ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): BOLETÍN PÚTCHI-PU No. 17-18. Pp. 8.

personas menores de 18 años¹⁶². La delicada situación ha sido reiteradamente denunciada por la Alcaldía, la Personería y organizaciones no gubernamentales, quienes afirman que los NNA son utilizados para cobro de extorsiones, transporte de armas y de drogas. El no reconocimiento de los grupos paramilitares como perpetradores constantes de reclutamientos ha cobrado especial relevancia en este caso, en el que se registran preocupantes declaraciones que niegan la existencia de un reclutamiento y que le restan importancia al fenómeno *"creo que la denominación de reclutamiento está mal usada porque no hay un grupo en la ciudad que controle el territorio con exclusión de la autoridad legítima del Estado"*¹⁶³.

La utilización de las mujeres también evidencia que su situación no varía mucho respecto a las dinámicas en las cuales venían siendo vinculadas por los paramilitares. *"La situación de las niñas en esa zona es una situación que no ha cambiado, han cambiado los actores; antes la guerrilla, [después] que llegaron las bandas, ahora los paramilitares. (...) yo pienso que en este momento se ha agudizado la situación de ellas porque hay un momento como en la adolescencia que ellas se enamoran de los guerreros, de los guapos, de los que son como muy... como que se deslumbran por eso"*¹⁶⁴. La advertencia revela la existencia de un modelo normativo patriarcal, donde las mujeres se ven irremediamente sometidas al poder de un varón que las determina, controla, e incentiva a buscar su reconocimiento y seguridad, abandonando sus propios recursos y quedando sometidas a los roles tradicionales de protección y cuidado del hogar¹⁶⁵.

Se constata entonces que los paramilitares continúan reclutando NNA desconociendo el acuerdo establecido con el gobierno en Santafé de Ralito de cesar la vinculación de personas menores de 18 años. Así lo constatan las declaraciones de la MAPP – OEA, OACNUDH, UNICEF, el Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados y organizaciones nacionales de derechos humanos, donde se evidencia la utilización de personas menores de 18 años en bloques que no se desmovilizaron o en grupos que se rearmaron después de la desmovilización y que se identifican como parte de las estructuras paramilitares. A este respecto se supo que después de finalizadas las negociaciones muchos de los NNA fueron trasladados a diferentes regiones para incrementar en número la presencia de otros bloques pa-

¹⁶² Al respecto véase: EL PAÍS "Reclutamiento en la Comuna 13 sería el caso más delicado. Los niños: blanco de los delincuentes" Febrero 13 de 2007; PARTICIPANDES "Aumenta preocupación por reclutamiento de niños en comunas de Medellín" 6 de marzo de 2009, en www.somosmas.org.

¹⁶³ PARTICIPANDES "Aumenta preocupación por reclutamiento de niños en comunas de Medellín" 6 de marzo de 2009, en www.somosmas.org.

¹⁶⁴ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): *Un camino por la escuela colombiana desde los derechos de la infancia y la adolescencia 2006 - 2007*. Pp. 75.

¹⁶⁵ Al respecto ver Informe de la "Mesa de Mujer y Conflicto Armado" en Colombia, 2008.

ramilitares, o para adherirlos a bandas emergentes y delincuenciales al servicio del tráfico de drogas, armamentos o personas¹⁶⁶. *"En las filas de estos grupos se encuentra un número considerable de ex miembros, desmovilizados y no desmovilizados, reclutados voluntaria y forzosamente, de organizaciones paramilitares (...) los que se resisten a ser reclutados son asesinados o forzados a desplazarse para preservar su vida"*¹⁶⁷.

Informes recientes de la OACNUDH han señalado su preocupación por el reclutamiento perpetrado por grupos paramilitares en zonas como la Comuna 8 y 13 de Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Resguardo El Carmen (Norte de Santander), Tame y Arauca (Arauca)¹⁶⁸. Por su parte organizaciones de derechos humanos también han denunciado la vinculación de NNA a grupos paramilitares en Putumayo, Meta y Cauca¹⁶⁹, reportando en este último departamento reclutamiento y utilización de niñas que son "compradas" o "alquiladas" por varios meses para que presten servicios sexuales a los miembros del grupo y se sometan a otro tipo de trabajos forzosos y degradantes.

El Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados también se pronunció al respecto anotando que *"Cada vez existe una mayor preocupación por las denuncias de violaciones y abusos cometidos contra niños por nuevos grupos armados ilegales organizados. Estos grupos, como las Águilas Negras, Manos Negras, la Organización Nueva Generación o los Rastrojos, están muy involucrados en actividades delictivas relacionadas fundamentalmente con el tráfico de drogas. En el período que se examina, se han recibido denuncias sobre el reclutamiento y la utilización de niños por los grupos antes mencionados en el departamento del Valle del Cauca; la ciudad de Cartagena, en Bolívar; y la ciudad de Medellín, en Antioquia"*¹⁷⁰.

¹⁶⁶ Tal y como reiteradamente lo han denunciado organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales como la OEA. Al respecto véase: EL TIEMPO "Bandas emergentes de paramilitares están reclutando jóvenes, denuncia la OEA". Septiembre 24 de 2008.

¹⁶⁷ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (19 de febrero de 2009): Op. cit. Párrafo 43.

¹⁶⁸ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Op. cit. Párrafo 63 y Anexo 2 Párrafo 81.

¹⁶⁹ Información suministrada por: CIDH, Corporación Vínculos, Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia.

¹⁷⁰ Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, documento A/62/609-S/2007/757 del 21 de diciembre de 2007, párr. 116.

3.3. La escuela como escenario de reclutamiento

“No nos dejan ser jóvenes y ahora nos utilizan, señalan y maltratan”¹⁷¹.

Pese a que las normas del Derecho Internacional Humanitario protegen a las escuelas como bienes directamente ligados a la población civil, la fuerza pública y los grupos armados ilegales que participan de las hostilidades las atacan, ocupan, y utilizan como espacios aptos para el reclutamiento. En este sentido, el lugar de la escuela en el campo de la vinculación es ambivalente y complejo pues aunque es un lugar de encuentro, de carácter formativo y civil, desafortunadamente, en el contexto del conflicto armado en Colombia se ha convertido en un espacio de presencia constante de los grupos armados que entre otras cosas buscan reclutar estudiantes y convencerlos de su incorporación.

Los grupos armados ilegales que participan de las hostilidades utilizan los planteles educativos como escenarios propicios para cooptar a NNA dentro de sus filas, tal y como se ha constatado en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Las denuncias involucran actividades de intimidación, engaños, y control social.

La guerrilla intimida a docentes y estudiantes, presionándoles para que apoyen la lucha armada. Muchas veces hace uso de dichos espacios para adoctrinar en las clases a NNA. *“La guerrilla ingresa a las escuelas para enganchar niños. Un ejemplo de ello que yo conocí sucedió en la Macarena (Meta) donde el frente séptimo y el frente Yará de las FARC ocupaban los alrededores cuando los niños salían al descanso, y les comenzaban a decir que se fueran para la guerrilla que allá tendrían todo y que no tendrían que volver a estudiar para tener plata y armas nuevas. Eso es malo porque los separan de la escuela y de la familia”¹⁷².*

Los paramilitares por su parte asedian a las instituciones, esperando a los NNA a las afueras de los planteles para venderles la idea de vincularse a sus grupos a cambio de dinero y otros beneficios, buscando información o realizando acciones de control. Dos ejemplos emblemáticos al respecto ocurrieron en Medellín (Antioquia). El caso más preocupante sucedió el 11 de julio de 2007 cuando 4 hombres llegaron a las instalaciones de la institución educativa Colegio

¹⁷¹ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2008): BOLETÍN PÚT-CHIPU No. 20 “Jóvenes conscientes y que sienten”.

¹⁷² COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Septiembre 17 de 2009): Memorias del taller. Testimonio de un adolescente.

Cedepro en busca de sus directivas, exigiendo que la institución organizara un grupo de jóvenes para trasladarlos en buses al Centro Administrativo La Alpujarra, con el objeto de que participaran en una concentración de apoyo al comandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, quien comenzaría a rendir su versión libre ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Ante la negativa las directivas fueron objeto de insultos por su “falta de colaboración” y posteriormente fueron seriamente amenazadas¹⁷³.

El mes de abril de 2008, en el departamento de Antioquia, se presentaron denuncias sobre la incursión de grupos paramilitares en colegios. Miembros de grupo paramilitar entraron en el plantel educativo Colegio Cooperativo Cacique Bitagüi, en el corregimiento de San Cristóbal en la ciudad de Medellín para adoctrinar y castigar a niños que en su opinión tenían mal comportamiento. Según el padre de uno de los niños castigados, a su hijo le cortaron el pelo y lo amenazaron. Por su parte, el personero delegado para los Derechos Humanos de San Cristóbal Jorge Ceballos, señala que se han presentado múltiples denuncias sobre hechos similares, que algunos de los casos denunciados corresponden a acciones de control paramilitar y que dichas violaciones de los derechos de los niños y niñas se presentan continuamente en los diferentes barrios de la ciudad¹⁷⁴.

Resulta preocupante entonces que la escuela sea contaminada con las dinámicas de la guerra y termine jugando un papel de expulsora de NNA a manos de los grupos armados, teniendo en cuenta que debería ser un escenario de prevención del reclutamiento. En este sentido, un aspecto que llama la atención dentro de los NNA atendidos por el programa del ICBF es que el 86.8% de ellos estudiaban antes de ingresar al grupo armado¹⁷⁵. Por otra parte, cuando se analiza la relación entre escuela, vinculación y grupos indígenas, el problema se complejiza aún más. En efecto, muchos jóvenes indígenas que logran acceder al derecho a la educación en escuelas (muchas veces con sistema de internado) que no manejan un pensum, ni las prácticas correspondientes al enfoque diferencial adecuado para la población indígena, con lo cual los NNA van perdiendo lazos con su comunidad e identidad cultural, elementos que permiten frecuentemente proteger a los niños y niñas y fomentar la cohesión de individuos y familias¹⁷⁶.

173 Hechos denunciados por la Corporación CEDECIS de Medellín. Julio de 2007.

174 DIARIO EL COLOMBIANO “Incursión al colegio fue para, Personería”, 24 de abril de 2008, versión electrónica; CARACOL NOTICIAS “En colegio paras castigaron alumnos”, 22 de abril de 2008, en Sala de Videos (Noticias, Nacional, Conflicto Armado) en www.canalcaracol.com; Y PERSONERÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE MEDELLÍN.

175 Datos consolidados por el ICBF con corte a 30 de abril de 2008.

176 Estos NNA indígenas son preparados con currículos que no se adaptan a las necesidades culturales de sus pueblos, por lo cual, muchas veces al salir de la educación formal, quedan más aislados de sus comunidades. Al alejarse de su cultura y comunidad, se convierten en presa fácil de las presiones o invitaciones de los grupos armados que participan del conflicto.

3.4. Política pública en materia de prevención

“La prevención de reclutamiento, liberación, protección y reinserción son interdependientes e indivisibles. Los esfuerzos por desarrollar soluciones duraderas al reclutamiento o utilización de niños y niñas por grupos o fuerzas armadas y para prevenir su ocurrencia a futuro, deberán incluir a todo niño o niña afectada por un conflicto armado, y abordar otras violaciones atroces de los derechos de los niños de acuerdo con las normas internacionales aplicables, o la legislación nacional de los países implicados”¹⁷⁷.

El Estado cuenta con algunas iniciativas en materia de prevención del reclutamiento de personas menores de 18 años. No obstante, la información anteriormente reportada demuestra que éstos no han sido suficientes, adecuados y efectivos, y no redundan en la disminución del fenómeno que por el contrario parece agudizarse. Al respecto vale la pena destacar algunos aspectos:

- Por una parte, hay que tener en cuenta que existe una Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, conformada por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Educación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Alto Consejero para la ReinTEGRACIÓN Social y Económica, el Programa Presidencial Colombia Joven y el ICBF¹⁷⁸. Según esta Comisión la prevención a la vinculación de NNA al conflicto armado es concebida desde la perspectiva de la promoción de entornos protectores evitando la vulneración de los derechos. En palabras de la coordinación de la Secretaría Técnica de dicha Comisión *“la política de prevención del reclutamiento está centrada en una fórmula elemental pero sustantiva: a mayor número de niños y niñas con derechos garantizados, menor será el riesgo de que esos derechos sean vulnerados, incluido el reclutamiento y utilización de niños y niñas”¹⁷⁹*. Desde esta perspectiva la política plantea la necesidad de lograr una articulación de los sectores competentes dentro del Estado en la garantía de los derechos de los NNA. Uno de los objetivos principales de esta comisión es lograr esos niveles de coordinación, jugando un papel de “Vigías de los

¹⁷⁷ PRINCIPIOS DE PARÍS: PRINCIPIOS Y GUÍA SOBRE NIÑEZ VINCULADA CON FUERZAS O GRUPOS ARMADOS (2007): Numeral 3.4.1. Véase en: www.coalico.org

¹⁷⁸ La Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley, creada en el 3 de diciembre de 2007, a través del Decreto 4690 de 2007

¹⁷⁹ UNICEF “47 municipios tienen hoy política para la prevención del reclutamiento” En: <http://www.universia.net.co/noticias/mas-noticias/47-municipios-tienen-hoy-politica-para-la-prevencion-del-reclutamiento.html>

derechos de la niñez” tal y como ellos lo han bautizado, para que los planes que implementan las diferentes instituciones competentes y pertenecientes al Sistema Nacional de Bienestar Familiar sirvan como estrategia de protección frente al reclutamiento¹⁸⁰. Resulta evidente entonces que el papel que se le ha asignado a la Comisión pone de presente que aún sigue siendo una deuda el desarrollo de una política integral de prevención y protección de NNA que logre una verdadera articulación de los sectores competentes dentro del Estado en la garantía de los derechos de los NNA, y que vaya más allá de la creación de nuevas plataformas que terminen encuadrando el trabajo existente de los diferentes sectores responsables en una diferente presentación.

Actualmente se registran programas institucionales de prevención desde el ICBF, Ministerio de Defensa, Alta Consejería de Reintegración y Colombia Joven. Ejemplo de estas iniciativas son los programas en contra de la explotación sexual comercial, la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas, y el consumo de drogas. También se desarrollan proyectos que propenden por la recreación, el deporte, la convivencia pacífica, la salud sexual y reproductiva, y la seguridad alimentaria, entre otros. En lo que respecta a la descentralización de la política a los niveles territoriales se reconocen esfuerzos importantes como la iniciativa que desde el 2004 viene desarrollando la Procuraduría General de la Nación a favor de la inclusión de la niñez y la adolescencia en los planes departamentales y municipales¹⁸¹; la labor que adelanta la Comisión Intersectorial para que el tema de la prevención al reclutamiento sea explícito en estos instrumentos de diseño de política local; y la sexta cumbre de 2008 de la iniciativa “Hechos y derechos, municipios y departamentos por la infancia y la adolescencia” donde los gobernadores se comprometieron a formular estrategias y asignar fondos a favor de atacar los principales problemas que padece la infancia.

No obstante, las acciones aún resultan desarticuladas, insuficientes, de limitada cobertura y con resultados inciertos en materia de prevención a la vinculación. La Comisión Intersectorial reporta la inclusión del tema en las agendas públicas de 47 municipios. No obstante, solo 2 de ellos han destinado recursos propios para invertirlos en el desarrollo de acciones focali-

180 “De allí que resulte imperativo fortalecer y revitalizar las redes familiares, las redes sociales, las redes institucionales, las redes de niños y niñas, las redes de jóvenes y todas las redes existentes, que articuladas con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y las entidades que le componen, sean capaces de cerrar el paso a quienes amenazan o vulneran los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, incluido el reclutamiento y utilización por los grupos organizados al margen de la ley”. Véase: COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LOS GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY “Segundo Informe de gestión de la Secretaría Técnica. Diciembre de 2008. Pág. 9.

181 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNICEF (Marzo de 2005): La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de desarrollo departamentales y municipales.

zadas lo que figura un panorama algo desalentador¹⁸². Asimismo, pese a la focalización de programas de prevención en municipios con altos índices de reclutamiento¹⁸³, el fenómeno parece agudizarse y recrudecerse (como en Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Chocó, Meta), lo que hace poner en tela de juicio la efectividad real de estos programas.

Este enfoque basado en la promoción de entornos especiales incita a la pregunta de si no sería necesario contar con programas específicos de protección a NNA en riesgo que responda de manera rápida y efectiva a casos de amenaza de vinculación. En efecto, algo que se advierte es que los programas estatales no cuentan con mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia que requieren un tipo de intervención inmediata y donde se quedan cortos por lo que suponen sus estrategias en materia de trámites y verificaciones que muchas veces ponen en mayores riesgos a las víctimas. En otras ocasiones, las acciones de protección no son las más adecuadas, acordes y efectivas a la condición particular del NNA en cuestión, puesto que priman intereses militares antes que de un enfoque de derechos. En informe sobre la situación de NNA de la Comuna 13 de Medellín realizado por varias organizaciones no gubernamentales se documentó el siguiente caso:

“El 31 de octubre de 2008, en Medellín (Antioquia), miembros de una de las organizaciones de la Coalición, recibieron denuncias acerca de NNA en amenaza de reclutamiento por parte de uno de los grupos armados que opera en la Comuna Trece de la ciudad. Habiéndose contactado con una funcionaria pública de la Procuraduría General de la Nación, citaron a los NNA y a sus familiares en una Fundación del barrio, desde allí los NNA serían trasladados a un internado del ICBF para prestarles la protección requerida. A la altura de las 12 del día, los NNA amenazados de reclutamiento comenzaron a llegar con sus madres a la Fundación acordada para su traslado.



Dos de los niños llegaron en estado de angustia, ingresaron corriendo a la institución y cerraron tras de sí la puerta, inmediatamente dos jóvenes en bicicleta

¹⁸² COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LOS GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY “Segundo Informe de gestión de la Secretaría Técnica. Diciembre de 2008. Pág. 19.

¹⁸³ Desde el 2004 el ICBF, UNICEF, y OIM vienen implementando el programa “Iniciativa Nacional para Prevenir la Vinculación de la Niñez a los Grupos armados organizados al margen de la ley”, la cual busca prevenir la utilización, vinculación y reclutamiento de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados organizados al margen de la ley con el fin de garantizar su permanencia en el mundo infantil y promover en la población colombiana la toma de conciencia para que asegure que la niñez disfrute de sus derechos..

les gritaban desde la puerta: “Salí, salí que te vamos a matar”. Uno de los NNA amenazado, relató que la noche anterior fue víctima de un atentado del cual había podido escaparse.

Los miembros de la Coalición que adelantaron las labores de atención de los NNA amenazados en este caso, permanecieron al interior del lugar con las víctimas, mientras los miembros del grupo armado que perseguían a los NNA rodeaban la edificación y seguían hostigando. En ese momento se logró establecer comunicación nuevamente con la funcionaria de la Procuraduría a quién le pidieron ayuda por la gravedad de la situación, en ese momento también se encontraban en peligro los demás NNA que iban a llegar al encuentro para ser llevados al internado. Desde el ICBF se solicitó protección de la policía.

Al llegar al lugar de los hechos la representante de la Procuraduría, dos funcionarios más y miembros de la policía, se logró la identificación de uno de los jóvenes que amenazaba desde afuera los NNA, la policía procedió a capturar a esta persona. Siendo la 1:30 p.m. salieron de la Fundación ocho NNA con un representante rumbo a la sede del ICBF, lugar en el cual se documentaría la situación.

Días después, la Coalición tuvo conocimiento de que seis de los NNA que fueron remitidos al internado se escaparon, debido a las condiciones del lugar. Cabe resaltar que uno de los NNA de 8 años de edad fue devuelto a su casa por el ICBF, por considerar que no se encontraba en riesgo. Las madres de algunos de los NNA escapados los llevaron nuevamente al internado. La madrastra de una de las víctimas decidió emprender la búsqueda de otro lugar más apropiado para internar a su hijastro.

El día sábado 8 de noviembre, miembros de la Coalición le solicitaron a la funcionaria de la Procuraduría que informara acerca de las circunstancias en las que se habían escapado los NNA y adicionalmente, le pidieron que éstos fueran enviados a lugares adecuados, puesto que no se trataba de NNA habitantes de la calle, sino que a pesar de tener una familia y vivienda, estaban siendo víctimas del conflicto armado urbano que vive la Comuna Trece.

Uno de los NNA que se había escapado del internado y a quien su madrastra le estaba buscando un lugar más apropiado para que recibiera protección, fue asesinado por presuntos paramilitares de la zona de Monteverde mientras se encontraba en su casa. El NNA había recibido amenazas por parte de dichos paramilitares porque tenía amigos que pertenecían a una banda que al parecer estaba aliada con miembros de otro grupo paramilitar. La madrastra dice que el problema se presenta por

tener que vivir en medio de todos los bandos de la zona, además indicó que habían solicitado protección en la cárcel de menores de la Floresta, sin embargo, el NNA asesinado se escapaba de ese lugar porque quería permanecer en la Escuela de Trabajo de San Jose”¹⁷⁵.

Por último, vale la pena resaltar que los desarrollos incipientes que se registran en política pública de niñez y conflicto armado han estado centrados fundamentalmente en la atención y protección a NNA víctimas, postergando así el trabajo en torno a la prevención, lo que se constata con lo reciente de la creación de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento que solo fue creada hasta el mes de diciembre de 2007. Es necesario lograr una mayor formalización de este órgano, garantizando recursos técnicos y financieros para su operatividad.

- Otro elemento que vale la pena analizar es que el trabajo hasta ahora implementado por el Estado en materia de prevención niega la vinculación de NNA al conflicto armado a través de la fuerza pública, partiendo del supuesto de que el Estado y sus instituciones son neutrales ante el conflicto y no una fuerza más que opera dentro de él. Situación esta que contraviene lo establecido por el derecho humanitario en materia de protección de los civiles, entre ellos los NNA que de ninguna forma deben estar relacionados con las acciones que desarrollan todos los grupos armados que participan en el conflicto armado interno. En este sentido la política de prevención a la utilización y uso de personas menores de 18 años en el conflicto armado niega un actor, afectando su imparcialidad, transparencia y efectividad.
- Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo desarrolla una de las labores de prevención, como es la de monitorear y advertir situaciones de riesgo para promover acciones de prevención y protección de la población civil en medio del conflicto armado. No obstante, pese a que el sistema ha emitido informes de riesgo, notas de seguimiento y alertas en relación al riesgo de reclutamiento que padecen NNA de varios municipios del país donde operan grupos armados irregulares, su operatividad para estimular respuestas estatales que desde las diferentes entidades competentes prevengan la vinculación y protejan a la población en riesgo no ha sido efectiva. Lo anterior muchas veces hace que este mecanismo actúe anunciando riesgos de los que es testigo sin capacidad de incidir

en la respuesta por parte de las demás instituciones del Estado encargadas de la protección de la población civil. Adicionalmente, las dinámicas propias al conflicto en donde se invisibilizan los grupos armados bajo las nuevas bandas criminales ha tenido efectos dentro del Sistema y su emisión de informes de riesgo en materia de reclutamiento; muchas veces sus análisis son rechazados por el CIAT y por alcaldes y gobernadores que argumentan que en sus zonas ya no hay grupos armados, por lo que resulta incorrecto hablar de reclutamiento¹⁸⁵. *"En 2008, el sistema detectó 71 situaciones de riesgo en 145 municipios del país, el 66% de ellas vinculadas al reclutamiento de niños. Sin embargo, no todos los informes de riesgo derivaron en una alerta temprana. Según la Defensoría del Pueblo, de las 71 situaciones de riesgo detectadas, el comité interinstitucional ordenó que se adoptaran medidas concretas para evitar violaciones en el 50% de los casos"*¹⁸⁶.

- Otro aspecto que genera dificultades a la hora de diseñar una política pública de prevención de reclutamiento adecuada, es la militarización de la vida civil y las permanentes acciones cívico militares y de propaganda comercial del Ejército, la Fuerza Aérea y Policía Nacional, que destacan el valor de la vida militar aplicable a cualquier fuerza. En este sentido, es claro que para los NNA no es clara la diferencia entre estar en alguno de los grupos armados ilegales o alistarse en el ejército regular. Desde esta perspectiva, la prevención efectiva de la vinculación de los NNA al conflicto armado pasa por la promoción de una cultura de la civilidad encaminada a empoderar a la sociedad civil y desestimular el camino de la guerra en todos los bandos¹⁸⁷.
- Finalmente, la política de seguridad democrática es una estrategia fundamentalmente bélica que recrudece el conflicto y niega salidas pacíficas al mismo. En este sentido, vale la pena tener en cuenta que tal como se ha afirmado anteriormente, hasta el momento la estrategia armada del Gobierno Nacional no ha logrado acabar con los grupos de guerrilla y grupos paramilitares; así como tampoco ha disminuido los ataques en contra de la población civil por parte de todos los grupos combatientes. Adicionalmente, se reporta un aumento en los cultivos ilícitos, lo cual refuerza la idea de que la prevención de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, se deben abordar desde la búsqueda de salidas humanitarias y negociadas del conflicto armado.

¹⁸⁵ En este sentido, se reconoce el trabajo realizado por la Comisión Intersectorial en relación a incluir los NNA de bandas criminales dentro del enfoque de prevención, promoviendo programas educativos que prevengan la delincuencia juvenil, el reclutamiento y la utilización.

¹⁸⁶ Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. 28 de agosto de 2009. Documento No. S/2009/434.

¹⁸⁷ CORPORACIÓN ALOTROPIA (2006): Estudio exploratorio de patrones culturales que contribuyen a la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados en Colombia. En www.alotropia.org. Pp. 73.

4. PROHIBICIÓN Y CUESTIONES CONEXAS

4.1. Tipificación del delito del reclutamiento en el ordenamiento jurídico colombiano

“No hay coherencia entre la ley y la realidad de la guerra”¹⁸⁸

La vinculación de NNA está tipificada en la Ley 599 de 2000 (Código penal), la cual en su artículo 162 establece: *“el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de 6 a 10 años y multa de 600 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”*.

Adicionalmente, en el marco de los procesos de negociación, desarme, desvinculación y reincorporación de miembros de grupos armados ilegales, se han desarrollado una serie de normas que abordan los temas de reclutamiento de personas menores de 18 años, entrega en el marco de los procesos de desmovilización, confesión de delito y concesión de beneficios. Sin embargo, dichas herramientas jurídicas no tienen un desarrollo adecuado en la defensa del interés superior del niño. Tal es el caso de la Ley 975 de 2005 –Ley de Justicia y Paz–, *“por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de los grupos organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”*.

Dicha ley desarrolla superficialmente el tema de las víctimas de reclutamiento y su entrega en los artículos 10 y 64. El artículo 10, establece la entrega de niños NNA como uno de los requisitos

¹⁸⁸ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Junio 2008): Conversatorio con jóvenes. Palabras de un joven desvinculado, Bogotá.

de elegibilidad para acceder a la desmovilización colectiva¹⁸⁹. El numeral 3º establece que el grupo debe poner a disposición del ICBF la totalidad de menores de edad reclutados. Este requisito de elegibilidad condiciona el acceso a los beneficios de la Ley 975 (especialmente el beneficio de la pena alternativa, que oscila entre cinco y ocho años), a que las víctimas de reclutamiento sean puestas a disposición del ICBF. Haciendo una lectura sistemática de la norma, el numeral 3º del artículo 10 se convierte en una condición privilegiada y de especial observación.

A pesar de que en principio la exigencia de cada requisito de elegibilidad es necesaria, el hecho de que el numeral 3º involucre la protección reforzada de la que son sujetos los NNA, hace que la entrega comporte mayor relevancia. El elemento de que la entrega deba ser hecha en manos de un organismo específico imprime una responsabilidad cualificada que va más allá de la simple entrega en cualquier circunstancia. Frente a la aplicación del numeral 3º del artículo 10, el Estado en desarrollo de su obligación de garante de los derechos humanos, es responsable del cumplimiento efectivo de este requisito. Como consecuencia de ello debe velar por una interpretación de la norma en clave de protección reforzada y prevalente de los derechos de las NNA víctimas de reclutamiento.

Más adelante, la norma es confusa referente a la protección de las NNA. El artículo 64 contempla que la entrega de personas menores de 18 años no es causal de pérdida de beneficios, desconociendo aparentemente la obligación de juzgar el delito de reclutamiento y minimizando la necesidad de obtener la entrega de las víctimas¹⁹⁰. Dicho artículo fue demandado ante la Corte Constitucional. La sentencia C-575¹⁹¹ en sus consideraciones estableció que si bien la entrega de NNA por parte de los grupos armados no es causal de pérdida de los beneficios, esto no constituye un impedimento para que se pueda establecer la responsabilidad penal de quienes hayan cometido el reclutamiento. En criterio de la Corte, la norma debe entenderse en el sentido de facilitar dicha entrega, de ninguna manera puede interpretarse como eximente de responsabilidad penal¹⁹².

A su vez, la Procuraduría General de la Nación, interpreta que el artículo 64 de la Ley 975 debe entenderse como aplicable a procesos de desmovilización individuales regulados por el artículo 11 de la misma ley, y no considera que contradiga el numeral 3 del artículo 10¹⁹³. En su opinión,

189 Ver artículo 10 de la Ley de justicia y paz sobre los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva.

190 Artículo 64. "La entrega de menores por parte de miembros de Grupos armados al margen de la ley no será causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002."

191 Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis del 25 de julio de 2006.

192 "El análisis de la acusación formulada en contra del artículo 64 de la Ley 975 de 2005, Corte Constitucional", sentencia C-575 de 2006, 6.2.6.

193 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2006): Seguimiento a Políticas Públicas en materia de desmovilización y reinserción. Tomo II. Bogotá. Pág. 383.

el artículo prevé que durante el proceso de desmovilización individual se entregue a niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto armado, como parte de los actos de colaboración con la justicia.

Por otra parte, la Procuraduría supone que el desmovilizado individual que hace la entrega no puede tenerse como autor del delito de reclutamiento ilegal inmediatamente, ya que al momento de la entrega no se cuenta con elementos probatorios suficientes para proceder a aplicar la exclusión de los beneficios¹⁹⁴. En todo caso, es obligación del Estado establecer la responsabilidad individual frente a este delito que no es amnistiable ni indultable. Cuando se determine dicha responsabilidad, la persona sobre la cual recaiga no podrá acceder a los beneficios de la desmovilización por tratarse de un delito no susceptible de amnistías ni de indultos¹⁹⁵.

En la práctica la Ley 975 supone riesgos de impunidad muy amplios, pues al operar mancomunadamente con el Decreto 128 de 2003¹⁹⁶ posibilita que se omita la investigación de este delito en el proceso de acreditación de desmovilizado y que se libere de algún tipo de condena por perpetrar este crimen de guerra. La CIDH se refirió a su contenido en los siguientes términos:

"La CIDH en su informe observó que entre los objetivos de la norma no se cuenta el establecimiento de la verdad histórica sobre lo sucedido durante las últimas décadas del conflicto ni sobre el fomento del paramilitarismo y el grado de involucramiento de los diversos actores en la comisión de crímenes contra la población civil. La CIDH también señaló que las disposiciones de la ley no establecen incentivos para que los desmovilizados confiesen en forma exhaustiva la verdad sobre su responsabilidad en la comisión de nuevos crímenes que aún no han sido investigados, a cambio de

¹⁹⁴ PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2006): Op. cit.

¹⁹⁵ El Decreto 4760 de 2005 establece que la postulación realizada por el gobierno para acceder a los beneficios de la Ley 975, no implican el otorgamiento de los mismos. Si no se presenta el cumplimiento de los requisitos de los artículos 10 y 11 de la Ley 975, respectivamente, el proceso se envía a la jurisdicción ordinaria.

¹⁹⁶ El Decreto 128 de 2003 que reglamenta la Ley 418, define conceptos y procedimientos sobre desvinculados y reincorporados, y desarrolla la función de un certificado entregado por el CODA a los miembros de grupos ilegales que decidan entrar en proceso de desvinculación individual. "Para la desmovilización individual, el desmovilizado debe haber sido certificado por el CODA, dicho comité está compuesto por un delegado del Ministro de Justicia y del Derecho, un delegado del Ministro de Defensa Nacional, un funcionario del programa de reincorporación del Ministerio del Interior, un delegado del Fiscal General de la Nación, un delegado del Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y un delegado del Defensor del Pueblo. El CODA debe constatar que la persona desmovilizada pertenece a una organización al margen de la ley y evaluar su voluntad de reincorporarse a la vida civil, y como resultado de ello expide un certificado donde así lo manifieste. Para la desmovilización colectiva, debe estar incluido en el listado que los jefes del grupo armado entregan al Alto Comisionado para la paz. En virtud del decreto 3360 del 24 de noviembre de 2003, los voceros del grupo armado que pretenda desmovilizarse deberán entregar al Alto Comisionado para la Paz una lista de desmovilizados, que los "habilita (...) para acceder al proceso de reincorporación y sustituye, para todos los efectos, la certificación expedida por el Comité Operativo para la Dejación de Armas - CODA-" (art.1). La inclusión en ese listado le permite al desmovilizado acceder a los beneficios jurídicos y económicos que contempla el decreto 128 de 2003." *Procedimiento aplicable a los combatientes desmovilizados de acuerdo con la llamada ley de "justicia y paz" y el decreto 128 de 2003: Garantías de impunidad*, pág. 1, Comisión Colombiana de Juristas.

los importantes beneficios judiciales que recibirán. Consecuentemente, el mecanismo establecido no constituye garantía de que los crímenes perpetrados sean debidamente esclarecidos y, por lo tanto, en muchos casos sus autores podrán gozar de impunidad. Asimismo, la CIDH observó que los mecanismos institucionales creados por la Ley de Justicia y Paz no parecen contar con la fortaleza necesaria para afrontar con efectividad la tarea de esclarecer judicialmente los numerosos crímenes cometidos por los actores armados durante los últimos años”¹⁹⁷.

En conclusión, el Estado, al llevar a cabo o tolerar la vinculación de niños y niñas a grupos armados, no investigar dichos actos de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los responsables, viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de las víctimas como de sus familiares, imposibilita que sus comunidades y la sociedad en general conozca lo ocurrido¹⁹⁸, propicia la repetición de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas y de sus familiares¹⁹⁹. Así, la investigación de estos hechos debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de todos los responsables, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales²⁰⁰.

Actualmente se está dando trámite en el Congreso de la República al proyecto de ley N° 179 de 2008-Senado, por medio del cual “se penaliza la vinculación, utilización y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas y en el narcotráfico”. La ponencia del proyecto de ley señala que la finalidad del mismo es proteger a los NNA utilizados para actividades delictivas y de narcotráfico, debido a que ellos son víctimas frecuentes de explotación por parte de bandas criminales de violencia armada organizada y por parte de otras formas de delincuencia común. Sin embargo, en la práctica, la reforma penal que se introduce podría crear una confusión innecesaria respecto del tipo penal de reclutamiento forzado encaminado a proteger a los NNA, el cual se encuentra en el capítulo de infracciones al derecho internacional humanitario del código penal colombiano.

Adicionalmente, el proyecto de ley vulnera el principio de unidad de materia al exceder el objeto del mismo, el cual, fue explicado en la exposición de motivos. El nuevo tipo penal que

197 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH Expresa su Preocupación por la Situación de Derechos Humanos en Colombia, Comunicado de Prensa No. 16 de 2006.

198 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 15, párr. 300; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 12, párr. 146; y Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 12, párr. 238.

199 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Baldeón García, supra nota 112, párr. 168; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 12, párr. 266; y Caso Gómez Palomino, supra nota 119, párr. 76.

200 Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 8, párr. 256; Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 16, párr. 111; y Caso Goiburú y otros, supra nota 11, párr. 117.

pretende crear, no sólo sanciona a quienes vinculen y utilicen NNA para ciertas actividades delincuenciales, sino que además introduce en los parágrafos 1º y 2º del artículo 1, disposiciones que modifican el sistema de responsabilidad penal juvenil, al que se verían sometidos los adolescentes utilizados por los grupos que se sancionan, tema que está regulado en la Ley de Infancia y Adolescencia.

Resulta especialmente preocupante que el legislador al regular una materia que excede el objeto del proyecto de ley, no solo estaría vulnerando el principio constitucional de unidad de materia, sino que restringiría la aplicación del principio de oportunidad aplicable en el marco del sistema penal juvenil, al establecer dos requisitos nuevos no contemplados en la ley de infancia y adolescencia, como son (i) la reincidencia y (ii) la calificación de carácter político del grupo al que pertenecía el NNA, haciendo más gravosa la situación de los adolescentes que sean judicializados en el marco de dicho sistema. En este sentido, el parágrafo 1º es explícito al hacer una aclaración en el sentido de que dicho tipo penal no constituye un eximente de responsabilidad para los NNA utilizados por los grupos que se pretende sancionar. Dicha situación también podría dar lugar a que se creara un trato discriminatorio.

Por último, el proyecto de ley crea una confusión entre las conductas reguladas por el Convenio 182 de la OIT y por el Protocolo facultativo que sería necesario enmendar a favor de la debida aplicación de la ley en las conductas y tipos penales a sancionar.

4.2. Prohibición del reclutamiento y uso de la niñez

“No existe el bien, solo el mal”²⁰¹.

Conforme a los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, la prohibición del reclutamiento y uso de la niñez está proscrito no solo para los grupos armados no estatales sino también para la fuerza pública²⁰². A pesar de lo anterior, la Ley de Infancia y Adolescencia en varias de sus disposiciones establece dicha prohibición solo para los grupos armados no estatales dejando por fuera a la fuerza pública. A continuación, se citan varias de las normas que evidencian esta contradicción con la legislación internacional:

²⁰¹ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (2007): Boletín Pútchipu No. 17-18. Palabras de un adolescente reinsertado.

²⁰² Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991 y formuló una reserva con respecto al artículo 38 (en que se establecen los 15 años como edad mínima de reclutamiento en las fuerzas armadas), estableciendo que la edad mínima para ingresar en las Fuerzas Militares era de 18 años. En 1999, Colombia prohibió sin excepción el reclutamiento de niños menores de 18 años en 1999.

El artículo 20, relativo a los derechos de protección de los niños y niñas establece en su numeral 7 que: *"los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra (...) el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley"* (subrayado fuera del texto).

Si bien el artículo 41, relativo a las obligaciones del Estado, numeral 29 proscribe la utilización de los niños y niñas de manera genérica, luego el numeral 30 establece que: *"el Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: (...) Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley"* (subrayado fuera del texto).

De igual forma, el artículo 175, relativo al principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley, señala que *"La Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley(...)"* (subrayado fuera del texto).

Por otro lado, es importante mencionar que al mismo tiempo que la Ley proscribe el impulso de campañas cívico-militares, operaciones psicológicas o acciones similares (artículo 41, numeral 29), el artículo 89 faculta a la Policía Nacional para *"diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención y garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional"*, funciones eminentemente educativas y de competencia del Ministerio de educación nacional y otras entidades estatales de carácter civil.

Dicha facultad ha sido utilizada por la Policía Nacional para realizar campañas de integración con NNA en diferentes regiones del país, familiarizarlos con la visión militar y en el peor de los casos involucrarlos en actividades de inteligencia, tal y como lo hemos denunciado detalladamente en el capítulo IV de este informe. Consideramos que esta atribución en un contexto como el de Colombia puede aumentar la situación de vulnerabilidad de los NNA al ser estigmatizados y señalados como objetivo militar por los grupos armados contrarios; puede promover su uso y vinculación indirecta al conflicto e incentivar una visión militar en los contenidos educativos.

Los artículos descritos exponen de manera clara la contradicción entre la ley aprobada y los postulados de los instrumentos internacionales ratificados por el país. Así, con el fin de dar una aplicación coherente a dichas disposiciones éstas deberán ser interpretadas a la luz del interés superior de los NNA, otras normas de la ley que disponen su protección especial y los principios de las normas internacionales para entender que dichas normas se refieren a cualquier grupo que participe en las hostilidades y no solo a los grupos armados no estatales.

4.3. Disposiciones jurídicas para el tratamiento de NNA desvinculados de grupos armados

*"[en] razón de su inmadurez y vulnerabilidad, [los niños] requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado. Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procedimientos, judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de [sus] derechos"*²⁰³.

Fue con ocasión de las primeras desmovilizaciones de NNA ocurridas a finales de la década de 1990 que se hizo inminente la necesidad de adecuar un marco jurídico que reglamentara su situación, ya que el ordenamiento legal de ese entonces no tenía orientaciones específicas sobre esta situación irregular, lo que condujo a que se atendieran como infractores de la ley penal, judicializándolos penalmente y adscribiéndolos a programas de reeducación.

Teniendo en cuenta que el tratamiento aplicado no respetaba su condición de víctimas, no garantizaba sus derechos humanos, y no tenía en cuenta el principio de interés superior que debe primar tratándose de personas menores de 18 años, se desarrollaron una serie de normas cuyo propósito era ajustar el procedimiento jurídico y administrativo que debe aplicarse en caso de NNA desvinculados del conflicto armado, dentro de las que se destacan: (i) la Ley 782 de 2002 –prorrogada por la Ley 1106 de 2006–, (ii) su decreto reglamentario 128 de 2003, y (iii) Ley 1098 de 2006 –Código de la Infancia y la Adolescencia–. Adicionalmente, como parte de los procesos de justicia y paz se encuentran los artículos 10.3 y 64 de la Ley 975 de 2005.

La Ley 782 de 2002, en su artículo 19, parágrafo 2º, consagra la extinción de la acción penal para los delitos políticos, y en el caso específico de aquellos cometidos por personas menores de edad dispone: *"cuando se trate de menores de edad vinculados a las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las que se les haya reconocido carácter político, las autoridades judiciales enviarán la documentación al Comité Operativo para la Dejación de las Armas, quien decidirá la expedición de la certificación a que hace referencia el Decreto 1385 de 1994, en los términos que consagra esta ley"*. Los operadores jurídicos que conocían dichas situaciones interpretaron la norma en el sentido de considerar que -en dichos casos-, era necesaria la judicialización de estos NNA en la jurisdicción de menores de edad²⁰⁴.

²⁰³ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Condición jurídica y derechos humanos del niño*. Opinión consultiva OC-17 de 28 de agosto de 2002, Párrs. 93 y 94.

²⁰⁴ DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2006): "Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos", Bogotá, Colombia, capítulo II, Pp.16.

Con el objeto de aclarar dicha interpretación, la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva No. 013 de 2004, por medio de la cual se fijan criterios con relación a la conducta a seguir por los servidores públicos frente a la desvinculación de menores de edad de los grupos armados al margen de la ley. Dicha Directiva establece que: *"los defensores de familia, los promiscuos municipales y los procuradores judiciales de familia que actúan ante los jueces de menores, promiscuos de familia y promiscuos del circuito, solicitarán a estos que se abstengan de iniciar investigaciones judiciales contra menores de edad desvinculados en su calidad de víctimas"*²⁰⁵.

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-203 de 2005, al conocer de una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 19º de la Ley 782, en el cual se regula el procedimiento de indulto para niñez desvinculada²⁰⁶, consideró que los NNA vinculados a los grupos armados son víctimas del delito de reclutamiento –proscrito en normas nacionales e internacionales–, razón por la cual, primero, el sujeto activo de este crimen no puede excusarse en que la incorporación fue voluntaria; segundo, deben recibir la atención prioritaria del Estado para efectos de protección, rehabilitación y resocialización y, tercero, el Estado tiene el deber de hacer efectiva la responsabilidad penal de quienes les permitieron su ingreso en el grupo armado. Sin embargo, la sentencia de la corte también expresó que debido a la participación de muchos de estos NNA desvinculados en conductas delictivas del grupo armado, deben abrirse las investigaciones respectivas²⁰⁷, pues los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas generadas por dichos crímenes hacen parte del bloque de constitucionalidad. Aclaró que lo anterior no significa que deban ser objeto de medidas eminentemente punitivas, pues, en todo caso, su condición de víctimas obliga al Estado a rodear todas las actuaciones judiciales de mayores garantías, dada su calidad de personas especialmente protegidas por el derecho internacional.

En el mismo fallo determinó que dentro del proceso judicial donde se debata la culpabilidad del NNA vinculado al grupo armado, los operadores de justicia deberán evaluar en forma individual el grado de responsabilidad, con la debida atención a la edad, su nivel de desarrollo psicológico y su condición de víctima del delito de reclutamiento forzado; también deberán tener en cuenta una serie de factores que incluyen (i) las circunstancias específicas de la comisión del hecho, (ii)

205 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Directiva No. 013 de 2 de julio de 2004 "Por medio de la cual se fijan criterios en relación con la conducta a seguir por los servidores públicos frente a la desvinculación de menores de edad de los grupos armados al margen de la ley".

206 En síntesis, según el demandante, la norma impugnada crea un procedimiento judicial para los niños y niñas desvinculados, lo cual significa que están siendo tratados como responsables de delitos cometidos en el marco de su pertenencia al grupo armado, pero no como víctimas del mismo. Ésta señala lo siguiente: "... Parágrafo 2º. Cuando se trate de menores de edad vinculados a los grupos armados organizados al margen de la ley, las autoridades judiciales enviarán la documentación al Comité Operativo para la Dejación de las Armas, el cual decidirá sobre la expedición de la certificación a que hace referencia el Decreto 1385 de 1994, en los términos que consagra esta ley".

207 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia de constitucionalidad C-203 de 2005.

las circunstancias personales y sociales del niño o niña, (iii) el grado de responsabilidad que cabe atribuir a los culpables del reclutamiento del niño que impartieron las órdenes, y (iv) la responsabilidad de quienes, además de los reclutadores, obraron como determinadores de su conducta.

No obstante lo anterior, y a pesar de la presentación reiterada al Congreso de la República de documentos sobre los parámetros constitucionales e internacionales respecto de los NNA vinculados a los grupos armados, el 8 de noviembre de 2006, el Presidente de la República sancionó la Ley de Infancia y Adolescencia, en la cual, entre muchos temas, se abordó este de manera ambigua.

Por ejemplo, en su artículo 175 la ley aprobada señala que los NNA vinculados al conflicto armado podrán ser objeto de aplicación del principio de oportunidad –actuación procesal de la Fiscalía donde ésta decide cesar la persecución penal por la comisión de un delito-. Sobre esto, si bien es cierto que este mecanismo procesal puede ser aplicado bajo los preceptos que la Corte Constitucional señaló en su sentencia, también lo es que la falta de regulación de un tema tan complejo acarreará que muchos fiscales no lo apliquen, pues es facultad de ellos decidir si el caso amerita o no ser perseguido penalmente.

Adicionalmente, este artículo es explícito en señalar que dicho principio no podrá ser aplicado para delitos de lesa humanidad, infracciones al DIHo hechos de genocidio. En ese último aspecto, si bien es cierto que crímenes de tal naturaleza deben ser investigados y sancionados conforme a los parámetros penales más altos –dada su condición de atentado contra la humanidad-, también lo es que en el conflicto armado interno una cantidad considerable de niños y niñas pertenecientes a los grupos armados se han visto involucrados en este tipo de conductas. Así, esta provisión, de carácter excepcional, podría terminar siendo la regla general aplicable a los NNA desvinculados de los grupos armados.

La norma no es clara en determinar el tipo de sanciones que deberán cumplir en caso que resulten responsables por crímenes atroces, creando un trato diferencial entre aquellos que son remitidos directamente al programa del ICBF y aquellos sancionados penalmente.

Por otro lado, el artículo 187 de la ley señala que: *“en los casos en que los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de 2 hasta 8 años”*²⁰⁸.

En el caso concreto de los NNA desvinculados de los grupos paramilitares los cuales se encuentran en un proceso de desmovilización esta norma significa una sanción más severa que

208 Ley 1098 de 2006 – Ley de Infancia y Adolescencia.

la correspondiente a los adultos responsables del delito de reclutamiento ilícito de personas menores de 18 años, de acuerdo con la Ley de justicia y paz.

Así, mientras que los adultos miembros de estos grupos, que hayan incurrido en conductas violatorias del código penal, entre ellas el reclutamiento ilícito de personas menores de edad, podrán recibir penas alternativas que oscilan entre 5 y 8 años, *“tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”*, los NNA víctimas de la vinculación podrán ser objeto de penas privativas de la libertad entre 2 y 8 años.

En ese sentido, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los relatos y las experiencias vividas por los niños y niñas durante el reclutamiento por parte de estos grupos, en la mayoría de los casos se ven forzados a participar en conductas contrarias a los derechos humanos y el DIH, la regla general será su penalización en una proporción similar a la de los adultos.

A igual conclusión ha llegado la Defensoría del Pueblo, la cual ha señalado que *“En efecto, mientras la ley faculta que el sujeto activo del delito de reclutamiento ilícito e inclusive de otros delitos, no pierda sus beneficios por reclutar menores de edad en un grupo armado ilegal organizado, permite que los menores de edad que reclutó sean considerados y tratados como infractores de la ley penal y sometidos al procedimiento judicial correspondiente e incluso puedan perder los beneficios contemplados para ellos en la ley 782 de 2002. Esta situación inequitativa no guarda armonía con los preceptos constitucionales que obligan al Estado colombiano para que los derechos de los niños y niñas prevalezcan sobre los derechos de los demás”*²⁰⁹.

Así, resulta paradójico que las penas impuestas a los adultos responsables de la vinculación de personas menores de edad sea igual o menor a la de los NNA víctimas de este crimen de guerra, generándose desproporcionalidad frente al tratamiento especial que debe recibir la niñez víctima de reclutamiento que incurre en infracciones a la ley penal, a partir de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz.

Responsabilidad penal juvenil²¹⁰

Resulta claro que la participación de los NNA en los procesos es distinta a la de los adultos y por ello las actuaciones procesales en su conjunto deben ser pensadas desde la óptica de su protección, el restablecimiento de sus derechos y la imposición de verdaderas medidas que

²⁰⁹ DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2006): Op. Cit. Pp.22.

²¹⁰ Basado en: COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2005): Desafíos y obstáculos de la reforma al Código del menor en Colombia: Reflexiones sobre el proyecto de ley de infancia y adolescencia.

permitan su reinserción a la sociedad. Así, es fundamental tener en cuenta los factores de diferenciación entre adultos y niños para poder determinar el tipo de medidas que deben aplicarse a los segundos.

Sobre el particular la Corte Constitucional en su sentencia C-839 de 2001, al pronunciarse sobre la viabilidad de una jurisdicción especializada para menores de 18 años infractores puntualiza que antes de considerarse como un atentado contra los derechos de los NNA *“podría decirse que la comunidad internacional ha reconocido ampliamente la necesidad de crear un sistema judicial especializado que permita resolver el problema de la delincuencia juvenil desde la perspectiva de la resocialización, la tutela y la rehabilitación, evitando que el menor desvíe su proceso de adaptación y trunque su desarrollo físico y moral, base del desarrollo de la sociedad moderna”*.

Es esta la razón de ser de la jurisdicción de menores y la filosofía que, a juicio de la Corte, debe inspirar el trabajo del legislador cuando emprenda la tarea de regularla. *“Mientras la ley se ajuste a los principios constitucionales que guían el juzgamiento de los menores y conserve los objetivos que marcan su derrotero, la existencia misma de esta jurisdicción no merece reproche de constitucionalidad alguno; por el contrario, ésta debe ser avalada como el mecanismo propicio para armonizar los derechos de los menores infractores y la conservación de la seguridad pública”*.

Así, plantear un sistema de responsabilidad penal juvenil, implica que los NNA reciban cuidados especiales teniendo en cuenta su edad y su desarrollo vital para que de esta manera puedan gozar de sus derechos y se les proporcione un tratamiento digno y justo. La consideración de la minoría de edad debe ser un parámetro de protección y no un argumento que genere discriminación.

En el trámite legislativo de Ley de infancia y adolescencia, organizaciones de derechos humanos impulsaron una fuerte incidencia para que el Congreso de la República, al abordar el debate acerca de la responsabilidad penal juvenil, especialmente en cuanto a los tipos de medidas y la edad de privación de la libertad, realizara una interpretación amplia con base en el interés superior del niño. Sin embargo, aunque la ley aprobada fundamenta el sistema de responsabilidad penal bajo argumentos como los señalados, al momento de determinar las medidas y su tiempo de duración incurre en una normativa eminentemente punitiva.

El artículo 187 establece que *“la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno hasta cinco años”*²¹¹.

211 LEY 1098 de 2006 – Ley de Infancia y Adolescencia.

Lo anterior no se compadece con el carácter pedagógico que debe tener el sistema de responsabilidad juvenil, pues la diferenciación de penas según la gravedad del hecho está en contra de dicho carácter, convirtiéndolo en una extensión del derecho penal y desvirtuando los principios señalados en la misma ley, relativos a la finalidad de las medidas y al fin pedagógico del proceso y de las medidas.

De acuerdo con las Reglas de Beijing²¹², la respuesta frente a la delincuencia juvenil no debe basarse exclusivamente en la gravedad del hecho, sino que debe tener en cuenta especialmente las circunstancias personales y necesidades de los NNA. Con relación a la justicia penal juvenil, debe tener mayor peso el interés de garantizar el bienestar y el futuro de los NNA que el castigo, o la idea de justo merecido.

Por otro lado, encontramos que fue excluida del texto la mención a que la medida de privación de la libertad será aplicada de manera excepcional y será usada como último recurso. El artículo 161 establece simplemente que *"la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido 14 y sean menores de 18 años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica"*²¹³, sin hacer mención expresa a la utilización de esta medida como último recurso y solo lo menciona al referirse al internamiento preventivo.

Además, conforme al artículo 179, el incumplimiento de cualquiera de las sanciones que se puede imponer a los NNA tales como: amonestación, prestación de servicios a la comunidad o libertad asistida entre otras, generará inmediatamente la reclusión del niño o la niña en un centro de internamiento, con lo cual se desvirtúa la supuesta excepcionalidad argumentada por los autores del código, dicho artículo señala:

*"(...) Parágrafo 2. Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo en internamiento. El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez"*²¹⁴.

Respecto de la duración de la pena privativa de la libertad establecida en el artículo 187, consideramos que el término de uno a cinco y dos a ocho años excede la razonabilidad de cualquier

²¹² Las reglas mínimas uniformes para la administración de la justicia de menores (conocidas con el nombre de "Reglas de Beijing"), que el Consejo Económico y Social presentó al Séptimo Congreso, celebrado en Milán (Italia) en agosto y septiembre de 1985, fueron aprobadas el 6 de septiembre de 1985 por el Séptimo Congreso, que las recomendó a la Asamblea General para su aprobación. La Asamblea aprobó las reglas el 29 de noviembre de 1985 y las incluyó en el anexo a su resolución 40/33. Las reglas representan las condiciones mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los delincuentes juveniles en todo sistema de tratamiento de esas personas.

²¹³ LEY 1098 de 2006 – Ley de Infancia y Adolescencia.

²¹⁴ Ibid.

pena impuesta a los NNA. Dando un vistazo al derecho comparado encontramos que Colombia estaría estableciendo una pena más gravosa que el promedio de América Latina. Las penas máximas de privación de la libertad de adolescentes oscilan entre uno y cinco años. En Chile la pena privativa de libertad tiene un máximo de cinco años al igual que en Honduras, Nicaragua y Bolivia. Perú y Venezuela por su parte establecen un máximo de tres años.

Bajo estas consideraciones encontramos que si bien la Ley de infancia y adolescencia avanza en la adecuación de la legislación nacional a los estándares internacionales en algunos temas, el sistema de responsabilidad penal juvenil, como se encuentra planteado actualmente, así como algunas normas relativas a la participación de los NNA en los conflictos armados, podrían afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la infancia en Colombia.

En síntesis, de acuerdo con el sistema creado por la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, lo que le espera a los NNA que hayan cometido algún delito, es que:

- 1 – NNA entre 16 y 18 años podrán ser privados de libertad hasta por cinco años.
- 2 – NNA entre los 14 y 18 años, que hayan sido hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades podrán ser privados de libertad hasta por ocho años, superando el promedio de penas de otros países de América Latina.
- 3 – El incumplimiento de cualquier sanción impuesta tales como amonestación, prestación de servicios a la comunidad o libertad asistida entre otras, generará inmediatamente la reclusión en un centro de internamiento, con lo cual se desvirtúa la supuesta excepcionalidad argumentada por los autores del código.
- 4 – NNA que han hecho parte de los grupos armados que toman parte en las hostilidades y que son víctimas del delito de reclutamiento de personas menores de 18 años, podrán ser objeto del sistema de responsabilidad penal juvenil en caso de haber cometido infracciones graves al DIH. Esta excepcionalidad se convierte en regla general por cuanto la mayoría de estos NNA, debido a su subordinación dentro del grupo armado, se ven obligados a cometer dichas conductas. Mientras tanto los comandantes de los grupos paramilitares, responsables del delito de vinculación de niños, continuarán recibiendo beneficios y rebajas de penas.
- 5 – No habrá un verdadero restablecimiento de derechos para los NNA a quienes se les compruebe que la falta de garantía de sus derechos por parte del Estado los impulsó a incurrir en conductas contrarias a la ley penal, o para quienes fueron víctimas de la vinculación a grupos armados.

En el contexto de pobreza, falta de garantías y oportunidades, y de conflicto armado que enfrentan los NNA colombianos, consideramos que el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil:

- Desconoce los principios y lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa internacional de derechos humanos en esta materia
- Agrava la situación de vulnerabilidad de los NNA envueltos en la comisión de conductas penales
- Establece una de las penas de prisión para personas menores de 18 años más alta de América Latina
- Desconoce el interés superior del niño al establecer medidas que no tienen el carácter de “educativas”
- Privilegia la protección a la comunidad de los NNA que supuestamente representan un peligro para sus intereses sobre el restablecimiento de sus derechos y la creación de oportunidades. Cuando la ausencia de garantías, derechos y oportunidades para la infancia, debería ser entendida como el mayor peligro que puede enfrentar una comunidad.

4.4. Adhesión a instrumentos internacionales de protección

“Da risa, el Estado ahora se ve afectado ante la comunidad internacional y dice que va a hacer algo. Nunca ha habido un verdadero interés, nunca ha habido una verdad completa.”²¹⁵.

En materia de protección de los derechos de los niños y las niñas el Estado colombiano ha ratificado varios instrumentos de derechos humanos y tratados de derecho internacional humanitario dentro de los que se destacan:

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos²¹⁶ que tiene como finalidad “*promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos*”.
- La Convención Americana de Derechos Humanos²¹⁷ que busca establecer los derechos mínimos de los habitantes del continente americano, desarrollando los principios emanados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

²¹⁵ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Junio 2008): Conversatorio con jóvenes. Palabras de un joven desvinculado, Bogotá.

²¹⁶ Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 16 de diciembre de 1996, firmado por Colombia el día 21 de diciembre de 1966, aprobado internamente mediante ley 74 de 1968, ratificado el día 28 de Octubre de 1969, y en vigor el día 23 de marzo de 1976.

²¹⁷ Adoptada el 22 de septiembre de 1969, vigente desde el 18 de julio de 1978, aprobada en Colombia mediante ley 16 de 1972, ratificada el 31 de julio de 1973, y en vigor interno desde el 18 de julio de 1978.

- El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional²¹⁸ que tipifica como crimen de guerra el reclutamiento, alistamiento o utilización ilícita de niños y niñas menores de 15 años en las fuerzas y/o grupos armados, o su uso en las hostilidades, tanto en conflictos internos como en los internacionales.
- La Convención sobre los Derechos del Niño²¹⁹ y sus protocolos facultativos relativos a la participación de niños en los conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, creados por el Comité de los Derechos del Niño y que establecen prohibiciones y obligaciones de los Estados para prevenir y atender las diversas situaciones a las que están expuestos los NNA.
- Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales²²⁰, los cuales establecen una protección especial de los niños y niñas en los conflictos armados de carácter internacional e internos, particularmente el Artículo 24 del Convenio IV sobre Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, y los Protocolos Adicionales I y II de dichos Convenios.
- El Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)²²¹ referente a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, que interpreta el reclutamiento forzado de niños como una de las peores formas de trabajo infantil y reclama acciones para acabar su uso como “soldados”.
- Los Principios de París²²² sobre la reintegración de niños y niñas vinculados a grupos armados, adoptados en febrero de 2007 en el seno de las Naciones Unidas y firmados por Colombia, que establecen criterios fundamentales para la liberación, atención, protección y reintegración de los niños y niñas desvinculados de los grupos armados.

²¹⁸ Adoptado el 17 de julio de 1998, vigente desde el 04 de julio de 2002, firmado por Colombia el 05 de julio de 2002, aprobado mediante ley 742 de 2002, ratificado el 05 de agosto de 2002, y en vigor desde el 01 de noviembre del mismo año, es de especial atención su artículo 8.

²¹⁹ LEY 12 de 1991, en la cual son de especial relevancia los artículos 38, 39 y 40.

²²⁰ Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

²²¹ Adoptado por la OIT en 1999, aprobado mediante la Ley 704 de 2001 y ratificado el 17 de mayo de 2005 mediante el *Decreto 1547*.

²²² PRINCIPIOS DE PARÍS: PRINCIPIOS Y GUÍA SOBRE NIÑEZ VINCULADA CON FUERZAS O GRUPOS ARMADOS (2007). Véase en: www.coalico.org

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que buscan poner fin a la trasgresión de los derechos de la infancia en medio de la guerra: 1261 de agosto 25 de 1999; 1314 de agosto 11 de 2000; 1379 de noviembre 20 de 2001; 1460 de enero 30 de 2003; 1539 de abril 22 de 2004 y 1612 de julio de 2005. Particularmente, la Resolución 1612 constituye un avance importante en materia de protección de la niñez afectada por los conflictos armados. Dicha resolución establece un sistema de vigilancia y de presentación de informes a un Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad, a países donde el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se está produciendo. Establece además la importancia de que se cree un Equipo Especial conformado por Naciones Unidas y ONG que monitoreen la situación particularmente de seis violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario: homicidio, secuestro, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ocupación y ataque de escuelas y hospitales, y bloqueo de suministros básicos.

A pesar de la ratificación por parte de Colombia de estos instrumentos internacionales y de los esfuerzos realizados en materia de adecuación de la legislación nacional a estos preceptos, las situaciones de peligro para la infancia persisten, los niveles de impunidad son altos y las partes en combate siguen infringiendo las disposiciones del DIH relativas a los derechos y a la protección de los NNA en los conflictos armados.

5. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN

5.1. Programa de atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley

“Dado el deterioro de los vínculos que tiene lugar en la vida de los menores, en razón de la dinámica familiar y las estrategias de retención de los menores por parte de los grupos armados, centradas en la vulneración de todo vínculo personal, un reto central del programa está en facilitar la vinculación en primer lugar con la vida, a través de la dinámica cotidiana”²²³.

En 1999 el Estado colombiano implementó el programa de atención a NNA desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley, como una iniciativa que busca contribuir en el proceso de consolidación de una vida civil social y productiva, en el marco de la garantía y restitución de derechos. No obstante, resulta pertinente preguntarse si a la luz de los desvinculados menores de 18 años y de las organizaciones competentes en el tema estos programas han resultado efectivos para una resocialización dentro de la vida civil y el distanciamiento de la guerra. A este respecto, vale la pena destacar algunos aspectos centrales de preocupación.

Limitaciones en la cobertura: el programa ha atendido a un número bastante reducido de niños, niñas y jóvenes excombatientes, con respecto al número total estimado y al número de desvinculados. Desde el 16 de noviembre de 1999 hasta el 30 de abril de 2008 el programa del ICBF había atendido a 3.590 NNA (de los cuales el 73.25% son hombres y el 26.75% restante son

²²³ UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2005): *Atmósfera sociomoral y atención de los menores desvinculados del conflicto armado en Colombia*.

mujeres). Esto significa que, en cálculos someros, el programa ha atendido aproximadamente al 32% del total estimado de menores de 18 años en la guerra²²⁴.

Resocialización en un contexto urbano²²⁵: por lo general el modelo de atención en el medio institucional está ubicado en las principales ciudades del país, justificándolo como una condición esencial de seguridad que aleja a los NNA de las zonas donde podrían ser fácilmente identificados y castigados por los grupos a los que anteriormente pertenecían. Sin embargo, esta decisión -*el tránsito a las ciudades*- hace más complejo el proceso de inserción social para muchas de estas personas, debido a que además de apartarlas de las prácticas de guerra, implica integrarlas a un estilo de vida distinto al rural que era el suyo. Para ponerlo en otros términos, reincorporarse a la ciudad implica pasar de la *hostilidad* de la guerra a la *hostilidad* propia de las ciudades que supone adquirir nuevas herramientas y prácticas para vivir. Aquí se observa que después de su paso por el programa muchos NNA catalogan como un retroceso vital regresar al campo, lo que evidencia un desarraigo del sujeto rural.

Resocialización en un contexto permeado por la presencia de grupos armados: pese a que el programa ha buscado ubicarse en zonas urbanas como espacio idóneo para alejar a estos NNA de los grupos armados, su ubicación dentro de barrios o localidades urbanas con alta presencia de grupos irregulares ha expuesto nuevamente a estos NNA al contacto con una guerra presente que continúa amenazando su existencia. Al analizar el caso de Bogotá, por ejemplo, podemos advertir que luego de la desmovilización, los reinsertados fueron ubicados en localidades como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal Sur²²⁶, zonas donde se reconoce la existencia de grupos armados. Es así como muchos de ellos han sido nuevamente contactados, especialmente por paramilitares, para ser reintegrados a sus filas²²⁷. Las difíciles condiciones que les presenta la ciudad, y el panorama incierto que les figura la finalización del programa, hace que muchas veces ni siquiera se necesite convencerlos de su regreso, sino que más bien

²²⁴ Tomando como media el cálculo de 11.000 niños y niñas vinculados a grupos armados irregulares.

²²⁵ BENPOSTA (2006) "Plan piloto intersectorial para la definición de un programa de acción que contribuya a decantar un proceso civilista de reinserción enmarcado en los principios de verdad, justicia y reparación, en la ciudad de Bogotá". Bogotá.

²²⁶ SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ (2006): *Ciudadanos excombatientes, un desafío de reconciliación e inclusión para Bogotá. Caracterización de la población reincorporada y acompañamiento civilista al proceso de reintegración*. Bogotá. Pp.24.

²²⁷ Tal y como reiteradamente ha sido denunciado por la MAPP OEA en sus informes trimestrales No. 9, 10, 11 y 12. Al respecto véase COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Jun – Dic 2007): Boletín Pútchipu No. 17-18 "Rearme y nuevo reclutamiento de jóvenes en Bogotá".

ese regreso sea motivado porque terminan viéndolo como su única opción. Adicionalmente, en el 2006 se tuvo conocimiento de que la presencia de estos grupos permeó incluso a los mismos albergues, donde muchos de los que estaban operaban como reclutadores activos “...*hay gente que está dentro del programa, que o sea... no es porque sea reinsertado... porque haya querido venirse de allá, sino porque vienen a reclutar; entonces eso se (la) pasan de albergue en albergue, mirando así a todos los que están desanimados y esos son los que se llevan*”²²⁸ “(...) *pues reclutan en varias partes; por lo menos acá, en Bogotá, están reclutando en los albergues. Entonces... o sea uno le avisa al otro que 'yo me voy a ir' y que no se qué... y el otro le comenta a otro que también quiere ir, entonces comienza a hablar con todos ellos*”²²⁹.

Programa benefactor que proporciona derechos en forma de beneficios: tal y como está concebido, el programa les da a entender a los desvinculados su carácter de “beneficiarios” de unos derechos que posteriormente van a ser garantizados. Esta relación que ubica al Estado *en deuda* con los NNA necesariamente lleva a construir una propuesta de reintegración civil basada en el cumplimiento de lo pactado. Esto supone una serie de beneficios gratuitos que ofrece el Estado como alojamiento y alimentación; acceso a salud; la posibilidad de recibir educación básica y secundaria, o una o varias capacitaciones técnicas; apoyo para transporte mensual para que asistan a sus cursos; atención psicosocial; y acceso a documentación.

Aunque no se pone en duda la obligación del Estado de garantizar estos derechos, esto ha generado tensiones fuertes alrededor de los verdaderos intereses de las personas menores de 18 años frente a su estancia dentro de estos programas, pues pareciera que estos “incentivos” económicos o materiales fueran su único lazo al programa. Aquella relación de utilidad que el mismo programa fortalece, suponiendo la entrega a cambio de beneficios, le resta importancia a otras posibles razones morales y políticas para haber dejado la guerra, que nacen de la misma voluntariedad y que deberían reafirmarse a la hora de asumir esta decisión. El esquema de programa benefactor implementado con NNA infractores es un ejemplo importante sobre cómo este modelo tutelar puede construir un sujeto demandante de cosas, con una desconexión preocupante frente a sus deberes y derechos ciudadanos²³⁰.

²²⁸ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Jun – Dic 2007): Op. cit.

²²⁹ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Jun – Dic 2007): Op. cit.

²³⁰ UNIVERSIDAD EXTERNADO (2004): “Modelo de seguimiento post egreso del programa de los niños, niñas y jóvenes desvinculados al conflicto armado” Memorias del “Encuentro de Investigadores Niños, niñas y jóvenes vinculados o desvinculados al conflicto armado en Colombia”, OIT-IPEC, Abril 2004.

Adicionalmente, al analizar los beneficios que otorga el programa desde el enfoque de restitución de derechos se advierten varias falencias:

- En materia de atención psicosocial, resulta notorio el bajo impacto de las acciones adelantadas en materia de salud mental y de transformación de los patrones psicosociales. Esto resulta particularmente preocupante si se tiene en cuenta que se está hablando de personas menores de 18 años víctimas de violencia sociopolítica, que cargan serias secuelas de su paso por la guerra. El modelo debe hacer un esfuerzo importante en este sentido, otorgando herramientas de sanación y de socialización en modelos y opciones diferentes de vida, priorizando los criterios psicosociales de restitución. *"Los jóvenes se sentaban con papel periódico y marcador en mano y con el psicólogo o la trabajadora social, o quien estuviera disponible, empezaban a pensar, ¿qué vamos a hacer sobre el lavado de la loza?... esos eran los temas que el psicólogo consideraba necesario reglamentar"* ²³¹.
- Con respecto al derecho a la educación y formación técnica vocacional se evidencia desmotivación. Para muchos de los NNA los cursos de capacitación y proyectos productivos terminan siendo una frustración, pues no responden a sus expectativas y a la oferta laboral que encuentran una vez salen del programa. Esto muchas veces figura un panorama desalentador donde el regreso a la guerra termina siendo la única opción de vida, pues su plan de vida civil pasa de manera central por la exploración de alternativas productivas que sustenten la vida adulta *"(...) hemos tenido ganas de irnos, porque esperamos de aquí del programa muchas cosas, y no han salido... las personas meten los proyectos y después se los regresan, sabiendo que los meten con papeles bien y todo... después no les aceptan... se los devuelven. Pues la gente se desmoraliza y ya se les acaba el CODA (...) lo independizan ya, cuando no le falta nada a uno pa' que se le acabe el tiempo... y no hay nada más que hacer, no sale uno ni en pie de trabajo, ni nada. El programa a veces le 'faltonea' a uno, ha 'faltoneado' mucho"* ²³². Adicionalmente, también se han registrado casos de jóvenes que no quieren regresar a las capacitaciones porque han evidenciado situaciones de inseguridad en los espacios de formación.

²³¹ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Jun – Dic 2007): Op. cit.

²³² COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Jun – Dic 2007): Op. cit.

Paso de beneficiario a ciudadano²³³: el programa supone que en un momento dado las personas se independicen de la ayuda del gobierno y se comporten como ciudadanos autónomos, libres e iguales. Es decir, establece claramente la manera como las personas ingresan y los servicios específicos a los que acceden, pero es bastante confuso en cuanto al proceso de desprendimiento que culminará con una separación total de estas ayudas. Los desvinculados ingresan y se acostumbran a un programa benefactor que posteriormente los dejará solos ante una ciudad que cultural, social y económicamente no está preparada para recibirlos y ofrecerles condiciones dignas de vida. Cabe entonces preguntarse ¿qué posibilidades les puede abrir la sociedad y cómo adaptarse a ella?. Esta confrontación ha generado choques serios con la realidad que encuentran posteriormente a su salida y que les genera una enorme desesperanza frente a sus planes de vida. *"No se puede negar que el Estado ha hecho algo de propaganda en emisoras, televisión y volantes incitando a los jóvenes a no reclutarse o a que se reincorporen a la vida civil. Pero ¿qué hace el Estado para aliviar la pobreza? ¿qué hace con los jóvenes que se reincorporan? solo se encargan de echarles mentiras porque les prometen miles de cosas que no cumplen"*²³⁴.

Modelo de atención institucional: vale la pena destacar que el modelo centrado en la atención institucional ha evidenciado tanto en la cultura institucional como en la subcultura juvenil de los NNA beneficiarios dinámicas sociales y culturales complejas caracterizadas por la reproducción de conductas excluyentes, patriarcales, discriminatorias, autoritarias, y propensas al escalamiento de los conflictos (que validan prácticas como el uso de la fuerza, la ley del más fuerte, el machismo, etc.), que ponen en tela de juicio la efectividad del modelo en la construcción de sujetos reflexivos, inclusivos y democráticos. *"Observamos que las prácticas de participación en los CAE no solo son limitadas, sino que también se presentan acciones de abuso de autoridad por parte de los funcionarios de los centros. En relación con las prácticas autoritarias en la toma de decisiones, identificamos que por un lado, son empleadas de manera frecuente y por otro, que el ejercicio de la autoridad generalmente es impositivo y no recurre a consensos construidos democráticamente"*²³⁵.

²³³ BENPOSTA (2006): Op. Cit.

²³⁴ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Septiembre 17 de 2009): Memorias del taller. Palabras de un adolescente.

²³⁵ Al respecto véase: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2005): Op. cit.

5.2. Desmovilización de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las AUC: ocultamiento e impunidad

“La desmovilización de ‘Richard’ no fue con sus compañeros de los bloques Sinú y San Jorge el 18 de febrero de 2005. Él hace cuentas de tres días antes, el 15 de febrero. A él y otros 86 ‘paras’ que no llegaban a los 18 años los reunieron en la finca ‘06’ (...) les entregaron a cada uno 2 millones de pesos en efectivo y ropa nueva para que regresaran a sus casas. Era la liquidación por el tiempo servido a las autodefensas”²³⁶.

De acuerdo al Artículo 10 de la Ley 975 de julio de 2005 uno de los requisitos indispensables para que los paramilitares accedieran a la desmovilización colectiva era la entrega de NNA vinculados a estos grupos, poniéndolos a disposición del ICBF. No obstante, el proceso adelantado hizo caso omiso a esta exigencia evadiendo la entrega de los NNA vinculados a sus filas, e invisibilizando el tema en las declaraciones y audiencias dadas por los jefes paramilitares ante la justicia.

De acuerdo con Human Rights Watch el 20% de las estructuras paramilitares estaban conformadas por menores de 18 años²³⁷. Sin embargo, entre 1999 y octubre de 2007 el ICBF solo ha atendido a 1.037²³⁸ niños pertenecientes a estos grupos lo cual resulta además confuso por que al final del supuesto proceso de desmovilización paramilitar, se habrían desmovilizado 31.651 personas²³⁹. De esta cifra, 84 NNA fueron entregados con anterioridad al inicio de las “desmovilizaciones” colectivas, 307 fueron entregados como parte del proceso de desmovilización colectiva, 432 se habrían desvinculado de manera individual y 214 han sido capturados²⁴⁰. Los bloques que más NNA entregaron en el marco de las desmovilizaciones colectivas fueron el Bloque Central Bolívar, Centauros, Cacique Nutibara, ACC, Bloque Minero y Vencedores de Arauca²⁴¹. El reducido número de NNA entregados (307) motivó a la Procuraduría General de la Nación a pronunciarse al respecto señalando que “lo anterior indica que la entrega de niños, niñas y adolescentes es mínima con respecto a la totalidad de los utilizados en el conflicto armado y en comparación con la totalidad

²³⁶ EL TIEMPO “‘Richard’, un menor de edad, cuenta su “despedida” en Ralito”_13 de julio de 2008. En http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-13/richard-un-menor-de-edad-cuenta-su-despedida-en-ralito_4374908-1

²³⁷ HUMAN RIGHTS WATCH (2003): Op. cit. Pp. 41.

²³⁸ Véase: Alto Comisionado para la Paz, *Evaluación del proceso de paz con los grupos de autodefensa y aplicación de la ley de justicia y paz*, octubre 22 de 2007, en www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2007/octubre/documentos/PROCESO%20DE%20PAZ-LEY-CONSOLIDADO-P%C3%81GINA.pdf; Alto Comisionado para la Paz, carta al Procurador General de la Nación de 11 de diciembre de 2007.

²³⁹ MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA (Febrero 2009): Op. cit.

²⁴⁰ Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, S/2009/434, 28 de agosto de 2009, párr 60.

²⁴¹ Fuente: Fiscalía – Unidad de Justicia y Paz. En: <http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-13/ARCHIVO/ARCHIVO-4374929-o.pdf>

*de adultos desmovilizados, lo que trae como consecuencia el no cumplimiento de la condición de desmovilización del Art. 10 Numeral 3 de la Ley 975 de 2005*²⁴². El Consejo de Seguridad de la ONU también llamó la atención sobre este asunto en su informe de 2007 *“Según cifras oficiales, en 2006 fueron desmovilizados 63 niños de las AUC, en comparación con 17.581 adultos. Sin embargo, no se hizo entrega de esos niños oficialmente, como requiere el proceso de desmovilización colectiva y se teme que haya niños que no hayan sido incluidos en ese proceso”*²⁴³.

La MAPP OEA señaló en su Décimo primer informe que la cifra de atención a NNA desmovilizados de los grupos paramilitares puede seguir aumentando *“debido a que todavía hay menores que se presentan al ICBF para ingresar al programa y que aparentemente fueron enviados a sus casas por los comandantes, días antes de la desmovilización. Esta situación demuestra que aún no se tiene claro cuál es la cifra real de los menores reclutados por las AUC durante los años que ejercieron su actividad armada”*²⁴⁴.

Si no hay certezas sobre el número de NNA que fueron vinculados a estos grupos y si además resulta altamente factible que la cantidad superara con creces la cifra consolidada en materia de atención estatal ¿cuál ha sido entonces el paradero de los niños y niñas que conformaban estos frentes?. Al respecto se han ido estructurando diferentes hipótesis, la primera indica que fueron sustraídos de las desmovilizaciones colectivas y enviados a otras zonas del país donde operan nuevos grupos paramilitares; la segunda afirma que fueron liberados y entregados directamente a sus familias, o dejados en sus comunidades de origen con una suerte de bonificación bajo el brazo, impidiendo que recibieran la atención especializada del Estado y el reconocimiento de los derechos básicos que se les atribuye como víctimas; y la tercera, establece que fueron ejecutados extrajudicialmente o murieron en combate²⁴⁵. Al respecto el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, le respondió a la Procuraduría General de la Nación que, en su momento, *“no tuvo conocimiento de un estudio claro sobre el número de niños vinculados a las Auc”*²⁴⁶.

²⁴² Esta misma preocupación la comparte el Ministerio Público. Al respecto, ver, Procuraduría General de la Nación, “Seguimiento apolíticas públicas de desmovilización y reinserción”, Bogotá, Colombia, junio de 2006, tomo II, p. 338.

²⁴³ SEMANA “El crimen invisible” 26 de abril de 2008.

²⁴⁴ MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA (Julio 2008): Op. cit. Pp. 12. De acuerdo a este informe la atención consolidada a diciembre de 2007 es de 1.039 NNA.

²⁴⁵ Los análisis fueron realizados con base en la información recopilada por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en entrevistas sostenidas con NNA desvinculados del conflicto armado. Al respecto véase: *Un Camino por la Escuela colombiana desde los derechos de la infancia y la adolescencia 2006 - 2007*. COALICIÓN COLOMBIA y CEJIL, “Informe presentado ante la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, Washington D.C., EEUU, julio de 2007.

²⁴⁶ EL TIEMPO “Paramilitares escondieron a los niños que tenían en sus filas”. 13 de julio de 2008. En: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-13/paramilitares-escondieron-a-los-ninos-que-tenian-en-sus-filas_4374907-1

La no entrega de niños y niñas durante este proceso de desmovilización fue una realidad que salió a la luz pública en el 2008. Los procesos judiciales llevados a cabo en los años anteriores ocultaron tanto la omisión de la entrega, como el delito del reclutamiento. Así lo corroboran las primeras audiencias de versión libre practicadas a altos jefes donde la justicia no indagó de manera profunda acerca de esta práctica; y donde no se aceptó responsabilidad alguna en este crimen. En las 63 audiencias que se realizaron en el 2007 a 51 paramilitares, la regla general fue desconocer la vinculación de NNA en los bloques en los cuales actuaron, reduciendo el fenómeno a casos aislados que no hacían parte de las directrices del grupo armado y que fueron cometidos por mandos medios sin su autorización²⁴⁷.

No obstante, en el 2008 la gravedad del tema fue visible, este año el comandante paramilitar de los bloques Bananero y Calima de la Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- Ever Veloza, alias "HH" fue el primero en reconocer su responsabilidad por el delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas como una política que se extendió a nivel nacional, ya que, como expresó, estos le servían para "pasar desapercibidos y hacer inteligencia"²⁴⁸. En sus versiones libres, Ramón Isaza aceptó haber reclutado a cuatro niños y niñas provenientes del norte del Tolima en las Autodefensas del Magdalena Medio²⁴⁹. Freddy Rendón Herrera, alias el 'Alemán', confesó que el Bloque Elmer Cárdenas llegó a tener hasta 358 menores de edad en armas y señaló que antes de su desmovilización devolvió directamente a sus casas a 149 niños, entregándolos a sus familias en Necoclí (Antioquia)²⁵⁰. Y por último, Guillermo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, habló de 97 niños y niñas incorporados a las filas del Bloque Central Bolívar²⁵¹. Conforme a las declaraciones públicas de alias "el Alemán" dicha situación era conocida por el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y fue objeto de acuerdo durante las negociaciones con estos grupos para no entorpecer el proceso²⁵². Mancuso también reveló que como parte de la estrategia de las AUC se tomó la decisión de entregar una mínima proporción del total de los niños que componían las filas en las desmovilizaciones colectivas²⁵³. Hasta la fecha se han enunciado 1020

²⁴⁷ COALICIÓN COLOMBIA y CEJIL, "Informe presentado ante la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos", Washington D.C., EEUU, julio de 2007

²⁴⁸ Audiencia de versión libre de Éver Veloza García, alias "HH", 26, 27 y 28 de mayo de 2008, en: Comisión Colombiana de Juristas, Boletín No. 28: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975, Justicia en Colombia primero, extradición después: Antes de ser extraditados, alias "HH" y los restantes paramilitares deberían culminar sus procesos ante la justicia colombiana, Bogotá, julio 31 de 2008.

²⁴⁹ EL ESPECTADOR "Ramón Isaza confesó haber reclutado menores de edad". 25 de julio de 2008.

²⁵⁰ EL TIEMPO "Revuelo causa versión de exjefe para sobre niños reclutados que no fueron entregados al Estado". 27 de agosto de 2008.

²⁵¹ EL TIEMPO "Julián Bolívar, ex jefe del bloque Central Bolívar, acepta que reclutó 97 menores de edad". 28 de agosto de 2008.

²⁵² EL TIEMPO "Revuelo causa versión de exjefe para sobre niños reclutados que no fueron entregados al Estado". 27 de agosto de 2008.

²⁵³ SEMANA "El crimen invisible" 26 de abril de 2008.

casos de reclutamiento ilícito en desarrollo de las diligencias de versión libre y se han confesado un total de 389²⁵⁴.

Todas estas declaraciones impiden el acceso a los beneficios adquiridos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, según su artículo 10.3. En este sentido, la Fiscalía debe declarar no elegibles a los postulados que no hayan cumplido con la obligación de entregar NNA y al haber ocultado la entrega de niños y niñas pertenecientes a sus grupos armados. No obstante, hasta diciembre de 2008 el ente investigador solo había abierto investigaciones a 4 casos, cuando podría haber en trámite por lo menos 3000, teniendo en cuenta el número de niños atendidos por el programa del ICBF. Como expresó el Procurador General de la Nación en comunicación remitida a este órgano, es imperativa *“la búsqueda de la verdad como mecanismo para obtener justicia restaurativa en el caso de los niños, niñas y adolescentes usados en el conflicto armado interno”*²⁵⁵.

Asimismo, el Ministerio Público recordó la necesidad de *“individualizar a los sujetos responsables del reclutamiento dentro del proceso de justicia y paz que se adelanta dentro del territorio nacional, precisando algunos conceptos que el Derecho Internacional impone a los procesos de investigación en justicia transicional y que el nuevo Código de Infancia y Adolescencia prevé dentro de las fórmulas de la protección integral, del interés superior del niño/a y del restablecimiento de derechos”*²⁵⁶. Es por ello que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la Fiscalía General de la Nación dispuso a través del Memorando 057 del 15 de Agosto de 2008 el tratamiento del tema en sesiones especiales, dando instrucciones a los Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz a fin de que se interrogue a los desmovilizados sobre: Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados; Convención de Ginebra relacionada con la prohibición del reclutamiento de menores; Código Penal concerniente al reclutamiento ilegal de personas menores de 18 años; y Ley 975 de 2005 relativo a uno de los requisitos de elegibilidad referente a la entrega de todos los NNA vinculados a grupos armados.

Pero los vacíos en materia de investigación no son los únicos elementos que han alimentado la impunidad. La extradición en el 2008 de altos jefes paramilitares a los Estados Unidos a que comparezcan ante la justicia norteamericana por el delito del narcotráfico ha cerrado una puerta más a las posibilidades de esclarecer los crímenes de reclutamiento. Justamente cuando

²⁵⁴ UNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN “Respuesta derecho de petición No. 10388”. 1 de octubre de 2009.

²⁵⁵ Por reclutamiento ilícito de menores de edad, PGN urge medidas contra grupos armados al margen de la ley, Bogotá, 14 de septiembre de 2007, en: http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2007/noticias_375.html fecha de consulta: junio 16 de 2008.

²⁵⁶ Ibid.

empezaba a visibilizarse el tema en las versiones libres, el gobierno colombiano extraditó a 16 comandantes de las AUC procesados bajo la Ley 975 con el argumento de que habían seguido delinquirando después de su desmovilización²⁵⁷. Esta decisión puso de presente la poca voluntad e incapacidad del Estado de impartir justicia con relación a los delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia. En efecto, en tales circunstancias, y según la propia Ley 975, el Gobierno hubiera debido procesar a los paramilitares por la justicia ordinaria por crímenes de lesa humanidad en vez de priorizar el juzgamiento en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. En palabras de la CIDH la extradición de estos mandos *"impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares"*²⁵⁸, en especial la información que conduzca a establecer la verdad sobre el paradero de personas desaparecidas.

En dicho contexto, la investigación y sanción del delito de reclutamiento debe convertirse en un aspecto central del proceso de justicia que se adelanta en el marco de la Ley 975 de 2005. *Solo unos pocos paramilitares versionados han sido indagados sobre sus actos de reclutamiento de niñas y niños, y tan solo 23 jefes paramilitares han confesado este delito, a pesar de la sistematicidad con la que se viene perpetrando*²⁵⁹. *Así las cosas, permanece latente la necesidad de someter a la justicia a todos los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados en contra de niñas y niños*²⁶⁰. Situación que cobra especial relevancia en el contexto colombiano por el próximo levantamiento de la reserva al Estatuto de Roma que mantiene Colombia respecto de la investigación de crímenes de guerra.

Finalmente, a los obstáculos anteriormente descritos se debe sumar el hecho de que no se han adelantado investigaciones adecuadas respecto de situaciones que empezaron a ser cono-

257 "Llama la atención que durante más de cinco años el Gobierno hubiera negado las denuncias hechas por las organizaciones de derechos humanos en este sentido, y que de la noche a la mañana hubiera reconocido, de alguna manera, que dichas denuncias eran veraces.", "Los sistemas judiciales locales y el impacto del Estatuto de Roma", Conferencia Consultiva de Justicia Penal Internacional, Septiembre 11 de 2009, Naciones Unidas, Nueva York, Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas.

258 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Comunicado de prensa N° 21/08, CIDH expresa preocupación por extradición de paramilitares colombianos, 14 de mayo de 2008.

259 *Ibid.*

260 Annual report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/12/49, 30 July 2009, párr. 9.

cidos a través de las confesiones de los desmovilizados. La forma como se cometieron delitos como el reclutamiento, la ubicación cadáveres de personas desaparecidas, la conformación de las estructuras paramilitares y la identidad de sus cómplices, no han sido debidamente investigadas, especialmente en los casos en los que se ven involucrados los más altos niveles del Gobierno, organismos de seguridad, así como algunos miembros del sector empresarial nacional e internacional²⁶¹.

5.3. Medidas para la verdad, la justicia y la reparación

“Cada persona tiene su versión de la verdad. El gobierno tiene su verdad, los grupos paramilitares tienen su verdad, los grupos de guerrilla tienen su verdad, y también muchas veces es según su conveniencia. Cuando la verdad va relacionada a la justicia es más difícil”²⁶².

A pesar de que la Corte Constitucional estableció los parámetros para garantizar los derechos de las víctimas en el proceso de aplicación de la ley de “justicia y paz”, el Gobierno ha intentado, por vía de decretos reglamentarios y en la práctica, restringir el alcance del fallo de la Corte²⁶³.

En materia de justicia, el Gobierno ha burlado los derechos de las víctimas al extraditar a Estados Unidos a varios de los altos mandos paramilitares impidiendo el avance de las investigaciones y su juzgamiento. Aunque se anunció que la extradición no obstaculizaría los procesos judiciales que tienen estos paramilitares en el país, no podrán comparecer a la justicia colombiana hasta tanto no culmine su proceso de condena en Estados Unidos. Hasta el momento, sólo dos de ellos han sido condenados a más de 20 años de prisión. Esto podría significar que las víctimas tendrán que esperar largo tiempo y que las primeras audiencias con los fiscales colombianos se llevarán en un tiempo indeterminado. En este sentido, es imperativo que los mecanismos de cooperación judicial se implementen de manera efectiva para que los procesos en el marco de la Ley de Justicia y Paz avancen satisfactoriamente.

La falta de garantías para las víctimas ha constituido otro obstáculo para el accionar de la justicia. Algunos jóvenes que fueron vinculados a grupos armados cuando eran niños o niñas han expresado temor por la posibilidad de participar en nuevas investigaciones para esclarecer

²⁶¹ Al respecto ver la Serie de Boletines sobre la Aplicación de la Ley 975 y los Derechos de las Víctimas, en: www.coljuristas.org

²⁶² COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Junio 2008): Conversatorio con jóvenes. Palabras de un joven desvinculado, Bogotá.

²⁶³ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-370 de mayo de 2006.

el delito de reclutamiento del que fueron víctimas, ya que no consideran que existan garantías suficientes de seguridad para llevar a cabo estas investigaciones y como consecuencia de ello, en principio, no estarían dispuestos a participar en los procesos adelantados contra los comandantes de los grupos paramilitares o eventualmente contra miembros de la guerrilla por las consecuencias que esto podría traerles. Sus temores tienen fundamento: en Valle del Cauca se conoció del desplazamiento de 32 adolescentes desmovilizados que decidieron abandonar sus comunidades por la situación de riesgo que percibían²⁶⁴. Asimismo, a miembros de las AUC se les atribuyó la masacre de 12 jóvenes afrocolombianos desmovilizados del Bloque Calima en Buenaventura²⁶⁵. *"Mientras persistan los contextos de ilegalidad y la presencia de facciones armadas, será muy difícil que las víctimas se integren al proceso y participen activamente. No hay que perder de vista que a los grupos al margen de la ley, propician y hacen prosperar ambientes de impunidad. Bajo estas circunstancias, los ciudadanos que han sido afectados por la violencia paramilitar prefieren conservar el anonimato, por el temor a represalias"*²⁶⁶.

Por otro lado, observaron que la entrega de información a las autoridades judiciales respecto de los responsables de la vinculación al grupo genera no solo riesgos y amenazas sino también dificultades para su situación jurídica individual, en especial a partir de la vigencia de la Ley de Infancia y Adolescencia. En efecto, antiguamente en los procesos adelantados a niños y niñas desvinculados se ordenaba la preclusión con lo cual se entendía cerrado el capítulo de su vida al interior del grupo en términos judiciales.

No obstante, a partir de la Ley de Infancia y Adolescencia dicho tratamiento es sustancialmente diferente ya que, el artículo 175 establece que el principio de oportunidad no se aplicará a aquellos niños niñas y jóvenes que hayan sido partícipes en violaciones graves a los derechos humanos. Así, de los interrogatorios a los responsables o de testimonios de terceros podrían surgir hechos que afecten su situación jurídica en vez de contribuir a determinar la responsabilidad del victimario por la vinculación. *"Qué tal que uno vaya al juicio y le saquen otras cosas, es echarse el puñal uno mismo"*²⁶⁷.

Lo anterior evidencia unas de las dificultades más grandes al momento de orientar acciones para esclarecer este delito e impone el reto de pensar en estrategias de investigación judicial

²⁶⁴ Información entregada por Unicef – Julio de 2007.

²⁶⁵ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (20 de enero de 2006): Op. cit. Párrafo 62.

²⁶⁶ MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA (Febrero 2009): Op. cit. Pp.12.

²⁶⁷ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (Junio 2008): Conversatorio con jóvenes. Palabras de un joven desvinculado, Bogotá.

distintas a la declaración del niño o la niña desvinculada, o su participación directa en los procesos. La búsqueda de escenarios confiables y garantías de seguridad se presenta como uno de los principales desafíos ante la constante vigilancia de los grupos armados a los testigos, víctimas y niños y jóvenes desvinculados de sus filas.

Adicionalmente, la obligación de investigar los hechos de vinculación de niños y niñas por parte de todos los grupos que toman parte en las hostilidades ha sido abiertamente desconocida por el Estado limitando seriamente el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de este delito. Desde que se empezaron a tener noticias de los primeros casos públicos de vinculación y el ICBF empezó a recibir los primeros niños y niñas desvinculados, los operadores de justicia no han asumido con seriedad y eficacia la investigación de estos hechos así como tampoco las autoridades responsables de la atención y protección de estos niños han sido coherentes con la obligación de poner en conocimiento de la administración de justicia estas situaciones. Las autoridades desconocen la condición de víctimas de estos NNA, privilegiando su condición de victimarios con lo cual se resta importancia a impulsar investigaciones judiciales que determinen la responsabilidad de los reclutadores.

Por último, los actos de violencia sexual ocurridos contra las niñas y adolescentes en el contexto del conflicto armado continúan presentando un alto nivel de impunidad. En las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz se han mencionado 15 casos de violencia sexual, de los cuales sólo 4 han sido confesados²⁶⁸.

En materia de verdad, si bien las audiencias libres han permitido esclarecer algunos aspectos relacionados con el accionar paramilitar en materia de reclutamiento, aún sigue siendo un tema bastante invisibilizado en el que no se tiene ni siquiera un número aproximado del universo de víctimas. Resulta fundamental ubicar un número importante de estos NNA, a través de una búsqueda activa, asegurando a su vez que puedan tener acceso a los servicios de Estado a los que tienen derecho. Ese debe ser el compromiso del Alto Consejero para la Reintegración. Un proceso de transición hacia la paz debería iniciar con el esclarecimiento de la verdad y la ubicación y reconocimiento de todas las víctimas, para posteriormente definir sus necesidades y la forma como el Estado garantizará la justicia y la reparación. Los procesos adelantados en Colombia han operado al revés: primero se saca la ley y los decretos de reparación y luego se hace una comisión histórica. Siendo así el orden de las cosas, de qué sirve la comisión histórica si sus conclusiones no tienen incidencia en materia de justicia y reparación?

268 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (28 de febrero de 2008): Op. cit. Párrafo 6o.

En materia de reparación, el Gobierno ha tomado varias medidas contrarias a sus obligaciones de garantizar el derecho de las víctimas a una reparación integral. El Decreto 1290 de 22 de abril de 2008 crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Este instrumento excluye a las víctimas del Estado dentro de los beneficiarios del programa²⁶⁹, no contempla el derecho de las víctimas a una reparación integral²⁷⁰, no incluye a las víctimas futuras²⁷¹, desconoce el deber del Estado de garantizar el acceso a la reparación sino que basa la reparación sobre la solidaridad, y prevé solamente una indemnización precaria que se confunde con ayudas y asistencias humanitarias y que además suponen plazos extremadamente largos para ejecutar las indemnizaciones. La desafortunada posición plasmada en este Decreto está defendida por el Gobierno en el marco del debate sobre el Proyecto de Ley de Víctimas impulsado por varios parlamentarios que buscan crear una política que cobije a las víctimas.

En lo que respecta a indemnización la Procuraduría General de la Nación por su parte promulgó en junio de 2008 la Directiva 013/08 *“por la cual se imparten instrucciones a las entidades y servidores públicos con responsabilidades directas e indirectas en los procesos de reinserción y reintegración de la población desmovilizada, específicamente en el cumplimiento de los compromisos de beneficios socioeconómicos que dispone la ley para la misma”*²⁷². Esta directiva insta *“a las autoridades competentes para que realicen las gestiones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes obtengan los beneficios socioeconómicos a los que tienen derecho. Además, requiere al Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que le informe sobre la entrega de niños y niñas que se desmovilizaron en el marco del proceso de negociación con el gobierno nacional”*²⁷³.

²⁶⁹ Decreto presidencial 1290 del 22 de abril de 2008. Artículo 2 *“(…) Violaciones no incluidas. Los delitos contra la propiedad, el patrimonio y las violaciones colectivas o atribuibles a agentes del Estado, no están incluidos en el presente programa y serán regulados por las normas aplicables en estas materias”*.

²⁷⁰ La reparación integral supone que se cumplan efectivamente los principios de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas de internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Principio 18, ONU AG Res. 60/147 de diciembre de 2005)

²⁷¹ El decreto establece un marco temporal que solo cubrirá a aquellas víctimas que hayan sufrido violaciones a sus derechos fundamentales con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto, esta disposición da la impresión de que el conflicto armado hubiese terminado y que a partir de dicha fecha no existirán mas reparaciones por actos de grupos armados. Así, las víctimas de los actos de los grupos aun no desmovilizados o que actuando bajo otras denominaciones cometan violaciones con posterioridad a esta fecha no estaría cubierto, así como tampoco las infracciones al DIH por parte de grupos guerrilleros a partir de dicha fecha dejando desprotegidas por esta vía de reparación a las víctimas de estos grupos.

²⁷² PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Directiva 013/08.

²⁷³ DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES (2008): *Ruta ético jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley*. Bogotá.

Por último, vale la pena llamar la atención sobre el caso de los NNA vinculados a los grupos “emergentes” o de violencia armada organizada, actualmente excluidos de cualquier posibilidad de acceso a la verdad, justicia y reparación. La legislación y política de atención presente diferencia los niños desvinculados de los grupos armados de los de las bandas delincuenciales o criminales. Los primeros son definidos por su pertenencia a un ejército irregular o grupo armado. Los segundos son definidos como aquéllos que han cometido una infracción o están en “conflicto con la ley penal”. Los niños y niñas infractores²⁷⁴, cuando son definidos (socialmente) son tratados como miembros de grupos de delincuencia y allí, aunque existen políticas de atención, éstas revelan ciertas diferencias con respecto del primer grupo, en materia de planes y acciones de reparación, y adolecen de estrategias de prevención, conforme a los parámetros internacionalmente reconocidos, y el régimen al que están sometidos es más cercano al de delincuentes adultos que otra cosa. *“Esta sutil distinción entre grupo armado ilegal y organización criminal implica un riesgo para la protección de los adolescentes que se desvinculen de éstas, en tanto, por mandato de la normatividad vigente y de la operación judicial, no tendrían la prerrogativa de ser tratados por el Estado como víctimas de la violencia política, ni como víctimas del delito de reclutamiento ilícito, restringido exclusivamente para grupos armados al margen de la ley, y su destino desde la ruta jurídica definida por las normas citadas sería como sujetos del sistema de responsabilidad penal juvenil, y no como adolescentes víctimas a quienes se les aplica el principio de oportunidad”*²⁷⁵.

De otra parte, el hecho de que a las bandas delincuenciales o grupos de violencia armada organizada no pueda perseguírseles penalmente por reclutamiento ilícito de personas menores de 18 años, obstaculiza el juzgamiento de este delito, y perpetúa este crimen de guerra que no encuentra ningún factor de disuasión. Más aún, esta condición ha sido utilizada por los grupos paramilitares, quienes al ser considerados como “grupos emergentes” adquieren un carácter de banda delincuencial y no de grupo organizado al margen de la ley. Está claro entonces que si las diversas políticas sectoriales y poblacionales no se redefinen para que la condición del niño o niña prime sobre el tipo de grupo armado al que pertenezca (situación), los ciclos de la presencia de niños y niñas en grupos armados y grupos de delincuencia se repetirán y retroalimentarán mutuamente. Pero especialmente, se hace necesario y urgente que se establezca y apliquen políticas claras a nivel nacional y regional en materia de prevención.

²⁷⁴ La nueva ley de Infancia habla de la responsabilidad penal juvenil y más concretamente de adolescentes.

²⁷⁵ COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LOS GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY “Segundo Informe de gestión de la Secretaría Técnica. Diciembre de 2008. Pág. 7.

90

Informe alterno al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados



COALICO

6. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONALES

6.1. Proceso de aceptación e implementación del mecanismo de la Resolución 1612

“La Resolución 1612 busca ir más allá de las palabras y pasar a una acción concreta”²⁷⁶

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha emitido desde finales la década del 1990 una serie de disposiciones, normas y principios que buscan poner fin a la transgresión de los derechos de las personas menores de 18 años en medio de la guerra²⁷⁷. La Resolución 1612 adoptada en junio de 2005 insta formalmente un mecanismo dirigido a supervisar, monitorear y documentar las principales violaciones de los derechos de los NNA en situaciones de conflictos armados, para obtener información oportuna a favor de su futura protección (MRM). Su aplicación insta a varios países miembros de la ONU. Algunos ya hacían parte de la agenda del Consejo de Seguridad como Costa de Marfil, Burundi, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán, mientras que otros estaban fuera del orden del día como Birmania, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Uganda y Colombia. Para el primer grupo de países la Resolución se aplica de forma automática (anexo I de la resolución), mientras que para los segundos requiere de aprobación expresa por parte de los Estados (anexo II de la Resolución).

Es así como el Secretario General de Naciones Unidas invitó a los países del anexo II a aceptar el mecanismo con el fin de “asegurar el cumplimiento de las normas locales e internacionales que

²⁷⁶ Declaración de la Representante especial del Secretario general sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, Sra. Radikha Coomaraswamy en el debate abierto del Consejo de Seguridad de 2006.

²⁷⁷ Resoluciones: 1261 de agosto 25 de 1999; 1314 de agosto 11 de 2000; 1379 de noviembre 20 de 2001; 1460 de enero 30 de 2003; 1539 de abril 22 de 2004; 1612 de 2005.

*protegen a los niños afectados por los conflictos armados*²⁷⁸. No obstante, varios retrasaron su aceptación argumentando diversas preocupaciones frente al mismo. Según se puso de presente en el proceso de implementación:

*“Colombia y Filipinas tienden a ver el grupo de trabajo como una puerta de entrada a la agenda del Consejo de Seguridad. Se necesita un fuerte trabajo para convencerlos que la cooperación con la Representante Especial del Secretario General (SRSG) en implementar un equipo especial de monitoreo así como el grupo de trabajo servirá para sus propios intereses, que el equipo especial y el grupo de trabajo deben trabajar en consulta cerca de ellos, y que el enfoque recaerá sobre el uso y el reclutamiento de niños soldados. Para ello, se anima a los gobiernos de esos países a recibir la visita de la SRSG”*²⁷⁹.

Consientes de la importancia de un mecanismo como el que supone la Resolución 1612 para avanzar en la protección de NNA en conflictos armados, las organizaciones de derechos humanos y algunas agencias de Naciones Unidas, emprendieron desde su promulgación un proceso de difusión y apropiación de este instrumento con el fin de preparar el terreno para la aceptación del MRM por parte del Estado Colombiano. Del mismo modo, con el apoyo de organizaciones internacionales como la Coalición Internacional para Acabar el Uso de Niños Soldados y Watchlist on Children and Armed Conflict impulsaron una estrategia de incidencia ante el cuerpo diplomático y organismos internacionales, con el objeto de difundir el contenido de la Resolución y sentar las bases para la conformación de un eventual Equipo Especial de Vigilancia y Presentación de Informes o Equipo Especial de País (CTF) en Colombia. Fue así como estas entidades constituyeron un grupo de trabajo luego de que en noviembre de 2005 UNICEF informara oficialmente la aprobación de la Resolución.

La labor coordinada que realizó este grupo de trabajo representó un avance importante hacia la ampliación del marco de protección de la niñez víctima del conflicto armado y la consecución de importantes logros como los que se resaltan a continuación:

²⁷⁸ V Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, documento de Naciones Unidas A/59/695-S/2005/72 del 9 de febrero de 2005.

²⁷⁹ Presentación de la Delegación de Francia ante las Naciones Unidas durante la conferencia de Wilton Park sobre niñez y conflicto armado, “Logros y proyecciones del grupo de trabajo del Consejo de Seguridad sobre niñez y conflicto armado”, 20 de marzo de 2007, (traducción no oficial).

- Apertura de canales de comunicación e incidencia para que el tema fuera incorporado en las agendas de las agencias de Naciones Unidas en Colombia como un tema prioritario.
- Análisis de las seis categorías empleadas por el Secretario General en sus informes, de acuerdo con el contexto y las violaciones más significativas de los derechos de la niñez en Colombia.
- Elaboración de una guía de recolección de información que involucra a diversos actores locales, regionales y nacionales.
- Ampliación de los esfuerzos dirigidos a la recolección, búsqueda y análisis de información sobre la situación de la niñez víctima del conflicto armado.
- Consolidación de información relevante en cada una de las categorías del informe del Secretario General.
- Análisis de la información de manera colectiva, proponiendo acciones conjuntas y emitiendo recomendaciones dirigidas a las entidades estatales responsables del tema y la comunidad internacional entre otros actores relevantes.
- Envío periódico de información al Consejo de Seguridad como insumo que permite evaluar de manera objetiva la evolución de la situación al interior de los Estados.
- Realización de misiones de verificación sobre la situación de derechos humanos y derecho humanitario de los NNA en cinco regiones de Colombia.
- Iniciación de un proceso de sensibilización y formación con organizaciones locales en varios departamentos.
- Cualificación de la coordinación entre las agencias de Naciones Unidas, la sociedad civil y el Ministerio Público.

Por su parte, la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, realizó dos visitas a Colombia con el objeto de iniciar el diálogo con el gobierno alrededor de la implementación del MRM y sostener reuniones con funcionarios estatales, niños y niñas víctimas del conflicto armado, Agencias del Sistema de Naciones Unidas, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil para conocer de cerca la situación padecida por el país.

Pese a la fuerte incidencia política realizada tanto en los ámbitos nacional como internacional, el proceso iniciado desde 2005 en Colombia enfrentó momentos delicados producto de la reticencia que el gobierno mantuvo a aceptar el MRM, en razón a prevenciones relacionadas con los siguientes supuestos:

- 1 – La entrada en el MRM eleva la atención del CS hacia Colombia en el caso concreto de los niños y niñas afectados por los conflictos armados, lo cual exige mayores esfuerzos del Estado para dar respuesta a la situación.
- 2 – La aceptación del mecanismo implica reconocer que en Colombia existe un conflicto armado interno que afecta gravemente a la niñez por causa de las acciones de todos los grupos armados que toman parte en las hostilidades.
- 3 – Al establecer un MRM indiferenciado para las situaciones del anexo I y el anexo II se están “equiparando las situaciones de los niños y niñas en dichas situaciones de conflicto armado”, con lo cual Colombia aparece al lado de países como Sudan, o República Democrática del Congo, como uno de los Estados donde más se vinculan niños y niñas a los grupos armados, lo cual no corresponde con la lectura oficial de la situación.
- 4 – La información sobre Colombia incluida en el último informe del Secretario General evidencia una vez más la gravedad de las violaciones cometidas en perjuicio de los niños y niñas, no solo por las guerrillas y los grupos paramilitares sino también por la fuerza pública la cual, es identificada como una parte del conflicto responsable de vinculación indirecta de niños y niñas.
- 5 – La mención en el Informe del Secretario General sobre la persistencia de vinculación de niños y niñas por parte de grupos paramilitares y “nuevos grupos” es adversa a la campaña del gobierno para demostrar que el paramilitarismo ha sido desmantelado en Colombia. Al respecto el gobierno expresó en el debate abierto del 12 de febrero de 2008 que *“De los 11 grupos de autodefensa enlistados en el anexo II del informe presentado en febrero de 2005, solo aparecen dos grupos en el séptimo informe y éstos se encuentran hoy prácticamente desmantelados. Con la desaparición de las estructuras armadas de autodefensa ha cesado el peligro de reclutamiento forzado ejercicio por las mismas”* ²⁸⁰.
- 6 – Por otro lado, la aceptación del MRM abre la puerta para que el grupo de trabajo del CS pueda adoptar medidas frente a la situación de Colombia y su “tool-kit”, tales como: *“prohibición de exportar o suministrar armas pequeñas y armas ligeras y otros pertrechos y asistencia militares, contra las partes en situaciones de conflicto armado que se hallen sometidas a su consideración*

²⁸⁰ Debate abierto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 12 de febrero de 2008. Nueva York.

constituyan una contravención del derecho internacional aplicable en relación con los derechos y la protección de los niños en un conflicto armado”²⁸¹.

- 7 – El constante llamado de los estados miembros, la SRSO, ONG internacionales y el propio CS a “emitir respuestas concretas frente a las partes incluidas en la lista del Secretario General que reiteradamente han sido señaladas como responsables del delito de reclutamiento de niños y niñas”, han generado preocupación por la posibilidad que esto representa de remitir situaciones a la Corte Penal Internacional, lo cual en el caso de Colombia tendrá consecuencias una vez sea levantada la reserva de siete años al Estatuto de Roma.

Sin embargo, a pesar de los temores y prevenciones descritas, el gobierno colombiano aceptó formalmente la Resolución 1612 en diciembre de 2008. Así, desde enero de 2009 funciona en el país un CTF conformado por agencias de Naciones Unidas con presencia en Colombia; tres delegados de las ONG y la Defensoría del Pueblo. Como resultado de la aplicación de la Resolución 1612 en Colombia, el Secretario General de Naciones Unidas presentó su primer informe sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, el 28 de agosto de 2009.

6.2. La cooperación internacional con relación a la aplicación del Protocolo Facultativo

“Llamamos a la comunidad internacional en general y a los países amigos en particular a que continúen apoyando el proceso y llamen a las partes a retomar el diálogo para la solución política negociada al conflicto, garantizando la participación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, al igual que la del conjunto de la sociedad de modo que las causas estructurales de la violencia se empiecen a resolver”²⁸².

La comunidad internacional ha tenido un papel fundamental dentro de la evolución y desarrollo del conflicto armado colombiano. Actores estatales como Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Venezuela; y Organizaciones internacionales como Comunidad Andina (CAN), Grupo de Río, Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los

²⁸¹ Resolución 1612 del Consejo de Seguridad.

²⁸² COORDINACIÓN COLOMBIA-EUROPA-ESTADOS UNIDOS (diciembre de 2007): Declaración de la Asamblea Nacional. Bogotá.

Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fondo Monetario Internacional (FMI), han desempeñado labores importantes frente al conflicto armado y su impacto sobre la sociedad civil.

Acuerdos humanitarios y de paz; intermediaciones con grupos armados; apoyo a procesos de reinserción y desmovilización; ayuda a las comunidades víctimas; lucha contra el narcotráfico; medidas a favor de la verdad, justicia y reparación; financiación a la política de seguridad democrática; son algunas de las tareas emprendidas por los Estados, organizaciones internacionales y organismos de cooperación internacional en el marco del conflicto colombiano. Algunos compromisos concretos que hoy en día adquieren relevancia son: la presencia de la ONU en el país²⁸³ con oficinas como UNICEF, OACNUDH, ACNUR, OCHA, UNIFEM; los laboratorios de paz como el proyecto bandera de la Unión Europea²⁸⁴; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP de la OEA; el apoyo de estados europeos con relación a la atención a víctimas, el proceso de reinserción, y la consolidación de una comisión nacional de reparación; el papel de la cooperación financiada a través de numerosas ONG internacionales en cuanto a la restitución de derechos de la sociedad afectada por el conflicto armado en materia de seguridad alimentaria, salud, vivienda y educación; y el apoyo estadounidense a la estrategia militar del actual gobierno fundamentalmente a través del Plan Colombia. Dentro de estas intervenciones unas han sido más afortunadas que otras respecto al propósito de aportar a la construcción de la paz en Colombia. Por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil valoran la gestión y respaldo obtenido por la cooperación internacional proveniente de la ONU; no obstante otras iniciativas como el Plan Colombia y los Laboratorios de Paz son altamente cuestionadas en términos de sus verdaderos intereses y efectos.

Con relación a los NNA víctimas de los grupos armados sobresale el papel que han jugado algunos estados como Canadá, Holanda, Noruega, Reino Unido y Suecia, y organizaciones de cooperación internacional como la Comisión Europea (fundamentalmente a través de UNICEF, OACNUDH y OIM), y la agencia estadounidense de desarrollo USAID. Los anteriores han estado directamente involucrados en los procesos de resocialización de NNA víctimas y de fortalecimiento e implementación de una política pública en materia de protección y de preven-

²⁸³ Colombia es uno de los Estados que cuenta con la mayor presencia de Agencias de la ONU en el mundo. Son 24 entre Programas, Fondos, Comisiones regionales, Agencias especializadas, Departamentos, Oficinas de la Secretaría, Programas inter-agenciales y Organismos aliados.

²⁸⁴ Los Laboratorios de Paz son financiados desde 2002 por la Unión Europea en Santander, César, Bolívar, Antioquia, Norte Santander, Nariño, Cauca, Meta, Sucre y Bolívar con finalización el 2010.

ción. Para ello han prestado asesoría técnica y otros apoyos a favor del fortalecimiento de la capacidad en el país para implementar políticas públicas, planes y programas garantes de los derechos de la niñez afectada por el conflicto armado.

No obstante, es claro que esta cooperación a favor de los NNA víctimas se enmarca dentro de la política de promoción de los objetivos del milenio, actuando desde un enfoque humanitario y de desarrollo que muchas veces se libra de responsabilidades políticas. En otras palabras, la cooperación no debate temáticas que podrían ser cuestionables desde el plano político como los efectos de la seguridad democrática en materia de reclutamiento infantil, o la exigencia plena de la verdad frente a la no entrega de personas menores de 18 años por los grupos paramilitares. En este sentido se advierte que la cooperación internacional ha perdido en los últimos años poder de incidencia política, probablemente producto de la pérdida de autonomía que ha sufrido en el marco del actual gobierno. Adicionalmente, la sociedad civil cuestiona el apoyo de organizaciones como la OIM o USAID, justamente por evidenciar una postura política débil que no dimensiona en su justa medida los costos y responsabilidades de las acciones que afirma, al apoyar algunos programas estatales que a su parecer tienen una lectura parcial del contexto. Un buen ejemplo al respecto es la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos organizados al margen de la ley, actualmente financiada por UNICEF, USAID y OIM, cuyo principio rector desconoce la responsabilidad de las fuerzas militares en la vinculación de personas menores de 18 años en el conflicto armado. Una omisión que discute la sociedad civil y que de plano omite parte de la realidad.

También se observa que la financiación de la política nacional en materia tanto de protección como de prevención de la vinculación de NNA al conflicto armado se sustenta de manera esencial en la cooperación internacional, fundamentalmente en la asistencia brindada por UNICEF, OIM y USAID. Al observar los presupuestos del Programa de atención del ICBF y de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial se evidencia que los recursos provienen en su mayor parte de la cooperación internacional, siendo mínimo el aporte estatal en la materia. Con respecto al programa de atención del ICBF se advierte que mientras la institución invirtió entre 2005 y 2008 un total de 19 mil millones de pesos con cargo a su presupuesto, la cooperación internacional para ese mismo periodo ascendió a 31 mil millones de pesos otorgados por

OIM, UNICEF, Unión Europea, OIT y Comunidad Autónoma de Madrid²⁸⁵; es decir el 62% del total invertido en el programa. Por su parte, el 78% del presupuesto de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para 2008 y 2009 provino de OIM, UNICEF y ACDI, siendo tan solo un 22% el aporte estatal a través del ICBF²⁸⁶.

Preocupa entonces que en la cooperación recaiga una responsabilidad tan importante, cuando su fin último debiera ser la complementariedad. Una complementariedad que contribuyera a los esfuerzos de un Estado que conoce sus obligaciones y que responde cabalmente a ellas. Caso contrario es lo que sucede actualmente, donde pareciera que la cooperación internacional otorgada al Estado y a la sociedad civil terminara suplantando muchas de las labores que por Ley le corresponde al Estado garantizar.

Por último, vale la pena hacer mención a la focalización de recursos. En aras de cumplir los preceptos contenidos en la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo²⁸⁷ los recursos de cooperación internacional están siendo dirigidos a través del presupuesto nacional colombiano. Es por ello que en el 2005, el gobierno expidió el Decreto 2467 por medio del cual dio origen a la nueva entidad llamada Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional incorporando en ella a las antiguas Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversión para la Paz. No obstante, esta nueva estrategia que apunta a la 'eficacia en la ayuda' no es percibida positivamente por todos *"En realidad, esta forma de cooperación se dirige, indirectamente, a la guerra. Para explicar esta afirmación, podemos recurrir a un ejemplo sencillo. Si un Estado tiene un presupuesto de 100 y gasta 6 para financiar la guerra, estos 6 se desvían para financiar gastos sociales como por ejemplo salud, educación y saneamiento ambiental. Si la cooperación internacional se ocupa de financiar parte de este gasto social, que no puede ser atendido a cabalidad porque parte del presupuesto nacional se destina a la guerra, entonces indirectamente se está financiando la guerra. Es lo que está pasando con Colombia"*²⁸⁸.

²⁸⁵ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "Respuesta a derecho de petición No. 1758142020" de 30 de septiembre de 2009.

²⁸⁶ COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LOS GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY "Respuesta a derecho de petición interpuesto por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y radicado el 8 de septiembre de 2009". 25 de septiembre de 2009.

²⁸⁷ ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (2005): *Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo*, París.

²⁸⁸ DAVIDE BOCCHI (2009): "Análisis de la política exterior de la Unión Europea en el período 2002-2008 hacia la solución negociada del conflicto colombiano". Consulte: Biblioteca Universidad Javeriana.

El Plan Colombia como ejemplo emblemático de acciones en contravía de los derechos humanos

“Yo en mi finca tenía 24 hectáreas de coca. Ahora ya no tengo una sola mata de coca porque firmé un pacto con el gobierno de erradicar lo que tenía. Metí todos mis recursos en 16 hectáreas de palmito y me las fumigaron” “Nos dan una mata para sembrar en nuestra finca y al mes la están fumigando. ¿Qué quiere el gobierno colombiano y el norteamericano de nuestro Putumayo? Un desierto”²⁸⁹.

El Plan Colombia ha sido la estrategia fundamental mediante la cual Estados Unidos ha apoyado al país en un doble propósito: la lucha contra el narcotráfico, y la lucha contra el terrorismo²⁹⁰. “Para tal fin, Estados Unidos ha gastado más de \$6 miles de millones de dólares desde 2000, cerca del 80% en las fuerzas armadas colombianas”²⁹¹ y el 20% restante en programas de ayuda económica y social (paz, protección de derechos humanos, desplazamiento forzado, seguridad alimentaria, entre otras).

Hoy, nueve años después de su inicio, resulta evidente su fracaso. Los resultados son contundentes. De acuerdo al informe mundial sobre las drogas de Naciones Unidas presentado en el 2008²⁹², pese a la lucha contra el narcotráfico realizada por los dos países, Estados Unidos ocupa el primer lugar como la nación que consume más estupefacientes en el mundo, y Colombia registra un incremento del 27% en los cultivos de uso ilícito para el 2007²⁹³, produciendo así el 55% de la cocaína que se consume en el planeta. En lo que compete a la lucha contra el terrorismo los resultados tampoco son alentadores: los grupos catalogados como terroristas subsisten, se prolonga el conflicto, y mutan y se multiplican las organizaciones y grupos armados, lo que evidencia las limitaciones de la estrategia militar. El plan no solo ha fracasado en términos

289 Testimonios comunidad del Putumayo. En: ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL ALTERNATIVA (MINGA) y CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO (CODHES) (Noviembre 2004): *Informe de la misión de observación sobre los efectos del Plan Colombia en los departamentos de Nariño y Putumayo*. Bogotá.

290 Inicialmente fue concebido como una estrategia de lucha contra el narcotráfico y posteriormente después del 11 de septiembre de 2001 involucró la lucha contra los tres grupos armados colombianos que entonces se encontraban en la “lista de terroristas”. El proyecto pasó a ser un proyecto contrainsurgente, llamado en el texto de la ley, “una campaña unificada en contra del narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional colombiana”. Luego en el 2005 se orienta a lo que llamaron la “seguridad hemisférica regional”.

291 Carta enviada por organizaciones norteamericanas al Presidente Barack Obama. Marzo 2009. Disponible en: http://www.ajpl.nu/radio/index.php?option=com_content&view=article&id=627:fin-al-plan-colombia-y-a-la-fracasada-sguerra-contra-las-drogass&catid=77:comunicados&Itemid=177

292 OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (2008): *Informe mundial sobre las drogas*. Véase en: http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_Spanish_web.pdf Pp. 17

293 En 2007, la superficie total de cultivo de coca en Bolivia, Colombia y el Perú aumentó en un 16% a 181.600 hectáreas. Véase: OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (2008): Op. Cit. Pp. 69

de obtener los propósitos planteados. Ha fracasado porque ha supuesto negativos efectos en materia de: violaciones a los derechos humanos; control militar de Estados Unidos en el territorio²⁹⁴; afectaciones ambientales en el agua, aire, plantas medicinales y cultivos de pan coger producto de las fumigaciones; riesgos para la salud y la seguridad alimentaria de comunidades campesinas e indígenas producto de la fumigación y la erradicación manual; frustrados pactos sociales de sustitución; y parálisis de la economía local *"...el plan ha sido un desperdicio de recursos. La cocaína que entra a Estados Unidos cuesta lo mismo que costaba hace ocho años, en algunos sitios es más económica y más fácil de conseguir. La aspersión aérea ha causado un desastre medioambiental y menoscabado la salud y cultivos de campesinos colombianos pobres, en tanto que la cantidad de hojas de coca cultivada se ha mantenido constante, lo que sugiere que el Plan Colombia tiene muy poco impacto con cualquier fluctuación del precio."*²⁹⁵.

Reconociendo los cortos alcances de esta política de lucha contra el terrorismo y contra las drogas, la Fase II del Plan Colombia instó a reducir el monto destinado a la asistencia militar, buscando fortalecer el aspecto social, lo que desencadenó una lógica perversa a favor de la llamada 'recuperación social del territorio'. Este nuevo enfoque fundamentado en la 'Doctrina de Acción Integral' supone acciones cívico militares y de inteligencia convenientes para los dos países, tras el propósito de, por un lado, garantizar la seguridad hemisférica de la región; y por el otro, recuperar social y militarmente el territorio²⁹⁶. En palabras del Ministerio de Defensa se entiende como *"un conjunto de principios que deben orientar la acción coordinada de la fuerza legítima con la acción social del Estado y la sociedad civil. El objetivo es ejecutar, en los próximos 3 años, recursos del sector defensa en proyectos de bienestar comunitario en zonas donde aun no ha llegado el resto del Estado y ya se encuentra la FP [Fuerza Pública]. Esta no reemplaza la acción social del Estado pero le permite al esfuerzo social ganar tiempo"*²⁹⁷.

La combinación de acciones militares y civiles dentro de una estrategia predominantemente bélica es un tema en el que las organizaciones colombianas de derechos humanos hemos mostrado un enfático desacuerdo por desconocer el principio de distinción entre civiles y comba-

²⁹⁴ Actualmente se está negociando la instalación de 7 bases militares estratégicas en Colombia. Eso más las 3 que ya ocupaban, daría un total de 10 instalaciones militares ocupadas y utilizadas por las Fuerzas armadas de Estados Unidos.

²⁹⁵ Carta enviada por organizaciones norteamericanas al Presidente Barack Obama. Marzo 2009. Disponible en: http://www.ajpl.nu/radio/index.php?option=com_content&view=article&id=627:fin-al-plan-colombia-y-a-la-fracasada-sguerra-contra-las-drogass&catid=77:comunicados&Itemid=177

²⁹⁶ Al respecto véase "La Acción Integral como estrategia de guerra – "365 días de trabajo que hacen la diferencia". 4 de julio de 2008. En: <http://elyacare.wordpress.com/2008/07/04/la-accion-integral-como-estrategia-de-guerra-365-dias-de-trabajo-que-hacen-la-diferencia/>

²⁹⁷ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (2007), *365 días de trabajo que hacen la diferencia. Informe anual Ministerio de Defensa. Julio 2006 – Julio 2007*, Bogotá, Pp. 2.

tientes, poner en riesgo la autonomía de las autoridades civiles afectando los principios básicos del Estado de Derecho, y someter la política social a los parámetros de la guerra. ¿Cómo atribuir a las fuerzas militares apoyadas por el Plan Colombia tareas en materia de política social y de derechos económicos, sociales y culturales que no les competen ni corresponden, cuando son ellas mismas quienes cuentan con el peor récord en abusos de derechos humanos en las Américas?.

De acuerdo a la declaración final de la asamblea nacional de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos de organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos (CCEEU) realizada en el mes de diciembre de 2007, la llamada 'recuperación social y militar del territorio' es la estrategia por medio de la cual se han justificado violaciones sistemáticas de derechos humanos, "falsos positivos" y persecución contra las organizaciones sociales opositoras al gobierno y duramente estigmatizadas y tildadas como terroristas. Asimismo, el esquema supone posible el hecho de que los recursos nacionales de la política social y los aportes de la cooperación internacional terminen alineados en función de la política de seguridad democrática y la estrategia de guerra. La Doctrina de Acción Integral configura el *"desmonte de los principios del Estado de Derecho y una renuncia a la búsqueda de la paz y la convivencia por la vía negociada"*²⁹⁸.

298 COORDINACIÓN COLOMBIA-EUROPA-ESTADOS UNIDOS (diciembre de 2007): Op. cit.

7. INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

“Es motivo de preocupación que algunos altos funcionarios gubernamentales hubieran continuado la práctica de estigmatizar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los sindicalistas, señalándolos de ser simpatizantes de grupos guerrilleros”²⁹⁹

Teniendo en cuenta que las políticas implementadas por el país en materia de prevención y de protección de la niñez con ocasión del conflicto armado no son suficientes ni adecuadas para responder a las demandas de esta población en inminente riesgo, la sociedad civil ha tomado la iniciativa buscando propiciar respuestas más apropiadas al contexto y a las necesidades. Esto ha implicado que la sociedad civil trascienda su papel de veedor social para ejecutar de manera protagónica acciones que colmen los vacíos que el Estado deja en el desamparo.

Justamente el descontento frente a la situación social y económica, la injusticia y la inequidad, es lo que ha motivado a la lucha social a expandirse en los últimos seis años y medio del gobierno de Uribe. De acuerdo a uno de los más recientes informes del CINEP³⁰⁰ se registra un crecimiento del movimiento sin precedentes, hasta alcanzar en el 2007 el mayor auge observado desde 1975. Lo anterior no deja de llamar la atención, más si tenemos en cuenta consideraciones como que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos a sindicalistas en el mundo, y que día a día defensoras y defensores de derechos humanos son objeto de amenazas, intimidaciones y persecución. La descalificación de la labor del movimiento social por parte del gobierno y las fuerzas militares ha sido constante y atrevida, motivando el pronunciamiento de la OACNUDH en varios comunicados publicados del 2008 y en su informe anual. Asimismo, la Relatora Especial de Naciones Unidas para defensores de derechos humanos, Margaret Zekaggya, en la declaración de septiembre de 2009 fruto de su visita al país afirmó que *“Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatiza-*

²⁹⁹ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (19 de febrero de 2009): Op. cit. Párrafo 75.

³⁰⁰ CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR CINEP (junio 2009): *La protesta social 2002-2008: en cuestión las políticas públicas de Uribe Vélez*. Bogotá.

*ción y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno*³⁰¹. No obstante, la lucha social persiste y se fortalece a favor del ejercicio y reivindicación de los derechos de las poblaciones más vulnerables y a favor de la finalización del conflicto armado.

*"Los sectores sociales que se han expresado en el escenario público durante este periodo comprenden un amplio número de actores que han venido cambiando no sólo por dinámicas relacionadas con políticas neoliberales y la violación de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, culturales y de tercera generación, sino también por el desplazamiento parcial del escenario político nacional de las organizaciones sindicales (históricamente se habían caracterizado por ser el actor principal en las protestas sociales) y por la emergencia de nuevos actores: indígenas, afrocolombianos, mujeres, población LGTB, estudiantes, ONG de Derechos Humanos, teniendo en muchos casos como grupo social subyacente a los jóvenes. Así mismo, y más allá de la inserción de nuevos actores que ganan protagonismo en la protesta, también se hizo presente un cambio en el elemento detonante en gran parte de estas protestas sociales y fue la guerra, la fatiga generalizada y el odio que despertó la prolongación del conflicto armado interno"*³⁰².

Dentro de estos actores que entraron a escena, la emergencia de los NNA inmersos en el conflicto armado ha motivado a ONG, iglesias, universidades, colegios, sindicatos y otras instancias, a desempeñar labores a favor de su protección y cuidado. Su papel ha sido fundamental en tareas como:

- El reconocimiento de la vinculación al conflicto armado como una 'situación socialmente problemática'³⁰³ que merece la atención del Estado, la sociedad civil y la familia.
- El posicionamiento del tema en la agenda pública exigiendo acciones de protección y prevención.
- La incidencia frente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en aras de que velen por el respeto de los derechos humanos de los NNA de acuerdo a los estándares internacionales y el derecho internacional humanitario.

301 ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ "No más interceptaciones ni señalamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos y paz". Bogotá, 22 de septiembre de 2009.

302 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR CINEP (junio 2009): Op. cit. Pp. 8.

303 Las situaciones socialmente problemáticas se conciben como "aquellas en las cuales la sociedad de manera mayoritaria percibe un problema social como relevante y considera que el régimen político debe entrar a enfrentarlo a través de políticas públicas". Vargas Velásquez, Alejo (1999): *El estado y las políticas públicas*. Almuzena editores. Bogotá. Pp. 58.

- El desarrollo de mecanismos de protección de NNA en situaciones de alto riesgo y de inminente peligro frente a grupos armados.
- El desarrollo de mecanismos de prevención a través de programas que reivindican sus derechos a la educación, protección y uso creativo del tiempo libre.

Son muchas las experiencias sociales exitosas que, pese a los señalamientos y estigmatizaciones, resisten buscando alternativas integrales que aminoren el impacto del conflicto armado en NNA. He aquí algunos ejemplos emblemáticos con relación a los temas tratados a lo largo de este informe.

7.1. En materia de prevención

Internados escolares del bajo Putumayo

Los internados escolares fueron una estrategia de protección creada en el 2007 por educadores y padres de familia de municipios del bajo Putumayo, para proteger a decenas de NNA frente a tres graves problemas: 1) la crisis alimentaria fruto de las fumigaciones y de la acción de erradicadores manuales de la coca que literalmente “arrasaban” con los cultivos de pancoger; 2) la inasistencia de los NNA a los centros educativos; y 3) el riesgo de vinculación a grupos armados que asediaban y hostigaban a los NNA en sus casas siendo “*literalmente arrancados de sus familias*”³⁰⁴ y en los caminos que unían a sus viviendas con las escuelas.

La respuesta entonces supuso que las familias enviaran a sus hijos a las instalaciones escolares que fueron “adecuadas” como espacios de internado, para que allí pudieran suplir la falta de alimentos y de protección ante los grupos armados. En abril de 2008 se notificó la existencia de 4 internados que agrupaban a un número cercano a 214 NNA de edades entre 10 y 17 años.

Estos internados funcionaron por más de dos años en condiciones que no eran las más adecuadas. Los salones de clase cumplían su cometido en el día y en la noche se convertían en dormitorios. No había suficientes colchones, los elementos de aseo y cocina eran insuficientes y

³⁰⁴ Testimonio de un profesor. Recogido en la Misión de acompañamiento a las comunidades y procesos sociales del bajo putumayo realizada por más de 14 organizaciones nacionales e internacionales en abril de 2008.

muchos NNA requerían de atención médica. Los profesores planteaban la necesidad de recibir formación en el área psicosocial para animar a los NNA ahora tristes de permanecer distanciados de sus padres, y para tratar los traumas que muchos padecían por ser víctimas de la violencia. Adicionalmente, tenían serios problemas para cubrir los gastos de su funcionamiento. Los profesores ponían dinero de su bolsillo pues la secretaria de educación solo enviaba \$1.500 pesos al día por niño (aproximadamente U\$0,80). Pese a todos estos obstáculos, los internados fueron una estrategia efectiva que permitió garantizar la seguridad alimentaria, la permanencia en la Escuela y la protección de muchos NNA del Putumayo ante los grupos armados que los asediaban intentando vincularlos a sus filas.

Los internados se han ido acabando a lo largo de 2009 por varias razones: la ausencia de ayuda estatal ha hecho insostenible la estrategia, el hacinamiento ha llegado a niveles preocupantes, y han sido atacados por los grupos armados que han puesto en riesgo la vida y la seguridad alimentaria³⁰⁵.

7.2. Con relación a las prohibiciones y cuestiones conexas

Ruta Jurídica Indígena para los Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas en Colombia³⁰⁶

Los pueblos indígenas como sujetos colectivos reconocidos y protegidos constitucionalmente, encuentran en su autonomía la posibilidad de aplicar las normas propias de cada comunidad, siendo éstas limitadas únicamente en la medida en que afecten derechos fundamentales o derechos de mayor rango a los que busca proteger³⁰⁷. Desde esta perspectiva, las comunidades indígenas han venido desarrollando una ruta jurídica diferenciada con el objeto de atender los casos de desvinculación de víctimas de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados.

Teniendo en cuenta el impacto generado por el crimen de guerra de reclutamiento de niñas y niños sobre la población indígena en Colombia, las comunidades se vieron obligadas a desarro-

³⁰⁵ Las huertas escolares fueron saqueadas o minadas y la intervención de los grupos armados demeritó este espacio como escenario de protección y prevención al reclutamiento.

³⁰⁶ DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ALDHU) Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (2008): *Ruta Jurídica para los Pueblos Indígenas. Caminos y retornos para los niños, niñas y jóvenes víctimas de la violencia política*. Bogotá.

³⁰⁷ Constitución Política de Colombia, artículos 7, 171, 176, 246 y 330; Corte Constitucional, *Sentencia T-496*, Bogotá, 1996.

llar un camino especial para los casos en que sus NNA que han sido víctimas de reclutamiento, se desvinculen. Es así como se empiezan a reconocer las acciones emprendidas por estas comunidades de manera autónoma, dentro del marco de herramientas institucionales sustentadas jurídicamente sobre la materia. Es importante resaltar que la experiencia indígena hace un aporte en la delimitación de responsabilidades autoridades estatales respecto de las comunidades en el contexto del conflicto armado y en el enfoque, por lo menos de manera formal, de las necesidades básicas diferenciadas de NNA desvinculados de grupos armados.

Los pasos recorridos por las diferentes poblaciones indígenas colombianas, que ante la desprotección estatal y los continuos ataques en su contra por parte de todos los grupos armados, han generado la implementación de una ruta jurídica de desvinculación de NNA que pretende armonizar las obligaciones internacionales e internas del Estado, con las regulaciones autónomas de dichas comunidades. En el contenido de la Ruta Jurídica Indígena elaborada por la Defensoría del Pueblo, se describe este proceso como la orientación y organización de acciones de todos los actores que participan de la problemática con el objeto de evitar la vinculación de los niños y niñas indígenas a los grupos combatientes, así como para desvincularlos de estos, para así no ser una víctima más del conflicto armado en Colombia³⁰⁸.

El énfasis en el tratamiento diferenciado que debe darse a los niños y niñas indígenas que se ven afectados por el conflicto armado es el eje central de esta propuesta en cuya aplicación debe darse prioridad a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas propias de cada comunidad y, las cuales deben ser respetadas³⁰⁹.

La guía pedagógica realizada por la Defensoría del Pueblo describe los comportamientos que se deben adelantar de acuerdo a cada situación concreta que se pueda presentar, centrándose en su mayoría en las obligaciones que las autoridades indígenas adoptan con el objetivo de lograr la readaptación de NNA a su entorno tradicional. En este sentido, además de las disposiciones generales establecidas para la desvinculación de NNA, en el caso de las víctimas de reclutamiento indígenas pueden entregarse o ser entregados a su propia comunidad. La decisión de aceptar el retorno del NNA por parte de autoridad indígena debe ser documentado con el fin de disponer de una constancia que le brinde un soporte frente a las

308 Ley 782 de 2002, por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones, artículo 6°.

309 Organización Internacional del Trabajo, *Convenio No. 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*, artículo 1°, Ginebra, 1989.

autoridades del Estado y no vea afectados sus derechos por ser aún considerado parte del grupo combatiente del que se desvincula³¹⁰.

Adicionalmente, así como todos los NNA víctimas de reclutamiento en Colombia, los NNA indígenas pueden desvincularse ante funcionarios públicos, autoridades eclesiásticas, fuerza pública o cualquier particular que no ostente la representación de su comunidad indígena, y deberá ser llevado en las 36 horas siguientes o en el término de la distancia al ICBF³¹¹. Una vez en manos en manos del ICBF, esta entidad tiene la obligación de dar aviso a la autoridad indígena para establecer si su comunidad está en condiciones de asumir la protección del NNA o si por el contrario debe quedar en manos de la Institución³¹². En todo caso, siempre deberán respetarse las condiciones culturales indígenas propias y las decisiones de sus autoridades autóctonas³¹³.

7.3. Con relación a la protección, recuperación y reintegración

Red de protección

El programa de atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley del ICBF y la Comisión Intersectorial de prevención son las respuestas que desde el Estado se han diseñado a favor de la protección de víctimas y prevención de la vinculación de NNA a grupos armados. No obstante, estos programas han demostrado ser inoperantes ante situaciones de emergencia que requieren un tipo de intervención inmediata que los programas oficiales no ofrecen, ya que suponen tiempos de inscripción, trámites y verificaciones que muchas veces ponen en mayores riesgos a las víctimas. En otras ocasiones, las acciones de protección no son las más adecuadas, acordes y efectivas a la condición particular del NNA en cuestión, puesto que priman intereses militares antes que de un enfoque de derechos. Además, este tipo de políticas terminan por reproducir modelos de atención y de

³¹⁰ *Supra* 2, artículo 7º; Decreto 1397 de 1996, *Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones*, artículo 14; *Supra* 3, artículo 8º.

³¹¹ *Decreto 128 de 2003, por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil*, artículo 22º.

³¹² DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ALDHU) Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (2008): Op. cit. Pág. 12.

³¹³ Asamblea General de Naciones Unidas, *Convención Internacional de los derechos del niño*, artículo 30; *Supra* 2, artículos 7, 28 y 29; *Supra* 4, artículo 14.

asistencia generadores de dependencia que impiden el desarrollo de capacidades para transformar su condición de víctimas y su paso a una ciudadanía plena, con enfoques diferenciados de género, etnia y edad.

En aras de establecer medidas efectivas de protección, organizaciones de derechos humanos como Benposta, Justapaz y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, crearon una Red de Protección que a partir de la articulación de esfuerzos colectivos actúa en situaciones de emergencia, ofreciendo alternativas prácticas a favor de la protección integral de NNA que por su condición de riesgo por vinculación/uso y/o amenazas por los grupos armados necesitan una medida de protección directa e inmediata.

La red realiza acciones locales de ejercicio de derechos para defensa y resguardo de la infancia en el conflicto; actividades que incentivan el derecho a la participación y al fortalecimiento de redes sociales; y activa mecanismos para situaciones de urgencia encaminados a proteger la vida de un niño o niña. Para ello cuenta con herramientas de valoración de riesgo, análisis de vulnerabilidades y modelos de autoprotección a partir de los cuales se han identificado amenazas y riesgos directos relacionados con el uso de la niñez por grupos armados ilegales y estatales en actividades como informantes, extorsión, tráfico de drogas y armas; la “invitación” a trabajar para el grupo o formar parte del mismo; la imposición de códigos de conducta; la relación afectiva con algún miembro de un grupo armado (legal e ilegal); vinculación a grupos organizados de delincuencia; entre otras situaciones de amenaza..

Opera en todo el territorio nacional ante situaciones de emergencia que suponen un riesgo inminente para la vida de los NNA amenazados por grupos armados, y en territorios específicos con acciones puntuales donde se fortalece la respuesta de autoprotección local. Fundamentalmente contempla tres estrategias de acción:

- a – *Protección dentro de la misma comunidad:* el programa considera que el fortalecimiento de iniciativas y redes locales y regionales en las que participan activamente NNA puede mitigar y prevenir el riesgo. Existen actualmente prácticas exitosas que el programa ha identificado como los clubes infantiles y juveniles, grupos parroquiales o de iglesias, unidades productivas, núcleos de apoyo y comedores comunitarios entre otras experiencias, que pueden ser apoyadas por el programa.
- b – *Protección en la región:* se considera que algunas situaciones de riesgo que se presentan en veredas pueden resolverse con el traslado y ubicación de los NNA en cabeceras municipales donde residan familiares, se les garantice la asistencia a un centro educativo y la participación en una acción de acompañamiento permanente bajo la responsabilidad de un coordinador/coordinadora local, organización social, comunitaria e iglesia. Sobre esta medida no existe has-

ta el momento experiencia piloto pero existen condiciones en algunas regiones del país para implementarla.

- c– *Protección fuera de la zona*: en los casos identificados como de alto riesgo el programa interviene en forma directa a solicitud de los padres, tutores y/o organizaciones acompañantes reubicando a los NNA en riesgo en un centro de acogida o lugar de protección. Estos centros pretende ser una alternativa a la “institucionalización” y se conciben como “espacios de protección” donde se encuentran las condiciones educativas, sociales y culturales para que puedan desarrollar su proyecto de vida en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y los Principios de París.

La aplicación de una u otra modalidad depende de los niveles de riesgo individuales y de las capacidades y posibilidades en la misma región de origen.

8. RECOMENDACIONES

8.1. Con respecto al contexto político del país

Instar al Estado Colombiano a:

- Reconocer la existencia de un conflicto armado interno que exige el cumplimiento del derecho humanitario y la suscripción de acuerdos humanitarios que propendan por el compromiso de las partes en conflicto de cesar la vinculación directa e indirecta de NNA a sus filas.
- Establecer medidas adecuadas y eficaces de prevención del reclutamiento y utilización de NNA por parte de todos los grupos que participan de las hostilidades, especialmente, aquellas encaminadas a erradicar los actos de utilización cometidos por agentes estatales.
- Terminar la realización de actividades cívico militares que contravienen el principio de distinción en contra de NNA en el contexto del conflicto armado en Colombia.
- Desarrollar una política eficaz de extinción total del paramilitarismo, en cumplimiento de la cual se dismantelen las estructuras políticas y económicas de estos grupos, se haga cesar su actividad delictiva, y se sancione a los servidores públicos que con unos y otros tengan nexos de cualquier naturaleza.
- Garantizar las condiciones adecuadas para que el poder judicial pueda proseguir con las investigaciones de servidores públicos y líderes políticos que tengan vínculos con paramilitares.
- Intensificar las acciones encaminadas a combatir la impunidad de todos los responsables del reclutamiento y utilización de NNA, para lo cual deberán adelantarse investigaciones oportunas y eficaces.
- Aplicar medidas inmediatas para acabar con las ejecuciones extrajudiciales en contra de NNA.
- Adoptar medidas adecuadas para la prevención del desplazamiento forzado y la protección de las personas que se encuentra en esta condición, especialmente teniendo en cuenta que este factor eleva el riesgo de NNA de ser reclutados por los grupos armados.

- Profundizar en la implementación de las políticas públicas contenidas en la estrategia para reducir la desigualdad y combatir la pobreza y la indigencia, priorizando la atención de las víctimas del conflicto armado.

8.2. Con respecto a las medidas generales de aplicación

Instar al Estado Colombiano a:

- Apropiar el contenido del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la participación de los niños en los conflictos armados al interior de sus instituciones.
- Capacitar a los funcionarios judiciales de forma adecuada sobre la necesidad de incluir el contenido de las disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la participación de los niños en los conflictos armados en todas sus decisiones en la materia.
- Difundir el contenido del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la participación de los niños en los conflictos armados ampliamente en todo el territorio nacional.
- Garantizar el trabajo de las Organizaciones de la sociedad civil que adelantan labores en la defensa de los derechos de la niñez afectada por el conflicto armado interno.

8.3. Con respecto a la prevención

Instar al Estado Colombiano a:

- Impulsar investigaciones tendentes a determinar la responsabilidad y sancionar a miembros de la Fuerza Pública por conducir entrevistas militares a niños y niñas; desconocer el plazo máximo de 36 horas y retenerlos en guarniciones militares o utilizarlos como guías a los campamentos del grupo armado poniendo en grave riesgo su vida e integridad personal.
- Adoptar medidas urgentes para proteger a las niñas y jóvenes de la violencia sexual ejercida por todos los grupos armados que toman parte en las hostilidades en zonas de conflicto armado.
- Investigar y sancionar penal y disciplinariamente a los miembros de la fuerza pública que ejerzan cualquier forma de violencia de género en contra de niñas y jóvenes.
- Implementar dentro de la política pública de prevención programas de protección a NNA que se encuentren en riesgo inminente de reclutamiento, estableciendo estrategias de respuesta

rápida y acciones dirigidas a las poblaciones identificadas como vulnerables (desmovilizados, personas en situación de desplazamiento, indígenas, afrodescendientes, mujeres).

- Establecer mecanismos de protección para las escuelas dotando de herramientas a todo el personal directivo y docente a favor de que las instituciones sean escenarios de protección y no de reclutamiento.
- Destinar esfuerzos a la articulación de la política desde un lente de política pública de infancia que permita superar la fragmentación actual del discurso, apuntando a una protección integral.
- Lograr un desarrollo efectivo de las tareas correspondientes a las instituciones de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley, garantizando recursos técnicos y financieros para su operatividad.
- Promover una solución política negociada al conflicto con las guerrillas, favoreciendo, entre otros, los acuerdos humanitarios para permitir la liberación de NNA que se hallen en sus filas.
- Cesar la formación impartida por escuelas militares a favor de ambientes educativos que promuevan valores como la convivencia pacífica, los derechos humanos y la construcción de sujetos de paz.

Instar a la fuerza pública a:

- Abstenerse de realizar campañas y programas “cívico – militares” que realzan la vida militar contribuyendo a idealizar la milicia como opción de vida, ponen en grave riesgo a los NNA involucrados, y son aprovechadas para realizar actividades de inteligencia.
- Cesar la utilización de NNA en actividades militares y de inteligencia para suministrar información, participar en operativos e identificar a miembros de los grupos a los que pertenecían. En este sentido, se hace un llamado categórico a que interrumpan la detención de NNA en bases militares por un plazo máximo de 36 horas.
- Detener la utilización de NNA en la realización de tareas de apoyo como transporte de paquetes y materiales, oficios domésticos, limpieza y carga de armas, que violan el principio de distinción y que los hace susceptibles de estigmatización por parte de los grupos armados irregulares.
- Abstenerse de amenazar y asesinar a niñas y jóvenes en virtud de sus relaciones de pareja o familiares con miembros de los grupos armados.

Instar a la fuerza pública y a los grupos paramilitares a:

- Cesar toda estigmatización contra los grupos juveniles reconociendo el derecho a la participación y a la reunión y asociación pacífica.

Instar a los grupos armados a:

- Cesar toda forma de vinculación de NNA al conflicto armado, así:
 1. Los grupos paramilitares y nuevas expresiones de paramilitares rearmados, cesar toda vinculación de NNA a sus filas cumpliendo así con los acuerdos establecidos en la Declaración del Paramillo y ratificados con la Ley 975 de 2005. De lo contrario, asumir los costos en términos de pérdida de beneficios.
 2. La guerrilla de las FARC-EP, cesar toda vinculación directa e indirecta de NNA a sus filas, y que cumpla lo ofrecido al Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados de no reclutar niños y niñas menores de 15 años; al igual que busquen un acuerdo humanitario para dejar en libertad todos los NNA que hacen parte del mismo.
 3. A la guerrilla del ELN, cesar toda vinculación de niños y niñas a sus filas, y que cumpla con los acuerdos de “Puerta del Cielo”, en los cuales se comprometió a no reclutar menores de 16 años; al igual que busquen un acuerdo humanitario para dejar en libertad todos los NNA que hacen parte del mismo.
- Abstenerse de cometer actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales, o cualquier acto que afecte la integridad física o mental de los NNA vinculados a sus filas, en especial en el caso de la violencia de género en perjuicio de las niñas y jóvenes.
- Cesar toda utilización de niñas y jóvenes como combatientes, informantes, cocineras y esclavas sexuales en sus filas.
- No cometer actos de violencia en contra de las niñas y jóvenes tales como anticoncepción y abortos forzados; violación, esclavitud sexual entre otros, que pongan en riesgo su salud sexual y reproductiva y su integridad personal.

8.4. Con respecto a la prohibición y cuestiones conexas

Instar al Estado Colombiano a:

- Velar porque la interpretación de la norma favorezca la protección reforzada y prevalente de los derechos de las NNA víctimas de reclutamiento, particularmente frente a las ambigüedades que presenta la Ley 975 de 2005 y la Ley 1098 de 2006 o de Infancia y Adolescencia.
- Ampliar el marco jurídico de protección y prevención contra la utilización y reclutamiento de NNA a todos los grupos armados que hacen parte del conflicto, de acuerdo a lo que establecen los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Dicho marco jurídico se encuentra actualmente restringido solo para “grupos armados al margen de la ley”.
- Derogar la facultad atribuida por la Ley de Infancia a la Policía Nacional para adelantar programas educativos.
- Aplicar en todos los casos impulsados por las autoridades judiciales de NNA desvinculados el principio de oportunidad dando prevalencia al interés superior del niño y a la condición de víctimas.
- Equiparar el tratamiento jurídico de los NNA vinculados a la violencia armada organizada y los grupos armados, estableciendo los mismos derechos y sabiendo que las diferencias son difusas.
- Ajustar el sistema de responsabilidad penal juvenil a los principios y lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa internacional de derechos humanos, reconociendo el interés superior del niño y revisando las penas privativas de libertad establecidas.

8.5. Con respecto a la protección, recuperación y reintegración

Instar al Estado Colombiano a:

- Fortalecer el Programa de atención a NNA desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley por medio de: la cualificación de los servicios prestados en materia de restitución de derechos; la asistencia técnica; y la articulación de formas de operación políticas, organizacionales y de bienestar entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional a favor de mejorar el programa.
- Capacitar a los operadores judiciales en base a los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre niñez y conflicto armado y los Principios de París, para que cuenten con ele-

mentos suficientes para considerar la situación concreta de los NNA desvinculados de grupos armados y su consideración de víctimas y no de victimarios.

- Adoptar medidas que faciliten el ejercicio de la justicia en el marco de la aplicación de la Ley 975 de 2005 como: incluir preguntas sobre el delito de reclutamiento ilícito de NNA en todas las versiones libres y actuaciones judiciales pertinentes para determinar la responsabilidad de los autores frente a tales hechos, contrastar la información confesada por los comandantes de estos grupos con las denuncias de vinculación en sus zonas de control para determinar aquellos casos que no están siendo confesados y el número de NNA no entregados como lo ordena el Artículo 10 de la ley, impulsar investigaciones tendentes a determinar la responsabilidad de los grupos paramilitares por la desaparición de niños y niñas que no fueron entregados durante las desmovilizaciones colectivas o que tampoco se desmovilizaron de manera individual.
- Adoptar una política de lucha contra la impunidad que lleve a resultados concretos en la investigación y sanción del delito del reclutamiento.
- Establecer procesos de coordinación entre el ICBF y la Fiscalía General de la Nación que viabilicen investigaciones frente al delito del reclutamiento de los NNA desvinculados y adscritos a los programas del ICBF, teniendo en cuenta criterios de seguridad, confianza, colaboración y apoyo mutuo.
- Exigir a los grupos paramilitares que entreguen todos los niños y las niñas que pertenecen a los mismos y siguen en su poder, como condición necesaria para la continuación del proceso de negociación con estos grupos cumpliendo de esta forma el requisito de elegibilidad contenido en el artículo 10 de la Ley 975 de 2005. En caso que esta obligación sea incumplida, abstenerse de otorgarle a dichos grupos los beneficios jurídicos contenidos en la ley.
- Facilitar la cooperación entre la justicia colombiana y estadounidense para que los jefes paramilitares extraditados respondan por los crímenes de lesa humanidad perpetrados al mando de sus grupos armados, en especial, frente a la vinculación de NNA a sus filas.
- Generar garantías para las víctimas propiciando escenarios confiables y seguros que permitan su participación directa dentro de los procesos de esclarecimiento de la verdad.
- Establecer un marco jurídico ético que proteja a los NNA desvinculados de “bandas de delincuencia” o “violencia armada organizada” para que cuenten con los mismos derechos y oportunidades de resocialización establecidos para las personas menores de 18 años desvinculadas de grupos armados, teniendo en cuenta el actual estado de cosas inconstitucional, su calidad de víctimas y el Interés Superior del Niño.

8.6. Con respecto a la asistencia y cooperación internacionales

Instar al Estado Colombiano a:

- Respalda la gestión de las Agencias de la ONU en el país, para que puedan cumplir con su mandato.

Instar a la cooperación internacional a:

- Incluir como punto fundamental dentro de la estrategia de cooperación internacional para Colombia la solución negociada del conflicto armado, actualmente excluida de la agenda, garantizando en el proceso la participación de la sociedad civil y en particular de las víctimas.
- Exigir el desmantelamiento real del paramilitarismo en el país.
- Fortalecer su apoyo con relación a la cualificación de las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar; la creación y apoyo a sistemas de monitoreo a nivel local; y la consolidación de una política pública que se traduzca en asignaciones presupuestales y gasto público a favor de los derechos de la niñez.
- Aplicar los principios de independencia frente al Estado y de diálogo con todos los sectores de la sociedad a favor del óptimo desempeño en función de la observación y asistencia de la situación de los derechos humanos en Colombia.
- Establecer desde su competencia medidas de protección para garantizar el libre ejercicio de las organizaciones de derechos humanos que abogan por la niñez de Colombia.

8.7. Con respecto a iniciativas de la sociedad civil

Instar al Estado Colombiano a:

- Cesar la estigmatización de la lucha que realizan los movimientos sociales, específicamente las organizaciones que abogan por el respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario en medio del conflicto, reconociendo el disenso y la protesta como elementos constitutivos de una democracia.

8.8. Con respecto al cumplimiento por parte del Estado de los mandatos contenidos en la Convención sobre Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados

- Mantener las recomendaciones realizadas al Estado Colombiano por el Comité de los Derechos del Niño en el año 2006 con relación a sus preocupaciones frente a los NNA en situación de conflicto armado, especialmente frente a:
 - a) *El reclutamiento en gran escala de niños por los grupos armados ilegales para combatir y también como esclavos sexuales;*
 - b) *El interrogatorio por las fuerzas armadas de los niños soldados capturados y desmovilizados y el incumplimiento del plazo máximo de 36 horas establecido en la legislación nacional para entregarlos a las autoridades civiles;*
 - c) *La utilización de niños por las fuerzas armadas para obtener información de inteligencia;*
 - d) *El nivel insuficiente de reintegración social, rehabilitación y reparación de que disponen los niños soldados desmovilizados;*
 - e) *El número de niños que han sido víctimas de minas terrestres;*
 - f) *El hecho de que el actual marco jurídico en que se desenvuelven las actuales negociaciones con los grupos paramilitares no se tenga en cuenta los principios básicos de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas;*
 - g) *La falta general de transparencia suficiente al examinar los aspectos relativos a la infancia en las negociaciones con los grupos armados ilegales, que prolonga la impunidad de los responsables de reclutar a niños como soldados”³¹⁴.*
- Mantener las recomendaciones realizadas al Estado Colombiano por el Comité de los Derechos del Niño en el año 2000 con relación a la implementación de *“medidas efectivas para que se libere y desmovilice a todos los niños raptados y combatientes y para que se rehabilite y reintegre a éstos en la sociedad. El Comité recomienda además que el Estado Parte dicte, y aplique estrictamente, normas legislativas que prohíban el reclutamiento futuro de niños por cualquier clase de grupo”³¹⁵.*

³¹⁴ COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: Observaciones Finales Colombia. Documento número CRC/C/COL/CO/3. 8 de julio de 2006. Párr. 8o.

³¹⁵ COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: Observaciones Finales Colombia. Documento número CRC/C/15/Add.137. 16 de octubre de 2000. Párr. 56.

Alternate Report to the Colombian State's Report on the Fulfillment of the Optional
Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict

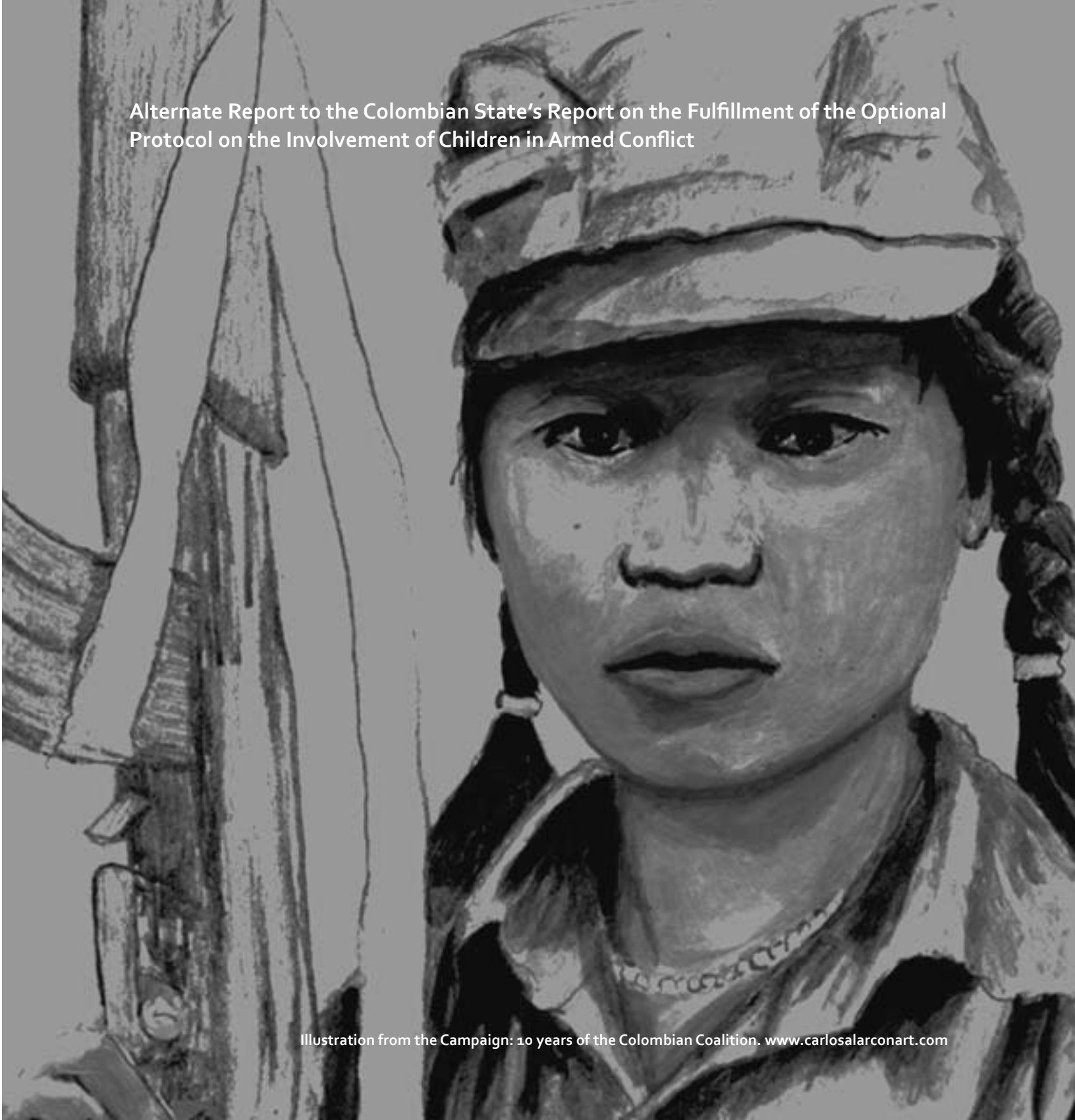


Illustration from the Campaign: 10 years of the Colombian Coalition. www.carlosalarconart.com

Informe alternativo al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo
Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados



Imagen de la Campaña de los 10 años de la Coalición Colombia. www.carlosalarconart.com



Alternative Report

to the Colombian State's Report on the Fulfillment of the Optional Protocol
on the Involvement of Children in Armed Conflict

with the support of:



en





Alternate Report to the Colombian State's Report on the Fulfillment of the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict

AUTHORS

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia

Acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia, Acooc.
Benposta Nación de Muchachos.
Corporación Paz y Democracia.
Corporación Vínculos.
Defensa de los niños internacional –DNI–, Colombia.
Fundación Creciendo Unidos.
Fundación para la Educación y el Desarrollo, Fedes.
Justapaz.
Servicio Jesuita a Refugiados.
Taller de Vida.
Tierra de hombres, Alemania.
War Child, Holanda.

Comisión Colombiana de Juristas

Bogotá, Colombia. November 2009

Alternate Report to the Colombian State's Report on the Fulfillment
of the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict

GENERAL COORDINATION

**Coalition against the involvement of boys, girls and youth to the armed conflict
in Colombia**

EDITORIAL COMMITTEE

Defensa de los niños internacional –DNI–, Colombia.
Justapaz.
Tierra de hombres, Alemania.
Comisión Colombiana de Juristas
Humanidad Vigente Corporación Jurídica

WITH THE SUPPORT OF

Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme
Unión Europea
War Child Holanda
TDH Alemania
ICCO & Kerk in Actie

This report was written by:

Coalition against the involvement of boys, girls and youth to the armed conflict in Colombia
(María Clara Melguizo, Independent Consultant. *Research Committee*: Fernando Sabogal
and Natalia Camargo –DNI–. Hilda B. Molano Casas –Technical Secretariat–.
John Giraldo –Justapaz–. William León –tdh–).

Colombian Commission of Jurist (Margarita Bonilla, Researcher in Humanitarian Law).

Designed by Rocío Paola Neme Neiva

Cover illustration by Carlos Alarcón. Illustration from the Campaign: 10 years of the
Colombian Coalition. www.carlosalarconart.com

ISBN: 978-958-98137-6-8

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ENDORSING THIS REPORT

- ✓ Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas – Asocodita
- ✓ Asociación para la Promoción Alternativa - Minga
- ✓ Casa de la Juventud
- ✓ Colectivo Semillas Flora Tristán - Red de Mujeres de Suba
- ✓ Corporación Casa Amazonía
- ✓ Corporación Colombia Joven
- ✓ Corporación Con – Vivamos
- ✓ Corporación para el Ecodesarrollo Comunitario - Comunitar
- ✓ Equipo de Asesorías a Proyectos de Desarrollo Integral Comunitarios – Aprodic
- ✓ Fundación Afrocolombiana Servir
- ✓ Fundación Enséñame a Pescar
- ✓ Fundación Social Colombiana - Cedavida
- ✓ Fundación Sol y Serpiente de América
- ✓ Humanidad Vigente Corporación jurídica
- ✓ Instituto de Capacitación Popular - IPC
- ✓ Red Distrital de Salud de las Mujeres de Bogotá

INDEX

INTRODUCTION	9
1. SOCIO-POLITICAL CONTEXT OF THE COUNTRY 2005-2008	15
2. GENERAL APPLICATION MEASURES	25
3. PREVENTION	27
3.1. Involvement with State Security Forces	27
3.2. Involvement with Irregular Armed Groups	38
3.3. The School as a Recruitment Space	50
3.4. Public Policy on Prevention	52
4. PROHIBITION AND RELATED SUBJECTS	59
4.1. Typification of the crime of recruitment in the Colombian Legal Code	59
4.2. Prohibition of Recruitment and Use of Children	63
4.3. Judicial Provisions for the Treatment of Boys, Girls and Adolescents Demobilized from Armed Groups	65
4.4. Adherence to International Instruments of Protection	73
5. PROTECTION, REHABILITATION AND REINTEGRATION	75
5.1. Program of attention to boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups	75
5.2. Demobilization of Boys, Girls and Adolescents Members of AUC: Concealment and Impunity	80
5.3. Measures for Truth, Justice and Reparation	85

6. INTERNATIONAL ASSISTANCE AND COOPERATION	91
6.1. Process of acceptance and implementation of the mechanism of Resolution 1612 ...	91
6.2. International cooperation in relation to the application of the Optional Protocol	95
7. CIVIL SOCIETY INITIATIVES	101
7.1. On Prevention	103
7.2. On prohibitions and related issues	104
7.3. On protection, rehabilitation and reintegration	106
8. RECOMMENDATIONS	109
8.1. On the political context of the country	109
8.2. On general application measures	110
8.3. On prevention	110
8.4. On prohibitions and related issues	113
8.5. On protection, rehabilitation and reintegration	113
8.6. On international assistance and cooperation	115
8.7. On civil society initiatives	115
8.8. On compliance by the State of the mandates of the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflicts	116



“Involving boys and girls in the war is an act of savagery, as they have nothing to do with a war that is not theirs”¹.

INTRODUCTION

Colombia has ratified the Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts², and the provisions of international humanitarian law related to the protection of civilian population, particularly children, are applicable³. Such international norms proscribe the involvement of boys, girls and adolescents to the armed groups that participate in the hostilities, including the State Security Forces, and urge the States to adopt all possible measures to prevent these forces from recruiting or using persons under 18 years of age under any circumstances.

The ratification of the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts⁴ implies the commitment to submit regular reports to the Committee on the Rights of the Child, giving an account of progress in the country regarding the obligations and the assumptions contained in the same. The Committee, on its part, examines the reports submitted at regular intervals and makes recommendations on how the States may best apply the provisions of the treaty.

¹ COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTHS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA) (17 September 2009): Workshop Report. Words of an adolescent.

² Signed on 15 May 2001, approved by Law 833 of 2003 and delivered at the General Secretariat of the United Nations on 25 May 2005.

³ The Geneva Convention of 1949 and its Additional Protocols of 1977; and the Ottawa Convention on the prohibition of employment, storage, production and transfer of anti-personnel mines and on their destruction and the principles and guidelines on children involved in armed forces or groups.

⁴ From here on, the Optional Protocol.

Taking into account the validity of the mentioned Optional Protocol for Colombia⁵ and considering the norms stipulated by this instrument regarding its operational application⁶, the Colombian Government presented its report at the end of 2008. On its part, civil society also participates in this reflection, handing in the alternate report that follows.

The current report is the product of a participatory process conducted by several non-governmental organizations, human rights platforms and boys, girls and adolescents with the intention of making visible their main proposals and concerns in relation to the problem of children in the context of the internal armed conflict. The document presents a balance of the current situation of persons under 18 years of age involved in the armed conflict in Colombia, based on the obligations arising from the Optional Protocol, international recommendations in this area and the information that has been verified through monitoring of the situation between 2005 and 2008⁷.

The construction of this document entailed the following activities:

National Meeting of boys, girls and adolescents.

This meeting, held during the first semester of 2009, counted on the participation of 45 boys, girls and adolescents from Antioquia, Bolivar, Cauca, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Valle del Cauca and Bogotá. Its purpose was to strengthen the tools boys, girls and adolescents count on regarding influence, investigation and communication in relation to the Optional Protocol and the preparation of the alternate report. Based on this, three working groups were organized to look deeply into the different strategies, providing information on the diagnosis and analysis of the situation, the visibility of the Optional Protocol and the participation of boys, girls and adolescents in its follow up and application.

Round tables with boys, girls, adolescents and youths demobilized from armed groups

Children affected directly by the armed conflict tend to be the most recurrent and invisible victims in public opinion and in the acknowledgement of their rights to truth, justice and repa-

⁵ Validity, which in our case is legally binding, as of 25 June 2005, one month after delivering the ratification instrument.

⁶ The Optional Protocol presupposes the delivery of an initial report "at the latest, two years after the entry into force of the Protocol" Article 8 of the Protocol. From then on, the States should present follow up reports together with a report on the application of the Convention on the Rights of the Child.

⁷ Based on the date of entry into force of the Protocol for Colombia, this follow up report cover the period 2005-2008.

ration. In order to give voice to the boys, girls and adolescents in relation to the truth, justice and reparation they look forward to and demand as *víctims*⁸, since 2008 three round tables have been held in order to learn about their perceptions and recommendations regarding the fulfillment of these rights. During these activities, the boys, girls and adolescents have provided analysis elements that are presented in this report. Likewise, the process has awakened their interest to work on the subject, promoting discussion and understanding of such concepts.

Presentation and consultation with organizations

Considering that the alternate report must represent an important part of civil society, a convening and consultation process was undertaken among non-governmental organizations and human rights platforms, to guarantee that the latter contribute with documents and information, become allies in its preparation or adhere to the content of the document at the end of the process.

The participation of national level organizations was facilitated thanks to the spaces that, as civil society, have been created and strengthened for the investigation, follow up, denouncing and advocacy in relation to the development of the armed conflict and its impact on the human rights of children⁹. The consultation with regional organizations was possible thanks to the alliances established in some areas of deepening conflict that exemplify how Colombian boys, girls and adolescents are being affected by the war. The compilation, systematization and analysis of the information was the responsibility of an editorial committee that met periodically to review progress.

Compilation of documented information

Compiling documented information required reviewing and analyzing documents, reports, bulletins and press releases issued over the period 2005-2008 by State sources, civil society organizations, international organizations and media. The analysis entailed gathering and sys-

8 It is necessary to take into account a differential approach in the processes and measures that seek to reparate victims integrally. The dynamics of socio-political violence and the armed conflict in Colombia have affected people, communities, organizations and social movements in different ways, generating specific harm with respect to gender, age, political options and ethnic and cultural background. Acknowledging and making visible the impact and harm in a differential way, makes it possible to look at the different ways in which the harm done is felt and what it means. With this, it is possible to start building a coherent response with the specificities and needs of victim children.

9 Within these spaces we can highlight the Working Group of Resolution 1612, and the groups created for submission of alternate reports to Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (International Pact for Economic, Social and Cultural Rights) and Examen Periódico Universal (Periodic Universal Examination).

tematizing duly documented cases that sustain the tendencies and dynamics found regarding the involvement of boys, girls and adolescents with all the armed groups in different regions of the country. In this sense, all the information documented here regarding emblematic cases, affected regions and populations are based on denunciations and specific cases contributed by the cited source.

Consolidation of the Report

The ratification of the Optional Protocol in Colombia and the submission of the State and Alternate reports offer the opportunity to receive the Committee's recommendations regarding the prevention of the use of boys, girls and adolescents by irregular armed groups and State Security Forces; adjusting our internal legislation according to international instruments; investigating and charging those responsible for the war crime of recruiting boys, girls and adolescents; and preparing plans and programs for the population victim of involvement, among others.

The main assumptions, considerations and concerns on the subject have been briefly described in eight chapters. The first chapter presents some of the milestones that characterized the socio-political context of the country from 2005 to 2008, which has been dominated by the extension of the "democratic security" policy, as a fundamentally warlike and military strategy; the prevalence of the power of paramilitary groups and the uncovering of their links to the State; the denial of the existence of an armed conflict by the National Government; the threats to human rights defenders, teachers and social leaders; the continuous infringements to humanitarian law by the guerrillas, paramilitary groups and military forces against boys, girls and adolescents; the deepening of the humanitarian crisis. The second chapter deals with the general application measures, analyzing the legal reach of the Optional Protocol in the national legislation, the reservations made by the country and the work undertaken by the State and civil society in terms of dissemination and implementation of this instrument.

Taking into account that prevention refers to the measures adopted in a country to ensure that boys, girls and adolescents are not recruited or used in the hostilities, the third chapter points out that the measures implemented to fulfill the purpose of preventing and reducing the recruitment or use of boys, girls and adolescents by regular and irregular armed groups are insufficient; it even demonstrates that instead of improving, the situation seems to worsen. Chapter four dedicates its pages to analyzing the legal framework that covers the perpetrators of the crime of recruitment and the victim boys, girls and adolescents, pointing out concerns regarding the impunity in which the crime may remain, the severity of the penalties imposed on demobilized boys, girls and adolescents, the apparent lack of responsibility of State Security Forces regarding the use of persons under 18, and the unawareness of international regulations

on human rights, in spite of the country's adherence to several international protection instruments.

In order to describe the condition of victim boys, girls and adolescents, chapter five presents some considerations about the attention program of the Colombian Institute for Family Welfare (ICBF) as a resocialization space, the demobilization process with the paramilitary of the AUC (United Self-Defense Forces of Colombia) and the measures adopted to guarantee the rights to truth, justice and reparation. Chapter six analyzes the process of implementation of Resolution 1612 of 2005 of the Security Council in Colombia and the international cooperation on the application of the Optional Protocol. In this regard, serious concerns are noted with relation to the harmful effects that the assumption of State responsibilities by other sectors of society may have, when they should only have a supporting role, without taking on a protagonic role, and the possible indirect financing of the military strategy. On the other hand, in an assessment of civil society initiatives for the prevention and protection of boys, girls and adolescents in relations to their involvement in the armed conflict, chapter seven presents some successful experiences in this area. Lastly, chapter eight presents the recommendations that arise from the analysis made throughout the document and the assessment regarding the observations previously made by the Committee on the Rights of the Child.

Taking into account the above, it is expected that this alternate report may provide analysis elements regarding the Colombian armed conflict and compliance with the optional Protocol in order to promote, enhance and qualify public policies on behalf of the boys, girls and adolescents that suffer the war day after day.

1. SOCIO-POLITICAL CONTEXT OF THE COUNTRY 2005-2008

Colombia has been engaged in an internal armed conflict for approximately five decades, which has deep roots in structural problems such as the inequitable distribution of wealth, social exclusion and discrimination. At the time of presentation of this report, such conditions are far from overcome. In words of the Inter-American Commission on Human Rights: “*the inequities that have persisted in spite of economic development and growth, have been a constant source of conflict in Colombia*”¹⁰. The guerrilla and paramilitary groups and members of the State Security Forces continue to repeatedly infringe the norms of humanitarian law against the civilian population¹¹. The characteristics of the political and economic regime are associated with phenomena such as paramilitarism and drug trafficking, which together coincide in the use of forced displacement as a method to take over large extensions of land¹².

10 “There is a close relationship between social injustice, particularly the forced dispossession of land, and internal displacement, the primary causes of which precede the current armed conflict”. Third report on the Human Rights Situation in Colombia. Inter-American Commission on Human Rights, Paragraphs 10,13 and 61 and page 219.

11 Report for Examen Periódico Universal de las Organizaciones No Gubernamentales (Periodic Universal Examination of Non-Governmental Organizations) - Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Coordination Colombia-Europe-United States) (199 organizations), the Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alliance of Social Organizations and Similar) (140), the Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Human Rights Platform, Democracy and Development) (110 organizations), the Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Permanent Civil Society Assembly for Peace) (754 organizations), the Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (Work Table on Women and Armed Conflict), the Coalición contra la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado (Coalition against the involvement of boys and girls in the armed conflict), the Observatorio sobre Discriminación Racial y el Centro de Cooperación al Indígena (Observatory on Racial Discrimination and the Center for Cooperation with Indigenous Communities (CECOIN), Consejo de Derechos Humanos (Human Rights Council), Periodic Universal Examination, Report of the Working Group on Periodic Universal Examination, Colombia, A/ HRC/10/82, 9 January 2009.

12 COLOMBIAN COMMISSION OF JURISTS “Reverting forced exile: protection and restitution of the usurped territories. Obstacles and challenges to guarantee the right to patrimony of the displaced population in Colombia”. Page 13.

The Republic of Colombia is the second country in the world with the largest population in situation of forced displacement¹³. Peasants, indigenous peoples and afro- descendent communities have been affected in a disproportionate way by this crime against humanity¹⁴. 76% of displaced persons worked the land for their own subsistence and, at the time of forced exodus, they had rights linked to the land, be it as owners, tenants, occupants or holders in possession of the land¹⁵. According to the Constitutional Court, approximately 50% of the displaced population is made up of persons under 18 years of age¹⁶. In this sense, it is important to take into account the relationship there is between forced displacement and the constant acts of recruitment against the boys, girls and adolescents in condition of displacement¹⁷.

Other elements that deepen the conditions of vulnerability of the infant population in the context of the internal armed conflict, are impunity and difficulties to access effective justice¹⁸. A representative example is constituted by the crimes committed by paramilitary groups that, although they participated in an alleged demobilization process, they keep their military structures and continue to operate with adverse effects against the civilian population¹⁹. At the beginning of 2006, the Defensoría del Pueblo (Ombudsperson's Office) denounced that in areas such as La Jagua municipality of Ibirico (Cesar), paramilitaries continued to impose social behavior regulations and illegally expropriate rural assets under threats of

- 13 Report of the Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, Walter Kälin, 9 February 2009, A/HRC/10/13, Paragraph 91; Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2008, Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, April 2009, page 9 and AMNISTÍA INTERNACIONAL (AMNESTY INTERNATIONAL) Colombia: Medalla de Plata en desplazados internos (Colombia: Silver Medal in Internally Displaced Persons), En: <http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/colombia-medalla-de-plata-en-desplazados-internos/>
- 14 CORTE PENAL INTERNACIONAL Estatuto de Roma (International Criminal Court Rome Statute), Article 7 literal d.
- 15 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PROCURATOR GENERAL OFFICE) (2006): Project Preventive Control and Follow up to Public Policies Regarding Reintegration and Demobilization, Chapter 2, Follow up to the protection of the victims of the conflict regarding patrimonial assets. Description, Analysis and Follow up, Bogotá, Page 185.
- 16 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA (CONSTITUTIONAL COURT OF COLOMBIA) (2008): Court Ruling 251 of 6 October 2008. It has the purpose to "protect the fundamental rights of boys, girls and adolescents affected by forced displacement due to the armed conflict, aimed at overcoming the unconstitutional state of things declared in sentence T-025 of 2004.
- 17 Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict, A/62/609-S/2007/757, 21 December 2007, Paragraph 6 and Annual report of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/12/49, 30 July 2009, paragraph 37.
- 18 On this, see: INTERAMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, "Third report on the human rights situation in Colombia", doc. OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 rev.1, 26 February 1999 and COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS (COMMISSION ON HUMAN RIGHTS), Report of the Special Rapporteur in charge of the question of the independence of judges and lawyers, Mr. Param Coomaraswamy, Report of the mission to Colombia, doc. E/CN.4/1998/39/Add.2, 30 March 1998.
- 19 Report for the Periodic Universal Examination of Non Governmental Organizations, 9 January 2009.

death²⁰. Currently, the rights to life, personal integrity and freedom, among others, continue to be violated by paramilitary groups²¹. In addition, it is a matter of concern that at this time, the relationships between high level state officials and businessmen with paramilitarism still have not been clarified²².

Another aspect of special concern is the fact that links between paramilitaries and the State Security Forces have been confirmed. The following case reflects the conditions in which some of these actions take place:

On 21 February 2005, members of the National Army, jointly with paramilitary groups, murdered, in the village Mulatos Medios of the Apartadó municipality (Antioquia), Luis Eduardo Guerra Guerra, member of the Peace Council of San José de Apartadó, the girl Beyanira Areiza Guzmán and the boy Deiner Andrés Guerra. Simultaneously, the same perpetrators murdered in the village of La Resbalosa, of the neighboring village of Tierralta (Córdoba), Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, Sandra Milena Muñoz Posso, Alejandro Pérez Castaño, the boy Santiago Tuberquia Muñoz and the girl Natalia Andrea Tuberquia Muñoz. Some of the bodies showed signs of torture. The eight victims were members of the Peace Community of San José de Apartadó²³. The presumed authors belonged to Counter-guerrilla Battalion 33 attached to Brigade XVII, who acted jointly with members of the “Heroes de Tolová” band, who belonged to the paramilitary AUC group. For these actions, the investigating bureau called two officers, nine sub-officers and 58 soldiers to make a deposition for “*being the apparent authors of the crimes of homicide on protected person and terrorism*”²⁴.



- 20 OMBUDSPERSON'S OFFICE (2006): Risk Report January/February 2006, vol. 5, No. 2, page 5, See in: www.colombiassh.org (consulted on 7 September 2006). Cited in Humanitarian Situation Room, Office for Coordination of Humanitarian Affairs OCHA.
- 21 CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS “Criminal bands: Democratic Security and Corruption”, Observatory of the Conflict, Bogotá.
- 22 COLOMBIAN COMMISSION OF JURISTS (2008) Colombia: The mirage of justice and peace. Balance of the application of Law 975 of 2005. Page 49.
- 23 COLOMBIAN COMMISSION OF JURISTS: Revista Noche y Niebla No. 31, Pages 93 – 94; and public denunciations in the files of the Colombian Commission of Jurists, under Nos. D-05095; D-05097; D-05099 y D-5100.
- 24 FISCALIA GENERAL DE LA NACION (ATTORNEY GENERAL OFFICE), “Officer taken into custody for terrorism and homicide in protected person”, 22 November 2007, www.fiscalia.gov.co

In such a context, the situation of boys, girls and adolescents continues to be of extreme vulnerability. Just as has been verified in internal armed conflicts, such as the Colombian one, the persons under 18 years of age continue to be victims of violations of their fundamental rights systematically²⁵. Boys and girls continue to be victims of recruitment, massacres, forced displacement, hostage taking, victims of anti-personnel landmines and sexual violence in the context of the armed conflict, by guerrilla groups, paramilitary groups and the State Security Forces²⁶.

In the period between July 2002 and June 2008, the Colombian Commission of Jurists registered that at least 13,877 persons lost their lives out of combat (that is, in their homes, in the street or in their place of work) due to socio-political violence²⁷. Of the total of victims of which their sex is known (12,125), for each 100 male victims, approximately 13 women were victims of violations to life²⁸. In those cases in which it was possible to establish the age of the victim, (4,956), 784 were boys and girls²⁹.

In relation to violations to the right to life against boys, girls and adolescent in the context of the armed conflict, it has been possible to verify homicides against them, committed by all the groups that participate in the hostilities³⁰.

On 28 February 2009 in Bogotá, the child Rodolfo Blandón was forcefully disappeared, allegedly by members of the Metropolitan Police of Bogotá. According to María Fernanda Sierra, mother of the 15 year old child, two policemen on an official motorcycle disappeared the child in the area of Ciudad Bolívar. On 7 March he was found dead with a shot in the head in a field in the Lucero Alto area, in the South of the city. According to a relative of the victim *"The facts in*



- 25 Annual report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/12/49, 30 July 2009.
- 26 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER OF THE UNITED NATIONS FOR HUMAN RIGHTS). Annual reports on the Human Rights Situation in Colombia. UNHCHR, E/CN.4/2006/9, 20 January 2006; A/HRC/4/48, 5 March 2007; A/HRC/7/39, 28 February 2008 and A/HRC/10/032, 19 February 2009.
- 27 During the same period, 10,282 persons died in combat or were victims of crossed fire.
- 28 Out of the 1,392 female victims, the age of 692 is known. Of these 215 were girls, 141 youths, 311 adults and 25 older adults.
- 29 COLOMBIAN COMMISSION OF JURISTS (2009): "Human Rights Situation and the Situation of Humanitarian Law in Colombia July 2007-June 2008".
- 30 Regarding the homicides of girls, boys and adolescents by members of the State Security Forces, the Secretary General of the United Nations states: "In 2008, the magnitude of the problem of extrajudicial executions was made publicly known. According to the Attorney General Office, in November 2008, the number of children victims of extrajudicial executions in the 50 cases under investigation amounted to 51", Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia,, S/2009/434, 28 August 2009, paragraph 34.

*which my nephew died are very strange, but in Ciudad Bolívar it is very difficult to identify uniformed policemen because their motorcycles never have license plates and they never carry reflective vests (...) My nephew was a working young man, in spite of his age, he helped his mother, a 40 year old woman who is deaf-mute*³¹. The Commander of the Metropolitan Police of Bogotá declared through a press release that *"the relevant investigations are underway and, in the meantime, the Command has taken the decision of provisionally suspending the allegedly involved policemen in order to contribute to the investigation"*³².

As to the constant use of weapons outlawed by international humanitarian law, it is worth pointing out that guerrilla groups, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) and the Ejército de Liberación Nacional, ELN (National Liberation Army) have not ceased their indiscriminate attacks and the use of antipersonnel mines against the civilian population³³.

On 20 January 2008, in the Palmira municipality (Valle), a pregnant woman and her nine month old daughter died when they accidentally stepped on an anti-personnel mine installed by an unidentified guerrilla group. After a seven day search, Martha Liliana and the girl Luisa Fernanda Villota Machín were found in a path in the mountains of Combia, Cabuyal jurisdiction, about four kilometers from the farm La Grecia. The woman lost her extremities and crawled with her baby for several meters trying unsuccessfully to save their lives. The body of the girl was found next to her dead mother³⁴.



³¹ EL ESPECTADOR, "Two policemen would have killed a 15 year old young man", 10 March 2009.

³² EL ESPECTADOR, "Policemen under suspicion of murder", See complete video in: <http://www.elespectador.com/policia-nacional/video-policias-sospechosos-de-asesinato>

³³ Report of the Secretary General on children and the armed conflict in Colombia, S/2009/434, 28 August 2009, paragraph 33. Report of the Land Mines Monitor 2008 (Land Mine Report) en: <http://www.icbl.org/lm/2008/countries/colombia.php>.

³⁴ Data Bank on Socio-political Violence of CINEP, Revista Noche y Niebla / No. 37/ 71, DIARIO EL PAÍS 29/01/2008 v.e. y DIARIO EL PAÍS 30/01/2008 v.e.

14 August 2008, eight people were murdered and at least 52 wounded, victims of an attack with explosives produced by alleged members of the 18th Front of FARC-EP guerrilla group. A device which, apparently had been left in a waste basket, exploded around 10:30 at night in a pedestrian way in the urban area of the Ituango municipality (Antioquia). In this case died: Christian Estiven Cossio Barrera, 15 years old; Guillermo Osorio Uribe, 17 years old; José Alejandro Arias Valencia, 18 years old; Darío Pineda Galeano, 18 years old and Alberto Calle Gallo, former Secretary of Government in Ituango and relative of the municipality's Mayor. Two volunteers of the fire corps who were walking in that area, and a still unidentified person, also died. Among the wounded are the following persons: a 4 year girl, whose name is unknown; 10 year old Juan Sebastián Oquendo Misas; Andrés Palacio, 15 years old; John Fernando Oquendo, 16 years old; Luis Fernando Craciano, 16 years old; Gilbert Alexis Sucerquia, 16 years old; Juan Fernando Betancur, 17 years old; Arley López Henao, 25 years old; Elkin Alberto Higueta, 32 years old; Andrés Arredondo García, member of the National Police Force and Jaime Orozco López³⁵.



For their part, paramilitary groups, in spite of having announced a cessation of hostilities in the framework of the negotiation process with the National Government, continue to commit violations against the right to life of the civilian population of boys, girls and adolescents³⁶.

On 23 July 2008, in the municipality of Puerto Escondido (Córdoba), alleged paramilitaries abducted, tortured and murdered the boys Rony Ricardo Díaz Babilonia, 14 years of age, and Norbey Miranda, 16 years of age. The perpetrators took their victims to an uninhabited area on the banks of Canalete River of Puerto Escondido; once there, they tied them, tortured them repeatedly until they caused their deaths³⁷.



35 COLOMBIAN COMMISSION OF JURISTS (15 August 2008): "The Colombian Commission of Jurists rejects the massacre against the population of Ituango (Antioquia)", Press Release.

36 Over 4,500 persons have been registered as dead or forcefully disappeared by them since the President of the Republic announced, on 1st December 2002, that negotiations had been formally initiated with the paramilitary, and that they would be conditioned to their commitment to ensure that there would not be a single additional death. It is noteworthy that, in relation to the denunciations made for these facts, the Government's High Commissioner for Peace stated that "the cease fire [was] a metaphor that should be handled with a great deal of flexibility".

37 CINEP Data Bank, Revista Noche y Niebla No. 38 page 96.

On the right to personal integrity and the different forms of violation committed in the context of the armed conflict in Colombia against boys, girls and adolescents by all the groups that participate in hostilities, acts of torture, cruel treatment and personal injuries have been identified³⁸. The following are some representative cases.

On October 12, 2008, in the municipality of Neiva (Huila), older adult José Cardozo was murdered and 11 persons were wounded by alleged members of the FARC guerrilla. Among the persons wounded were the child Diego Alejandro Cardozo, 16 years of age and the girls Heler Dayana Rivera and Linda Dayana Vega of 11 and 10 years of age respectively. This happened as a result of an indiscriminate attack carried out by members of the Mobile Teófilo Forero Column of FARC in front of two hotels in the municipality. The blast of explosive devices occurred in front of the Plaza and Sulicam hotels, located in the center of the capital of Huila. The explosions were registered at 5 minutes intervals, while the guests of the hotels rested³⁹.



On 16 December 2008, in the municipality of Puerto Libertador (Córdoba), alleged paramilitaries who got around in several vehicles, arrived at a place where a group of persons were gathered and started shooting at them. This caused the death of Omar Jacinto Muñoz Guerra, who was a teacher, Armando Ceballos, Facundo Peralta, Manuel Alfredo Pacheco and the couple Eduardo Hernández and Neris Urango. In this act, the daughter of the couple, 4 year old Wendy Hernández Urango was wounded. This happened at Puerto Libertador⁴⁰.



As to violations to the right to personal freedom against boys, girls and adolescents in the context of the internal armed conflict, according to the Observatory of the Presidential Program on Human Rights and International Humanitarian Law, in 2008, 75 persons under 18 years

³⁸ Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia, S/2009/434, 28 August 2009.

³⁹ DAILY EL COLOMBIANO of 14 October 2008, electronic version; DAILY DEL HUILA 14 October 2008, electronic version; "FARC reactivate terrorist attacks in Neiva: 1 dead and 11 wounded", RADIO SANTAFÉ News 13 October 2008.

⁴⁰ CINEP Data Bank, Revista Noche y Niebla No. 38 pages 204-205.

of age were kidnapped⁴¹. It has been proven that the FARC and ELN guerrilla groups repeatedly commit the war crime of hostage taking. During the last few years abhorrent cases have been known, such as the case of children victims of hostage taking or born in captivity of the FARC guerrilla. Likewise, paramilitary groups have carried out this type of deprivation of liberty against young civilian population.

In January 2008, the situation endured by a child born in captivity was verified. It is the child of Clara Rojas, a woman who was kidnapped by the FARC-EP guerrilla group for over five years. The child was in the hands of the armed group during its first months of life in company of his mother and then was handed over to José Crisanto Gómez, a man who stated that he had taken the child the FARC-EP had handed over to him to a hospital in San José del Guaviare (300 kilometers Southeast of Bogotá). Emmanuel was born on 20 July 2004 and was handed over to a hospital in the South of the country on 15 June 2006. Months later, ICBF, having found the child in situation of abandonment, assigned him to one of its attention programs. However, after the effort to free three kidnapped persons, among whom was the child, at the time of liberation of the mother in January 2008, the State reported to public opinion that the child had been in custody for several months⁴².



For their part, members of the State Security Forces persist in frequently conducting arbitrary detentions against persons under 18 years of age. In the development of such deprivation of liberty, they incur in acts of torture and cruelty, inhuman and degrading treatment, among other violations, as described below:⁴³

- 41 "In July 2008, 18 persons, including 2 boys aged 1 and 5, were kidnapped by the FARC-EP in the Department of Chocó. In November 2008, in the Department of Antioquia, the FARC-EP tried to kidnap a 3 year-old girl and threatened with death 15 families for collaborating with the National Army. This forced them to displace", Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia, S/2009/434, 28 August 2009, paragraphs 40 and 41
- 42 "Clara Rojas visits her son Emmanuel in an orphanage", DAILY EL PAIS, 14 January 2008 www.elpais.com; "ICBF will hand over Emmanuel when Clara Rojas so decides", DAILY EL TIEMPO, 11 January 2008, www.eltiempo.com. "FARC/hostages: the riddle of DNA", BBC Mundo/ América Latina, Thursday, 3 January 2008, in http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7168000/7168297.stm
- 43 DAILY EL ESPECTADOR "A witness describes how the policemen burned the young men". 10 February 2009. DEL SUR DAILY "Nearly 200 persons protested on behalf of the burned youths", 1st March 2009, and Basis of the denunciation of the Colombian Commission of Jurists, No. D-09005 and D-09012

8 February 2009, in Bogotá, the boys Jhonatan Ricaurte y Oscar Beltrán were victims of arbitrary detention and torture by members of the National Police. After being deprived of liberty, the children were led to the Police Station in the Rafael Uribe Uribe locality and were imprisoned with adults. While there, the children were taken out of the cell, handcuffed to the bars, sprayed with gasoline and set on fire by members of the National Police. Apparently the children had been deprived of liberty based on Decree 587 of 2007, issued by the Bogotá Mayor's Office, which forbids boys and girls under 18 years of age *"to stay or circulate between eleven at night and five in the morning, without the company of their parents or a responsible relative"*⁴⁴.



Acts of sexual violence by combatant groups against women, as well as those perpetrated against the infant population, are used as war weapons in the framework of the conflict⁴⁴. Besides, this type of crime occurs recurrently in situations of abuse of authority by members of the State Security Forces.⁴⁵

On 14 June 2009 in Bogota, nine members of the Bogota Metropolitan Police sexually abused a 12 year old girl. The facts occurred in a tent installed by displaced persons in Third Millennium Park. In the mentioned park, a groups of approximately 1,000 displaced persons had settled down several months earlier, demanding that the State guarantee their rights. The displaced persons concentrated in the place were living in conditions of over-crowding, poverty and discrimination. The Attorney General Office issued arrest warrants against nine members of the Police for the crimes of aggravated abusive carnal access and child pornography. According to the sources, what led the Attorney General Office to impute them of the crime of pornography, was that some of those involved filmed the sexual abuse in videos which were later broadcasted by the media. The girl is under custody of the ICBF⁴⁵.



⁴⁴ On this, see Report Work Table on Women and Armed Conflict 2008; Report of the Secretary General on children and armed conflict in Colombia. S/2009/434, 28 August 2009, paragraph 36 International Committee of the Red Cross, CICR, Colombia Annual Report: Annual Report 2006, page 35; Annual Report 2007, page 43; Annual Report 2008, page 64.

⁴⁵ GENERAL ATTORNEY OFFICE "They arrest nine Auxiliary Policemen for violating a minor", Press Release, 30 July 2009, in fgn.fiscalia.gov.co; "Policemen accused of abusing a minor", EL TIEMPO DAILY, www.eltiempo.com; "Auxiliary policemen to prison for abusing a minor" EL TIEMPO DAILY, 31 July 2009, pages 1-27; "Nine Policemen Imprisoned", EL ESPECTADOR, 31 July 2009, page 7.

In relation to the war crime of recruitment, there is a serious concern regarding the large number of boys, girls and adolescents that are incorporated to the ranks of the illegal armed groups in Colombia⁴⁶. The war crime of recruitment⁴⁷ of persons under 18 years of age constitutes one of the most constant and repeated violations to the rights of children in Colombia and although the number of boys, girls and adolescents involved in armed groups is difficult to estimate⁴⁸, it has been calculated that at least one of every four combatants is under 18 years of age⁴⁹. In spite of their obligations under international humanitarian law and some of the commitments they have made, the armed groups that participate in the conflict continue to involve boys, girls and adolescents in its dynamics.

Taking into account the above described setting, it is possible to forewarn the situation of risk and vulnerability of boys, girls and adolescents in Colombia and the need to put an end to the armed conflict immediately. The effects suffered by this sector of the population have a devastating social and individual impact and it is not possible to maintain a policy of impunity of the violations, as has been the case. Thus, it is necessary to set adequate prevention and protection measures on behalf of the infant population to guarantee the non-repetition of the crimes.

⁴⁶ Report of the Secretary General on children and the armed conflict in Colombia, S/2009/434, 28 August 2009.

⁴⁷ Article 8 of the Rome Statute establishes war crimes as those serious violations to the four Geneva Conventions of 1949, their two Additional Protocols of 1977 and the laws and uses of war in the context of international armed conflicts as well as those that are not international.

⁴⁸ UNICEF estimates that the number of boys and girls involved with armed groups ranges between 6,000 and 7,000. UNICEF, Colombian Children in Numbers, Bogotá, 2002, page 42; HUMAN RIGHTS WATCH, in its report: You will learn not to cry, considered that the figure could exceed 11,000 children. HUMAN RIGHTS WATCH, You will learn not to cry: Child combatants in Colombia, September 2003, page 5 and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in its 2004 report on Colombia considered that there could be 14,000, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Colombia, document E/CN.4/2003/13, 24 February 2003, paragraph 45.

⁴⁹ HUMAN RIGHTS WATCH (2003): You will learn not to cry: Child Combatants in Colombia. Report. New York.

2. GENERAL APPLICATION MEASURES

Regarding dissemination of the content of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts, there were some public events carried out by civil society organizations and state entities that are worth mentioning.

- Activities of the Colombian National Army regarding the International Day against the Use of Child Soldiers, which they celebrate since 12 February 2002. *"On this date, the anniversary of the ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of boys and girls in armed conflicts is celebrated. This celebration is meant to call the attention of the international community on the situation of so many child soldiers in more than twenty countries in the world"*⁵⁰.
- Campaign called: Initiative to prevent the involvement of children in the armed conflict – "The first right of children is to be children". Organized by ICBF, the Ombudsperson's Office, the United Nations Children's Fund (UNICEF), the International Labour Organization (OIT), and the International Organization for Migrations (IOM), with the support of the United States Agency for International Development (USAID), the Swedish Agency for International Cooperation and Development and the Embassies of Sweden and Norway. This campaign took place in January 2004.
- Campaign "No more recruited children and adolescents", carried out by the Ombudsperson's Office with the support of the United Nations High Commissioner for Refugees, (UNHCR) and the Norwegian Council for Refugees since 29 October 2008⁵¹.

⁵⁰ "International Day against the use of child soldiers" in: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=189258>

⁵¹ SOACHA MAYOR, CUNDINAMARCA "Launching of the Recruitment Campaign at national level will be in Soacha", in: <http://soacha-cundinamarca.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=C1p1--&x=1483833>

- Round Table: "The Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts and the sale of children, child prostitution and the use of children in pornography", organized by the Ministry of Foreign Relations and ICBF in Bogotá, on 28 February 2008. The event was organized with the support of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Colombia (UNHCHR) and UNICEF. Ms. Rosa María Ortiz, member of the Committee on the Rights of the Child and Mr. Noberto Liwski, former member of the mentioned Committee participated as lecturers.
- Event held on 6 November 2006, under the name: "Child protection against abuse and violence", consisting in a performance for the rights of children by the artist Fernando Pertuz⁵².
- Campaign called: "We, boys and girls do not want to be in the war", aimed at the adoption of the internal code of the Optional Protocol. It was organized by the Coalition against the involvement of girls, boys and youths in the armed conflict⁵³.
- Event called "V Anniversary of the entry into force of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts", organized by Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Jose Alvear Restrepo Lawyers' Collective (CAJAR)), on 12 February 2007.
- Press Release on sentence C-203 of 2005 of the Constitutional Court of Colombia which declared the acceptance of paragraph 2 of Article 19 of Law 782 of 2002. The document was prepared by the Coalition against the involvement of boys, girls and youths to the armed conflict, 11 March 2005.
- Press Release: "New attempts of paramilitarism to involve schools in the war strategy", prepared by the Coalition against the involvement of boys, girls and youth in the armed conflict in Colombia, 26 July 2007.

⁵² "INTERACTIVE PERFORMANCE: Rights of the Child, INTERNATIONAL DAY AGAINST CHILD ABUSE" in: <http://www.fernandopertuz.com/Pertuz-Performance-Derechos-de-la-Ninez.htm>

⁵³ Joint initiative of the Coalition against the involvement of boys, girls and youths in the armed conflict in Colombia and the International Coalition to end the use of child soldiers, which seeks to sensitize national and international public opinion on the situation suffered by the boys, girls and youths in Colombia who are directly or indirectly involved in the armed conflict, in order to call the attention of the National Government and the parties at war to respect girls, boys and youths as subjects of rights", June 2008, in: <http://www.comminit.com/es/node/271138/2714>

3. PREVENTION

3.1. Involvement with State Security Forces

"Children come closer more easily (...) the National Police and the Army approach them, they find the way, that is to say, they organize activities that appeal to them, or they give them food"⁵⁴.

According to provisions of laws 418 of 1997, 548 of 1999 and 642 of 2001, the Military Forces of Colombia must not recruit persons under 18 years of age into their ranks, not even with the parents' consent. The above notwithstanding, national and international human rights organizations have verified that although there is no formal recruitment of boys, girls and adolescents, this population is used indirectly through their involvement in intelligence activities, "civil-military" campaigns and programs, recreational activities and support tasks (transportation, domestic chores, etc.), which put them at grave risk before combatant groups, besides being contrary to International Humanitarian Law, and particularly, the principle of distinction.

This practice, on which there are important denunciations since 1998, persists to this date. This constitutes a reason for concern on the part of United Nations organizations. This is confirmed by UNHCHR reports since 2005 to this date, and the declarations of the Secretary General in his 2007 and 2008 reports, and in the First Country Report to the Security Council on the Application of Resolution 1612, where he points out that "[t]he Government armed forces have used children for intelligence tasks, in spite of the Government's official policy against this"⁵⁵. Regardless of permanent Directive 048 of 2008 of the General Command of the Military Forces, that expressly establishes the prohibition of the use of boys, girls and adolescents in intelligence activities,

⁵⁴ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTHS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): A Journey through the Colombian School from the perspective of the Rights of Infancy and Adolescence 2006 - 2007. Page 39.

⁵⁵ Report of the Secretary General to the Security Council. United Nations document A/62/609-S/2007/757, 21 December 2007, paragraph 114.

logistic tasks, operations, patrolling or similar activities (guides, informants, messengers, etc.), further establishing the obligation to guarantee the security and integrity of the boys, girls and adolescents recovered from the armed groups while they are handed over to ICBF, as the highest office in charge of their protection, this practice continues to be used systematically. According to consolidated information, between 2005 and 2008, cases of use of children by the State Security Forces have been registered in departments such as Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca and Putumayo⁵⁶.

Civil-Military Campaigns and Programs

"Of course, now there are no minors in the army. But they are supposed to be an armed actor; then I ask myself, why an armed actor gives so many speeches in schools talking about recruitment and they exclude us from their speeches when we say that we do not agree with what is related with military behavior and conduct that is used in the life of our peoples?"⁵⁷.

These campaigns and programs held in communities or educational institutions include pedagogical, ludic or humanitarian activities such as health brigades, recreational activities and educational campaigns. Although at the beginning these activities are presented as a service and a social benefit for the community, in the end, state security forces are ascribed tasks that are not within their competence and they put the population involved at risk, turning it into a military objective. In addition, the military are assigned activities that should be exclusively carried out by other state entities, such as the Ministries of Education and Social Protection, in line with their missions. The direct contact of uniformed men with the boys, girls and adolescents cause them to take in and admire military values, acclaim this model as a life option and generate familiarity with badges and symbols belonging to this institution. This way, the uniform, the weapons and the figure of the courageous hero become images of power, liberty and autonomy for boys, girls and adolescents. The development of these activities often goes together with intelligence activities aimed at finding out about the activities of parents and relatives and information about the presence and activities of armed groups in the area.

⁵⁶ Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia, 28 August 2009, S/2009/434, paragraph 23; Report of the Secretary General to the United Nations Security Council on Children and Armed Conflicts, 26 March 2009, A/63/785-S/2009/158, Paragraph 114; and Children and Armed conflict, Global Report of the Secretary General to the Security Council, 21 December 2007.

⁵⁷ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2008): PÚT-CHIPU BULLETIN No. 20 "Conscientious youths who also have feelings".

These activities are constantly reported on the web page of the national army, illustrated with photographs of boys, girls and adolescents embracing soldiers or referring to celebrations where their civic role in support of the community is praised⁵⁸. Many of these activities are conducted in school premises which poses a risk and threatens the neutrality these institutions should offer. The communities affected by these programs hold that these activities put boys, girls and adolescents at a greater risk regarding the effects of the conflict or their involvement. Emblematic examples in this sense were found in Chocó (in municipalities such as Quibdó, Piedra Honda, Tutunendo and Cuajandó) and Bolívar (in the municipalities of María La Baja, Turbaco and Carmen de Bolívar) where members of the armed forces interfere with the educational contents and develop cleanliness campaigns, ecological days, ludic activities and hand out didactic material and school supplies⁵⁹.

It has also been confirmed that in areas of the Bolívar Department, these integration activities include lunch, paid for by the military command, and “personalized” protection to victims of forced displacement⁶⁰, putting these people at risk of revictimization. In the Sincelejo municipality (Sucre), these activities include lending arms for firing range exercises⁶¹. Likewise, there are countless cases of commemoration acts throughout the country where boys, girls and adolescents participate wearing uniforms of some of the branches of the State Security Forces⁶².

Some programs include conducting community activities and providing social services with a group of boys, girls and adolescents that is regularly taught over a period of time. However, it is noted that during practice in these programs, activities related to military instruction are included, such as physical exercises, subordination relations, tactic instruction in public order situations and activities with the purpose of generating an emotional impact that fosters the perception of the “*kind warrior*” and a “*just war*”. Within these programs it is worth mentioning

58 Web of the National Army, <http://www.ejercito.mil.co/>. See news such as: Achí population benefits from a civil-military day. 26 November 2007; The children of Mocoa have a good time with the Geos groups of Jungle Brigade 27. 4 September 2007; The 16th Brigade increases its integration with the Casanare community. 25 June 2007; Lancita and its friends greet travelers. 22 May 2008; The children of Arauca united to their Army in: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=78190>; Children from the Catatumbo region will visit other regions of Colombia. 11 May 2009. Indigenous communities celebrate their day with the army. 11 August 2009.

59 Coalition against the Involvement of Boys, Girls and Youths in the Armed Conflict in Colombia (2007): op.cit. pages 49-63.

60 Ibid. Page 43.

61 Idem.

62 An example of this occurred in the La Cruz neighborhood in Medellín on 12th April 2008, inhabited by displaced population, when a small road was inaugurated. The main act was responsibility of the local police and more than 20 children were presented with police uniforms as part of the police's civil action. CORPORACIÓN PAZY DEMOCRACIA (PEACE AND DEMOCRACY CORPORATION) (May 2008): “The Antioquia case. Follow up report submitted to the Special Representative of the Secretary General on the issue of children and armed conflicts during his mission to Colombia”. Bogotá.

the program developed since July 2007 in Antioquia by the Colombian Air Force, called the "Falcon Group", in which 73 children, between the ages of 8 and 16, are trained by Air Command No. 5 of the Rionegro municipality in activities aimed at "*rendering a service to the homeland*"⁶³, the Youth Civic Police program implemented since 2008 in the municipalities of Patía (Cauca) and Vista Hermosa (Meta) with boys and girls between the ages of 7 and 14⁶⁴, the "Club Lancita" program, as an entertainment and educational program for children and youths between the ages of 5 and 16, implemented in several municipalities of the country⁶⁵, experimental laboratories implemented in Comunas 3 and 4 of Buenaventura (Valle del Cauca) and led by ICBF, SENA and the National Navy⁶⁶, the institutional program "Getting to see Colombia", implemented with boys, girls and adolescents of the Catatumbo region (Norte de Santander) by the National Army and the Department's Governorship, including support from private enterprises (Apuestas Cúcuta 75, the Bolívar Hotel, Bancalzado and Carrefour)⁶⁷, and the program "Soldiers for a day", which continues to be implemented in several areas of the country with minor modifications, in spite of the pronouncements made by the General Procurator Office in 2003 regarding its inconvenience⁶⁸, and regardless of the recommendations made in 2008 in the context of the Universal Periodic Examination implemented for the Colombian Government by the Human Rights Council⁶⁹.

Many of these programs comprise activities that are carried out in military garrisons, thus increasing the danger for the boys, girls and adolescents involved. Such is the case of the ac-

63 COLOMBIAN AIR FORCE "Youth Falcon Group", September 2007, in, www.cacom5.mil.co/

64 CORPORACIÓN VÍNCULOS (June 2009): Internal analysis document

65 Such as: Puerto Wilches, Neiva, Cocorná, Florencia, Oasis, Carmen de Bolívar, Bucaramanga, Bogotá, Florencia, Segovia, Anorí, La sierra, Rivera, Puerto Berrio, Caracolí. On this see: <http://www.clublancita.mil.co>

66 ICBF, SENA and the National Navy train vulnerable population, Bogotá, 29 April 2008, in: http://www.icbf.gov.co/Noticias/doc_noticias/doc-mar-abr-8/Capacitacion%20poblacion%20vulnerable.pdf

67 Children from the Catatumbo region will get to see other regions of Colombia. 11 May 2009, in: <http://www.segundadivision.mil.co/?idcategoria=223711>

68 THE GENERAL PROCURATOR OFFICE: The Arauca Rehabilitation and Consolidation Area, Special Report, without date, mimeographed, 28 August 2003.

69 In the recommendations made by the Report on the session of the Universal Periodic Examination on Colombia adopted by the Working Group of the Human Rights Council, Slovenia recommended putting an end to the "Soldier for a Day" program as it implied the use of boys, girls and adolescents by the State's Security Forces. However, the Government rejected the observation arguing that the program does not contradict the principle of distinction and does not turn boys, girls and adolescents into military objectives. On the contrary, it reaffirms that the program strengthens relationships between the civilian population and the armed forces, providing social services to rural communities where the armed forces is the only State presence. On this, see: Human Rights Council "Draft report of the working group on the universal periodic review Colombia" United Nations document A/HRC/WG.6/3/L.14. December 15, 2008. Para 37. HUMAN RIGHTS COUNCIL "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Colombia Addendum Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review" United Nations document A/HRC/10/82/Add.1. 16 December 2008.

tivities conducted by XVIII Army Brigade in the Arauca Department, involving even children between the ages of four and seven⁷⁰.

Conducting civil-military campaigns and programs with intelligence purposes has been reported by UNHCHR, which denounced that in the rural communities of Carmen de Atrato and Quibdó (Chocó), the Army and the National Police distribute toys and military propaganda material to boys, girls and adolescents, asking for information about the whereabouts of guerrilla groups and the identity of its members in exchange⁷¹.

Use in military and intelligence activities

*"The soldiers often ask children whether their parents are "militias", besides, they motivate them to enroll in the Army. A military person has asked a two-year old girl 'where her father has the grenades', the little girl ran away but they followed her and took her to a cane field (sic) and held her for half an hour. This report was presented to the battalion's authorities and they branded the relatives as liars"*⁷².

On 6th March 2007, the Colombian Ministry of Defense issued Directive 30743 that forbids members of the State Security Forces to use boys, girls and adolescents in intelligence activities, particularly children rescued from illegal armed groups. However, organizations such as the Ombudsperson's Office, UNHCHR, UNICEF and human rights NGO's have continued to report cases of persons under 18 years of age, particularly those demobilized from illegal armed groups, who have been under pressure to provide information, participate in operations and identify members of the groups they belonged to⁷³.

In the Cauca Department, a boy demobilized from FARC was used by alleged members of the XXIX Brigade as informant for the armed forces in an operation, and later, at the age of 19, he was killed in combat with FARC⁷⁴. In the Bolivar Department, an 11 year old boy was used

⁷⁰ Children from Arauca united with their Army in: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=78190>

⁷¹ OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (19 February 2009): Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Colombia. United Nations document A/HRC/10/032. Paragraph 36.

⁷² COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTHS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): Op. cit. Page 40.

⁷³ As has been denounced by the OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN (5 March 2007): Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Colombia. United Nations document A/HRC/4/48. Paragraph 97

⁷⁴ Information provided by the Ombudsperson Office and reported in the Report of the Secretary General to the Security Council. United Nations document A/62/609-S/2007/757, 21 December 2007.

as guide by alleged members of the Nueva Granada Battalion in a military operation⁷⁵ and the death of another one, due to an explosive device while he was forced to transport Army troops in San Pablo (Bolívar), was recorded⁷⁶. In the Putumayo Department, boys, girls and adolescents are persuaded to give information in exchange for rewards⁷⁷ and a case was known of an 11 year old who was murdered by FARC-EP for being an informant⁷⁸.

Regarding the use of boys, girls and adolescents in intelligence activities, one concern is the continuous arbitrary detentions of persons under 18 years of age demobilized from the armed conflict, who are kept in military battalions and garrisons for non-authorized periods, ignoring the 36 hour term established by Decree 128 of 2003 to hand them over to the corresponding authorities. According to information of the Ombudsperson's Office, *"boys and girls –particularly those coming from the guerrillas- who have stayed in military facilities for periods of over 36 hours have been pressured to provide information to members of the State Security Forces, as well as to participate in operations and point to or denounce the members of the group they come from"*⁷⁹. The report affirms that only 12.2% of demobilized children incorporated in the ICBF attention program for boys, girls and adolescents have declared to have arrived directly at the program, 32.6% at police stations and 58.9% at military battalions.

Civil society organizations and United Nations agencies in Colombia⁸⁰ have been able to confirm several cases of demobilized boys, girls and adolescents who have remained in battalions for months and who, under pressure, have been forced to provide information on the groups they belonged to and have even been forced to be guides to the camps, putting in serious risk their life and personal integrity. In 2007, the case of a young girl became known, who upon her demobilization when she was still a girl, was illegally kept in a battalion for over eleven months and was forced to serve as guide to a camp, where she was seriously wounded when she stepped on an antipersonnel mine. Currently the young woman is emotionally affected and she

75 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (28 February 2008): Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Colombia. United Nations document A/HRC/7/39. Paragraph 44.

76 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (20 January 2006): Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Colombia. United Nations document E/CN.4/2006/009. Paragraph 68.

77 COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTHS IN THE COLOMBIAN ARMED CONFLICT (2007): Op. cit. Page 40.

78 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (20 January 2006): Op. cit. Paragraph 68.

79 OMBUDSPERSON'S OFFICE (2006): Bulletin No. 9 Characterization of boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups: Social and productive insertion from a human rights approach. Page. 24

80 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (5 March 2007): Op. cit.

lost 90% of her eyesight and 70% of her hearing capacity as a consequence of the explosion of the mine. Her case remains in total impunity⁸¹.

The so-called raids or actions by means of which the State Security Forces unexpectedly pick up young people gathered in squares, parks, street corners, evening schools, among other places, and who do not have a military discharge card, are also cases of special concern⁸². In these actions, persons under 18 years of age or youths specially protected by national laws and exempt from compulsory military service are held in exchange for information and are subjected to cruel and inhuman treatment. In this regard, a matter of great concern is the issuance of Decree 092 of April 2007 which regulates the sea port of Buenaventura (Valle del Cauca) and which authorizes *"to conduct the citizen raids and police controls required in all the territory of Buenaventura, as long as true and objective information is obtained on possible situations that may generate violence threatening citizen security and peaceful co-existence"*⁸³. According to information from the community, since then operations are carried out where arbitrary detentions are made, searches done without a judicial order, and where photos and videos of the inhabitants are made in their houses⁸⁴.

Use in domestic activities, transportation and as messengers

*"Here the military sometimes use children to (...) run errands or are sent to the hills to take them things, leave packages, that is then a form of involvement in the war"*⁸⁵.

In addition to military and intelligence activities, boys, girls and adolescents are used in domestic chores, transportation and as messengers. Cases reported by the United Nations in 2007 in Chocó, where the use of persons under 18 years of age was evident, confirm this⁸⁶. The children

81 Case documented and followed up by the Coalition against the involvement of boys, girls and youths in the armed conflict in Colombia. Detailed information is found in the data base of the Coalition.

82 This situation is identified by the Report of the Working Group on Arbitrary Detention which visited Colombia in 2008, pointing out that: "the detentions made by military personnel are observed with concern, especially because the Army does not have the legal faculties to conduct them, particularly the so-called "raids". Report of the Working Group on Arbitrary Detentions, United Nations document A/HRC/10/21/Add.3, 16 February 2009.

83 Decree 092 of April 2007.

84 Information provided by the Servicio Jesuita para los Refugiados (Jesuit Service for Refugees), SJR

85 COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): Op. cit. Page 44.

86 Report of the Secretary General on children and armed conflicts 2007. United Nations document, paragraph 115

transported materials in Urrau, cleaned and did maintenance of arms in Bebedó, and carried war supplies (backpacks and radiophones) en Curbatá⁸⁷.

In the mission conducted in the Putumayo Department, the Coalition against the involvement of boys, girls and youths in the armed conflict received multiple declarations by teachers and members of the population that informed that the Army attempts to get close to boys, girls and adolescents to involve them in carrying arms, supplies and food, arguing that it is a citizen duty to cooperate with state forces and that besides, that help may receive some type of economic remuneration⁸⁸. In the San Onofre municipality (Sucre), teachers of the educational institution "Libertad", commented that members of the Armed Forces use boys, girls and adolescents as messengers, because often, they cannot move from the assigned places and for this reason, they need someone who can take or pick up correspondence within the urban perimeter⁸⁹. Messengering was also reported in San José de la Fragua (Caquetá)⁹⁰.

Military Schools

"Military discipline is very bad. Human beings become slaves of orders and the hierarchy and this restrains the desires for exploration, freedom of expression to think and to live"⁹¹.

In Colombian society there is a permanent promotion of the involvement of boys, girls and adolescents in the military field in legitimate and socially acknowledged spaces such as military schools, minors police, and mounted police, among others⁹². Currently there are 46 military schools in the country with military instruction regulated by Resolution 00715 of the Ministry of Defense of 11 August 1999.

Students receive military instruction from Grade nine to eleven, that is, between the ages of 14 and 17. Students are considered cadets⁹³ and they obtain a "Technical High School with

87 Information provided in July 2007 by UNICEF

88 COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): Op. cit. Page 39

89 Ibid. Pp.43.

90 COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2009): Card for data gathering applied to Benposta boys, girls and adolescents. Information kept in the data system of the Coalition.

91 Testimony of a grade 11 student of the Military School "Antonio Nariño".

92 Ruiz, Sandra. In: Bello, Martha Nubia y Ruiz, Sandra (2002): Armed conflict, childhood and youth. A psychosocial perspective, National University of Colombia, Fundación Dos Mundos, Ediciones Ántropos. Bogotá.

93 Constitutional Court, Court Ruling T-1032/00 against Military School Simón Bolívar MP Alejandro Martínez Caballero

military orientation" diploma. Instruction implies 1,300 hours of training and 3 campaigns, after which, they obtain a first class military card *"that means that they define their military situation as any soldier because just as them ... they get trained in the different areas that qualify them as combatants"*⁹⁴. The above assumes that there is no clear definition of the limits that define them as official members of the armed forces.

The education provided includes⁹⁵ physical exercise, love of symbols of the homeland, arms handling, firing practices, survival activities, assault with and without arms, mob control training and field campaigns and missions. *"When we started using arms, I had a strong sense of power, which later subsided because it became something normal"*⁹⁶. In terms of strategy, they are taught to think as the enemy thinks. According to the testimonies of students, the enemy is the person that does not agree with the action of the armed forces or state policies.

The atmosphere and decoration of many of these schools is similar to that of battalions; aggressive and military. Murals with war tanks, the homeland's symbols, bellicose emblems. Although the teachers are duly certified, they have taken on military attitudes that permeate pedagogical activities and that are based on the idea that discipline is related to sacrifice, punishment and obedience. This vision, accepted by parents and students, legitimizes mechanisms of "disciplinary control" which imply intimidation over faults, shouting, insults, public stigmatization before leaders and physical punishment such as crouching and running long distances for periods between 30 minutes to three hours.

Most of those interviewed were conscious that they could be considered military targets, as the schools are located near military battalions, receive instruction or conduct campaigns in their premises, their uniforms are similar and in an extreme case, in war times, they could be asked to enlarge the war manpower. They, however, are not concerned as they do not perceive this as a risk. When asked about the motives that moved them to adopt this pedagogical model, more than 50% answered that this is a possibility to get their first class military card without being drafted. They also said that this was not a personal decision, but one taken by their parents.

Taking into account the context of internal armed conflict, this type of education should be eradicated due to the negative effects it involves. The education provided in military schools

94 Senator of the República Luis Elmer Arenas, Presentation of the motives for motion No. 184 of 2001, "By means of which, the military service in Military Schools and Academies is regulated and other provisions are dictated", November 2001.

95 Information obtained through interviews conducted by the Coalition against the involvement of boys, girls and adolescents in the armed conflict in Colombia to 6 youths graduated from military schools and 40 students of grade 11 from military schools in Bogotá.

96 Testimony of a grade 11 student from Military School "Mariscal Sucre".

promotes, in legitimate settings, war as a life option and violence as a mechanism to solve conflicts; it places students in risk situation as they become military target of armed groups; it provides boys, girls and adolescents knowledge that, due to the stage they are in, they are not capable of managing in a responsible way (such as training in the use of arms); and it promotes the acceptance of pedagogical models in which discipline is associated to punishment, roughness, and the restriction of the rights to the free development of the personality and the choice of a different political option.

Impact on girls and women adolescents

"Several young women (who) have children with policemen (...) The military is power, he gets paid, and he can spend; he buys the 'Discman' and he has a way to free them from hunger (...)”⁹⁷.

It is worthwhile to highlight that socialization of the State Security Forces with the communities has particularly affected girls, youths and women, who have been subjected to sexual violence, degrading treatment and discrimination, as confirmed by reports of UNHCHR, UNICEF, UNIFEM, the Ombudsperson's Office and NGO's, which have taken up the subject, as well as the members of the Work table on Women and Armed Conflict, the Colombian Commission of Jurists and the Coalition against the involvement of boys, girls and adolescents in the armed conflict in Colombia. *"In situations of militarization of society and in armed conflict situations, the workload, risks and insecurity for women, youths and girls increase and violence against them becomes more acute”⁹⁸.*

The camouflaged uniform, the cell phone, motorcycles and arms are power symbols that strongly attract the attention of boys, girls and adolescents, creating a positive imaginary of war. In the particular case of girls and young women, it is appealing that the members of the State Security Forces who are stationed in the area are young, that they come from different regions of the country and have the capacity to give them something they do not have: money and the possibility of having access to social security that members of the armed forces are entitled to. *"There are groups of members of the military around who become another element of danger for young boys and girls. We have had difficulties due to harassment of these people*

97 COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTH IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): Op. cit. Page 68.

98 WORK TABLE ON WOMEN AND ARMED CONFLICT (2006): Guide to document violence against women, youths and girls in contexts of armed conflict. Bogotá.

towards girls. (...) we cannot condemn the girls because they look at them. We need to work with them"⁹⁹.

In affected communities, it is a common occurrence that the girls become girl friends of soldiers and policemen and it is well known that there are cases of pregnancies in which the fathers do not respond and then they are transferred. *"There is a close relationship between the police and the civilian population. They make girls between the ages of 12 and 14 pregnant, there are small children without fathers, the girls go to the military garrisons"*¹⁰⁰. An interviewed mother said: *"In the dancing halls, sometimes I see uniformed men dancing with young girls but I tell them that I do not dance with them [if they have] arms or camouflaged"*¹⁰¹. The cases of sexual violence against young women and girls are common and seriously affect their physical and mental health, their self-esteem and personal integrity, increasing the number of pregnancies at an early age and widespread sexual transmission diseases. In other cases, there are poorly performed abortions that generate permanent consequences in the health of adolescents and girls. There is evidence that many cases of abuse are denounced before military authorities without any results.

The communities associate the arrival of the State Security Forces with an increase in sexual violence, adolescent pregnancies, child prostitution, alcoholism and drug-addiction. The association is not fortuitous. According to the records of sexual violence consolidated by the Colombian Commission of Jurists: *"If one observes the behavior of alleged authors by five-year period, it is established that the participation of the Armed Forces nearly tripled in percentage terms, with relation to the previous period. This level of participation of the Armed Forces in sexual violence may also be confirmed upon analysis of State sources. The General Prosecutor Office reported to the organization Sisma Mujer to be in the process of investigating 127 cases of sexual abuse crimes committed between 2001 and 2006 by members of the armed groups that participate in hostilities. According to report of the General Prosecutor Office, the following are the percentages by perpetrator: State agents are attributed 80.3%; paramilitary groups 14.2%; and guerrilla groups 3.9%. Data of the National Institute of Legal Medicine also reveal that for the years, 2006 and*

99 WORK TABLE ON WOMEN AND ARMED CONFLICT (2008): VIII Report on socio-political violence against women, girls and youths in Colombia/Sexual Violence. Bogotá. Testimony heard in the Puerto El Sol village, San Miguel Municipality . Page 115.

100 COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTH IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): Op. cit. Page 69.

101 Idem.

2007, among the armed groups that participate in hostilities, the group of alleged authors with the largest number of records on sexual violence are the State Security Forces"¹⁰².

Another factor of concern is that the State Security Forces use trenches or places of cantonment to have sexual relations with girls and youths, which makes access and control by parents, mothers heads of households or teachers difficult. Many of these place have precarious hygienic conditions but, above all, may involve an additional risk for the girls and adolescents that remain there, not only due to possible acts of sexual violence on the part of other combatants, but also because these places are declared as military objectives by the opposing band. These practices, besides putting at serious risk the physical integrity and health of the girls and youths, generate gender discrimination because they are stigmatized with humiliating nicknames "...behind a mirror, the policemen have written down the names of the women they take to their bunker, they call the women "bitches", "whores", because of their friendliness with them, sometimes too much. Women do not like to be called "whores"..."¹⁰³.

3.2. Involvement with Irregular Armed Groups

*"Many people decide to join an armed group, because they feel safer under its protection. Most have a very vague idea of what the life of combatant means, until it is too late to go back. In exchange for camaraderie, food and protection, children are exposed to illness, physical exhaustion, injuries, sudden death and torture in the hands of the enemy. Many do not have the least contact with their families"*¹⁰⁴.

In Colombia, all groups taking part in the hostilities have subscribed at some point agreements of non-use or recruitment of boys, girls and adolescents into their ranks. The AUC, in the Paramillo declaration of July 26th, 1998, agreed that from that date they would not recruit minors under 18 years into their ranks, nor would they be used in intelligence or surveillance activities, agreement that was reiterated in the framework of the implementation of the Justice and Peace Law, as part of the cessation of hostilities.

FARC, in June 1999, formally offered to the Special Representative of the Secretary General of the United Nations for Children and Armed Conflicts, in which they promised not to recruit any

¹⁰² Work Table on Women and Armed Conflict (2008): VIII Report on socio-political violence against women, girls and youths in Colombia/Sexual violence Bogotá. Page 8.

¹⁰³ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTH IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): Op. cit. Page 74.

¹⁰⁴ HUMAN RIGHTS WATCH (2003): Op. cit. Page 3.

more children under 15 years¹⁰⁵. In June, 1998, in Mainz, Germany, ELN signed the “Puerta del Cielo” agreements, in which they agreed not to recruit persons under 16 years.

In spite of these agreements, these groups continued to involve boys, girls and adolescents in their activities, using them as informants, bell-ringers, combatants and/or sexual slaves. The involvement of boys, girls and adolescents is something that has been noticed with concern since the end of the 1990's, when the first demobilizations of boys, girls and adolescents from illegal armed groups came to the light¹⁰⁶, becoming an important issue in the agenda from 2000¹⁰⁷. Since then, international cooperation organizations and national and international non-governmental organizations have been denouncing the recruitment of persons under 18 years into the armed groups in Colombia, as a permanent activity that indicates that this practice is systematic and general¹⁰⁸. *“In October 2008, the Constitutional Court of Colombia also stated that illegal armed groups were recruiting children in Colombia in a general, systematic and habitual way, and that the true dimension and territorial reach of these recruitments were not yet known”*¹⁰⁹.

Recently, it has been noted that the phenomenon, far from decreasing has increased considerably in the last years. This is corroborated by the declarations of Hilde Johnson, Deputy Director of UNICEF, who declared that, according to fieldwork carried out in the country by this agency, in 2008 the number of minors under 18 years recruited by the illegal armed groups increased¹¹⁰. Similar statements were given by the prosecutor of the International Tribunal on Children Affected by War and Poverty (Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza), Sergio Tapia, who attributed the growth to the new paramilitary modalities and the organized violence that make the internal armed conflict even more complex¹¹¹. Although there are no exact figures and those that exist are the result of extrapolations, Tapia affirms that at present the number of boys, girls and adolescents involved with the armed

105 Special Representative of the Secretary General of the United Nations for Children and Armed Conflict, after his humanitarian mission to Colombia, Press Release HR/4418, 9/06/99.

106 OMBUDSPERSON'S OFFICE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS (2008): Ethical judicial System for the attention of boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups. Bogotá.

107 According to the State of the Art carried out by the Observatory on Infancy of the National University of Colombia in 2002, it is from 1996 that the subject becomes relevant and visible in the political agenda of the State and civil society.

108 The recruitment of boys, girls and adolescents is a phenomenon that is being noticed since 2004, as it is a subject recurrently reported in the reports of the Secretary General, UNHCHR, UNICEF, Ombudsperson's Office and several NGO's.

109 Report of the Secretary General on children and the armed conflict in Colombia, 28 August 2009. Document No. S/2009/434. Paragraph 16.

110 EL TIEMPO. “UNICEF alerts on the increase of children recruited for the war in Colombia”. 24 October 2008.

111 CARACOL RADIO. “International NGO says that the recruitment of minors in Colombia increased”. 1st November 2008.

groups may be estimated in 25,000, when historically a figure that varies between 6,000¹¹² and 14,000¹¹³ has been used. The economic recession the world faces and that already affects the country is also a matter of concern, since as it has been stated by Paul Martin, UNICEF Director, *"this crisis could increase the number of children that are part of the ranks of these organizations in Colombia, because the illegal armed groups are not going to suffer the same recession as the poor of the country and will continue to offer one million pesos to children, who suffer increasingly as a result of the crisis and are going to be ever more willing to accept these incentives"*¹¹⁴.

It would then seem that the new findings on the subject were ever more disheartening. This is noticed in the increasing number of boys, girls and adolescents in the irregular armed groups, as well as in the early ages of involvement. In 2006, the report of the Ombudsperson's Office¹¹⁵, found that the average age of recruitment decreased between 2001 and 2005, from 13.8 to 12.8 years of age. We could then affirm that the trend shows an increase of recruitment and a systematic use of ever younger children.

The involvement with irregular armed groups is a threat suffered by the boys, the girls and the adolescents of 84% of the departments of the country¹¹⁶. The evidence of the danger has been documented by the Early Warning System (SAT, the acronym in Spanish) of the Ombudsperson's Office, that in 2007 warned of 90 situations of risk (risks reports and follow-up notes), 60% of which warned of possible risk of recruitment of boys, girls and adolescents by guerrillas, paramilitaries and other groups that are rearming after demobilization¹¹⁷. Likewise, in 2008 it issued over 20 warnings in 44 municipalities of 14 departments of the country, establishing as high risk areas the departments of Antioquia, Caldas, Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca (Soacha), Guaviare, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Vaupés, among others¹¹⁸. On their part, national and international human rights orga-

112 Ombudsperson's Office and UNICEF (December 2002): "Children in the Colombian Armed Conflict", Boletín La Niñez y sus derechos No. 8.

113 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Colombia, 2002.

114 EL TIEMPO. "Recruitment of minors in armed groups could increase as a result of the economic crisis, warns UNICEF", 11 February 2009. See: http://www.eltiempo.com/colombia/politica/reclutamiento-de-menores-en-grupos-armados-podria-aumentar-por-crisis-economica-advierte-unicef_4809206-1

115 OMBUDSPERSON'S OFFICE (2006). Bulletin No. 9. Characterization of the boys, the girls and the adolescents demobilized from the illegal armed groups: Social and productive insertion from a human rights approach.

116 The Ombudsperson's Office has stated in its investigations that children have been recruited by illegal armed groups in 27 of the 32 departments of Colombia. See OMBUDSPERSON'S OFFICE (2006): Bulletin No. 9. Characterization of the boys, the girls and the adolescents demobilized from the illegal armed groups: Social and productive insertion from a human rights approach.

117 OMBUDSPERSON'S OFFICE. Press Release No. 1336. 28 August 2008.

118 See: OMBUDSPERSON'S OFFICE. Press Release No. 1336. 28 August 2008. SEMANA "The Ombudsperson's Office warned about recruitment in Soacha and Ciudad Bolívar". 25 September 2008.

nizations have also reported cases of recruitment, between 2005 and 2008 in these and other departments such as Amazonas, Arauca, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima and Valle del Cauca.

Additionally, it is important to emphasize that the dynamics of recruitment by all groups participating in the hostilities have been transformed. Since 2005, national and international human rights organizations have registered recruitments with the following characteristics:

- *Massive recruitment*: as the cases that occurred in the south of Bogotá (30 boys, girls and adolescents recruited by paramilitary groups)¹¹⁹; Cartagena – Bolívar (100 boys, girls and adolescents recruited by paramilitary groups)¹²⁰; Cali – Valle del Cauca (24 boys, girls and adolescents recruited by paramilitary groups)¹²¹; Mitú – Vaupés (25 indigenous boys, girls and adolescents recruited by the guerrilla group FARC)¹²² and Rioblanco – Tolima (100 boys, girls and adolescents recruited by the guerrilla group FARC)¹²³. Similar actions have occurred in the region of Montes de María (Caribbean Coast), and the departments of Chocó and Arauca¹²⁴.
- *In areas of difficult access*: places in which apparently there were no records, as the case of Guaviare, Vaupés and Amazonas.
- *Particularly affecting*:
 - » *Indigenous communities*: registering cases of recruitment in the Nasa communities (Cauca) by FARC¹²⁵, Awa (Nariño) by FARC and ELN¹²⁶, Inga (Putumayo) by FARC¹²⁷, 8 ethnic groups from Vaupés Department, as the Kubeo and Yuruti peoples, by FARC¹²⁸, and Motilón Barí

¹¹⁹ The self-defense groups have recruited more than 30 minors in the South of Bogotá, Caracol Radio, 10 September 2007, in: <http://www.caracol.com.co/noticias/490953.asp>

¹²⁰ UNICEF, information provided on 9 July 2007.

¹²¹ UNICEF, information provided on 9 July 2007. information reported in Diario El País, 6 June 2007.

¹²² Information reported by the Ombudsperson's Office, September 2008.

¹²³ Information reported by the Ombudsperson's Office, April 2009.

¹²⁴ UNICEF, information received on 9 July 2007.

¹²⁵ "FARC continue to recruit children for the war". 4 March 2008. In: <http://www.terceradivision.mil.co/index.php?idcategoria=200003>

¹²⁶ In the matter, see: 1) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (20 January 2006): Op. cit. Annex 2 Paragraph 82. 2) Organización Mundial contra la Tortura, OMCT (World Organisation Against Torture). "Serious violations of human rights against the AWA indigenous community in Nariño", 24 June 2009, in: <http://www.omct.org/index.php?id=&lang=es&articleSet=Appeal&articleId=8576>

¹²⁷ Office of the High Commissioner of the United Nations for Human Rights (20 January 2006): Op. cit. Paragraph 63.

¹²⁸ a) EL ESPECTADOR. "It is being denounced that FARC have recruited nearly 42 native Colombians in Vaupés", 4 June 2009. In: <http://www.elespectador.com/articulo144045-denuncian-farc-han-reclutado-cerca-de-42-indigenas-el-vaupes> b) Information given by Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. (National Indigenous Organization of Colombia)

(Norte de Santander) by paramilitary groups¹²⁹, among others. The evidence of what happened came to light in 2005 when, due to the imminent recruitment of indigenous boys, girls and adolescents, the Ombudsperson's Office, with the support of IOM, the Latin American Association for Human Rights (Asociación Latinoamericana para los derechos humanos -ALDHU), and indigenous organizations, conducted a process of consultation and coordination to produce the "Judicial Road Map for Indigenous Peoples"¹³⁰, establishing a specialized attention guide for demobilized indigenous boys, girls and adolescents.

- » *Women*: All groups have committed acts of sexual violence, particularly against girls and adolescents. Their bodies are used as war loot, marking the reprisals committed by one or the other group. As stated by the Rapporteur on the Rights of Women of the Inter-American Commission on Human Rights, in her report on Colombia: "*The recruitment of women and girls may be accompanied by sexual violations by members of the armed group, the imposition of forced abortions and the use of contraceptives, sexual slavery, and harassment by their superiors and other members*"¹³¹. The departments with more reports of homicides, threats and sexual violence against women attributed to FARC-EP, ELN and paramilitary groups are Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo and Valle del Cauca¹³².
- » *Displaced persons*: in August 2007, the Ombudsperson's Office, UNHCR, UNICEF and the Colombia Coalition, among other social organizations, denounced, in an audience before the Constitutional Court, that in 13 departments of the country the illegal armed groups recruit displaced boys, girls and adolescents¹³³. As a result of this audience, the Constitutional Court issued several Court Ruling, requesting information from the General Prosecutor's Office on the actions carried out to investigate these acts¹³⁴. "*There are signs that the camps of refugees and internally displaced persons frequently are often the preferred areas for the*

¹²⁹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (20 January 2006): Op. cit. Paragraph 63.

¹³⁰ OMBUDSPERSON'S OFFICE, Latin American Association for Human Rights, IntERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (2005): Ethical Judicial System for Indigenous Peoples: Pedagogical Guide, Bogotá.

¹³¹ Inter-American Commission on Human Rights: Women Before Violence and Discrimination Derived from the Armed Conflict in Colombia. 18 October 2006. Paragraph 89.

¹³² Information reported by UNHCHR in 2007.

¹³³ CARACOL RADIO. "Displacement of children in 13 departments is denounced", 29 June 2007 in: <http://www.caracol.com.co/noticias/>, consultation date: 12 July 2007.

¹³⁴ CONSTITUTIONAL COURT. Court Ruling No. 171, 4 July 2007.

recruitment of children as soldiers, due to the convenient fact that a good number of vulnerable children are concentrated in them"¹³⁵.

» *Demobilized*: MAPP/OAS has been denouncing in its quarterly reports that forced recruitment is affecting the demobilized population, that continues to strengthen the ranks of illegal groups¹³⁶, and identifies the following territories as those of greater concern: Urabá, Bolívar, Santander, Antioquia, Magdalena, Córdoba, and Chocó¹³⁷.

- *Causing direct effects on the displacement phenomenon*: In the report of the International Committee of the Red Cross, CICR (the acronym in Spanish), of 2007, it is affirmed that of the total cases received in the country by this institution, the third factor of displacement is the threat of recruitment. This was also verified by the NGO CODHES, in its Bulletin No. 74¹³⁸, in which it points to recruitment as one of the main factors for displacement. For his part, the Secretary General has affirmed in several occasions that *"Recruitment of children and internal displacement are closely related, (...) as in many cases displacement is the only means that families in certain areas have to avoid that their children be recruited by armed groups"*¹³⁹. *"In 2008, information was received that agreed that the threat of recruitment of children had caused the displacement of local populations in at least five departments: Arauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo and Valle del Cauca"*¹⁴⁰.

¹³⁵ Report of the Secretary General of the United Nations on Children and Armed Conflicts, Document A/62/609-S/2007/757, 21 December 2007, paragraph 6.

¹³⁶ In the matter, see: SUPPORT MISSION TO THE PEACE PROCESS IN COLOMBIA – MAPP/OAS (July 2008): Eleventh quarterly report of the Secretary General to the Permanent Council on the Support Mission to the Peace Process in Colombia. SUPPORT MISSION TO THE PEACE PROCESS IN COLOMBIA – MAPP/OAS (February 2009): Twelfth quarterly report of the Secretary General to the Permanent Council on the Support Mission to the Peace Process in Colombia.

¹³⁷ SUPPORT MISSION TO THE PEACE PROCESS IN COLOMBIA – MAPP/OAS (February 2009): Op. cit. Page 6.

¹³⁸ CONSULTANCY FOR HUMAN RIGHTS AND DISPLACEMENT. CODHES, Bulletin CODHES Reports No. 74. Covering the Sun with the Hands. Report on Forced Displacement, Armed Conflict and Human Rights. January – June, 2008.

¹³⁹ Report of the Secretary General of the United Nations on Children and Armed Conflicts, document A/62/609-S/2007/757 of 21 December 2007, paragraph 6; Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia, 28 August 2009. Document No. S/2009/434, paragraph 26.

¹⁴⁰ Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia, 28 August 2009. Document No. S/2009/434, paragraph 26.

Involvement with Guerrilla Groups

*"They greet the home owners as if they had known them all their life. They talk for a while (...) they talk to them about the weakness of the State, that they are the authority and are there to protect them. (...) Their intention: to know the families and win their sympathy. Their goal: to identify their potential combatants. Their final goal: to recruit"*¹⁴¹.

The weakening of the guerrilla group FARC, as a result of the offensive by the State, with important strikes to its structure in 2008 (death of two members of its top leaders, Operación Jaque, and many casualties in its middle ranks and internal structures that have severely affected its command and control), has raised the pressure on this group.

This has been one of the main reasons for FARC to be on the double with recruitment¹⁴². According to the last report of the Secretary General *"The information received confirms the recruitment (by FARC) of children in 13 departments"*¹⁴³. The cases reported confirm pressure and intimidation to the families to deliver their children¹⁴⁴, kidnappings¹⁴⁵, and forced recruitment¹⁴⁶.

Public relations efforts with the community are also noticed, seeking to generate trust and motivation; such cases have been known in the Department of Putumayo, where they have their own radio service, which they use to motivate the adult and juvenile population to join their ranks, and in the department of Chocó, where they have delivered fliers and pamphlets inviting youths and adolescents to join the ranks of the guerrilla groups¹⁴⁷.

¹⁴¹ "The way FARC recruit", Diario El País, 17 July 2006.

¹⁴² Report of the Secretary General to the Security Council, United Nations document A/62/609-S/2007/757, 21 December 2007, paragraph 114.

¹⁴³ Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia, 28 August 2009. Document No. S/2009/434, paragraph 17.

¹⁴⁴ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (20 January 2006): Op. cit. Office of the High Commissioner of the United Nations for Human Rights (19 February 2009): Op. cit.

¹⁴⁵ COALITION AGAINST THE RECRUITMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS INTO THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): A Journey through the Colombian School from the perspective of the Rights of Infancy and Adolescence 2006 – 2007. Page 42.

¹⁴⁶ In the matter, a case was known of two minors of 13 and 15 years respectively, who were murdered for resisting recruitment (Putumayo – January 2008) Information reported in the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (19 February 2009). Op. cit. Paragraph 31.

¹⁴⁷ DIARIO EL MUNDO. "Possible illegal recruitment of youths in Quibdó", 22 January 2008. Page A9.

The boys, girls and adolescents are also used by the guerrilla groups in war, logistic, and intelligence activities¹⁴⁸. The girls and adolescents are also used as sexual partners of the combatants¹⁴⁹, are victims of acts of sexual violence and are forced to abort when pregnant and to use contraceptives¹⁵⁰. Intensive work within indigenous communities has been observed, with some ethnic groups being severely affected, such as the Nasa. According to the Governor and leader of the Tacueyó Council, Saray Vitonás, in the last four years her community has reported the recruitment of 200 boys, girls and adolescents¹⁵¹.

According to information consolidated by national and international human rights organizations, the most affected departments by recruitment by FARC are Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca and Vaupés. Although less visible, recruitment of boys, girls and adolescents by ELN in the departments of Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander and Sucre has also come to the light.

Involvement with Paramilitary Groups

*"First he told me that, well, to go and work there (...) escorting the merchandise and also what they put on you, if they put you to kill, then that too (...) they pay \$800,000 for doing something or nothing... they give you a commission for the work they do"*¹⁵².

It is important to point out that the demobilization process of the paramilitary group AUC was not real. There is talk of a demobilization of about 35,000 paramilitaries, however, according to official sources the number of paramilitaries in 2002 was 12,000¹⁵³. Thus, it is not comprehensible how 35,000 persons are counted within the demobilized. On the other hand, the parami-

¹⁴⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (19 February 2009): Op. cit. Paragraph 29.

¹⁴⁹ The Constitutional Court of Colombia issued its Court Ruling 092 in April 2008, that followed Sentence T-025, where it affirmed that "sexual violence against women in the context of the Colombian armed conflict is a habitual, extended, systematic and invisible practice, as are sexual violence and abuse by all the illegal armed groups and, in some isolated cases, by individual agents of the Armed Forces". Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia. 28 August 2009. Document No. S/2009/434. Paragraph 36.

¹⁵⁰ INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS: Women Before Violence and Discrimination Derived from the Armed Conflict in Colombia. 18 October 2006, paragraph 114.

¹⁵¹ "FARC continue to recruit children for the war" 4 March 2008. In: <http://www.terceradivision.mil.co/index.php?idcategoria=200003>

¹⁵² COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): BULLETIN PUTCHIPU No. 17-18. Page 8.

¹⁵³ Crisis Group, "The New Armed Groups in Colombia", Report on Latin America No. 20. 10 May 2007, pages 4 and 5.

litary leaders themselves have confessed that many counted as demobilized were persons recruited at the last moment, which is serious, because then the figures would be blown, perhaps with the purpose of pretending a successful operation¹⁵⁴. Currently, it is estimated that there are about 10,000 active paramilitaries, among which are included victims of child recruitment not handed over by the paramilitary group AUC¹⁵⁵.

It was with the sanctioning of Law 782 of December 2002 and Decree 182 of 2003 that the Uribe Government began conversations with AUC. The paramilitaries agreed to declare the end of the hostilities as of December 1st, 2002. The Metro and Elmer Cárdenas groups detached themselves from this initial commitment and the Central Bolívar and Autodefensas Campesinas del Casanare groups set later dates for the agreement to be in force¹⁵⁶. Besides the absence of a declaration of commitment to end the hostilities by all paramilitary groups, it was systematically violated by those who agreed to the commitment¹⁵⁷.

Nevertheless, today we can see that these forces have not been dismantled; they continue to control socially, economically, and politically, various areas of the country; they continue breaching human rights and international humanitarian law (such as the recruitment of boys, girls and adolescents); and the close links between State agents and some entrepreneurs have not been purged¹⁵⁸. Their regrouping is recognized mainly in three phenomena: the existence of paramilitary structures that did not participate in the demobilization process, the regrouping of demobilized persons in the unfittingly called "delinquent bands" that control specific communities and illicit economies; redoubts of groups or fronts that did not demobilize, refraining from negotiations, and the existence of organizations with a specific political motivation, a strong evidence of the persistence of paramilitarism¹⁵⁹. *"The Inter-American Commission on Human Rights (CIDH, the acronym in Spanish), has received information, during fieldwork, of nu-*

154 "Judging International Crimes Committed in Colombia", (Commentaries to the paper of Cecile Aptel, "The Local Judicial Systems and the Impact of the Statute of Rome"). Consultative Conference on International Penal Justice, 11 September 2009, United Nations, New York, Gustavo Gallón, Colombian Commission of Jurists.

155 "Criminal Bands: Democratic Security and Corruption", Observatory of the Conflict, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

156 Paramilitary group that like Bloque Cacique Pipitá did not participate in the demobilization ceremonies. Colombian Commission of Jurists, "Colombia: The Mirage of Justice and Peace. Evaluation on the Application of Law 975 of 2005", Bogotá, November 2007, page 18. Colombian Commission of Jurists.

157 Between 1st December 2002 and 30 June 2007, there were at least 3,530 violations to the right to life, directly attributed to paramilitary groups. List of Victims of Violations to the Right to Life, presumably perpetrated by paramilitary groups Out of Combat from 1st December 2002 to 30 June 2007; November 2007, www.coljuristas.org

158 Crisis Group, "The New Armed Groups in Colombia", Report on Latin America No. 20. 10 May 2007, pages 4 and 5.

159 Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in Colombia, 28 August 2009. Document No. S/2009/434, paragraphs 10 and 11. Such concern has been expressed in: SUPPORT MISSION TO THE PEACE PROCESS IN COLOMBIA – OAS/MAPP (February 2009): OP. cit.

*merous victims of the conflict who live in areas of influence of demobilized groups, who affirm that they continue to receive threats, and are victims of acts of violence and intimidation and control of territory*¹⁶⁰.

Paramilitarism is a constant but changing phenomenon; the paramilitary structures have not disappeared, but have innovated and reorganized, which allows them to adjust to the needs and types of operation they seek to develop. Although, according to the National Government, these structures have been unassembled and there is a categorical difference between boys, girls and adolescents linked to the paramilitaries and those linked to the so called delinquent bands, reality has shown that that frontier is in most cases feeble, blending the paramilitary groups as actors of the conflict and some forms of organized violence.

It must be remembered that since the beginning, the paramilitary groups also financed part of their territorial control actions, political persecution and counterinsurgency with money from activities like drug trafficking; so, this should not be an argument to now disqualify them as actors of the internal armed conflict. Additionally, the growth of paramilitarism towards the end of the 1990's, mainly in urban areas, benefited from the massive annexation into their military structures, by force or agreed upon, of delinquent bands, within a logic that mixed counterinsurgency, with its links with drug trafficking, and the exercise of political violence. The boys, girls and adolescents members of groups of organized armed violence, such as then, go to bed as violators of the penal code and wake up as paramilitaries, that is, soldiers, when their leaders have negotiated their involvement in paramilitary structures (remember that in the first case, it went from the name "Self-Defense" to that of "Groups", showing military command and structure).

The effects of demobilization have shown that the process also works in reverse, transforming demobilized boys, girls and adolescents in highly desirable persons for common delinquent and the paramilitary structures that today persist under new or old clothing, in spite of the process carried out under the Justice and Peace Law. *"... what one now hears is that the Self-defense groups, with respect to the handing over (massive demobilizations) are not going to remain as paramilitaries, but as drug traffickers: to carry drugs, to watch, make 'cleansings', all that remains far from what paramilitaries are, as they are also drug traffickers... and they have always been quite in the business, that leaves a load of money"*¹⁶¹.

¹⁶⁰ Report on the implementation of the Justice and Peace Law: initial steps of the demobilization process of AUC and first judicial proceedings, OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 6, 2 October 2007, Paragraph 91.

¹⁶¹ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): BULLETIN PUTCHIPU No. 17-18. Page 8.

An emblematic example in this respect are Comunas 8 and 13 of Medellín, where the differences between the current actions of recruitment and those that had been carried out by the combatant armed groups are difficult to ascertain and where an important focus of recruitment of boys, girls and adolescents since 2007 is recognized, with a current population at risk of more than 100 persons under 18 years¹⁶². The delicate situation has been repeatedly denounced by the Mayor's Office, the Municipal Legal Representative, and non-governmental organizations, who affirm that boys, girls and adolescents are used for the collection of extortions, and carrying arms and drugs. The non-recognition of paramilitary groups as permanent perpetrators of recruitment has become particularly relevant in this case, where there are worrying declarations that deny the existence of recruitment and detract from its importance *"I believe that calling it recruitment is wrong, because there is not one group in the city that controls the territory with the exclusion of the legitimate authority of the State"*¹⁶³.

The use of women also shows that their situation does not vary significantly with respect to the dynamics by which they were being recruited by paramilitaries. *"The situation of the girls in that area is one that has not changed, the actors have changed; the guerrilla before, [when] the bands arrived, now the paramilitaries. (...) I think that at the moment their situation has worsened, because there is a moment, in adolescence, when they fall in love with the warriors, the handsome, those quite... it is as if they fall for that"*¹⁶⁴. The warning reveals the existence of a patriarchal normative model, where women are inexorably under the power of a male that controls and incentives them to seek recognition and security, abandoning their own resources and being submitted to the traditional roles of protection and care of the home¹⁶⁵.

It is obvious, then, that paramilitaries continue to recruit boys, girls and adolescents, ignoring the agreement with the Government, in Santafé de Ralito, of ceasing the recruitment of persons under 18 years of age. This is verified by the declarations of OAS/MAPP, UNHCHR, UNICEF, the Representative of the Secretary General of the United Nations on Children and Armed Conflict, and national human rights organizations, where the use of persons under 18 years in groups that did not demobilize or that rearmed after demobilization and which are identified as part of the paramilitary structures is noticed. In this respect, it was known that

¹⁶² In the matter, see: EL PAÍS "Recruitment in Comuna 13 would be the more serious case. Children: goal of delinquents". February 13th, 2007; PARTICIPANDES "Greater concern due to recruitment of children in Medellín Comunas" 6 March 2009. in www.somosmas.org

¹⁶³ PARTICIPANDES "Greater concern by recruitment of children in Medellín Comunas" 6 March 2009. in www.somosmas.org

¹⁶⁴ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007 A Journey through the Colombian School from the perspective of the Rights of Infancy and Adolescence 2006 – 2007. Page 75.

¹⁶⁵ See Report of the "Work Table on Women and Armed Conflict" in Colombia, 2008.

after the end of the negotiations, many of the boys, girls and adolescents were transferred to different regions to increase in numbers the presence of other paramilitary groups, or to have them join emergent and delinquent bands at the service of traffic of drugs, arms or persons¹⁶⁶. *"One finds in the ranks of these groups a considerable number of former members, demobilized and non-demobilized, voluntarily and forcibly recruited, of paramilitary organizations (...) those who resist recruitment are murdered or must displace to save their lives"*¹⁶⁷.

Recent reports by UNHCHR have indicated its concern for the recruitment perpetrated by paramilitary groups in areas like Comunas 8 and 13 of Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Resguardo El Carmen (Norte de Santander), Tame and Arauca (Arauca)¹⁶⁸. On their part, human rights organizations have also denounced the recruitment of boys, girls and adolescents into paramilitary groups in Putumayo, Meta and Cauca¹⁶⁹, reporting, in the last department, recruitment and use of girls that are "bought" or "rented" for several months to render sexual services to members of the group and submitted to forced and degrading jobs.

The Secretary General of the United Nations on Children and Armed Conflicts also referred to it, saying that *"Every time there is a greater concern due to denunciations of violations and abuses committed against children by the new illegally organized armed groups. These groups, like Aguilas Negras, Manos Negras, Organización Nueva Generación or Los Rastrojos, are deeply involved in delinquent activities basically related to drug trafficking. During the period considered, denunciations have been received about the recruitment and use of children by the mentioned groups, in Valle del Cauca department; the city of Cartagena, in Bolívar; and the city of Medellín, in Antioquia"*¹⁷⁰.

¹⁶⁶ As non-governmental organizations and international organisms like OAS have repeatedly denounced. See: EL TIEMPO "Delinquent bands of paramilitaries are recruiting youths, OAS denounces". 24 September 2008.

¹⁶⁷ Office of the High Commissioner of the United Nations for Human Rights (19 February 2009): Op. cit. Paragraph 43.

¹⁶⁸ Office of the High Commissioner of the United Nations for Human Rights (20 January 2006): Op. cit. Paragraph 63 and Annex 2 Paragraph 81.

¹⁶⁹ Information provided by: CIDH, Corporación Vínculos, Coalition against the involvement of boys, girls and adolescents in the armed conflict in Colombia.

¹⁷⁰ Report of the Secretary General of the United Nations on Children and Armed Conflicts, document A/62/609-S/2007/757, 21 December 2007, paragraph 116.

3.3. The School as a Recruitment Space

*"They do not let us be young and now they use us, point at us, and mistreat us"*¹⁷¹.

Although the norms of International Humanitarian Law protect schools as assets linked directly to the civilian population, the State Security Forces and the illegal armed groups participating in the hostilities attack, occupy, and use them as spaces apt for recruitment. In this sense, the place of the school in the field of recruitment is ambivalent and complex since, although it is a meeting place, of formative and civilian character, unfortunately, in the context of the armed conflict in Colombia, it has become a space of constant presence of the armed groups that, among other things, look forward to recruiting students and convincing them to join their ranks.

The illegal armed groups that participate in the hostilities use the educational institutions as propitious settings to convince boys, girls and adolescents to join their ranks, as has been the case in the departments of Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre and Valle del Cauca. The denunciations involve activities of intimidation, deception, and social control.

The guerrilla intimidates teachers and students, pushing them to support the armed struggle. It often uses those spaces to indoctrinate boys, girls and adolescents in the classrooms. *"The guerrilla enters the school to entice children. An example that I knew happened in Macarena (Meta), where the Seventh and the Yará Fronts of FARC were around when the children had a break, and they began to tell them to enter the guerrilla, that they would have everything and would not have to study to get money and new arms. That is evil because they separate them from the school and the family"*¹⁷².

The paramilitaries, on their part, besiege the institutions, waiting for the boys, girls and adolescents outside the buildings, to sell them the idea of joining their groups in exchange for money and other benefits, looking for information or carrying out control actions. Two emblematic examples occurred in Medellín (Antioquia). The more worrying case happened on July 11th, 2007, when four men arrived at the educational institution Colegio Cedepro, in search of the directors,

¹⁷¹ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2008): Bulletin Pútchipu No 20 "Conscientious youths who also have feelings".

¹⁷² COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (17 September 2009): Report of the Workshop. Testimonial of an adolescent.

requesting that the institution organized a group of youths to take them by bus to Centro Administrativo La Alpujarra, in order to participate in a support rally to paramilitary commander Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, who would begin to render his free version before the prosecutors of the Justice and Peace Unit. Given the refusal of the directors, they were insulted for their “lack of cooperation” and were later seriously threatened¹⁷³.

In April 2008, in the department of Antioquia, there were denunciations about the incursion of paramilitary groups in schools. Members of a paramilitary group entered into Colegio Cooperativo Cacique Bitagüi, in the borough of San Cristóbal in the city of Medellín, to indoctrinate and punish children who, in their opinion, were behaving badly. According to the father of one of the punished children, they trimmed the hair of his son and threatened him. On his part, the Deputy Municipal Legal Representative for Human Rights of San Cristóbal, Jorge Ceballos, affirms that many denunciations of similar cases have been made, that some of the cases correspond to actions of paramilitary control and that such violations of the rights of the children happen continuously in the different boroughs of the city¹⁷⁴.

It is a matter of great concern that the school is contaminated with the dynamics of war and ends up playing an expulsion role for boys, girls and adolescents into the hands of the armed groups, when it should be a setting for the prevention of recruitment. In this sense, a significant aspect regarding the boys, girls and adolescents attended to by the ICBF program is that 86.8% were studying before joining the armed group¹⁷⁵. On the other hand, when the relationship between school, involvement and indigenous groups is analyzed, the problem becomes even more complex. In effect, many indigenous youths that have access to the right to education in schools (often with boarding), that do not have a curriculum or practices with an adequate differential approach for the indigenous population, the boys, girls and adolescents lose the links with their communities and their cultural identity, elements that often make it possible to protect the children and develop the cohesion of individuals and families¹⁷⁶.

¹⁷³ Facts denounced by Corporación CEDECIS of Medellín, July 2007.

¹⁷⁴ DIARIO EL COLOMBIANO “Incursion into the school was paramilitary”, 24 April 2008, electronic version; CARACOL NOTICIAS “Paramilitaries punished students in schools”, 22 April 2008, in Sala de Videos (News, National, Armed Conflict) in www.canalcaracol.com and Deputy Municipal Legal Representative Office for Human Rights of Medellín.

¹⁷⁵ Consolidated data by ICBF as of 30 April 2008.

¹⁷⁶ These indigenous boys, girls and adolescents are trained with curricula that are not adequate for the cultural needs of their peoples, so that often, when they finish the formal education, they remain more isolated from their communities. Being far away from their culture and their community, they become easy preys to the pressures or invitations of the armed groups in the conflict.

3.4. Public Policy on Prevention

"The prevention of recruitment, liberation, protection and reinsertion are interdependent and indivisible. The efforts to develop lasting solutions to the recruitment or use of boys and girls by armed groups or forces and to prevent their occurrence in the future, should include every child affected by an armed conflict, and tackle other atrocious violations of the rights of children, according to applicable international norms or the national legislation of the countries involved"¹⁷⁷.

The State counts with some initiatives on the prevention of recruitment of minors under 18 years. Nevertheless, the information formerly reported proves that these have not been enough, adequate or effective, and do not result in a reduction of the phenomenon that, on the contrary, seems to be worsening. In the matter, it is worth to highlight some aspects:

- On the one hand, one must keep in mind that there is an Intersectoral Commission for the Prevention of Recruitment and Use of Children, formed by the Office of the Vice President of the Republic, the Ministry of Interior and Justice, the Minister of Foreign Relations, the Minister of Defense, the Minister of Social Protection, the Minister of Education, the Presidential Agency for Social Action and International Cooperation, the High Commissioner for Social and Economic Reintegration, the Presidential Program Young Colombia and ICBF¹⁷⁸. According to this Commission, prevention of the recruitment of boys, girls and adolescents into the armed conflict is conceived from the perspective of the promotion of protecting environments, to prevent the vulnerability of rights. In the words of the coordination of the Technical Secretary Office of the Commission *"the policy of prevention of recruitment is centered on a formula that is elementary but substantive: the higher the number of children with guaranteed rights, the lower will be the risk that those rights will be affected, including the recruitment and use of children"*¹⁷⁹. From this perspective, the policy poses the need of coordinating relevant sectors within the State to guarantee the rights of the boys, girls and adolescents. One of the main objectives of this Commission is to reach those levels of coordination, playing a

¹⁷⁷ PARIS PRINCIPLES: PRINCIPLES AND GUIDELINESS ON CHILDREN INVOLVED WITH ARMED FORCES OR GROUPS (2007): Numeral 3.4.1. See www.coalico.org

¹⁷⁸ The Intersectoral Commission for the Prevention of Recruitment and Use of Boys, Girls, Adolescents and Youths by Illegal Armed Groups, created on 3 December 2007, through Decree 4690 of 2007.

¹⁷⁹ UNICEF "Today 47 towns have a policy for the prevention of recruitment" In: <http://www.universia.net.co/noticias/mas-noticias/47-municipios-tienen-hoy-politica-para-la-prevencion-del-reclutamiento.html>

role of “Guards of the Rights of Children” as they have called them, so that the plans that the different relevant institutions implement and that are a part of the National Family Welfare System (Sistema Nacional de Bienestar Familiar), may be used as a strategy of protection from recruitment¹⁸⁰. It is then evident from the role assigned to the Commission, that one has yet to develop an integral policy of prevention and protection of boys, girls and adolescents, that achieves a genuine articulation of the relevant sectors within the State in the guarantee of their rights, and that goes beyond the creation of new platforms that end by framing the existing work of the different responsible sectors in a different presentation.

Currently, there are institutional prevention programs from ICBF, the Ministry of Defense, The High Commissioner Office for Reintegration and Young Colombia. Examples of these initiatives are the programs against commercial sexual exploitation, the eradication of the worst forms of child labor, and drug use. Projects are also developed that promote recreation, sports, peaceful coexistence, sexual and reproductive health, and food security, among others. In the matter of decentralization to the territorial levels important efforts must be recognized, as the initiative that the General Procurator office is developing since 2004 in favor of the inclusion of children and adolescents in department and municipal plans¹⁸¹; the work that the Intersectoral Commission carries out so that the subject of prevention of recruitment is made explicit in these instruments of local policy design; and the Sixth Meeting of the Initiative “Facts and Rights, towns and departments for infancy and adolescence”, of 2008, where the governors committed to formulating strategies and assigning resources to confront the main problems suffered by infancy.

Nevertheless, the actions are still disarticulated, insufficient, of limited coverage and with uncertain results regarding the prevention of recruitment. The Intersectoral Commission reports the inclusion of the subject in the public agendas of 47 towns. However, only two of them have used their own resources to invest them to develop focalized approaches, which shows a somewhat disheartening panorama¹⁸². Likewise, in spite of the focalization of pre-

180 “Hence, it is imperative to strengthen and revitalize family nets, social nets, institutional nets, nets of children, nets of youths and all the existing nets, that in coordination with the National System of Family Welfare, and the entities that are part of it, may be able to close the door on those who threaten or affect the rights of the boys, girls, adolescents and youths, including their recruitment and use by illegal armed groups”. See: Intersectoral Commission for the Prevention of Recruitment and Use of Boys, Girls, and Adolescents by Illegal Armed Groups “Second Administrative Report of the Technical Secretary Office. December 2008. Page 9.

181 General Procurator Office and UNICEF (March 2005): Infancy, Adolescence and a Healthy Environment in the Departmental and Municipal Development Plans

182 INTERSECTORAL COMMISSION FOR THE PREVENTION OF RECRUITMENT AND USE OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS BY ILLEGAL ARMED GROUPS “Second administrative report of the Technical Secretary. December 2008. Page 19.

vention programs in towns with high indexes of recruitment¹⁸³, the phenomenon seems to worsen and deepen (as in Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Chocó and Meta), which makes the real effectiveness of these programs doubtful.

This approach, based on the promotion of special environments leads to the issue of the need to count with specific protection programs for boys, girls and adolescents at risk, that respond, in a fast and effective way, to cases of recruitment threats. In effect, it is noted that State programs do not count with response mechanisms vis-a-vis emergency situations that require immediate intervention and where they are insufficient because of the paper work and verification requirements of their strategies that often put the victims at greater risk. In other instances, the protection actions are not the most adequate, fitting and effective to the particular condition of the boys, girls and adolescents involved, since military interests have priority before the rights approach. In a report on the situation of boys, girls and adolescents in Comuna 13 of Medellín, prepared by several non-governmental organizations, the following case was documented:

“On 31 October 2008 in Medellín (Antioquia), members of one of the organizations of the Coalition received denunciations about boys, girls and adolescents under threat of recruitment by one of the armed groups that operate in Comuna 13 of the city. Having made contact with a General Procurator Office public officer, they made an appointment with the boys, girls and adolescents and their relatives in a Foundation in the neighborhood, as the boys, girls and adolescents would be transferred to an ICBF boarding house to provide them the required protection. At 12 noon of that day, the threatened boys, girls and adolescents started to arrive at the Foundation with their mothers for their transfer, as agreed.



Two of the children were terrified, they ran into the institution and closed the door behind them. At that point, two youngsters in bicycles shouted at them from the door: “Come out, come out, we are going to kill you”. One of the threatened boys,

¹⁸³ Since 2004, ICBF, UNICEF, IOM are implementing the program “National Initiative to Prevent the Involvement of Children into Illegal Armed Groups”, which seeks to prevent the use, involvement and recruitment of boys, girls and youths into the illegal armed groups, so as to guarantee their permanence in a children’s world and to promote, among the Colombian population, the awareness that ensures that children enjoy their rights.

girls and adolescents, said that the previous night he had been victim of an attempt from which he had managed to escape.

The members of the Coalition that initiated the attention actions for the threatened boys, girls and adolescents stayed inside with the victims, while the members of the armed group that persecuted the youngsters surrounded the building and continued their harassment. At that point it was possible to get in touch with the General Procurator Office official again and ask her for help, given the seriousness of the situation that also placed in danger the other boys, girls and adolescents who were about to arrive at the meeting to be taken to the boarding house. ICBF requested the protection of the police.

On arrival at the site of events, the General Procurator Office representative, two other officials and members of the police force, it was possible to establish the identification of one of the youngsters who were threatening the boys, girls and adolescents outside; the police captured this person. At 1:30 pm, 8 boys, girls and adolescents left the Foundation with a representative towards the ICBF offices, where the situation would be documented.

Days later, the Coalition learned that six of the boys, girls and adolescents that were sent to the boarding house escaped due to the conditions of the place. It is worth highlighting that an 8 years old child was sent home by ICBF, as he was not considered to be at risk. The mothers of some of the other boys, girls and adolescents that had escaped, took them back to the boarding house. The step mother of one of the victims decided to look for a more appropriate place to intern her stepson.

On Saturday, 8 November, members of the Coalition asked the General Procurator Office official about the circumstances in which the boys, girls and adolescents had escaped and additionally, asked that these children be sent to adequate places, as these were not street children but instead, boys, girls and adolescents who, in spite of having a family and house, were being victims of the urban armed conflict of Comune 13.

One of the children who had escaped from the boarding home and for whom his stepmother was looking for a more appropriate place where he would have protection, was murdered by alleged paramilitary of the Monteverde area, while he was at home. The child had been threatened by the mentioned paramilitaries because he had friends that belonged to a band that appeared to be allied with members of another paramilitary group. The stepmother says that the problem is due to the fact of having to live in the middle of all the bands of the area. She also pointed out that they had asked for protection in the minors' jail of La Floresta, however, the murdered minor escaped from that place because he wanted to stay in the San José Work School"¹⁸⁴.

Finally, it is worthwhile to highlight that the incipient developments registered in public policy on children and armed conflict have basically been focused on attention to and protection of victim boys, girls and adolescents, while postponing work on prevention. This is confirmed in the recent creation of the Intersectoral Commission for the Prevention of Recruitment, which was only created in December 2007. It is necessary to ensure an increased formalization of this entity, guaranteeing technical and financial resources for its effective operation.

- Another element worth analyzing is that the work implemented by the State up to now in relation to prevention denies the involvement of boys, girls and adolescents in the armed conflict through the State Security Forces, based on the assumption that the State and its institutions are neutral before the conflict and not an additional force that operates within it. This situation infringes what is established by humanitarian law regarding the protection of civilians, among them, the boys, girls and adolescents, who in no way, should be linked with the actions developed by any of the armed groups that participate in the internal armed conflict. In this sense, the prevention policy regarding the use of persons under 18 years of age in the armed conflict, ignores one actor, affecting its impartiality, transparency and effectivity.
- For its part, the Early Warning System of the Ombudsperson's Office fulfills one prevention task, which is to monitor and warn of risk situations to promote prevention and protection

¹⁸⁴ Information provided by one of the Coalition's Organizations in Medellín and which is kept in the files of the Coalition.

actions for the civilian population in the midst of the conflict. However, in spite of the fact that the system has issued risk reports, follow up notes and alerts in relation to the risk of recruitment suffered by boys, girls and adolescents in several municipalities of the country where illegal armed groups operate, its operational capacity to trigger State responses by the different responsible entities, which should prevent the involvement of children and ensure the protection of the population at risk, has not been effective. Thus, this mechanism often warns of risks of which it is a witness without any capacity to influence the response by the other State institutions responsible for the protection of the civilian population. In addition, the dynamics that characterize the conflict, where the armed groups become invisible under the new criminal bands, has had effects on the System and its issuance of risk reports regarding recruitment. Its analysis are often rejected by the CIAT (Early Warning Interinstitutional Committee) and by mayors and governors, who argue that there are no armed groups in their areas, and it is therefore mistaken to talk of recruitment¹⁸⁵. *"In 2008, the System detected 71 risk situations in 145 municipalities of the country, of which 66% were related to the recruitment of children. Nevertheless, not all the risk reports led to an early alert. According to the Ombudsperson's Office, out of the 71 risk situations detected, the interinstitutional committee ordered to adopt concrete measures to prevent violations in 50% of the cases"*¹⁸⁶.

- Another aspect that generates difficulties when designing adequate public policy for the prevention of recruitment, is the militarization of civilian life and the permanent civil-military actions and commercial advertisement of the Army, the Air Force and the National Police, which highlight the value of military life applicable to any force. In this sense, it is evident that for boys, girls and adolescents, the difference of being in one of the illegal armed groups or enlisting in the regular army is not clear. From this perspective, effective prevention of the involvement of boys, girls and adolescents in the armed conflict requires the promotion of a culture of good citizenship aimed at empowering civil society and dissuading all bands from following the war path¹⁸⁷.
- Finally, the democratic security policy is basically a warlike strategy that worsens the conflict and rejects pacific solutions to the same. In this sense, it is worth taking into account

¹⁸⁵ In this sense, the work of the Intersectoral Commission regarding the inclusion of boys, girls and adolescents involved in criminal bands in the prevention approach, promoting educational programs that prevent juvenile delinquency, recruitment and use is acknowledged.

¹⁸⁶ Report of the Secretary General on children and the armed conflict in Colombia, 28 August, 2009. Document No. S/2009/434.

¹⁸⁷ CORPORACIÓN ALOTROPIA (2006): Exploratory study of cultural patterns that contribute to the involvement of boys, girls and youths in the Armed Groups in Colombia. In www.alotropia.org. Page 73.

that, as has been previously stated, up to the present time, the armed strategy of the National Government has not managed to finish off the guerrilla and paramilitary groups; just as it has not reduced the attacks against the civilian population by all the armed combatants either. Additionally, an increase in illicit crops is reported, which reinforces the idea that the prevention of violations to human rights and breaches of humanitarian law must be taken up by seeking humanitarian and negotiated solutions to the armed conflict.

4. PROHIBITION AND RELATED SUBJECTS

4.1 Typification of the crime of recruitment in the Colombian Legal Code

"There is no coherence between the law and the reality of war"¹⁸⁸.

The involvement of boys, girls and adolescents is typified in Law 599 of 2000 (Penal Code), which in Article 162 states: *"the person who, in the context of and in the course of armed conflict recruits minors under 18 years of age or forces them to participate directly or indirectly in the hostilities or in armed actions, will be subject to prison from 6 to 10 years and a fine of 600 to 1,000 current monthly legal minimal wages"*.

Additionally, in the frame of the negotiation, disarmament, demobilization and reincorporation processes of members of illegal armed groups, a series of norms has been developed that tackle the subjects of recruitment of persons under 18 years of age, their hand over in the framework of demobilization processes, confession of crimes and granting of benefits. However, such legal tools do not have a proper development for the defense of the higher interest of the child. Such is the case of Law 975 of 2005 –Justice and Peace Law-, *"by which regulations are established for the reinsertion of members of illegal armed groups that effectively contribute to the achievement of national peace and other regulations are established for humanitarian agreements"*.

The aforementioned law superficially develops the subject of the victims of recruitment and their hand over in Articles 10 and 64. Article 10 establishes the hand over of boys, girls and

¹⁸⁸ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND YOUTHS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June 2008): Round table with youths. Words of a demobilized Youth. Bogotá.

adolescents as one of the eligibility requirements to be part of collective demobilization¹⁸⁹. Numeral 3 establishes that the group must hand over to ICBF all recruited minors. This eligibility requirement is a condition to access the benefits of Law 975 (specially the benefit of an alternative penalty, that ranges from five to eight years), that the victims of recruitment be surrendered to ICBF. A systematic reading of the norm, Numeral 3 of Article 10 becomes a privileged condition of strict observance.

Although in principle the exigency of each eligibility requirement is necessary, the fact that Numeral 3 involves the reinforced protection to which boys, girls and adolescents are subject, makes the hand over more relevant. The fact that the hand over must be made to a specific entity provides a qualified responsibility that goes beyond a simple hand over in any circumstance. Regarding the application of Numeral 3 of Article 10, the State, in accordance with its obligation as guarantor, is responsible for the effective compliance with this requirement. As a result, it must ensure an interpretation of the norm in accordance with the reinforced and prevalent protection of the rights of boys, girls and adolescents victims of recruitment.

Further on, the norm is unclear in relation to the protection of boys, girls and adolescents. Article 64 establishes that the hand over of persons under 18 years of age does not cause the loss of benefits, apparently disregarding the obligation of judging the crime of recruitment and minimizing the need to secure the hand over of the victims¹⁹⁰. A lawsuit was brought against the aforementioned article before the Constitutional Court. Sentence C-575¹⁹¹ in its preamble established that although the hand over of boys, girls and adolescents by illegal armed groups does not cause the loss of benefits, this does not constitute a hindrance to establish the penal responsibility of those responsible for the recruitment. According to the Court, the norm must be understood as facilitating such hand over; in no way should it be interpreted as exempting from the penal responsibility¹⁹².

At the same time, the National Procurator General Office considers that Article 64 of Law 975 must be understood as applicable to individual demobilization processes regulated by Article 11 of the same law and does not consider that it contradicts numeral 3 of Article 10¹⁹³. In its opinion, the article foresees that, as part of the collaboration with justice during the individual

189 See Article 10 of the Justice and Peace Law on the eligibility requirements for collective demobilization.

190 Article 64. "The hand over of minors by members of illegal armed groups will not cause the loss of the benefits referred to in the present law and Law 782 of 2002".

191 Leading Magistrate, Alvaro Tafur Galvis, July 25, 2006.

192 "Analysis of the indictment against Article 64 of Law 975 of 2005, Constitutional Court", Sentence C-575 of 2006, 6.2.6

193 GENERAL PROCURATOR OFFICE (2006): Follow up to Public Policies regarding demobilization and reinsertion. Volume II. Bogotá, Page 383.

demobilization process, the boys, girls and adolescents linked to the armed conflict be handed over.

On the other hand, the Procurator Office assumes that the demobilized individual that makes the hand over, may not be immediately considered to be the author of the crime of illegal recruitment, since at the time of the hand over the sufficient probative elements to apply the exclusion of benefits are not available¹⁹⁴. In any case, it is the duty of the State to establish the individual responsibility regarding this crime, which is not subject to amnesty or pardon. When the aforementioned responsibility is ascertained, the person upon whom it falls may not receive the benefits of demobilization as this crime is not subject to amnesty or pardon¹⁹⁵.

In actual practice, Law 975 implies wide-ranging risks of impunity, because since it operates jointly with Decree 128 of 2003¹⁹⁶, it makes it possible that in the process of accreditation of a demobilized person, the investigation of this crime is omitted and thus, the individual goes unpunished having perpetrated this war crime. The ICHR referred to its content in the following terms:

"In its report CIDH, indicated that the establishment of the historical truth on what happened during the last decades of the conflict or the fostering of paramilitarism and the extent of involvement of the different actors in the crimes committed against the civilian population, are not included among the objectives of the norm. CIDH also showed that the provisions of the law do not set up incentives so that the demobilized persons confess the whole truth on their responsibility in the commission of new crimes that have not been investigated yet, in exchange for the significant juridical benefits they will receive. Consequently, the established mechanism does not guarantee

¹⁹⁴ GENERAL PROCURATOR OFFICE (2006): Op. cit.

¹⁹⁵ Decree 4760 of 2005 establishes that the nominations made by the Government to receive the benefits of Law 975 do not imply the granting of the same. If the requirements of Articles 10 and 11 of Law 975 are not fulfilled, the process is sent to ordinary jurisdiction.

¹⁹⁶ Decree 128 of 2003 that regulates Law 418, defines concepts and procedures on demobilized and reinserted persons and develops the function of a certificate delivered by CODA to members of illegal groups who decide to enter in a process of individual demobilization. "For individual demobilization, the demobilized person must have been certified by CODA. The Committee is made up of a delegate of the Minister of the Interior and Justice, a delegate of the Minister of National Defense, an official of the Reinsertion Program of the Ministry of the Interior, a delegate of the National Attorney General, a delegate of the Director of the Colombian Family Welfare Institute and a delegate of the Ombudsperson. CODA must ascertain that the demobilized person belongs to an illegal organization and must evaluate his or her will of reinsertion into civilian life and as a result, it issues a certificate to that effect. For collective demobilization, the individual must be included in the list that the heads of the armed group deliver to the High Commissioner for Peace. In accordance with Decree 3360 of November 24, 2003, the spokespersons of the armed group seeking demobilization must deliver to the High Commissioner for Peace a list of demobilized persons that "enables (...) to enter the reinsertion process and substitutes, for all effects the certification issued by the Operational Committee for Laying Down Arms (CODA), Article 1. The inclusion in this list allows the demobilized person to access the juridical and economic benefits contemplated by Decree 128 of 2003." Procedure applicable to demobilized combatants according to the so called 'Justice and Peace' Law and Decree 128 of 2003: Impunity Guarantees, page 1, Colombian Commission of Jurists.

*that the crimes perpetrated are duly clarified and, hence, in many cases, their authors will be able to enjoy impunity. Likewise, CIDH observed that the institutional mechanisms created by the Justice and Peace Law do not seem strong enough to effectively face the task of judicially clarifying the numerous crimes committed by the armed actors during the last years*¹⁹⁷.

Finally, the State, when involving or tolerating the involvement of boys and girls in armed groups, when it does not investigate such acts effectively and when it does not punish those responsible, violates the obligation to respect the rights recognized by the Convention and to guarantee their free and full exercise, for both the victims and their family members, makes it impossible for their communities, and society at large, to know what happened¹⁹⁸, it fosters the repetition of human rights violations and the defenselessness of the victims and their relatives¹⁹⁹. Thus, the investigation of these actions must be carried out with all the legal means available and must seek to determine the truth, investigating, prosecuting, capturing, judging and sentencing all those responsible, especially when State agents are involved or might be involved²⁰⁰.

Currently, Motion of Law No. 179 of 2008-Senate, by which "*the involvement, use and recruitment of boys, girls and adolescents in criminal activities and drug trafficking are penalized*". The Motion states that the goal of the same is to protect the boys, girls and adolescents used in criminal activities and drug trafficking, since they are frequent victims of exploitation by criminal bands of organized armed violence and by other forms of common delinquency. In practice, however, the penal reform introduced might create unnecessary confusion regarding the penal type of forced recruitment designed to protect the boys, girls and adolescents, which is found in the chapter on violations to international humanitarian law of the Colombian Penal Code.

Additionally, the Motion tampers with the principle of unity of subject by surpassing the purpose of the same, which was explained in the preamble. The new type of penal code that it seeks to create punishes not only those who involve and use boys, girls and adolescents for certain criminal activities, but it also introduces, in Paragraphs 1 and 2 of Article 1, provisions that

197 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH Expresses its Concern for the Human Rights Situation in Colombia, Press Release No, 16 of 2006.

198 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Massacre of Ituango, *supra* note 15, paragraph 300; Massacre of Pueblo Bello, *supra* note 12, paragraph 146; and Massacre of Mapiripán, *supra* note 12, paragraph 238.

199 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Case of Baldeón García, *supra* note 112, paragraph 168; Massacre of Pueblo Bello, *supra* note 12, paragraph 266; and Case Gómez Palomino, *supra* note 119, paragraph 76.

200 Case of the Miguel Castro Castro Prison, *supra* note 8, paragraph 256; Case Almonacid Arellano and others, *supra* note 16, paragraph 111; and Case Goiburú and others, *supra* note 11, paragraph 117.

modify the system of juvenile penal responsibility, to which the adolescents used by the groups being punished would be submitted, which is regulated in the Infancy and Adolescence Law.

It is particularly worrying that the legislator, when regulating a subject that goes beyond the purpose of the Motion, would not only be damaging the constitutional principle of unity of subject, but it would also be restricting the application of the opportunity principle applicable within the framework of the juvenile penal system, by establishing two new requirements not contemplated in the Infancy and Adolescence Law, such as (i) recidivism and (ii) the qualification or political character of the group to which the child or youth belonged, making the situation of the adolescents taken to justice within such a system more serious. In this sense, paragraph 1 is explicit by clarifying that such penal type does not exempt from responsibility the boys, girls and adolescents used by the groups it seeks to punish. This situation could also lead to the creation of discriminatory treatment.

Finally, the Motion creates a confusion between the conducts regulated by ILO Convention 182 and by the Optional Protocol that would have to be changed in favor of the due application of the law in the behavior and penal types to punish.

4.2. Prohibition of Recruitment and Use of Children

"Good does not exist, only Evil"²⁰¹.

According to the treaties on human rights ratified by Colombia, the recruitment and use of children are prohibited not only for non-State armed groups, but also for the State Security Forces²⁰². In spite of this, in several provision, the Infancy and Adolescence Law establishes such prohibition only for non-State armed groups, excluding the State Security Forces. The following are some of the norms that show this contradiction with international legislation:

Article 20, regarding the rights of protection of boys and girls, establishes in Numeral 7 that: *"boys, girls and adolescents will be protected against (...) the recruitment and the use of children by organized illegal armed groups"* (underlined outside the text).

²⁰¹ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (2007): Boletín Pútchipu No. 17-18. Words of a reinserted adolescent.

²⁰² Colombia ratified the Convention on the Rights of the Child in 1991, with a reservation regarding Article 38 (in which the age of 15 years is established as the minimum age for recruitment in the armed forces), establishing 18 years as the minimum age for recruitment in the Military Forces. In 1999, Colombia prohibited, without exception, the recruitment of children under 18 years of age.

Even though Article 41, Numeral 29, regarding the obligations of the State, proscribes the use of boys and girls generically, Article 30 then establishes that: "*the State is the institutional context for the integral development of boys, girls and adolescents. In the fulfillment of its functions at the national, departmental, district and municipal levels, it will (...) Protect them against the involvement with and recruitment in illegal armed groups*" (underlined outside the text).

Likewise, Article 175, regarding the principle of opportunity in the processes against adolescents as participants in the crimes committed by illegal armed groups, states that "*The Attorney General Office may relinquish penal prosecution in cases in which adolescents, under any condition, had been part of illegal armed groups or had participated directly or indirectly in the hostilities or in armed actions or in the crimes committed by illegal armed groups (...)*" (underlined outside the text).

On the other hand, it must be said that at the same time that the Law proscribes the promotion of civil-military campaigns, psychological operations or similar actions (Article 41, Numeral 29), Article 89 authorizes the National Police to "*design and execute educational and prevention programs and campaigns, and to guarantee and reestablish the rights of boys, girls and adolescents in all the national territory*", functions that are mostly educational and that concern the Ministry of National Education and other State entities of civil character.

Such authority has been used by the National Police to carry out integration campaigns with boys, girls and adolescents in different regions of the country, to acquaint them with the military perspective and, in the worst of all cases, to involve them in intelligence activities, as we have denounced in detail in Chapter IV of this report. We consider that this capacity in a context such as that of Colombia may worsen the vulnerability of boys, girls and adolescents, as they may be stigmatized and declared military objectives by opposing armed groups; it may promote their use and involvement in the conflict indirectly, as well as promoting a military perspective in education.

The described articles clearly state the contradiction between the approved law and the provisions of the international instruments ratified by the country. Thus, with the purpose of applying such provisions coherently, they must be interpreted in the light of the higher interest of the boys, girls and adolescents, other norms of the law that imply their special protection and the principles of international norms, to understand that such norms refer to any group that participates in the hostilities and not only to non-State armed groups.

4.3. Judicial Provisions for the Treatment of Boys, Girls and Adolescents Demobilized from Armed Groups

"[on] account of their immaturity and vulnerability, [children] require protection that guarantees the exercise of their rights within the family, society and in relation to the State. These considerations must be projected upon the regulation of judicial or administrative procedures in which decisions are taken about their rights"²⁰³.

As a result of the first demobilizations of boys, girls and adolescents, at the end of the 1990's, it became urgent to have a judicial framework for their situation, since the legal framework at the time did not have specific guidelines for this irregular situation, which led to their being considered violators of the penal law, taking them to justice under the penal system and placing them in reeducation programs.

Keeping in mind that the treatment applied did not respect their condition as victims, did not guarantee their human rights and did not take into account the principle of higher interest that must take priority with minors under 18 years of age, a set of norms was developed that sought to adjust the juridical and administrative procedure that must be applied in the case of boys, girls and adolescents demobilized from the armed conflict, among which are particularly relevant: (i) Law 782 of 2002 –extended by Law 1106 of 2006- (ii) its Statutory Decree 128 of 2003, and (iii) Law 1098 of 2006 –Infancy and Adolescence Law. Additionally, as part of the justice and peace processes, we find Articles 10.3 and 64 of Law 975 of 2005.

Law 782 of 2002, in Article 19, paragraph 2, confirms the extinction of penal action for political crimes and, in the specific case of those committed by minors, it states: *"when it concerns minors linked to illegal armed organizations, to which a political character has been granted, the judicial authorities will send the documentation to the Operational Committee for the Relinquishment of Arms (Comité Operativo para la Dejación de las Armas), that will decide on the issue of the certification referred to by Decree 1385 of 1994, according to the terms laid down by this law"*. The judicial operators that were aware of this situation interpreted the norm in the sense of

²⁰³ INTER-AMERICAN COURT ON HUMAN RIGHTS, Judicial Condition and Human Rights of the Child. Consulting Opinion OC-17 of 28 August 2002, Paragraphs 93 and 94.

considering that –in such cases- it was required to bring these boys, girls, and adolescents to justice, in the jurisdiction for minors²⁰⁴.

With the purpose of making this interpretation clear, the National Procurator Office issued Directive No. 013 of 2004, setting the criteria regarding the conduct to be followed by public officials with relation to the separation of minors from armed groups outside the law. Such Directive states that: *"the family ombudspersons, the Municipal Legal Representative and the family judicial procurators acting before the judges of minors, family judges and circuit judges, will request that they abstain from initiating judicial investigations against minors demobilized from the conflict as victims"*²⁰⁵.

With respect to the subject under discussion, the Constitutional Court, through ruling C-203 of 2005, when it accepted a lawsuit against the constitutionality of paragraph 2 of Article 19 of Law 782, by which the procedure of amnesty for demobilized children is regulated²⁰⁶, considered that boys, girls and adolescents linked to the armed groups are victims of the crime of recruitment –proscribed by national and international norms-, which means that, first, the active subject of this crime cannot be excused on the ground that joining was voluntary; second, they must receive priority attention from the State for protection, rehabilitation and reintegration into society and, third, the State must ensure that those who allowed their involvement into the armed group answer for their penal responsibility.

However, the sentence of the Court also stated that, due to the participation of many of these demobilized boys, girls and adolescents in the criminal activities of the armed group, the respective investigations must be opened²⁰⁷, since the rights to truth, justice and reparation of the victims of those crimes are a part of the constitutionality structure. It made clear that the former does not mean that they should be subject to clearly punishable measures, since, in any case, their condition as victims makes it mandatory for the State to give greater guarantees to the judicial actions, given their quality as persons especially protected by international law.

²⁰⁴ Ombudsperson's Office (2006): "Characterization of boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups: social and productive insertion from a human rights approach", Bogotá, Colombia, Chapter II, Page 16.

²⁰⁵ GENERAL PROCURATOR OFFICE, Directive No. 013 of 2 July 2004 "By which criteria are fixed regarding the conduct to be followed by public officials with relation to the demobilization of minors from illegal armed groups".

²⁰⁶ Briefly, according to the plaintiff, the norm contested creates a judicial procedure for the demobilized boys and girls, which means they are being treated as responsible of crimes committed while they were a part of the armed group, but not as victims of the group. The norm states: "... Paragraph 2. When it refers to minors linked to organized illegal armed groups, the judicial authorities will send the documentation to the Operational Committee for the Relinquishment of Arms (Comité Operativo para la Dejación de las Armas), which will decide on the issue of the certification, to which Article 1385 of 1994 refers, according to the terms stated by this Law".

²⁰⁷ Constitutional Court. Constitutionality Sentence C-230 of 2005.

In the same ruling, the Court determined that within the judicial process where the guilt of the boy, girl or adolescent involved with the armed group is debated, the operators of justice shall evaluate individually the degree of responsibility, with due attention to the age, the level of psychological development and the condition as victim of the crime of forced recruitment; they must also keep in mind a series of factors, among which are (i) the specific circumstances of the commission of the action, (ii) the personal and social circumstances of the boy or girl, (iii) the degree of responsibility that must be attributed to those guilty of the recruitment of the child, those who gave the orders, and (iv) the responsibility of those, besides the recruiters, who determined the conduct of the child.

Notwithstanding what has just been said, and in spite of the repeated presentation to the Congress of the Republic of documents on the constitutional and international parameters with respect to boys, girls and adolescents involved with armed groups, on November 8, 2006, the President of the Republic sanctioned the Infancy and Adolescence Law, in which, among many subjects, this one was ambiguously handled.

As an example, the Law states, in Article 175, that the boys, girls and adolescents involved in the armed conflict may be subject to the application of the opportunity principle –procedural act of the Attorney General Office whereby it decides to cease penal prosecution for the commission of a crime. On this point, even if it is true that this procedural mechanism may be applied under the precepts that the Constitutional Court affirmed in its Sentence, it is also true that the lack of regulation of so complex a subject implies that many prosecutors will not apply it, since it is at their discretion whether or not the case merits to be penally prosecuted.

Additionally, this Article is explicit in stating that such principle shall not be applied for crimes against humanity, violations of international humanitarian law or genocide. Even if it is true that crimes of such nature must be investigated and punished in accordance with the highest penal parameters –given their condition as crimes against humanity, it is also the case that in the internal armed conflict a considerable amount of children may have been involved in this type of conduct. Thus, this provision, of exceptional character, might end up being the general rule applicable to boys, girls and adolescents demobilized from armed groups.

The norm is not clear in determining the type of sanctions they must incur when they are found responsible for atrocious crimes, creating a differential treatment between those who are sent directly to the ICBF program and those penally punished.

On the other hand, Article 187 of the Law states that: *"in the cases in which adolescents older than 14 and younger than 18 years of age are found to be responsible of intentional homicide,*

kidnapping or extortion, in all their forms, the loss of freedom in a center of specialized attention will be from 2 to 8 years"²⁰⁸.

In the particular case of boys, girls and adolescents demobilized from paramilitary groups in process of demobilization, this norm implies a more severe sanction than that of adults responsible for the crime of illicit recruitment of persons under 18 years of age, according to the Justice and Peace Law.

Thus, while adults members of these groups, that have incurred in conduct that violates the penal code, among them the illicit recruitment of minors, will receive alternative sentences of between 5 and 8 years, *"determined according to the gravity of the crimes and their effective collaboration in the clarification of the same"*, the boys, girls and adolescents victims of recruitment shall be subject to sanctions with deprivation of liberty from 2 to 8 years.

In that sense, having in mind that, according to the stories and the experiences lived by the children during their recruitment by these groups, in the majority of cases they are forced to participate in conducts contrary to human rights and international humanitarian law, the general rule will be their penalization in similar duration to that of the adults.

The Ombudsperson's Office has reached a similar conclusion, stating that *"In effect, while the law allows that the active subject of the crime of illicit recruitment and even other crimes does not lose his or her benefits for recruiting minors into an organized illegal armed group, it allows that the minors recruited be considered and treated as violators of the penal law and be subject to the corresponding judicial procedure and even lose the benefits contemplated for them in Law 782 of 2002. This inequitable situation is not in harmony with the constitutional precepts that obligate the Colombian State to ensure that the rights of children prevail over those of all others"*²⁰⁹.

Thus, it is paradoxical that the sanctions imposed upon adults guilty of the recruitment of minors is equal or less to those of the boys, girls and adolescents victims of this war crime which, due to the provision of the Justice and Peace Law, generates disproportionality regarding the special treatment that children victims of recruitment, who violate the penal law, must receive.

208 Law 1098 of 2006 –Infancy and Adolescence Law.

209 Ombudsperson's Office (2006). pag. 22.

Juvenile Penal Responsibility²¹⁰

It is clear that the participation of boys, girls and adolescents in the processes is different from that of adults and, hence, the procedural actions as a whole must be considered from the point of view of their protection, the reestablishment of their rights and the imposition of real measures that allow their reinsertion to society. Thus, it is fundamental to keep in mind the factors of differentiation between adults and children to be able to determine the type of measures that must be applied to the latter.

On this point, the Constitutional Court, in its Sentence C-839 of 2001, when deciding on the viability of a specialized jurisdiction for violators who are minors under 18 years, affirms that instead of being considered an attack against the rights of boys, girls and adolescents *"it could be said that the international community has widely recognized the need to create a specialized judicial system that allows to solve the problem of juvenile delinquency, from the perspective of resocialization, the writ for protection of fundamental rights and rehabilitation, avoiding that the minor deviates from the adaptation process and stunts his/her physical and moral development, basis of the development of modern society"*.

This is the *raison d'être* of the jurisdiction of minors and the philosophy that, in the opinion of the Court, must inspire the work of the legislator when setting out to regulate it. *"As long as the law complies with the constitutional principles that guide the judgment of minors and maintains the objectives that guide it, the existence itself of this jurisdiction does not deserve any reproach of constitutionality; on the contrary, it must be endorsed as the proper mechanism to harmonize the rights of violators who are minors and the preservation of public security"*.

Thus, to consider a system of juvenile penal responsibility, implies that the boys, girls and adolescents receive special care according to their age and vital development, so that they may enjoy their rights and be given a proper and just treatment. Considering that their underage must be a parameter for protection and not an argument for discrimination.

During the legislative proceedings for the Infancy and Adolescence Law, human rights organizations lobbied so that the Congress of the Republic, when debating juvenile penal responsibility, especially the types of measures and the age for loss of liberty, made a wide interpretation based on the higher interest of the child. However, even though the Law, as approved, bases

²¹⁰ Based on : COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF CHILDREN AND YOUTHS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA AND COLOMBIAN COMMISSION OF JURISTS (2005): Challenges and Obstacles to the reform of the Code of the Minor in Colombia: Reflections on the Motion of Law for Infancy and Adolescence.

the system of penal responsibility on arguments such as those mentioned, when determining the measures and the time of duration incurs mainly in punishing regulations.

Article 187 establishes that *"the loss of freedom in a centre of specialized attention will be applied to adolescents older than 16 and younger than 18 years, that are found responsible for the commission of crimes whose minimum penalty, as established in the penal code, is six years of prison or longer. In these cases, the loss of freedom in a center of specialized attention will be for a period between 1 and 5 years"*²¹¹.

The former does not agree with the pedagogical character that the system of juvenile penal responsibility must have, since the differentiation of penalties according to the seriousness of the action goes against such character, transforming it into an extension of penal law and detracting from the principles stated in the law itself, with regard to the goal of the measures and the pedagogical goal of the process and the measures.

According to the Rules of Beijing²¹², the answer to juvenile delinquency must not be based exclusively on the seriousness of the action, but it must particularly take into account the personal circumstances and needs of boys, girls and adolescents. With relation to the juvenile penal justice, a greater weight must be given to the interest of guaranteeing the welfare and future of boys, girls and adolescents, rather than the penalty or the idea of what is rightfully deserved.

On the other hand, we find that the mention that the penalty of loss of freedom will only be applied exceptionally and as a last resource was not included in the text. Article 161 simply establishes that *"the loss of liberty is only applicable to persons who at the moment they commit the action are older than 14 and under the age of 18 years. The loss of liberty will only apply as a pedagogical measure"*²¹³, without mentioning expressly the use of this measure as a last resort and only referring to it when dealing with preventive internment.

Besides, according to Article 179, the non-fulfillment of any of the sanctions that may be imposed to boys, girls and adolescents, such as: warning, rendering services to the community or assisted freedom, among others, will immediately generate the internment of the child in

²¹¹ Law 1098 of 2006 –Infancy and Adolescence Law.

²¹² The uniform minimum rules for the administration of justice to minors (known as "Rules of Beijing"), that the Economic and Social Council presented to the Seventh Congress, celebrated in Milan (Italy) in August and September of 1985, were approved on 6 September 1985 and recommended to the General Assembly for approval. The Assembly approved the rules on 29 November 1985 and included them in the annex to its Resolution 40/33. The rules represent the minimal conditions accepted by the United Nations for the treatment of juvenile delinquents in every system of treatment of those persons.

²¹³ Law 1098 of 2006 –Infancy and Adolescence Law.

an internment center, which impairs the supposed exceptionality argued by the authors of the code. The Article states:

*"(...) Paragraph 2. The adolescents between 14 and 18 years of age who do not fulfill any of the sanctions contemplated in this Code will finish their time in internment. The non-fulfillment on the part of the adolescent of the commitment not to break the penal law again will result in the imposition of a sanction of loss of liberty by the judge"*²¹⁴.

With respect to the duration of the penalty of loss of freedom established in Article 187, we consider that the term of one to five years and two to eight years exceeds the reasonableness of any sanction imposed to boys, girls and adolescents. Looking at comparative law, we find that Colombia is setting a heavier penalty than the average in Latin America. The maximum penalties of loss of liberty for adolescents vary from one to five years. In Chile, the penalty of loss of liberty has a maximum of five years, as is the case for Honduras, Nicaragua and Bolivia. Peru and Venezuela establish a maximum of three years.

Under these considerations, we find that although the Infancy and Adolescence Law advances in the adaptation of the national legislation to international standards in some subjects, the system of juvenile penal responsibility, as it currently exists, as well as some norms related to the participation of boys, girls and adolescents in armed conflicts could impair the full enjoyment and exercise of the rights of children in Colombia.

In brief, according with the system created by the Infancy and Adolescence Law, what awaits the boys, girls and adolescents who have committed any crime is that:

- 1 – Boys, girls and adolescents between 16 and 18 years of age may be deprived of their liberty for up to five years.
- 2 – Boys, girls and adolescents between 14 and 18 years of age that have been found guilty of intentional homicide, kidnapping or extortion, in all their forms, may be deprived of their liberty for up to eight years, surpassing the average of penalties of other Latin American countries.
- 3 – The non-fulfillment of any penalty imposed, such as warning, rendering of services to the community, or assisted freedom, among others, will immediately generate the internment of the child in an internment center, which impairs the supposed exceptionality argued by the authors of the code.

²¹⁴ Ibid.

- 4 – Boys, girls and adolescents under 18 years of age who have been part of armed groups participating in the hostilities and who are victims of the crime of recruitment of persons under 18 years of age, may be subject to the system of juvenile penal responsibility when they have committed serious violations to international humanitarian law. This exceptionality becomes a general rule, as most of these boys, girls and adolescents, because of their subordination within the armed group, are forced to commit those violations. In the meantime, the commanders of the paramilitary groups, responsible of the crime of recruitment of children, will continue to receive benefits and reduction of penalties.
- 5 – There will be no real reestablishment of rights for boys, girls and adolescents when it is proved that the lack of guarantee of their rights by the State moved them to incur in conducts contrary to the penal law, or for those who were victims of recruitment into the armed groups.

In the context of poverty, lack of guarantees and opportunities, and of armed conflict that Colombian boys, girls and adolescents face, we consider that the new system of juvenile penal responsibility:

- Ignores the principles and guidelines of the Convention on the Rights of the Child and international regulations on human rights on this subject
- Aggravates the vulnerability situation of boys, girls and adolescents involved in the commission of penal conducts
- Establishes one of the highest prison sentences for minors under the age of 18 years in Latin America
- Ignores the higher interest of the child by establishing measures that do not have an “educational” character
- Privileges the protection of the community from boys, girls and adolescents who supposedly represent a danger to their interests over the reestablishment of their rights and the creation of opportunities. Instead, the absence of guarantees, rights and opportunities for children should be understood as the greatest danger a community may face.

4.4. Adherence to International Instruments of Protection

*"It is laughable, the State is now affected by the international community and it says it is going to do something. There has never been a real interest, never a whole truth"*²¹⁵.

As to protection of the rights of boys and girls, the Colombian State has ratified several human rights instruments and international humanitarian law treaties. Noteworthy among them are:

- The International Pact on Civic and Political Rights²¹⁶, whose goal is *"to promote universal and effective respect for and observance of, human rights and freedoms"*.
- The American Convention on Human Rights²¹⁷, that seeks to establish the minimum rights of the inhabitants of the American continent, developing the principles issued from the American Declaration of the Rights and Duties of Man.
- The Rome Statute of the International Criminal Court²¹⁸, that typifies as a war crime the recruitment, isolation or illicit use of children under 15 years of age in armed forces and/or groups, or their use in the hostilities, both in internal as in international conflicts.
- The Convention on the Rights of the Child²¹⁹ and its optional protocols related to the participation of children in armed conflicts, and the sale of children, child prostitution and the use of children in pornography, created by the Committee on the Rights of the Child and that establish prohibitions and obligations of the States, in order to prevent and pay attention to the various situations to which boys, girls and adolescents are exposed.
- The Geneva Conventions and their additional protocols²²⁰, which establish a special protec-

²¹⁵ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF CHILDREN AND YOUTHS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June 2008): Round Table with Youths. Words of a demobilized youth, Bogotá.

²¹⁶ Adopted by the General Assembly of the United Nations on 16 December 1966; signed by Colombia on 21 December 1966; internally approved through Law 74 of 1968; ratified on 28 October 1969; in force on 23 March 1976.

²¹⁷ Adopted on 22 September 1969; valid since 18 July 1978; approved in Colombia through Law 16 of 1972; ratified on 31 July 1973; and in force since 18 July 1978.

²¹⁸ Adopted on 17 July 1998; valid since 4 July 2002; signed by Colombia on 5 July 2002; approved through Law 742 of 2002; ratified on 5 August 2002; and in force since 1st November of the same year. Article 8 is particularly noteworthy.

²¹⁹ Law 12 of 1991. Articles 38, 39 and 40 are particularly relevant.

²²⁰ Geneva Convention of 12 August 1949, to alleviate the situation of the sick and injured of the armed forces in campaign; Geneva Convention of 12 August 1949, to alleviate the situation of the sick, the injured and the shipwrecked on the sea of the armed forces; Geneva Convention of 12 August 1949, concerning the protection of civilians in time of war; Geneva Convention of 12 August 1949, concerning the treatment of prisoners of war; Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, concerning the protection of victims of international armed conflicts; Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, concerning the protection of victims of non-international armed conflicts.

tion for boys and girls in internal and international armed conflicts, particularly Article 24 of the Fourth Geneva Convention on the protection of civilians in time of war; Article 3, common to the four Geneva Conventions, and the Additional Protocols I and II of such Conventions.

- Convention No. 182 of the International Labor Organization (ILO)²²¹, regarding the prohibitions of the worst forms of child labor and the immediate action for their elimination, that considers the forced recruitment of children as one of the worst forms of child labor and demands actions to end their use as “soldiers”.
- The Paris Principles²²², on the reintegration of children recruited into armed groups, adopted in February of 2007 within the United Nations and signed by Colombia, that establish basic criteria for the liberation, attention, protection and reintegration of children demobilized from armed groups.
- The resolutions of the United Nations Security Council that seek to end the infringement of the rights of children in war: 1261 of 25 August 1999; 1314 of 11 August 2000; 1379 of 20 November 2001; 1460 of 30 January 2003; 1539 of 22 April 2004 and 1612 of July 2005. Resolution 1612, in particular, is an important progress on the protection of children affected by armed conflicts. This Resolution establishes a system for follow up and presentation of reports to a Working Group of the Security Council, in countries where the recruitment of boys, girls and adolescents is occurring. It emphasizes the importance that a Special Team be created, formed by the United Nations and NGO's, that monitor in particular the situation of six violations of Human Rights and breaches of International Humanitarian Law: homicide, kidnapping, sexual violence, recruitment of boys, girls and adolescents, occupation and attack of schools and hospitals, and blockade of basic provisions.

In spite of ratification by Colombia of these international instruments and of the efforts to adapt the national legislation to these precepts, the situations of danger for children persist, the levels of impunity are high and the groups in combat continue to violate the norms of international humanitarian law, concerning the rights and protection of boys, girls and adolescents in armed conflicts.

²²¹ Adopted by the ILO in 1999, approved through Law 704 of 2001 and ratified on 17 May 2005, through Decree 1547.

²²² PARIS PRINCIPLES: PRINCIPLES AND GUIDELINES ON CHILDREN INVOLVED WITH ARMED FORCES OR ARMED GROUPS (2007). See: www.coalico.org

5. PROTECTION, REHABILITATION AND REINTEGRATION

5.1. Program of attention to boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups

“Given the damage in the links that occurs in the life of minors, because of family dynamics and the retention of minors by the armed groups, centered on the vulnerability of every personal link, a central challenge of the program is, in the first place, to facilitate the linking with life, through the daily dynamics”²²³.

In 1999, the Colombian State implemented the program of attention to boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups, as an initiative that seeks to contribute to the consolidation of a social and productive civilian life, within the framework of the guarantee and restitution of rights. However, it is valid to ask oneself whether, from the perspective of demobilized minors under 18 years of age and the competent organizations in the subject, these programs have been effective for a resocialization process into civilian life and separation from the war. With this in mind, it is worth it to highlight some central concerns.

Limitations in Coverage: The program has attended to a very reduced number of former combatant children and youths, in relation to the total number estimated and to the number of demobilized. From 16 November 1999, until 30 April 2008, the ICBF program had attended 3,590 boys, girls and adolescents (of which 73.25% men and 26.75% women). This means that,

²²³ UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2005): Social and Moral Environment and Attention to Minors Demobilized from the Armed Conflict in Colombia.

roughly, the program has attended to about 32% of the total estimated of minors under 18 years in the war²²⁴.

Resocialization in an Urban Context²²⁵: in general, the model of attention at the institutional level is located in the main cities of the country, justifying it as an essential condition for security reasons, that removes the boys, girls and adolescents from the areas where they could be easily identified and punished by the groups to which they belonged. This decision –moving it to the cities, however, makes the social reinsertion process more difficult for many of these persons because, besides separating them from war practices, it is necessary to integrate them into a lifestyle different from the rural one to which they belonged. To put it in another way, reincorporation into the city implies going from the *hostility* of war to the *hostility* inherent to cities, which requires new tools and practices for living. It has been noted that, after they go through the program, many boys, girls and adolescents consider that going back to the countryside is a backward movement, which shows an uprooting of the rural person.

Resocialization in a Context Permeated by Armed Groups: in spite of the effort to locate the program in urban areas, as the proper space to separate these boys, girls and adolescents from the armed groups, its location within quarters or districts with a high presence of irregular groups has again exposed these boys, girls and adolescents to contact with a current war that continues to threaten their existence. When analyzing the case of Bogotá, for example, we can realize that after demobilization, those reinserted were put in places like Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe and San Cristobal Sur²²⁶, areas where the existence of armed groups is acknowledged. Thus, many of them have been contacted again, especially by paramilitaries, to be reinserted into their ranks²²⁷. The difficult conditions that the city offers them, and the uncertain panorama that the end of the program means for them, in many cases, makes it not even necessary to convince them to return, as this appears to be the only option that seems possible for them. Additionally, in 2006, it was known that the presence of these groups spread even

224 Taking as median the estimate of 11,000 children recruited into irregular armed groups.

225 BENPOSTA (2006) "Intersectoral Pilot Plan for the definition of an action program that contributes to a civil process of reinsertion within the framework of truth, justice and reparation, in the city of Bogotá". Bogotá.

226 GOVERNMENT UNDERSECRETARY OFFICE OF BOGOTÁ (SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ) (2006): Former combatant citizens, a challenge of reconciliation and inclusion for Bogotá. Characterization of the reinserted population and civic follow up to the process of reintegration. Bogotá. Page 24.

227 As it has been repeatedly denounced by OAS/MAPP in its quarterly reports Nos. 9, 10, 11 and 12. See COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS INTO THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June – December 2007): Pútchipu Bulletin No. 17-18 "Rearmament and new recruitment of youths in Bogotá".

to the shelters, where many of those who were there operated as active recruiters "... *there are people within the program, that either... it is not because they are reinserted... because they wanted to come from there, but because they come to recruit, then they go from shelter to shelter, looking at those that seem dispirited and those are the ones they take with them*"²²⁸ "(...) *since they recruit in several places; at least here, in Bogotá, they are recruiting in the shelters. Then... one tells the other "I am going to go" and I do not know what... and the latter tells the former that he wants to go too, then he begins to talk with all of them*"²²⁹.

Beneficent Program that gives rights in the form of benefits: such as it is conceived, the program makes it clear to the demobilized their character of "beneficiaries" of some rights that will be later guaranteed. This relationship, that puts the State in debt with the boys, girls and adolescents, leads to construct a civilian reintegration proposal based on the fulfillment of the pact. This takes for granted a series of free benefits offered by the State, such as room and board; health services; the possibility of access to basic and secondary education, or technical training; monthly support for transportation so that they go to courses; psychosocial attention; and access to documentation.

Even though the obligation of the State of guaranteeing these rights is not in doubt, it has generated strong tensions concerning the real interests of minors under 18 years as to their permanence in these programs, as it would seem that these economic or material "incentives" were their only link to the program. Such relationship of utility that the program itself strengthens, assuming hand over in exchange for benefits, reduces the importance of other moral and political reasons for leaving the war, emanating from the will itself and that should be reaffirmed at the time of the decision. The scheme of beneficent program implemented with boys, girls and adolescents who are violators is an important example of how this tutelary model may construct a subject demanding of things, with a worrying disconnection concerning citizen duties and rights²³⁰.

²²⁸ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS INTO THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June – December 2007): Op. cit.

²²⁹ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS INTO THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June – December 2007): Op. cit.

²³⁰ UNIVERSIDAD EXTERNADO (2004): "Follow up model after leaving the program for boys, girls and adolescents demobilized from the armed conflict" Report of the "Meeting of Researchers of Mobilized or Demobilized Boys, Girls and Adolescents and the armed conflict in Colombia". ILO-IPEC, April 2004.

Additionally, when analyzing the benefits given by the program from the approach of restitution of rights, several deficiencies are noted:

- Regarding psychosocial attention, the low impact of actions carried out regarding mental health and transformation of psychosocial norms is noteworthy. This is particularly worrying when taking into account that we are referring to minors under 18 years, victims of sociopolitical violence, with serious sequels from the war. The model must make an important effort in this regard, giving healing and socialization tools in different models and life options, giving priority to psychosocial restitution criteria. *"The youths were seated with paper and a marker in hand and with the psychologist or social worker, or whomever was at hand, and began to think, what are we going to do about washing the dishes?... those were the subjects the psychologist thought they were important to regulate"*²³¹.
- With respect to the right to education and vocational technical training, one sees lack of motivation. For many of the boys, girls and adolescents, the training courses and productive projects end up being a frustration, as they do not satisfy their expectations and the job offers they find when they leave the program. This frequently results in a disheartening panorama, where the return to war ends up being the only life option, as their civilian life plan goes in an important way through the exploration of productive alternatives that sustain adult life *"(...) we have wanted to leave, because we expected many things from the program, and they have not come through... the persons submit the projects and they are returned to them, although the paperwork is all right and everything... then they do not accept them... they are returned. So people become disheartened and the CODA is finished (...) they make you independent, when nothing is missing for time to end... and there is nothing else to do, not even work, nothing. The program is disloyal with you, sometimes very disloyal"*²³². Additionally, there have also been cases of youths who do not want to go back to training because they have observed situations of insecurity in the training spaces.

²³¹ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June – December 2007): Op. cit.

²³² COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June – December 2007): Op. cit.

From Beneficiary to Citizen²³³: The program assumes that at a given moment, the persons become independent from Government support and behave as autonomous, free and equal citizens. That is, it clearly establishes the way persons enter and the specific services they receive, but it is very confusing as to the separation process that will lead to the end of these aids. The demobilized enter and get used to a beneficiary program that will later leave them alone in a city that culturally, socially and economically is not prepared to receive and offer them proper living conditions. One may ask: what possibilities can society offer them and how to adapt to them? This confrontation has generated serious encounters with the reality they later find when they leave and that grievously disheartens them in their life plans. *"It cannot be denied that the State has made some publicity in radio and television stations and in fliers, inviting youths not to enlist or to reincorporate into civilian life. But, what does the State do to alleviate poverty? What does it do with the reincorporated youths? They just tell them lies, because they promise them plenty of things they do not deliver"*²³⁴.

Institutional Attention Model: It is noteworthy that the model centered on institutional attention has shown, both in institutional culture and in the juvenile subculture of the beneficiary boys, girls and adolescents, complex social and cultural dynamics characterized by the reproduction of conducts that are excluding, patriarchal, discriminatory, authoritarian, and leading to the escalation of conflicts (that validate practices such as the use of force, the law of the stronger, machismo, etc.), that put in serious question the effectiveness of the model for construction of reflexive, inclusive and democratic subjects. *"We notice that the practices of participation in the CAE are not only limited, but there also are abuses of authority by officials of the centers. With respect to authoritarian practices in decision taking we identify that, on one hand, they are frequently used and, on the other, the exercise of authority is generally domineering and does not use democratically constructed consensus"*²³⁵.

²³³ BENPOSTA (2006): Op. cit.

²³⁴ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (17 September 2009): Report of the Workshop. Words of an adolescent.

²³⁵ See: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2005): Op. cit.

5.2. Demobilization of Boys, Girls and Adolescents Members of AUC: Concealment and Impunity

"The demobilization of 'Richard' on 18 February, 2005, was not with his comrades of the Sinú and San Jorge groups. He speaks of three days before. He and other 86 'paras' that were not yet 18 years old were grouped in farm '06' (...) they gave each one of them 2 million pesos in cash and new clothing so that they return to their homes. It was the redundancy pay for the time served with the self-defense groups"²³⁶.

According to Article 10 of Law 975 of July 2005, one of the essential requirements for the paramilitaries to be accepted for collective demobilization was the hand over of boys, girls and adolescents linked with these groups, handing them over to ICBF. Notwithstanding, the process carried out did not pay attention to this requirement, avoiding the hand over of the boys, girls and adolescents in their ranks, and not mentioning the subject in the declarations and audiences given before justice by paramilitary leaders.

According to Human Rights Watch, 20% of the paramilitary structures were formed by minors under 18 years²³⁷. However, between 1999 and October 2007, ICBF has only attended to 1,037²³⁸ children members of these groups, which moreover is confusing, because at the end of the so called demobilization process 31,651 persons would have demobilized²³⁹. Of this number, 84 boys, girls and adolescents were handed over before the beginning of the collective "demobilizations", 307 were handed over as part of the collective demobilization process, 432 would have demobilized individually and 214 have been captured²⁴⁰. The groups that handed over more boys, girls and adolescents, in the framework of the collective demobilizations, were Bloque Central Bolívar, Centauros, Cacique Nutibara, ACC, Bloque Minero and Vencedores de

²³⁶ EL TIEMPO "Richard', an age minor relates his 'farewell' in Ralito". 13 July 2008. In http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-13/richard-un-menor-de-edad-cuenta-su-despedida-en-ralito_4374908-1

²³⁷ HUMAN RIGHTS WATCH (2003): Op. cit. Page 41.

²³⁸ See: High Commissioner for Peace, Evaluation of the peace process with the self-defense groups and application of the Justice and Peace Law, 22 October 2007, in www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2007/octubre/documentos/PROCESO%20DE%20PAZ-LEY-CON-SOLIDADO-P%C3%81GINA.pdf High Commissioner for Peace, letter to the General Procurator; 11 December 2007.

²³⁹ Twelfth Quarterly Report of the Secretary General to the Permanent Council for the Support Mission to the Peace Process in Colombia (OAS/MAPP) – February 2009.

²⁴⁰ Report of the Secretary General on Children and the Armed Conflict in Colombia, S/2009/434, 28 August 2009, paragraph 60.

Arauca²⁴¹. The small number of boys, girls and adolescents handed over (307) led the General Procurator Office to state that *"this shows that the handing over of boys, girls and adolescents is not significant in relation to the total used in the armed conflict, and in comparison with the number of demobilized adults, which implies the non-fulfillment of the demobilization condition of Article 10 Numeral 3 of Law 975 of 2005"*²⁴². The United Nations Security Council also warned on this point in its Report of 2007. *"According to official figures, 63 children were demobilized from AUC in 2006, in comparison with 17,581 adults. However, these children were not handed over officially, as the process of collective demobilization requires and it is feared that there are children who have not been included in that process"*²⁴³.

OAS/MAPP indicated in its Eleventh Report that the figure of attention of demobilized boys, girls and adolescents of the paramilitary groups may continue to grow *"because there are still minors that go to ICBF to enter the program, who apparently were sent homes by the commanders, days before the demobilization process. This situation proves that it is not yet clear what is the real figure of minors recruited by the AUC, during the years of their armed activity"*²⁴⁴.

If there is no certainty on the number of boys, girls and adolescents recruited into these groups and if, besides, it is very likely that the amount exceeded by far the consolidated figure regarding attention by the State, what has happened to the children that were part of these groups? Different hypotheses have been formulated; the first states that they were removed from the collective demobilizations and sent to others parts of the country where new paramilitary groups operate; the second says that they were liberated and delivered directly to their families, or left in their original communities with some sort of bonus in their pockets, preventing them from receiving the specialized attention of the State and the acknowledgement of the basic rights that is their due as victims; and the third that they were extrajudicially killed or died in combat²⁴⁵. In the matter, the High Commissioner for Peace, Luis Carlos Restrepo,

²⁴¹ Source: General Prosecutor Office – Justice and Peace Unit. In: <http://www.eltiempo.com/colombia/jjusticia/2008-07-13/ARCHIVO/ARCHIVO-4374929-o.pdf>

²⁴² This same concern is shared by the Public Ministry. See: General Procurator Office, "Follow up to Public Policies on Demobilization and Reinsertion", Bogotá, Colombia, June 2006, vol. II, page 338.

²⁴³ SEMANA, "The Invisible Crime" 26 April 2008.

²⁴⁴ Eleventh Report of the Secretary General to the Permanent Council for the Support Mission to the Peace Process in Colombia (OAS/MAPP) – May 2008, page 12. According to this Report, the consolidated attention up to December 2007 is 1,039 boys, girls and adolescents.

²⁴⁵ The analyses were made based on the information collected by the Coalition Against the Involvement of Boys, Girls and Adolescents in the armed conflict, in interviews with boys, girls and adolescents demobilized from the armed conflict. See: A Journey through the Colombian School from the perspective of the Rights of Infancy and Adolescence 2006-2007. COALICION COLOMBIA and CEJIL, "Report presented before the honorable Interamerican Commission on Human Rights", Washington D.C. USA. July 2007.

replied to the General Procurator Office that, at the time *"he did not have knowledge of a clear study on the number of children linked to the AUC"*²⁴⁶.

The failure to hand over children during this demobilization process was a reality made public in 2008. The judicial processes carried out in the previous years hid both the non-handing over and the crime of recruitment. It was thus confirmed by the first free version audiences to the top commanders, where the justice system did not inquire in depth into this practice; and no responsibility was accepted for this crime. In the 63 audiences carried out to 51 paramilitaries in 2007, the general rule was to ignore the recruitment of boys, girls and adolescents in the groups in which they operated, reducing the problem to isolated cases that were no part of the directives of the armed group and that were committed by the middle ranks without their authorization²⁴⁷.

All the same, in 2008 the seriousness of the subject became obvious and this year the paramilitary commander of the Bananero and Calima groups of the United Self-defense Forces of Colombia –AUC, Ever Veloza, alias "HH" was the first to recognize responsibility for the crime of illegal recruitment of boys and girls as a policy that covered the country since, as he said, they were useful to "go unnoticed and do intelligence work"²⁴⁸. In his free versions, Ramón Isaza accepted having recruited four children from North Tolima into the Self-defense Forces of the Middle Magdalena²⁴⁹. Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán" confessed that the Elmer Cárdenas Group had up to 358 minors in arms and stated that before his demobilization he returned, directly to their homes, 149 children, giving them to their families in Necoclí (Antioquia)²⁵⁰. Lastly, Guillermo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar", spoke of 97 boys and girls recruited into the ranks of the Central Bolívar Group²⁵¹. According to the public statements of alias "El Alemán", this situation was known by the High Commissioner for Peace, Luis Carlos Restrepo, and was a matter of agreement during the negotiations in order not to impair

²⁴⁶ El Tiempo "Paramilitaries hid the children they had in their ranks". 13 July 2008. In: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-13/paramilitares-escondieron-a-los-ninos-que-tenian-en-sus-filas_4374907-1

²⁴⁷ COALICION COLOMBIA and CEJIL, "Report presented before the honorable Interamerican Commission on Human Rights", Washington D.C. USA. July 2007.

²⁴⁸ Free version audience of Ever Veloza García, alias "HH", 26, 27 and 28 May 2008, in: Colombian Commission of Jurists, Bulletin No. 28: Series on the rights of the victims and the application of Law 975, Justice in Colombia first, extradition later: Before being extradited, alias "HH" and the other paramilitaries should complete their processes before the Colombian justice. Bogotá, 31 July 2008.

²⁴⁹ EL ESPECTADOR, "Ramón Isaza confessed having recruited minors". 25 July 2008.

²⁵⁰ EL TIEMPO, "Version of former commander on children recruited who were not delivered to the State causes uproar". 27 August 2008.

²⁵¹ EL TIEMPO, "Julián Bolívar", former commander of Central Bolívar Group, accepts that he recruited 97 minors". 28 August 2008.

the process²⁵². Mancuso also said that, as part of the AUC strategy, a decision was taken to deliver a minimum proportion of the children in their ranks in collective demobilizations²⁵³. To date, 1,020 cases of illicit recruitment have been mentioned during the free version inquiries, and a total of 389 have been confessed²⁵⁴.

All these declarations hinder the access to the benefits acquired within the framework of the Justice and Peace Law, according to its Article 10.3. In this sense, the Attorney General Office must declare not eligible those who applied to the benefits but have not fulfilled the obligation of handing over the recruited boys, girls and adolescents and having hidden their presence in their armed groups. All the same, until December 2008 the investigative entity had initiated investigations in just 4 cases, when at least 3,000 could be in process, considering the number of children attended to by the ICBF program. As the General Procurator stated in his communication to that office, *"the search for truth as a mechanism to obtain restorative justice in the case of boys, girls and adolescents used in the internal armed conflict"*²⁵⁵ is imperative.

Likewise, the Public Ministry recalled the need to *"individualize the subjects responsible of recruitment within the justice and peace process in course in the national territory, determining exactly some concepts that International Law imposes to the investigation processes in transitional justice and that the new Infancy and Adolescence Code foresees within the formulae of integral protection, of the higher interest of the child and of the reestablishment of rights"*²⁵⁶. It is because of this that, keeping in mind the seriousness of the situation, the Attorney General Office ordered, through Memorandum 057 of 15 August 2008, the treatment of the subject in special sessions, instructing the prosecutors of the Justice and Peace Unit to ask the demobilized about: the Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol, concerning the participation of children in armed conflicts; the Geneva Convention, in relation with the prohibition of recruiting minors; the Penal Code, concerning the illegal recruitment of minors under 18 years; and Law 975 of 2005, in relation to one of the eligibility requirements regarding the handing over of all boys, girls and adolescents linked with the armed groups.

The voids of the investigation, however, are not the only elements that have fed the impunity. The extradition in 2008 of top paramilitary commanders to the United States, so that they

²⁵² EL TIEMPO, "Version of former commander on children recruited who were not delivered to the State causes uproar". 27 August 2008.

²⁵³ SEMANA, "The Invisible Crime" 26 April 2008.

²⁵⁴ PEACE AND JUSTICE UNIT – ATTORNEY GENERAL OFFICE, "Reply to Petition Right No. 10388". 1st October 2009.

²⁵⁵ Due to illicit recruitment of age minors, the General Procurator urges to take measures against illegal armed groups. Bogotá, 14 September 2007, in: http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2007/noticias_375.html Consultation date: 16 June 2008.

²⁵⁶ Ibid.

answer before their justice system for the crime of drug trafficking, has closed another door to the possibilities of clarifying the crimes of recruitment. Just when the subject was beginning to appear in the free versions, the Colombian Government extradited 16 commanders of AUC put on trial under Law 975, with the argument that they had continued to commit offences after demobilization²⁵⁷. This decision highlighted the scarce will and the incapacity of the State of applying justice regarding the crimes against humanity committed in Colombia. In effect, in such circumstances, and according to Law 975 itself, the Government should have taken the paramilitaries to ordinary justice for crimes against humanity instead of giving priority to their judgment in the United States for the crime of drug trafficking. In the words of CIDH, the extradition of these commanders "*hinders the investigation and judgment of serious crimes as established by the Justice and Peace Law in Colombia and by the ordinary judicial procedures of the Colombian justice. It also closes the possibilities of direct participation of the victims in the search for truth on the crimes committed during the conflict and limits the access to the reparation of the harm done. Likewise, this act interferes with the efforts to determine the links between State agents and these paramilitary leaders*"²⁵⁸, particularly information that leads to the establishment of the truth on the whereabouts of disappeared persons.

In such context, the investigation and punishment of a crime of recruitment must become a central aspect of the justice process within the framework of Law 975 of 2005. *Just a few paramilitaries who have given their versions have been inquired regarding their acts of recruitment of children, and just 23 paramilitary commanders have confessed this crime, in spite of the systematic way with which it is being perpetrated*²⁵⁹. *In such a state of things, the need to submit to justice all those responsible of genocide, crimes against humanity, and war crimes against boys and girls, remains latent*²⁶⁰. This situation is particularly relevant in the Colombian context, because of the forthcoming lifting of the reservation to the Rome Statute maintained by Colombia for the investigation of war crimes.

²⁵⁷ It is noteworthy that during more than five years, the Government denied the accusations made by human rights organizations in this sense, and that suddenly acknowledged, in some way, that those accusations were true". "The local judicial systems and the impact of the Rome Statute", Consultative Conference on International Penal Justice, 11 September 2009, United Nations, New York, Gustavo Gallón, Colombian Commission of Jurists.

²⁵⁸ INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Press Release No. 21/08, CIDH expresses concern for the extradition of Colombian paramilitaries, 14 May 2008.

²⁵⁹ Ibid.

²⁶⁰ Annual report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/12/49, 30 July 2009, paragraph 9.

Finally, to the former obstacles must be added the fact that proper investigations have not been made with relation to situations that began to be known through the confessions of the demobilized. The way crimes such as recruitment were committed, the location of bodies of disappeared persons, the formation of paramilitary structures and the identity of their accomplices, have not been properly investigated, especially in cases where the highest levels of Government, security entities, and members of the national and international business sectors are involved²⁶¹.

5.3. Measures for Truth, Justice and Reparation

“Each person has his or her own version of the truth. Government has its truth, the paramilitary groups have their truth, the guerrilla groups have their truth, often according to what benefits them. When the truth is related to justice it is more difficult”²⁶².

Although the Constitutional Court established the parameters to guarantee the rights of the victims in the process of application of the “Justice and Peace” Law, the Government has tried, through regulatory decrees and in practice, to restrict the reach of the sentence of the Court²⁶³.

As regards justice, the Government has made a mockery of the rights of the victims by extraditing to the United States several of the top paramilitary commanders, hinder the process of the investigations and their judgment. Although it was announced that the extradition would not be an obstacle to the judicial processes of these paramilitaries in the country, they will not be able to answer before the Colombian justice until they have completed their sentences in the United States. So far, only two of them have been condemned to more than 20 years of prison. This could mean that the victims will have to wait a long time and that the first audiences with the Colombian prosecutors will occur in an undetermined time. In this sense, it is imperative that the mechanisms of judicial cooperation be effectively implemented so that the processes within the framework of the Justice and Peace Law advance satisfactorily.

²⁶¹ See the Series of Bulletins on the Application of Law 975 and the Rights of the Victims, in: www.coljuristas.org

²⁶² COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June 2008): Round Table with youths. Words of a demobilized youth. Bogotá.

²⁶³ CONSTITUTIONAL COURT, Sentence C-370 of May 2006.

The lack of guarantees for the victims has been another obstacle for the operation of justice. Some youths, who were recruited into the armed groups when they were children, have expressed fear about the possibility of participating in new investigations to clarify the crime of recruitment of which they were victims, since they do not consider that there are enough security guarantees to carry out these investigations and, as a consequence, in principle, they would not be willing to participate in the processes against the commanders of the paramilitary groups or, eventually, against members of the guerrilla, because of the possible consequences for them. Their fears have sound bases: in Valle del Cauca it was known of a displacement of 32 demobilized adolescents that chose to leave their communities due to the situation of danger they perceived²⁶⁴.

Likewise, the massacre of 12 Afro-Colombian youths demobilized from the Calima group in Buenaventura was attributed to members of the AUC²⁶⁵. *"As long as the contexts of illegality and the presence of armed factions persist, it will be very difficult for victims to join the process and participate actively. We should not lose sight that illegal groups give rise to and create a favorable atmosphere for impunity. Under these circumstances, the citizens affected by paramilitary violence prefer to remain anonymous, for fear of reprisals"*²⁶⁶.

On the other hand, they observed that the delivery of information to judicial authorities, concerning those responsible for recruitment into the group, generates not only risks and threats but also difficulties for their individual judicial situation, especially since the Infancy and Adolescence Law took effect. Formerly, in effect, in processes to demobilized children, preclusion was ordained, which closed the chapter of his or her life inside the group, in judicial terms.

All the same, since the Infancy and Adolescence Law such treatment is substantially different, given that Article 175 establishes that the opportunity principle will not be applied to children and youths who have participated in serious violations of human rights. Thus, from the questioning of those responsible or testimonies from third parties, there could emerge facts that affect their judicial situation, instead of contributing to determine the responsibility of the victimizer for the recruitment. *"What if one goes to the trial and other things come out, it is like committing suicide"*²⁶⁷.

²⁶⁴ Information delivered by UNICEF – July 2007.

²⁶⁵ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (20 January 2006), op. cit. paragraph 62.

²⁶⁶ Support Mission to the Peace Process in Colombia – OAS-MAPP (February 2009): op. cit. page 12.

²⁶⁷ COALITION AGAINST THE INVOLVEMENT OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS INTO THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA (June 2008): Round Table with youths. Words of a demobilized youth. Bogotá.

The former shows one of the main difficulties at the time of orientating actions to clarify this crime and it imposes the challenge of thinking in judicial investigation strategies different from the declaration of the demobilized child, or his or her direct participation in the processes. The search for safe environments and security guarantees is one of the main challenges before the permanent vigilance by the armed groups of the witnesses, victims, boys and girls and youths demobilized from their ranks.

Additionally, the obligation to investigate the involvement of boys and girls by all groups participating in the hostilities has been openly ignored by the State, seriously hindering the right of victims of this crime to access justice. Since the first public cases of involvement were known and ICBF began to receive the first demobilized children, the operators of justice have not assumed with seriousness and efficacy the investigation of these facts, nor have the authorities responsible of the attention and protection of these children been coherent with the obligation of informing the administration of justice about these situations. The authorities ignore the condition of victims of these boys, girls and adolescents, emphasizing their condition as victimizers, with which the importance of promoting judicial investigations that determine the responsibility of recruiters is reduced.

Finally, the cases of sexual violence against girls and adolescents in the context of the armed conflict continue to show high levels of impunity. In the free versions of the Justice and Peace Law, 15 cases of sexual violence have been mentioned, of which only 4 have been confessed²⁶⁸.

With regard to truth, although the free audiences have allowed to clarify some aspects related with the paramilitary actions of recruitment, it continues to be a nearly invisible subject and there is not even an approximate number of victims. It is very important to locate a significant number of these boys, girls and adolescents, through an active search, making sure that they are able to have access to the services of the State to which they have a right. This must be the commitment of the High Commissioner for Reintegration. A transition process towards peace should begin with clarifying the truth and the location and identification of all the victims, in order to later define their needs and the way the State will guarantee justice and reparation. The processes in Colombia have been carried out backwards: the law and the reparation decrees are promulgated first and then an historical commission is formed. Being this the case, what is the use of the historical commission if its conclusions have no incidence on justice and reparation?

²⁶⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (28 February 2008): op. cit. paragraph 60.

As to reparation, the Government has adopted several measures contrary to its obligations of guaranteeing the right of victims to integral reparation. Decree 1290 of 22 April 2008, creates the individual reparation program through administrative decision for victims of illegal armed groups. This instrument excludes the victims of the State as beneficiaries of the program²⁶⁹, it does not contemplate the right of victims to integral reparation²⁷⁰, it does not include future victims²⁷¹, it ignores the duty of the State to guarantee access to reparation and it bases the reparations on solidarity, foreseeing only a precarious indemnity that is confused with aid and humanitarian assistance, with extremely long terms for their execution. The unfortunate position shaped in this Decree is defended by the Government within the framework of the debate on the Victims Bill, promoted by several members of parliament who seek to create a policy that covers the victims.

With respect to indemnity, the General Procurator Office issued Directive 013/08 in June, 2008, *"by which instructions are given to the public entities and officials with direct and indirect responsibilities in the processes of reinsertion and reintegration of the demobilized population, specifically in the fulfillment of the commitments of socioeconomic benefits that the Law ordains for them"*²⁷². This Directive urges *"the relevant authorities to take the necessary steps so that the boys, girls and adolescents obtain the socioeconomic benefits to which they have a right. Besides, it asks the High Commissioner for Human Rights to inform him on the hand over of children demobilized within the framework of the negotiation process with the National Government"*²⁷³.

Finally, it is worth noting the case of boys, girls and adolescents involved in the "emergent" groups or organized armed violence, currently excluded from any possible access to truth, justice and reparation. The current legislation and policy of attention differentiates children de-

²⁶⁹ Presidential Decree 1290 of 22 April 2008. Article 2 "(...) Violations not included. Crimes against property, wealth and collective violations or those attributable to agents of the State, are not included in the present program and will be regulated by the norms applicable on these subjects".

²⁷⁰ Integral reparation assumes the effective fulfillment of the principles of: restitution, indemnity, rehabilitation, satisfaction and guarantees of no repetition (Basic principles and guidelines on the right of victims of manifest violations of international norms of human rights and serious violations of international humanitarian law to lodge an appeal and obtain reparations, Principle 18, UN GA Res. 60/147 of December 2005)

²⁷¹ The Decree establishes a legal framework that will only cover those victims of violations of their fundamental rights before the Decree becomes applicable, which gives the impression that the armed conflict has ended and that, from that date, there will not be further reparations for acts of armed groups. Thus, the victims of acts of groups not yet demobilized or that acting under other names commit violations after that date, would not be covered. The breaches to international humanitarian law by guerrilla groups would not be covered after that date either, leaving the victims of these groups uncovered by reparation.

²⁷² General Procurator Office. Directive 013/08.

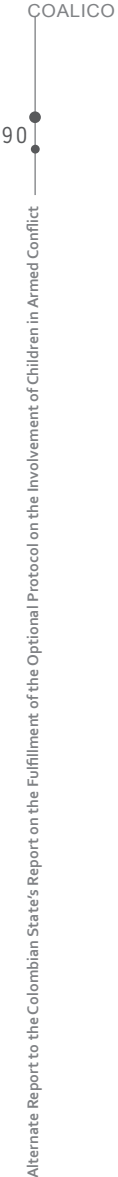
²⁷³ OmbudsPERSON's OFFICE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS (2008): Ethical judicial System for the attention of boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups. Bogotá.

mobilized from the armed groups from those of delinquent or criminal bands. The former are defined by their belonging to an irregular army or armed group. The latter are defined as those who have committed a violation or are "in conflict with the penal law". The boys and girls who are violators²⁷⁴, when they are (socially) defined, are treated as members of delinquent groups and in this case, although there are attention policies, they show some differences with respect to the first group, in relation to plans and actions of reparation, and lack prevention strategies, according to internationally recognized parameters and the regime to which they are submitted is closer to that of adult delinquents than any other thing. *"This subtle distinction between illegal armed group and criminal organization implies a risk for the protection of adolescents that demobilize from the latter as, under the current legislation and judicial operation, they would not have the privilege of being treated by the State as victims of political violence, nor as victims of the crime of illicit recruitment, restricted exclusively to illegal armed groups, and their destination from the judicial route defined by the cited norms would be as subjects of the system of juvenile penal responsibility, and not as adolescent victims to whom the principle of opportunity is applied"*²⁷⁵.

On the other hand, the fact that delinquent bands or groups of organized armed violence cannot be penally prosecuted for illicit recruitment of minors under 18 years is an obstacle for the judgment of this crime, and perpetuates a war crime that cannot be dissuaded. Moreover, this condition has been used by paramilitary groups that, which, being considered as "emergent groups", acquire the character of delinquent bands and not of illegal groups. It is then obvious that if the different sectoral and population policies are not redefined so that the condition of child takes priority over the kind of armed group to which he or she belongs (situation), the cycles of the presence of children in armed groups and delinquent groups will be repeated and will have mutual feedback. But, especially, it is both necessary and urgent that clear policies at the national and regional levels concerning prevention be established and applied.

²⁷⁴ The new Infancy Law refers to the juvenile, and more specifically adolescent, penal responsibility.

²⁷⁵ INTERSECTORAL COMMISSION FOR THE PREVENTION OF THE RECRUITMENT AND USE OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS BY ILLEGAL ARMED GROUPS. "Second Management Report of the Technical Secretariat. December 2008, page 7.



6. INTERNATIONAL ASSISTANCE AND COOPERATION

6.1. Process of acceptance and implementation of the mechanism of Resolution 1612

“Resolution 1612 seeks to go beyond words and move into concrete action”²⁷⁶

The United Nations Security Council has issued, since the late 1990s, a series of provisions, norms and principles that seeks to put an end to the infringement of the rights of persons under 18 years of age in the midst of war²⁷⁷. Resolution 1612 adopted in June 2005 formally sets up a mechanism aimed at supervising, monitoring and documenting the main violations to the rights of boys, girls and adolescents in situations of armed conflict in order to obtain timely information to facilitate their future protection, the Monitoring and Reporting Mechanisms (MRM). Several State members of the United Nations are urged to apply this mechanism. Some countries were already on the agenda of the Security Council, such as Ivory Coast, Burundi, Democratic Republic of Congo, Somalia and Sudan, while others were not on the agenda, such as Birmania, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Uganda and Colombia. The Resolution is applied automatically to the first group of countries (See Annex I of the Resolution), whereas for the second group, it requires the explicit approval on the part of the States (Annex II of the Resolution).

²⁷⁶ Declaration of the Special Representative of the Secretary General on the issue of Children and Armed Conflict, Ms. Radikha Coomaraswamy in the open debate of the Security Council in 2006.

²⁷⁷ Resolutions 1261 of 25 August 1999; 1314 of 11 August 2000, 1379 of 20 November 2001; 1460 of 30 January 2003, 1539 of 22 April 2004; 1612 of 2005.

Consequently, the Secretary General of the United Nations invited the countries listed in Annex II to accept the mechanism in order to “*ensure the fulfillment of the local and international norms that protect children affected by armed conflicts*”²⁷⁸. However, several countries postponed their acceptance arguing various concerns regarding the same.

*“Colombia and the Philippines tend to view the working group as an open door for inclusion in the agenda of the Security Council. A strong advocacy effort is required to convince them that cooperation with the Special Representative of the Secretary General (SRSG) to implement a special monitoring team and a working group will serve their own interest, that the special team and the working group must work in close consultation with them, and that the approach will focus on the use and the recruitment of child soldiers. To this end, the governments of those countries are encouraged to receive the visit of the SRSG”*²⁷⁹.

Conscious of the importance of a mechanism as the one proposed in Resolution 1612 to move forward in the protection of boys, girls and adolescents in armed conflicts, since its issuance, human rights organizations and some United Nations agencies initiated a dissemination and an appropriation process of this instrument in order to prepare the way for the acceptance of the Monitoring and Reporting Mechanisms by the Colombian State. Likewise, with the support of international organizations such as the International Coalition to end the use of child soldiers and the Watchlist on Children and Armed Conflict, they promoted a strategy to influence the diplomatic corps and international organizations in order to disseminate the contents of the Resolution and to set the bases for the formation of an eventual Special Alert System and Submission of Reports or a Special Country Task Force in Colombia (CTF). This is how these entities made up a working team after UNICEF officially reported the approval of the Resolution in November 2005.

The coordinated work of this working group represented a significant progress towards the expansion of the protection framework for children victims of the armed conflict and made possible to attain significant achievements such as the following:

²⁷⁸ V Report of the Secretary General of the United Nations on the issue of Children and Armed Conflict, United Nations document A/59/695-S/2005/72 of 9 February 2005.

²⁷⁹ Presentation of the French Delegation to the United Nations during the Wilton Park conference on children and armed conflict. “Achievements and projections of the working group of the Security Council on children and armed conflict”, 20 March 2007 (non-official translation).

- Opening of communication channels and influence so that the subject would be incorporated in the agendas of United Nations Agencies in Colombia as a priority subject.
- Analysis of the six categories used by the Secretary General in his reports, according to the context and the most significant violations of the rights of children in Colombia.
- Preparation of a guide for data collection that involves various local, regional and national actors.
- Expansion of the efforts aimed at data collection, search and analysis on the situation of children victim of the armed conflict.
- Consolidation of relevant information in each of the categories of the Secretary General's Report.
- Collective analysis of the information proposing joint actions and issuing recommendations aimed at state entities responsible for the subject and to the international community, among other relevant actors.
- Periodic submission of information to the Security Council as input for the objective evaluation of the evolution of the situation within the states.
- Organization of verification missions on the human rights situation and the humanitarian rights of boys, girls and adolescents in five regions of Colombia.
- Initiation of a sensibilization and training process with local organizations in several departments.
- Qualification of the coordination among United Nations agencies, civil society and the Public Ministry.

For its part, the Special Representative of the Secretary General of the United Nations on the question of children and armed conflict, Radhika Coomaraswamy, made two visits to Colombia in order to initiate a dialogue with the government on the implementation of the MRM and to hold meetings with state officials, boys and girls victims of the armed conflict, agencies of the United Nations System, international cooperation and civil society organizations to learn about the situation endured by the country.

In spite of the strong political advocacy at the national as well as at international level, the process initiated since 2005 in Colombia faced difficult moments due to the Government's hesitance to accept the MRM, given concerns related to the following presumptions:

- 1 – Entry in the MRM heightens the attention of the Security Council towards Colombia in the concrete case of boys and girls affected by armed conflicts, which requires greater efforts on the part of the State to respond to the situation.
- 2 – Acceptance of the mechanism implies acknowledging that there is an internal armed conflict in Colombia which seriously affects children due to the actions of all armed groups that take part in hostilities.
- 3 – Upon setting up an undifferentiated MRM for the situations contemplated in Annex I and those in Annex II, the “situations of boys and girls in those armed conflict situations are put at the same level”. Thus Colombia is placed next to countries such as Sudan or the Democratic Republic of Congo, as one of the states where more children are involved into armed groups, which does not correspond to the official version of the situation.
- 4 – The information on Colombia included in the last Report of the Secretary General clearly shows once more the seriousness of the violations committed against boys and girls, not only by the guerrillas and paramilitary groups but also by the State Security Forces, which are identified as part of the conflict responsible for the indirect involvement of boys and girls.
- 5 – The statement in the Secretary General’s Report about the persistence of involvement of boys and girls by paramilitary groups and “new groups” goes against the government’s campaign to demonstrate that paramilitarism has been dismantled in Colombia. In an open debate on 12 February 2008, on this subject, the government stated that: *“Out of the 11 self-defense groups listed in Annex II of the Report presented in February 2005, only two groups appear in the Seventh Report and at this time, these are practically dismantled. With the disappearance of the armed self-defense structures, the danger of forced recruitment by them has disappeared”*²⁸⁰.
- 6 – On the other hand, acceptance of the MRM opens the door for the Security Council’s working group to adopt measures vis-à-vis the situation of Colombia and its “tool-kit”, such as: *“prohibition to export or supply small arms and light weapons and other military equipment and military assistance against the parts in armed conflict situation that may be submitted to its consideration and which may constitute a breach of applicable international law in relation to the rights and protection of children in an armed conflict”*²⁸¹.
- 7 – The continuous call to state members, the SRSB, international NGOs and the Security Council itself to *“issue concrete responses vis-à-vis the parts included in the Secretary General’s list which have repeatedly been pointed to as responsible of the crime of recruitment of boys and girls”*, has

²⁸⁰ Open debate in the Security Council of the United Nations, 12 February 2008, New York.

²⁸¹ Resolution 1612 of the Security Council.

generated concern as this represents the possibility of referring situations to the International Criminal Court, which in the case of Colombia, will have consequences once the seven-year reserve to the Rome Statute is raised.

However, in spite of the described fears and preventions, the Colombian Government formally accepted Resolution 1612 in December 2008. Thus, since January 2009 a Country Task Force (CTF) operates in the country. The CTF is made up by United Nations Agencies with presence in Colombia, three NGO delegates and the Ombudsperson's Office. As a result of the application of Resolution 1612 in Colombia, the Secretary General of the United Nations presented its first report on children and the armed conflict in Colombia on 28 August 2009.

6.2. International cooperation in relation to the application of the Optional Protocol

*"We call upon the international community in general and particularly friendly countries to continue supporting the process and call upon the parties to initiate again a dialogue for the negotiated political solution to the conflict, guaranteeing the participation of victims of crimes against humanity and war crimes, as well as the whole of society so that the structural causes of violence can be gradually solved"*²⁸².

The international community has had a fundamental role in the evolution and development of the Colombian armed conflict. State actors such as Brazil, Cuba, Ecuador, the United States, Mexico, Nicaragua, Venezuela; and international organizations such as the Andean Community (CAN), the Rio Group, the Organization of the United Nations (UN), the Organization of American States (OAS), the South American Union of Nations (UNASUR), the Inter-American Development Bank (IDB), the World Bank (WB), the Andean Promotion Corporation (CAF) and the International Monetary Fund (IMF) have developed significant work related to the armed conflict and its impact on civil society.

The following are some of the initiatives undertaken by the states, international organizations, international cooperation organizations in the framework of the Colombian conflict: Humanitarian and peace agreements; mediation with armed groups; support to reintegration and demo-

²⁸² COLOMBIA-EUROPE-UNITED STATES COORDINATION (December 2007): Declaration of the National Assembly, Bogotá.

bilization processes; assistance to victim communities; the fight against drug trafficking; measures in favor of truth, justice and reparation; financing of the democratic security policy. Some concrete commitments that at present acquire special relevance are: the presence of the UN in the country²⁸³ with offices such as UNICEF, UNHCHR, ACNUR, OCHA, UNIFEM; the peace laboratories such as the flag project of the European Union²⁸⁴; the OAS/MAPP mission to support the peace process in Colombia; the support of European states related to attention of victims, the reintegration process and the consolidation of a national commission on reparation; the role of cooperation financed through numerous international NGOs in relation to the restitution of the rights of the society affected by the armed conflict in relation to food security, health, housing and education; and the support of the United States to the military strategy of the current Government, mainly through Plan Colombia. Within these interventions, some have been more successful than others with regard to contributing to the construction of peace in Colombia. For example, human rights organizations of civil society value the work and support obtained of the UN international cooperation. However, other initiatives such as Plan Colombia and the Peace Laboratories are seriously questioned in terms of their actual interests and effects.

With relation to boys, girls and adolescents, victims of the armed groups, the role played by some countries such as Canada, Holland, Norway, the United Kingdom and Sweden as well as international cooperation organizations such as the European Commission (Mainly through UNICEF, UNHCHR and IOM), and the United States Agency for Development, USAID stand out. The above mentioned have been directly involved in the resocialization processes of victim boys, girls and adolescents and the strengthening and implementation of a public policy regarding protection and prevention. To this end, they have provided technical support and other assistance to strengthen the country's capacity to implement public policies, plans and programs that guarantee the rights of children affected by the armed conflict.

However, it is clear that this cooperation on behalf of victim boys, girls and adolescents is set in the framework of policies for promotion of the millennium goals, acting within a humanitarian and development approach without political responsibilities. In other words, the cooperation does not debate topics that could be questioned at the political level, such as the effects of democratic security on the recruitment of children, or the total requirement for the full truth regarding the failure of paramilitary groups to hand over persons under 18 years of age. In this

²⁸³ Colombia is one of the States that have a larger presence of United Nations Agencies in the world. There are 24 between Programs, Funds, Regional Commissions, Specialized Agencies, Offices of the Secretariat, Inter-Agency Programs and allied organizations.

²⁸⁴ The Peace Laboratories are financed by the European Union since 2002 in Santander, César, Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Meta, Sucre and Bolívar to be finalized in 2010.

sense, it is noted that in the last few years, international cooperation has lost power for political influence, probably due to its loss of autonomy in the framework of the current Government. Additionally, civil society questions the support of organizations such as the IOM or USAID, precisely because they have shown a weak political position that does not measure correctly the costs and responsibilities of the actions that they declare, when they support some state programs that in their view have a partial understanding of the context. A good example is the Intersectoral Commission for the prevention of recruitment and the use of boys, girls and adolescents by organized illegal armed groups which is currently financed by UNICEF, USAID and IOM and the guiding principle of which disregards the responsibility of the armed forces in the involvement of persons under 18 years of age in the armed conflict. This is an omission discussed by civil society which openly disregards part of reality.

It is also observed that financing of national policy on protection and prevention of the participation of boys, girls and adolescents in the armed conflict is essentially based on international cooperation, mainly on the support provided by UNICEF, IOM and USAID. An analysis of the budgets of the ICBF Attention Program and the Technical Secretariat of the Intersectoral Commission shows that most of the resources are provided by international cooperation with a minimal contribution of the State. In relation to the ICBF attention program it is noted that while, between 2005 and 2008, the institution invested a total of 19 billion pesos from its own budget, the international cooperation for the same period amounted to 31 billions provided by IOM, UNICEF, the European Union, ILO and the Madrid Autonomous Community²⁸⁵; that is, 62% of the total investment in the program. Furthermore, 78% of the budget of the Technical Secretariat of the Intersectoral Commission for 2008 and 2009 was provided by IOM, UNICEF and Canadian International Development Agency, (ACDI), while the state contribution through ICBF amounted only to 22%²⁸⁶.

It is therefore a matter of concern that the international cooperation should assume such a significant responsibility when its main goal should be to complement efforts. This complementarity should contribute to the efforts of a State that is aware of its obligations and fully responds to them. Currently the opposite is the case, where it seems that the international cooperation provided to the State and civil society has taken over many of the tasks that, according to Law, are responsibility of the State to guarantee.

²⁸⁵ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "Response to right to petition No. 1758142020" of 30 September 2009.

²⁸⁶ INTERSECTORAL COMMISSION FOR THE PREVENTION OF RECRUITMENT AND USE OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS BY ILLEGAL ARMED GROUPS "Response to a right to petition submitted by the Coalition against the Involvement of Boys, Girls and Youths in the Colombian armed conflict, submitted on 8th September 2009". September 25, 2009.

Lastly, it is worthwhile to mention the focalization of resources. In order to comply with the procedures of the Paris Declaration on the Efficacy of Development Assistance²⁸⁷, the resources of international cooperation are channeled through the Colombian national budget. For this reason, in 2005, the Government issued Decree 2467 by which it created a new entity called Presidential Agency for Social Action and International Cooperation, which incorporated the former Colombian Agency for International Cooperation, the Social Solidarity Network and the Peace Investment Fund. However, this new strategy, which aims at "efficacy of support", is not regarded positively by all. *"The fact is that this form of cooperation is aimed, indirectly, to the war. To explain this statement, we can use a simple example. If a state has a budget of 100 and spends 6 to finance the war, these 6 are diverted to finance social expenditure such as health, education and environmental sanitation. If the international cooperation takes over the partial financing of this social expenditure, which cannot be taken care of properly because part of the national budget is allocated to the war, then the war is being financed indirectly. This is what is happening in Colombia"*²⁸⁸.

Plan Colombia as emblematic example of actions that are contrary to human rights

*"In my farm I had 24 hectares of coca. Now I do not have any coca plants because I signed a pact with the Government to eradicate what I had. I used all my resources in 16 hectares of palm for the production of palm hearts and they were sprayed". "They give us a plant to grow in our farm and a month later they spray it. What do the Colombian and the US Governments want in our Putumayo? A desert"*²⁸⁹.

Plan Colombia has been the fundamental strategy through which the United States has supported the country in a double purpose: the fight against drug trafficking, and the fight against terrorism²⁹⁰. *"To this end, the United States has spent over \$6 billion dollars since 2000, approximately*

²⁸⁷ ORGANIZATION FOR COOPERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT (2005): Paris Declaration on the Efficacy of Development Assistance, Paris.

²⁸⁸ DAVIDE BOCCHI (2009): "Analysis of the European Union foreign policy during the 2002-2008 period towards a negotiated solution to the Colombian conflict". For consultation: Javeriana University library.

²⁸⁹ Testimonies given by members of the Putumayo community. En: ASSOCIATION FOR ALTERNATIVE SOCIAL PROMOTION (MINGA) AND CONSULTANCY FOR HUMAN RIGHTS AND DISPLACEMENT (CODHES) (November 2004): Report of the observation mission on the effects of Plan Colombia in the departments of Nariño and Putumayo. Bogotá.

²⁹⁰ Initially it was conceived as a strategy to fight drug trafficking and later, after September 11, 2001, it involved the fight against the three Colombian armed groups that were on the "terrorist lists" then. The project became a counterinsurgency project, called "a unified campaign against drug trafficking, terrorism and other threats to the Colombian national security", according to the text of the law. Then in 2005 it is oriented to what they called, the "regional hemispheric security".

80% on the Colombian armed forces"²⁹¹ and the remaining 20% in economic and social assistance programs (peace, human rights protection, forced displacement, food security, among others).

Today, nine years after its initiation, its failure is evident. Its results are striking. According to the United Nations world report on drugs presented in 2008²⁹², in spite of the fight against drug trafficking conducted by the two countries, the United States has the first place as the nation with the highest consumption of narcotics in the world, and Colombia registers a 27% increase in illicit crops for the year 2007²⁹³, thus producing 55% of the cocaine consumed in the planet. As to the fight against terrorism, the results are not encouraging either: the groups listed as terrorist survive, the conflict continues and armed organizations and groups mutate and multiply, which demonstrates the limitations of the military strategy. The plan has not only failed in terms of obtaining the stated objectives. It has failed because it has implied negative effects in relation to: violations of human rights; military control of the United States in the territory²⁹⁴, it has had environmental effects on the water, air, medicinal plants and subsistence crops due to spraying; it has created health risks and risks for the food security of peasant and indigenous populations due to spraying and manual eradication; failed social pacts for crop substitution; and paralysis of the local economy "... *the plan has been a waste of resources. The cocaine entering the United States costs the same as eight years ago, in some places it is cheaper and easier to get. Aerial spraying has caused an environmental disaster and it has harmed the health and crops of poor Colombian peasants while the quantity of coca leaves grown has been constant. This suggests that Plan Colombia has very little impact on any fluctuation on the price*"²⁹⁵.

Acknowledging the limited impact of this policy to fight terrorism and drugs, Phase II of Plan Colombia proposed to reduce the amount aimed at military assistance seeking to strengthen the social component. This unleashed a perverse logic in favor of the so-called "social recovery of the territory". This new approach based on the "Integral Action Doctrine" presupposes civi-

²⁹¹ Letter sent by North American organizations to President Barack Obama. march 2009. Available in: http://www.ajpl.nu/radio/index.php?option=com_content&view=article&id=627:fin-al-plan-colombia-y-a-la-fracasada-sguerra-contra-las-drogass&catid=77:comunicados&Itemid=177

²⁹² OFFICE AGAINST DRUG AND CRIME (2008): World Report on Drugs. See in: http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_Spanish_web.pdf Pp. 17

²⁹³ In 2007 the total surface with coca plants in Bolivia, Colombia and Perú increased 16% to 181,600 hectare. See: OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (2008): Op. Cit. Page 69

²⁹⁴ Currently the installation of 7 strategic military bases in Colombia is being negotiated. This, in addition to the 3 already occupied, would give a total of 10 military installations occupied and used by the United States Armed Forces.

²⁹⁵ Letter sent by North American organizations to President Barack Obama. March 2009. Available at: http://www.ajpl.nu/radio/index.php?option=com_content&view=article&id=627:fin-al-plan-colombia-y-a-la-fracasada-sguerra-contra-las-drogass&catid=77:comunicados&Itemid=177

lian military and intelligence actions which suit the two countries with the purpose of, on the one hand, guaranteeing hemispheric security in the region; and on the other, recovering the territory socially and militarily²⁹⁶. As the Ministry of Defense declared: it is understood as *"a set of principles which must orient the coordinated action of the legitimate force with the social action of the State and civil society. The objective is to execute, in the next 3 years, sources corresponding to the defense sector in community welfare projects in areas not yet reached by the State and where the State Security force (PF) is already present. This does not replace the social action of the state but allows social efforts to gain time"*²⁹⁷.

The combination of military and civilian actions within a predominantly military strategy is a subject against which Colombian human rights organizations have shown emphatic disagreement because it disregards the principle of distinction between civilians and combatants, it puts at risk the autonomy of civilian authorities affecting the basic principles of a Social State with Rule of Law, and it subjects social policies to war parameters. How can tasks related to social policies and economic, social and cultural rights be assigned to the military forces supported by Plan Colombia since these tasks are not within their mandate and do not correspond to them, particularly when these forces have the worst record of human rights abuses in the Americas?

According to the final declaration of the National Assembly of the Colombia-Europe-United States Coordination of social organizations and non-government human rights organizations (CCEEU) that took place in December 2007, the so-called "social and military recovery of the territory" is the strategy that has been used to justify systematic human rights violations, extra-judicial executions (the so-called "false positives") and persecution of social organizations opposed to the Government and severely stigmatized and branded as terrorists. Likewise, the scheme considers acceptable that the national social policy resources and the contributions of international cooperation end up aligned in accordance with the democratic security policies and the war strategy. The Integral Action Doctrine constitutes the *"dismantling of the principles of the Social State with Rule of Law and giving up the search for peace and peaceful coexistence by means of negotiation"*²⁹⁸.

²⁹⁶ See: "Integral Action as a war strategy- "365 days of work make the difference". 4th July 2008. At:: <http://elyacare.wordpress.com/2008/07/04/la-accion-integral-como-estrategia-de-guerra-365-dias-de-trabajo-que-hacen-la-diferencia/>

²⁹⁷ MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE (2007), "365 days of work make the difference". Annual Report of the Ministry of Defense. July 2006-July 2007, Bogotá, Page 2.

²⁹⁸ COLOMBIA-EUROPE-UNITED STATES COORDINATION (December 2007): Op. cit.

7. CIVIL SOCIETY INITIATIVES

“It is a matter of concern that some high level Government officials have continued the practice of publicly branding human rights defenders and trade union leaders as sympathizers of guerrilla groups”²⁹⁹.

Taking into account that the policies implemented in the country in relation to the prevention and protection of children in the context of the armed conflict are neither sufficient nor adequate to respond to the demands of this population at serious risk, civil society has taken the initiative by seeking to foster a response that is more appropriate to the context and needs. This has implied that civil society has transcended its role as social watchdog to take on a leading role in carrying out actions in the spaces left unattended by the State.

It is precisely dissatisfaction with the social and economic situation, injustice and inequity what has motivated social struggle to expand during the last six and a half years of the Uribe Government. According to one of the most recent CINEP³⁰⁰ reports, an unprecedented growth of the movement is recorded; in 2007 reached the greatest peak observed since 1975. The preceding is noteworthy, particularly if we take into account considerations such as the following: Colombia is the country with the highest number of murdered union leaders in the world and that everyday human rights defenders are subject to threats, intimidation and persecution. The Government and the national armed forces have disqualified the work of the social movement continuously and rashly. This motivated the pronouncement of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) in several press releases published in 2008 and in its annual report. Likewise, the Special United Nations Rapporteur for human rights defenders, Margaret Zekaggya, in a declaration in September 2009, based on her visit

²⁹⁹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (19 February 2009): Op. cit. Paragraph 75.

³⁰⁰ CENTER FOR POPULAR RESEARCH AND EDUCATION, CINEP (June 2009): Social Protest 2002-2008: The public policies of Uribe Vélez are questioned. Bogotá.

to the country, stated that "A fundamental reason for the insecurity of human rights defenders is rooted in the systematic stigmatization and finger pointing that they are subjected to by Government officials"³⁰¹. However, the social struggle persists and becomes stronger in favor of the exercise and demand of the rights of the most vulnerable populations and the end of the armed conflict.

*"The social sectors that have expressed themselves in the public arena during this period include a wide number of actors that have been changing, not only due to the dynamics related to neo-liberal policies and the violation of civil, political, social and economic, cultural and third generation rights, but also due to the partial displacement of the national political scenery from the trade unions (which historically had taken on the role of main actors in social protests) and due to the emergence of new actors: indigenous groups, Afro-Colombian populations, women, LGTB, students, human rights NGOs, in many cases, with young people as the underlying social group. Likewise, and beyond the insertion of new actors who gain visibility in protests, a change was noted as the triggering factor in most of these social protests and that was the war, a generalized fatigue and hatred caused by the continuation of the internal armed conflict"*³⁰².

Among the actors that came into the scene, the emergence of boys, girl and adolescents immersed in the armed conflict has motivated NGOs, churches, universities, schools, trade unions and other entities to undertake initiatives on behalf of their protection and care. The role they have played has been fundamental in tasks such as:

- Acknowledging the participation in the armed conflict as a "socially problematic situation"³⁰³ that requires the attention of the State, civil society and the family.
- Placing the subject on the public agenda demanding that protection and prevention actions be taken
- Influence before the executive, legislative and judicial powers in order to ensure that they safeguard the respect for the human rights of boys, girls and adolescents according to international standards and international humanitarian law.

³⁰¹ PERMANENT ASSEMBLY OF CIVIL SOCIETY FOR PEACE "No more wire-tapping or stigmatization against human rights and peace defenders". Bogotá, 22 September 2009.

³⁰² CENTER FOR POPULAR RESEARCH AND EDUCATION, CINEP (June 2009): Op. cit. Page 8

³⁰³ Problematic social situations are conceived as "those in which society in its majority perceive a social problem as relevant and considers that the political regime must face it through public policies". Vargas Velásquez, Alejo (1999): The State and Public Policies. Almudena Editores. Bogotá, page 58.

- Development of protection mechanisms for boys, girls and adolescents in high risk situation and imminent risk from armed groups.
- Development of prevention mechanisms through programs that demand their rights to education, protection and creative use of free time.

There are many successful social experiences that, in spite of stigmatization and finger-pointing, keep on resisting and searching for integral alternatives that reduce the impact of the armed conflict on boys, girls and adolescents. The following are some emblematic examples in relation to the subjects dealt with throughout this report.

7.1. On Prevention

Boarding schools in the lower Putumayo

Boarding schools were a protection strategy created in 2007 by educators and parents in the lower Putumayo municipalities to protect tens of boys, girls and adolescents from three serious problems: 1) the food security crisis resulting from spraying and the action of manual coca eradicators who literally destroyed subsistence crops; 2) lack of attendance of boys, girls and adolescents to educational centers; and 3) the risk of involvement in armed groups that besieged and harassed the boys, girls and adolescents at their home, from where they were "*literally snatched from their families*"³⁰⁴ and in the roads from their homes to school.

The response required families to send their children to the school premises which had been "adapted" as boarding spaces, so that the lack of food and the need for protection from the armed groups could be met. In April 2008, the existence of 4 boarding schools that grouped approximately 214 boys, girls and adolescents between the ages of 10 and 17 were reported.

These boarding schools operated for over two years in conditions that were truly deficient. The classrooms were used as such during the day and at night they were converted into bedrooms.

³⁰⁴ Testimony of a teacher, registered in the follow up mission to the communities and social projects in the Lower Putumayo, conducted by more than 14 national and international organizations in April 2008.

There were not enough mattresses, personal cleanliness and kitchen elements were insufficient and many boys, girls and adolescents required medical attention. Teachers stated their need to get information on the psychosocial area to cheer up the boys, girls and adolescents who were sad to be away from their parents and to handle the traumas many had having been victims of violence. In addition, they had serious problems covering the expenses of their operation. Teachers contributed money out of their own pockets because the Education Secretariat only provided \$1,500 per child per day (Approximately US\$ 0.80). In spite of all these obstacles, the boarding schools were an effective strategy that made it possible to guarantee food security, school permanence and the protection of many Putumayo boys, girls and adolescents from armed groups that besieged them trying to incorporate in their ranks.

The children in the boarding schools gradually left during 2009 for several reasons: the lack of state support had made the strategy impossible to sustain, overcrowding has reached serious levels, and they had been attacked by armed groups that put their lives and food security at risk³⁰⁵.

7.2. On prohibitions and related issues

Indigenous Judicial Road Map for Indigenous Boys, Girls and Adolescents in Colombia³⁰⁶

The indigenous peoples, as collective subjects that have been acknowledged and protected by the Constitution, find, in their autonomy, the possibility of applying community specific norms which are only limited inasmuch as they affect fundamental rights or rights of a higher rank than those they seek to protect³⁰⁷. From this perspective, indigenous communities have been developing a differentiated judicial road map in order to attend to the demobilization of victims of recruitment and use by the armed groups.

³⁰⁵ The school vegetable gardens were ransacked or mined and the intervention of armed groups disqualified this space as a setting for protection and prevention from recruitment.

³⁰⁶ OMBUDSPERSON'S OFFICE, LATINAMERICAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (ALDHU) AND INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS (2008) Judicial System for Indigenous Peoples. Paths and return journeys for boys, girls and youths victims of political violence. Bogotá.

³⁰⁷ Political Constitution of Colombia, Articles 7, 171, 176, 246 and 330; Constitutional Court, Sentence T-496, Bogotá, 1996

Taking into account the impact generated by the war crime of recruitment of girls and boys on the indigenous population in Colombia, the communities were forced to develop a special route for the cases in which the boys, girls and adolescents, who have been victims of recruitment, demobilize. Thus, the actions undertaken autonomously by these communities, in the framework of institutional tools legally sustained on the subject, begin to be acknowledged. It is important to point out that the indigenous experience makes a contribution to defining the responsibilities of state authorities with respect to the communities in the context of the armed conflict and the approach, at least formally, of the differential basic needs of boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups.

The steps taken by the different Colombian indigenous populations, that in view of lack of state protection and the continuous attacks against them by all armed groups, have generated the implementation of a judicial road map for the demobilization of their boys, girls and adolescents which intends to harmonize international and internal state obligations with the autonomous regulations of said communities. In the content of the Indigenous Judicial Road Map prepared by the Ombudsman's Office, this process is described as the orientation and organization of actions of all actors that participate in the problem in order to prevent the involvement of indigenous boys and girls with the combatant groups, as well as to demobilize them from these, so as not to be an additional victim of the armed conflict in Colombia³⁰⁸.

Emphasis on the differential treatment that must be given to indigenous girls and boys that are affected by the armed conflict is the core of this proposal, in the application of which priority must be given to social, economic, cultural and political institutions pertaining to each community, which must be respected³⁰⁹.

The pedagogical guide prepared by the Ombudsperson's Office describes the appropriate behaviors for each concrete situation that may arise, with emphasis on the obligations that the indigenous authorities must take on in order to achieve the readaptation of the boys, girls and adolescents to their traditional environment. In this sense, in addition to the general guidelines established for the demobilization of boys, girls and adolescent, in the case of the indigenous victims of recruitment, they must surrender themselves or be handed over to their own community. The decision to accept the return of boys, girls and adolescents by the indigenous authority must be documented in order to have a record that provides support before state

³⁰⁸ Law 782 of 2002, by means of which the validity of Law 418 of 1997 is extended and modified by Law 548 of 1999; some of its provisions are modified, Article 6.

³⁰⁹ International Labour Organization. Agreement No. 169 On Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, Article 1, Geneva, 1989.

authorities so that they are not affected in their rights as they may still be considered part of the warring faction from which he demobilizes³¹⁰.

Additionally, just as all other boys, girls and adolescents victims of recruitment in Colombia, indigenous boys, girls and adolescents may demobilize before public officials, ecclesiastical authorities, the State Security Forces or any individual who does not hold the representation of his/her indigenous community. The child must then be taken to the Colombian Family Welfare Institute³¹¹ within the next 36 hours or the soonest possible. Once in the hands of ICBF, this entity has the obligation of informing the indigenous authority to establish whether the community can assume the protection of the boy, girl or adolescent or whether, on the contrary, the child must remain in charge of the Institution³¹². In any case, the indigenous cultural conditions and the decisions of their own autochthonous authorities must always be respected³¹³.

7.3. On protection, rehabilitation and reintegration

Protection Network

The attention program for boys, girls and adolescents demobilized from illegal armed groups operated by the ICBF and the Intersectoral Commission on Prevention constitute the State's response for the protection of victims and for preventing the involvement of boys, girls and adolescents with armed groups. However, these programs have demonstrated to be inoperative in emergency situations that require immediate action which official programs do not offer as those require time for registration, procedures and verifications that often put victims at greater risk. On other occasions, protection actions are not as adequate, appropriate and effective as they should be to the particular condition of the boy, girl and adolescent in question, because the primary interest is military and not the rights approach. In addition, this type

³¹⁰ Supra 2, Article 7, Decree 1397 of 1996, By which the National Commission of Indigenous Territories and the Permanent Concertation Table with indigenous people and organizations are created and other provisions are issued, Article 14; Supra 3, Article 8.

³¹¹ Decree 128 of 2003, by which Law 418 of 1997 is regulated, extended and modified by Law 548 of 1999 and Law 782 of 2002 on the subject of reincorporation to civil society, Article 22.

³¹² OMBUDSPERSON'S OFFICE, LATINAMERICAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (ALDHU) AND INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS (2008): Op. cit. page 12.

³¹³ General Assembly of the United Nations, International Convention on the Rights of the Child, Article 30; Supra 2, Articles 7, 28 and 29; Supra 4, Article 14.

of policies end up reproducing attention and assistance models that generate dependence and hinder the development of capabilities to transform the condition of the victims and foster their transition to full citizenship with a differential approach according to gender, ethnic background and age.

In order to set up effective protection measures, human rights organizations such as Benposta, Justapaz and the Coalition against the involvement of boys, girls and youths in the armed conflict, created a Protection Network which coordinates all collective efforts and acts in emergency situations offering alternative practices on behalf of the integral protection of boys, girls and adolescents who, due to their condition at risk of involvement/use and/or threats by armed groups, require direct and immediate protection measures.

The network conducts local actions to exercise the right to defend and protect children in the conflict; activities that promote the right to participation and strengthening of social networks and it activates mechanisms for emergency situation aimed at protecting the life of a boy or girl. To this end, it counts on risk assessment tools, vulnerability analysis and self-protection models which have made it possible to identify threats and direct risks related to the use of children by illegal and state armed groups in activities such as informants, extortion, drug trafficking and traffic of weapons; "invitations" to work for the group or become part of it; the imposition of behavior codes; affective relations with a member of an armed group (legal or illegal); participation in organized delinquent groups; among other threat situations.

It operates throughout the country in emergency situations that entail imminent risk to the life of boys, girls and adolescents threatened by armed groups, and in specific areas with specific actions where the local self-protection response is strengthened. It basically foresees three action strategies:

- a – Protection within the community itself:* The program considers that strengthening local and regional initiatives and networks in which boys, girls and adolescents actively participate may reduce and prevent risks. The program has identified some current successful practices such as early childhood and youth clubs, parish or church groups, productive units, core support groups and community dining rooms, which are among some of the experiences that may be supported by the program.
- b – Protection in the region:* It is considered that some risk situations in small villages may be solved with the transfer and establishment of the boys, girls and adolescents to municipal centers where relatives live and where they can be guaranteed attendance to an educational center and participation in a permanent follow up action under the responsibility of a local coordinator, social or community organization and church. At this time there is still no pilot experience

on this measure but there are adequate conditions in some regions of the country to implement it.

- c – *Protection away from the area*: in cases identified as high risk, the program intervenes directly upon the request of parents, mentors and/or supporting organizations transferring the boys, girls and adolescents at risk to a reception center or a protection place. These centers intend to be an alternative to “institutionalization” and are conceived as “protection spaces” that offer the educational, social and cultural conditions for the children to develop their life project according to the Convention on the Rights of the Child and the Paris Principles.

The application of a given modality depends of the individual risk levels and the capabilities and possibilities in the region of origin.

8. RECOMMENDATIONS

8.1. On the political context of the country

It urges the Colombian State to:

- Acknowledge the existence of an internal armed conflict that requires compliance with humanitarian law and to enter into humanitarian agreements aimed at the commitment of the parts in conflict to end the direct or indirect involvement of boys, girls and adolescents in their ranks.
- Set up adequate and effective measures to prevent the recruitment and use of boys, girls and adolescents by all the groups that participate in hostilities, particularly, those aimed at eradicating the acts of use of children committed by state agents.
- Put an end to the practice of civil-military activities that breach the principle of distinction against boys, girls and adolescents in the context of the armed conflict in Colombia
- Develop an effective policy for the total elimination of paramilitarism. To accomplish this, all their political and economic structures must be dismantled, their criminal activities ended, and all public officials with any links to them punished.
- Guarantee adequate conditions to the judicial power to continue with the investigations of public officials and political leaders with link with paramilitaries.
- Intensify all actions aimed at fighting impunity of those responsible for the recruitment and use of boys, girls and adolescents, for which timely and effective investigations must be conducted.
- Apply immediate measures to put an end to extrajudicial executions against boys, girls and adolescents.
- Adopt adequate measures for the prevention of forced displacement and for the protection of persons in that condition, particularly taking into account that this factor increases the risk of recruitment of boys, girls and adolescents by armed groups.

- Carry on with the implementation of the public policies included in the strategy to reduce inequality and to combat poverty and indigence, giving priority attention to the victims of the armed conflict.

8.2. On general application measures

Urge the Colombian State to:

- Appropriate the content of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict in its own institutions.
- Provide proper training to judicial officials on the need to include in all their decisions on the topic, the content of the provisions of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts.
- Widely disseminate throughout the country the content of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts.
- Guarantee the work of civil society organization that work in the defense of the rights of children affected by the internal armed conflict.

8.3. On prevention

To urge the Colombian State to:

- Promote investigations aimed at determining responsibilities and punishing members of the State Security Forces for conducting military interviews of boys and girls; for ignoring the 36 hour maximum term and retaining them in military barracks or using them as guides to the armed group's encampments putting their lives and personal integrity at risk.
- Adopt urgent measures to protect girls and youths from the sexual violence exerted by all armed groups that take part in hostilities in armed conflict areas.
- To investigate and apply appropriate penal sanctions and disciplinary measures to members of the State Security Forces who exert any form of gender violence against girls and youths.
- Implement, within public policies on prevention, protection programs for boys, girls and adolescents in imminent risk of recruitment setting up rapid response strategies and actions aimed at populations identified as vulnerable (demobilized persons, displaced persons, indigenous and Afro-descendant populations, women).

- Set up protection mechanisms for schools, providing school directors and teachers with tools for educational institutions to be settings for protection and not for recruitment.
- Make efforts to formulate policies from a perspective of public policy on childhood to make possible to overcome the current fragmentation of discourse and aiming at integral protection.
- Achieve effective development of the tasks corresponding to the institutions of the Intersectoral Commission for the prevention of recruitment and use of boys, girls, adolescents and youths by illegal organized groups guaranteeing technical and financial resources for their operation.
- Promote a negotiated political solution to the conflict with the guerrillas favoring, among others, humanitarian agreements to allow the liberation of the boys, girls and adolescents in their ranks.
- To discontinue education provided by military schools to foster educational environments that promote values such as peaceful coexistence, human rights and the construction of peace subjects.

To urge the State Security Forces to:

- Refrain from carrying out “civil-military” campaigns and programs that highlight military life contributing to idealize militias as a life option, because they put in serious risk the boys, girls and adolescents involved and are taken advantage of to conduct intelligence activities.
- To discontinue the use of boys, girls and adolescents in military and intelligence activities to provide information, participate in operations and identify members of the groups they belonged to. In this sense, an emphatic call is made to stop the detention of boys, girls and adolescents in military bases for a period over 36 hours.
- To stop the use of boys, girls and adolescents to carry out support tasks such transportation of packages and materials, domestic chores, cleaning and loading weapons, which violate the principle of distinction and makes them susceptible to stigmatization by irregular armed groups.
- To refrain from threatening and murdering girls and youths based on their family relationships and cohabitation with members of armed groups.

To urge the State Security Forces and paramilitary groups to:

- Cease all stigmatization against youth groups acknowledging their right to participation and to peaceful gathering and association.

To urge armed groups to:

- Cease all forms of association of boys, girls and adolescents to the armed conflict, as follows:
 1. Paramilitary groups and new rearmed paramilitary groups, to cease all incorporation of boys, girls and adolescents in compliance with the agreements made in the Paramillo Declaration and ratified in Law 975 of 2005. On the contrary, they must assume the costs in terms of loss of benefits.
 2. FARC-EP guerrillas, to cease all direct and indirect incorporation of boys, girls and adolescents into their ranks, and to comply with their offer to the Special Representative of the Secretary General of the United Nations for Children in Armed Conflict not to recruit boys and girls under 15 years of age; as well as to strive for a humanitarian agreement to free all the boys, girls and adolescents that participate in the same.
 3. ELN guerrilla to cease all incorporation of boys and girls in their ranks and to comply with the "Puerta del Cielo" agreements, in which it committed not to recruit children under 16; and that they also strive for a humanitarian agreement to free all the boys, girls and adolescents that are part of the group.
- To abstain from committing acts of torture or extrajudicial executions, or any other act that affects the physical or mental integrity of boys, girls and adolescents incorporated in their ranks, particularly in the case of gender violence that seriously harms girls and youths.
- To discontinue all forms of use of girls and youths as combatants, informers, cooks or sexual slaves in their ranks.
- Not to commit acts of violence against girls and youths, such as contraception, forced abortions, violation, sexual slavery, among others, that put at risk their sexual and reproductive health and personal integrity.

8.4. On prohibitions and related issues

To urge the Colombian State to:

- To ensure that the interpretation of the norm favors the reinforced protection and prevalence of the rights of the boys, girls and adolescents victims of recruitment, particularly vis-a-vis the ambiguities of Law 975 of 2005 and Law 1098 of 2006 or the Infancy and Adolescence Law.
- To expand the legal protection and prevention framework against the use and recruitment of boys, girls and adolescents to include all armed groups that are part of the conflict, as established in the human rights treaties ratified by Colombia. This legal framework is currently restricted to just the “illegal armed groups”.
- To repeal the authority vested by the Infancy Law on the National Police to conduct educational programs.
- To apply, in all the cases initiated by judicial authorities regarding demobilized boys, girls and adolescents, the principle of opportunity, giving priority to the superior interest of the child and their condition of victims.
- To put on a level the legal treatment of boys, girls and adolescents linked to organized armed violence and armed groups, setting the same rights and acknowledging that the differences are diffuse.
- Adjust the juvenile criminal responsibility system to the principles and guidelines of the Convention on the Rights of the Child and the international regulations on human rights, acknowledging the superior interest of the child and verifying the established prison penalties.

8.5. On protection, rehabilitation and reintegration

To urge the Colombian State to:

- Strengthen the Program of attention to boys, girls and adolescents demobilized from organized illegal armed groups by means of: the upgrading of the services provided regarding restitution of rights; technical assistance; and coordination of political, organizational and welfare operations between the State, civil society and the international cooperation with a view to improving the program.
- Train judicial operators on human rights treaties, international humanitarian law, the resolutions of the Security Council of the United Nations on children and armed conflict, the Paris

Principles, so that they may have sufficient elements to consider the concrete situation of the boys, girls and adolescents demobilized from armed groups and to consider them as victims and not as victimizers.

- Adopt measures that facilitate the exercise of justice in the framework of application of Law 975 of 2005 such as: include questions on the crime of illicit recruitment of boys, girls and adolescents in all 'free versions' and relevant judicial acts to determine the responsibility of the authors regarding those facts; to contrast the information provided in the confessions of commanders of these groups with the accusations of involvement in areas under their control to determine those cases that are not being confessed and the number of boys, girls and adolescents not handed over as ordered in Article 10 of the Law; to promote investigations in order to determine the responsibility of paramilitary groups for the disappearance of boys and girls who were not handed over during collective demobilizations or who did not demobilize individually.
- Adopt a policy to fight impunity that may lead to concrete results in the investigation and punishment of the crime of recruitment.
- Set up coordination processes between ICBF and the General Prosecutor Office that may make feasible to conduct investigations on the crime of recruitment of demobilized boys, girls and adolescents assigned to ICBF programs, taking into account criteria of safety, trust, collaboration and mutual support.
- Require paramilitary groups to hand over all the boys and girls that belong to them and continue in their power as a necessary condition for continuation of the negotiation processes with those group, thus complying with the eligibility requirement contained in Article 10 of Law 975 of 2005. In case this obligation is not complied with, to abstain from granting such groups the juridical benefits provided for in the Law.
- Facilitate cooperation between the Colombian and the United States justice systems so that extradited paramilitary commanders respond for the crimes against humanity perpetrated while they commanded those armed groups, particularly regarding the involvement of boys, girls and adolescents in their ranks.
- Generate guarantees for victims fostering trustworthy and safe settings that allow their direct participation within the processes to clarify the truth.
- Set an ethical legal framework that protects boys, girls and adolescents demobilized from "delinquent bands" or "organized armed violence" so they may have the same rights and opportunities for resocialization foreseen for persons under 18 years of age who have

demobilized from armed groups, taking into account the current unconstitutional state of things, their status as victims and the superior interest of the child.

8.6. On international assistance and cooperation

To urge the Colombian State to:

- Support the efforts of the United Nations Agencies in the country so they may fulfill their mandate.

To urge international cooperation agencies:

- To include as a fundamental item in the international cooperation strategy for Colombia the negotiated solution to the armed conflict, currently excluded from the agenda, guaranteeing the participation of civil society and particularly, of victims in the process.
- To demand the effective dismantling of paramilitarism in the country.
- To strengthen their support to improve the quality of the institutions that constitute the National Family Welfare System, the creation and support to monitoring systems at local level; and the consolidation of a public policy that is made effective in budgetary allocations and public expenditure on behalf of the rights of children.
- To apply the principles of independence vis-a-vis the State and dialogue with all social sectors for optimal performance in the observation of and support to the human rights situation in Colombia.
- To set up, from its area of responsibility, protection measures to guarantee the free exercise of human rights organizations that advocate for children in Colombia.

8.7. On civil society initiatives

To urge the Colombian State to:

- Cease the stigmatization of the efforts made by social movements, specifically the organizations that advocate for the respect of human rights and humanitarian law in the midst of the conflict, acknowledging dissent and protest as part of a democracy.

8.8. On compliance by the State of the mandates of the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflicts

- To adhere to the recommendations made by the Committee on the Rights of the Child in 2006 to the Colombian State in relation to its concerns regarding boys, girls and adolescents in armed conflict situation, particularly on:
 - a) *Large-scale recruitment of children by illegal armed groups for combat and also as sexual slaves;*
 - b) *Interrogation by the armed forces of child soldiers captured and demobilized and the failure to comply with the 36 hour maximum term established in the national legislation to hand them over to civilian authorities;*
 - c) *The use of children by the armed forces to obtain intelligence information;*
 - d) *The insufficient level of social reintegration, rehabilitation and reparation available to demobilized child soldiers;*
 - e) *The number of children who have been victims of land mines;*
 - f) *The fact that in the current legal framework in which negotiations with paramilitary groups take place, the basic principles of truth, justice and reparation to the victims are not taken into account;*
 - g) *The general lack of transparency when the aspects related to children are examined in the negotiations with the illegal armed groups, which prolong the impunity of those responsible for recruiting children as soldiers*³¹⁴.
- To adhere to the recommendations made to the Colombian State by the Committee on the Rights of the Child in 2000, in relation to the implementation of *"effective measures to free and demobilize all children abducted and combatants, and to ensure that they are rehabilitated and reintegrated to society. The Committee furthermore recommends that the State Party pass and strictly apply legislative norms that forbid the future recruitment of children by any type of group"*³¹⁵.

³¹⁴ COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD: Colombia Final Observations. Document Number CRC/C/COL/CO/3. 8 July 2006. Paragraph 80.

³¹⁵ COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD: Colombia Final Observations. Document Number CRC/C/15/Add.137. 16 October 2000. Paragraph 56.